

**ACTA DE EVALUACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL**

Año académico 2016/17

DOCTORANDO: **SALAS ALVARADO, RICARDO ANTONIO**  
D.N.I./PASAPORTE: \*\*\*\***027338**

PROGRAMA DE DOCTORADO: **D411-CIENCIAS**  
DEPARTAMENTO DE: **GEOLOGÍA, GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE**  
TITULACIÓN DE DOCTOR EN: **DOCTOR/A POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ**

En el día de hoy 14/10/2016, reunido el tribunal de evaluación nombrado por la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado y Doctorado de la Universidad y constituido por los miembros que suscriben la presente Acta, el aspirante defendió su Tesis Doctoral, elaborada bajo la dirección de **MARIA TANIA GARCÍA LÓPEZ**.

Sobre el siguiente tema: **INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA LA REPARACIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL: RETOS DEL DERECHO CIVIL MEXICANO**

Finalizada la defensa y discusión de la tesis, el tribunal acordó otorgar la CALIFICACIÓN GLOBAL<sup>5</sup> de (no apto, aprobado, notable y sobresaliente): **SOBRESALIENTE**

Alcalá de Henares, 14 de octubre de 2016

EL PRESIDENTE

  
Fdo.: Luis Antonio Moreno

EL SECRETARIO

  
Fdo.: Antonio Sastre

EL VOCAL

  
Fdo.: José Juan González Márquez

EL VOCAL

  
Fdo.: Alma Patricia Domínguez Alonso

EL VOCAL

  
Fdo.: Carlos F. Molina del Pozo

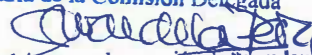
FIRMA DEL ALUMNO

  
Fdo.: RICARDO SALAS ALVARADO

Con fecha 27 de octubre de 2016 la Comisión Delegada de la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado, a la vista de los votos emitidos de manera anónima por el tribunal que ha juzgado la tesis, resuelve:

- ☐ Conceder la Mención de "Cum Laude"  
☒ No conceder la Mención de "Cum Laude"

La Secretaria de la Comisión Delegada



<sup>5</sup> La calificación podrá ser "no apto" "aprobado" "notable" y "sobresaliente". El tribunal podrá otorgar la mención de "cum laude" si la calificación global es de sobresaliente y se emite en tal sentido el voto secreto positivo por unanimidad.



Universidad  
de Alcalá

COMISIÓN DE ESTUDIOS OFICIALES  
DE POSGRADO Y DOCTORADO

En aplicación del art. 14.7 del RD. 99/2011 y el art. 14 del Reglamento de Elaboración, Autorización y Defensa de la Tesis Doctoral, la Comisión Delegada de la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado y Doctorado, en sesión pública de fecha 27 de octubre, procedió al escrutinio de los votos emitidos por los miembros del tribunal de la tesis defendida por *SALAS ALVARADO, RICARDO ANTONIO*, el día 14 de octubre de 2016, titulada *INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA LA REPARACIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL: RETOS DEL DERECHO CIVIL MEXICANO*, para determinar si a la misma se le concede la mención "cum laude", arrojando como resultado, 5 votos en contra.

Por lo tanto, la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado **resuelve no otorgar la Mención de "cum laude"** a dicha Tesis.

Alcalá de Henares, 31 de octubre de 2016

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS  
OFICIALES DE POSGRADO Y DOCTORADO



Juan Ramón Velasco Pérez

**Copia por e-mail a:**

Doctorando: SALAS ALVARADO, RICARDO ANTONIO

Secretario del Tribunal: ANTONIO SASTRE MERLÍN

Directora de Tesis: MARIA TANIA GARCÍA LÓPEZ







Departamento de Geología, Geografía y  
Medio ambiente

Tesis doctoral

***“Instrumentos jurídicos para la reparación  
del daño ambiental: retos del Derecho  
Civil mexicano”***

Tesis doctoral presentada por:  
**Ricardo Antonio Salas Alvarado**

Directora de tesis:  
**Dra. María Tania López García**

Alcalá de Henares, 2016



### ***A mi esposa y familia***

Por la comprensión y apoyo que me dieron para poder realizar la presente tesis y por el tiempo de convivencia que les quite.

### ***A mis papás***

Por sus palabras de entusiasmo que me han brindado desde que comencé mis estudios de doctorado.

### ***A Dra. Tania García***

Por ser mi directora de tesis por la paciencia y puntos de mejora que me proporciono en los siete años que estuve escribiendo la tesis.

Por último y no menos importante quiero agradecer al Dr. Hugo Alejandro Borjas, Dr. Jaime Nicolás López y al Dr. Agustín Loyola por las cartas que me brindaron al inicio de mis estudios de doctorado, al Dr. Antonio Sastre por su gran apoyo como mi tutor dentro del programa de doctorado, a Carmen Leiva por la información y ayuda que me proporcionó con mi expediente académico y al Dr. Federico de la Torre por su amistad y por ser mí primer contacto en España.

## Índice

INTRODUCCIÓN .....	1
--------------------	---

### **CAPÍTULO I Acciones interdictales para compensar un daño ambiental**

1.1 Introducción .....	4
1.2 Elementos básicos de las acciones interdictales .....	6
1.3 La acción de interdicto de retener la posesión .....	9
1.3.1 El carácter de perturbador ambiental .....	14
1.3.2 Tipos o clases de actos perturbatorios en materia ambiental .....	15
1.4 La posesión ejercida en el ambiente y sus elementos .....	20
1.4.1 Clasificación de los bienes del Derecho Civil aplicados en forma supletoria al ambiente .....	29
1.4.2 La posesión ambiental ¿es una garantía individual? .....	36
1.5 La acción de interdicto de obra peligrosa en materia ambiental .....	40
1.6 Ventajas legales de las acciones interdictales ante un daño ambiental .....	42
1.6.1 La legitimación colectiva ante un daño ambiental .....	53
1.6.2 La vía procesal de los interdictos de cualidad ambiental .....	59
1.6.4 La competencia de los interdictos por daños ambientales .....	63

### **CAPÍTULO II Acción negatoria como medio legal para reparar un daño ambiental**

2.1 Introducción .....	71
2.2 La acción negatoria en la doctrina civil mexicana .....	71
2.3 La acción negatoria y su procedencia para la reparación de un daño ambiental .....	73
2.4 La acción negatoria y sus beneficios para reclamar la reparación de un daño ambiental .....	79
2.4.1 Reparación de los elementos ambientales a su estado original .....	86

### **CAPÍTULO III Aplicación de presupuestos y principios procesales en un juicio interdictal y de acción negatoria para reparar un daño ambiental**

3.1 Introducción .....	96
------------------------	----



3.2 Los presupuestos procesales en un juicio interdictal y de acción negatoria por un daño ambiental .....	97
3.2.1 El órgano jurisdiccional competente ante un daño ambiental .....	97
3.2.2 Casos de incompetencia en el juez por un daño ambiental.....	101
3.2.3 El sistema de canalización múltiple en un juicio interdictal por un daño ambiental.....	102
3.2.4 Los presupuesto de las partes en un juicio interdictal y acción negatoria por un daño ambiental.....	104
3.2.5 El presupuesto procesal del procedimiento ante un daño ambiental .....	110
3.3 Casos de excepción del proceso civil interdictal y de acción negatoria ante un daño ambiental.....	112
3.3.1 La carga de la prueba para el actor en un juicio de interdicto y acción negatoria por un daño ambiental.....	112
3.3.2 Las pruebas supervinientes en un juicio por daño ambiental: presentación y desahogo .....	115
3.3.3 Las medidas precautorias y su procedencia en el juicio por daño ambiental .....	118
3.3 Aplicación de principios procesales en el juicio de interdicto y acción negatoria por un daño ambiental.....	121
3.4.1 El principio de contracción invocado por la parte demanda en un juicio por daño ambiental .....	121
3.4.2 El principio de economía procesal aplicado en un juicio de interdicto y acción negatoria por un daño ambiental .....	123
3.4.3 El principio inquisitivo en un juicio interdictal y de acción negatoria por daño ambiental aplicado por el juez .....	125
3.5 La intervención de las autoridades administrativas ambientales como parte en un juicio por daño ambiental .....	127
3.5.1 ¿Las autoridades administrativas deben considerarse como parte en un juicio interdictal y de acción negatoria por un daño ambiental? .....	132
3.5.2 La obligación de las autoridades ambientales de suministrar información y documentos en un juicio de interdicto de obra peligrosa y de retener y acción negatoria por daño ambiental.....	135

## **CAPÍTULO IV Ofrecimiento y desahogo de la prueba pericial en un juicio interdictal y de acción negatoria por un daño ambiental**

4.1	Introducción .....	140
4.2	La prueba pericial en la doctrina mexicana .....	141
4.2.1	Definición .....	142
4.2.2	La prueba pericial y sus características procesales .....	143
4.3	Puntos relevantes de la prueba pericial en un juicio interdictal y de acción negatoria por un daño ambiental.....	151
4.3.1	Contenido de la prueba pericial en un juicio por daño ambiental.....	151
4.3.2	Desahogo de una audiencia aclaratoria por el peritaje presentado en un juicio por daño ambiental .....	161
4.3.3	Conocimientos requeridos para la interpretación y conclusiones de un peritaje por daño ambiental.....	162
4.3.4	¿Quién puede ser perito ambiental: la autoridad administrativa ambiental o un consultor ambiental? .....	165

## **CAPÍTULO V Ofrecimiento y desahogo de las pruebas de inspección judicial y documental en un proceso civil por un daño ambiental**

5.1	Introducción .....	169
5.2	Definición y características de la inspección judicial.....	171
5.3	Puntos sobresalientes de la inspección en un juicio interdictal y de acción negatoria en un juicio por un daño ambiental.....	172
5.3.1	¿Qué tipo de indicios son susceptibles y necesarios para que el juzgador dé por cierto un daño ambiental? .....	185
5.3.2	Obligación de la presencia del juez en el lugar a inspeccionar.....	188
5.3.3	Anexar al acta de inspección fotografías o videos.....	189
5.4	La prueba documental pública en la doctrina del Derecho Procesal Civil.....	191
5.5	La prueba documental en un juicio interdictal y de acción negatoria para reparar un daño ambiental .....	196
5.5.1	Tipo de documentación que posee la parte demandada de acuerdo con la normatividad ambiental.....	200
5.5.2	Documentación de la parte demandada en posesión de las autoridades administrativas .....	221

5.5.2 Los efectos legales de la documentación en un juicio por daño ambiental .....	226
--	-----

## **CAPÍTULO VI Contenido y alcance de las sentencias definitivas dictadas en los juicios de interdicto (de obra peligrosa y de recuperar la posesión) y acción negatoria por daño ambiental**

6.1 Introducción .....	228
6.2 Concepto de sentencia definitiva .....	229
6.3 Elementos de una sentencia dictada en un juicio interdictal de acción negatoria por daño ambiental.....	236
6.3.1 Establecimiento tanto de los hechos como del derecho en la sentencia .....	239
6.3.2 Valoración de las pruebas aportadas en el juicio interdictal y de acción negatoria por un daño ambiental.....	243
6.3.3 Mecanismos para determinar la cuantificación de un daño ambiental .....	248
6.3.4 ¿Los efectos y alcance de una sentencia definitiva pueden afectar a terceros? .....	250
6.3.5 Sanciones aplicables a las autoridades administrativas contenidas en la sentencia dictada en un juicio interdictal y de acción negatoria por un daño ambiental .....	254
6.4 Ejecución de la sentencia dictada en un juicio interdictal y de acción negatoria por un daño ambiental.....	256
 CONCLUSIONES .....	 261
 BIBLIOGRAFIA.....	 267



## INTRODUCCIÓN

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente ( en adelante LGEEPA) contempla en su artículo 203 que al generarse un daño ambiental, quienes resulten afectados por dicho daño, ya sean estos individuos o grupos de personas, pueden, de acuerdo con el Derecho Civil, usar la vía de la responsabilidad civil para reparar dicho daño.

En el mes de junio de 2013 se publicó en México la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, cuyo objetivo es regular la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños, cuando sea exigible a través de los procesos judiciales federales previstos por el artículo 17 constitucional.

En esta Ley se indica, asimismo, (dentro del artículo 4) la posibilidad de interponer las correspondientes acciones civiles cuando se genere un daño ambiental, remitiéndonos, entonces, al Derecho Civil, al igual que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Con base en lo anterior y tomando en cuenta que el derecho civil contiene disposiciones tendentes a la reparación del daño ambiental complementarias a las contenidas en el Derecho Administrativo, el propósito de este trabajo se centrará, en primer lugar, en profundizar sobre qué tipo de acciones civiles son las apropiadas para demandar la reparación de un daño ambiental.

Es necesario señalar que existen, dentro del Derecho Civil, diversos instrumentos jurídicos que, de acuerdo a su contenido y estructura, pueden ser invocados en un juicio para remediar un daño ambiental y que son de competencia estatal, es decir, que pueden tramitarse ante los órganos jurisdiccionales locales.

En segundo lugar, nos centraremos en el estudio de ciertos elementos del procedimiento civil, desde el punto de vista de su efectividad jurídica durante el desarrollo de los juicios interpuestos para remediar un daño ambiental.

Para la realización de este trabajo seguiremos la siguiente metodología:

- Efectuaremos, en primer lugar, una interpretación sistemática de las normas jurídicas que contienen los interdictos de retener la posesión, de obra peligrosa y de la acción negatoria, así como de los elementos del procedimiento civil;

- En segundo lugar y, a través del método deductivo, analizaremos la viabilidad procesal de aplicar, a través de un juicio, las acciones interdictales y negatoria para reparar un daño ambiental;
- En tercer lugar, usaremos el método inductivo al revisar casos concretos de jurisprudencia, haciendo énfasis en los elementos de los interdictos y de la acción negatoria para que sean invocados en un juicio para reparar un daño ambiental;
- Por último y a través del método analógico, buscaremos plantear modificaciones a las normas jurídicas de los interdictos de retener la posesión, de obra peligrosa, de la acción negatoria y de determinadas figuras del procedimiento civil (como la carga de la prueba, las pruebas documentales, pericial e inspección judicial).

Asimismo, emplearemos la metodología de la investigación descriptiva toda vez que estableceremos las características jurídicas de viabilidad o aplicación de tres acciones civiles como el interdicto de retener la posesión, el interdicto de obra peligrosa y la acción negatoria para que puedan ser invocadas en una demanda para reparar un daño ambiental.

De igual modo, analizaremos las reformas que debe contener el procedimiento civil a través del Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí, indicando los cambios que se requieren para su aplicación durante la gestión de un juicio donde se reclame la reparación de un daño ambiental.

Para el desarrollo de dichos objetivos estructuraremos el presente trabajo en seis capítulos.

En el capítulo primero abordaremos el contenido y las características de las acciones interdictales - de retener la posesión y de obra peligrosa - tales como: la posesión, las cosas susceptibles de posesión y los actos perturbatorios. Expondremos las modificaciones que deberían darse entorno a estos conceptos para que sean invocados para demandar un daño ambiental.

A lo largo del capítulo segundo investigaremos las posibilidades que ofrece la acción negatoria como acción alterna que tiene la sociedad para demandar la reparación de un daño ambiental.

En el capítulo tercero nos enfocaremos en temas procesales como: la carga de la prueba, las medidas de apremio y los presupuestos procesales que toda controversia sigue. Intentaremos justificar por qué el Derecho Procesal Civil requiere de modificaciones en sus instituciones para que se convierta en una vía eficaz para poder demandar la reparación de un daño ambiental.

En el capítulo cuarto expondremos lo relativo a la prueba pericial, la cual consideramos apropiada para comprobar un daño al ambiente o a sus elementos, por el estudio técnico que se tiene que desarrollar y cómo es que esta probanza requiere de una evolución jurídica.

En el capítulo quinto nos acercaremos a dos medios de prueba que parecen ser adecuados para acreditar la existencia del daño ambiental, los cuales son: la inspección judicial y la documental, mismos que, por su naturaleza, tienen un papel importante para probar la acción negatoria e interdictal.

En lo referente a la prueba de inspección judicial abordaremos su contenido y el tiempo para su ofrecimiento y desahogo.

Por último, en el capítulo sexto nuestro planteamiento se basará en el contenido, características y elementos que conforman una sentencia definitiva. Aunado a lo anterior, expondremos la problemática que suscita la valoración de las pruebas. De la misma manera, indicaremos los elementos o puntos necesarios que debe contener una sentencia en la cual se condene a la reparación de un daño ambiental.

En definitiva, en el presente trabajo se intenta plantear la existencia de otras acciones civiles contenidas en el Derecho Civil mexicano, que difieren de la responsabilidad civil en su contenido o alcance, y que pueden llegar a convertirse en herramientas jurídicas útiles y efectivas, que estén disponibles para la sociedad en general, para demandar la reparación de un daño ambiental.

# **CAPÍTULO I      Acciones interdictales para compensar un daño ambiental**

## **1.1 Introducción**

La protección al medio ambiente tiene su sustento jurídico en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos<sup>1</sup> en su artículo 4º, párrafo quinto,<sup>2</sup> cuya premisa es que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Ahora bien, cuando se producen daños a los elementos que conforman el medio ambiente, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente<sup>3</sup> contempla en su artículo 203<sup>4</sup> que todo daño ambiental debe ser reparado, conforme a la legislación civil aplicable.

En el mes de junio del año 2013 se publicó la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental,<sup>5</sup> con el fin de regular la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente y la reparación y compensación de dichos daños, cuando sea exigible a través de los procesos judiciales federales previstos por el artículo 17 constitucional.<sup>6</sup>

Esta Ley Federal de Responsabilidad Ambiental establece en su artículo 4º<sup>7</sup> la posibilidad de que otras acciones civiles puedan ser emprendidas en los juicios por daño ambiental.

---

<sup>1</sup> *Diario Oficial de la Federación*, febrero 05, 1917, México, D.F.

<sup>2</sup> El quinto párrafo del artículo 4º indica: "Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley". *Op. cit.*

<sup>3</sup> *Diario Oficial de la Federación*, enero 28, 1988, México, D.F.

<sup>4</sup> El artículo 203 menciona: "Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona que contamine o deteriore el ambiente o afecte los recursos naturales o la biodiversidad, será responsable y estará obligada a reparar los daños causados, de conformidad con la legislación civil aplicable". *Op. cit.*

<sup>5</sup> *Diario Oficial de la Federación*, junio 7, 2013, México, D.F.

<sup>6</sup> Este artículo 17 menciona en sus tres primeros párrafos: "Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos". *Op. cit.*

<sup>7</sup> El artículo 4 indica: "La acción y el procedimiento para hacer valer la responsabilidad ambiental a que hace referencia el presente Título, podrán ejercerse y sustanciarse independientemente de las



Por lo anterior, nuestro propósito en el presente capítulo, es enfocarnos en mencionar estas acciones civiles, para lo cual analizaremos el interdicto de obra peligrosa y de retener la posesión y los supuestos para que puedan ejercitarse y sustanciarse como medios alternativos legales en un proceso por daño ambiental.

En materia civil existen instrumentos jurídicos para compensar un daño ambiental, sin embargo, es conveniente reformarlos en su contexto para que posean características jurídico-ambientales específicas y que la sociedad pueda invocarlos con la suficiente certeza jurídica en aquellos juicios que planteen una reparación del daño ambiental.

Debemos dejar de concebir el Derecho Civil (en lo sustantivo y en lo adjetivo) como una materia jurídica que no admite modificaciones importantes en sus instituciones. Es conveniente desarrollar un constructivismo jurídico, más allá del contexto que rige la materia civil, donde se actualicen aquellos instrumentos y figuras jurídicas, adaptándose a la realidad de las personas físicas y morales (en su desenvolvimiento económico y productivo) y en sus actividades generadoras de daños al ambiente.

En consecuencia, el presente capítulo se centrará en las acciones interdictales (de retener la posesión y de obra peligrosa) del Derecho Civil como vías procesales para remediar un daño ambiental.

Efectuaremos, en primer lugar, un análisis de las bases jurídicas que contienen estas acciones, como la posesión, las cosas susceptibles de posesión, los actos perturbatorios y el carácter de perturbador. Destacamos aquellas conjeturas jurídico-ambientales y planteamos una evolución normativa en sus conceptos y alcances jurídicos.

Analizaremos, de los interdictos, la figura del perturbador y quien puede tener dicho carácter; además, abordaremos conceptos tradicionales del Derecho Civil, como las cosas y como es que esta figura jurídica puede aplicarse cuando nos referimos al ambiente.

---

responsabilidades y los procedimientos administrativos, las acciones civiles y penales procedentes". *Op. cit.*

## 1.2 Elementos básicos de las acciones interdictales

Etimológicamente la palabra interdicto proviene del latín *interdictum*. Originalmente *interdictum* designaba una prohibición. El magistrado<sup>8</sup> otorgaba un decreto que contenía una prohibición o una orden de exhibición o retribución de una cosa.

En el Derecho Romano los interdictos eran decretos emitidos por el pretor para resolver una cuestión que amenazaba la vida cotidiana.

Las cuestiones protegidas por los interdictos eran de diversa índole; había interdictos sobre cuestiones de posesión, pero también había interdictos para proteger el uso de los bienes públicos (por ejemplo para que no se impidiera la navegación de un río público o para que no se estorbara el paso por una vía pública).<sup>9</sup>

El Derecho Procesal Civil se refiere al interdicto como un juicio sumario que tiene por objeto adquirir, retener o recobrar la posesión interina de una cosa, suspender la ejecución de una obra nueva o que se practiquen respecto de la que amenaza ruina o de un objeto que ofrece riesgo, las medidas conducentes para precaver el daño.<sup>10</sup> Algunos autores manifiestan que el Código Procesal Civil marcaba a los interdictos como juicios sumarísimos, que en realidad no son juicios, sino acciones que se entablan en juicios sumarísimos.

Con respecto a lo anterior, Rojina Villegas señala que “los interdictos son acciones posesorias provisionales que tienen por objeto proteger la posesión interina (originaria o derivada) de los bienes inmuebles o de derechos reales constituidos sobre los mismos”.<sup>11</sup> Su objeto es mantener un estado determinado de posesión, contra aquél que la perturbe, despoje o amenace por la ejecución de obras que puedan dañarla.

Tengamos presente la existencia de acciones civiles tendentes a la conservación, retención, restablecimiento y restitución de la posesión; estas acciones son: la acción

---

<sup>8</sup> Magistrado es “Integrante de un órgano jurisdiccional”. “Persona encargada de impartir justicia en un tribunal”. *Diccionario Jurídico General Tomo II (D-N)*, IURE EDITORES, primera edición, México, 2006, página 770.

<sup>9</sup> *Enciclopedia Jurídica Mexicana*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, primera edición, editorial Porrúa, México, 2002, página 627.

<sup>10</sup> El Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí lo establece en el capítulo IV, artículo 460. *Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí*, junio 19, 1947, S.L.P.

<sup>11</sup> ROJINA VILLEGAS, Rafael, *Compendio de Derecho Civil Bienes, Derechos Reales y Sucesiones*, editorial Porrúa, cuadragésimoprimer edición, México, 2008, página 290.

reivindicatoria,<sup>12</sup> acción de desahucio (desocupación).<sup>13</sup> Una característica sustancial para la procedencia legal es que el promovente tiene el carácter de propietario, requisito indispensable para el ejercicio de tales acciones. Los interdictos pueden ser interpuestos tanto por el propietario como por el poseedor.

Los interdictos no tratan de resolver quién es el mejor poseedor y quién debe ser confirmado definitivamente en la posesión, es decir, no prejuzgan en el juicio la calidad del poseedor, sólo previenen el ataque de que es sujeto el poseedor, provenga de quien provenga o el daño causado por las obras efectuadas.

Es menester indicar la composición normativa en base a dos órdenes jurídicos: el federal y el estatal, lo que ha llevado, por consecuencia, a la división de leyes procesales.

Es decir, a nivel federal existe un cuerpo sustantivo y adjetivo en materia civil, aplicable en materia federal y cada entidad federativa cuenta con un cuerpo de leyes civiles y procesales.

La aplicación del Código Federal de Procedimientos Civiles o del Código Procesal Civil del Estado de San Luis Potosí, se debe a que los tribunales federales conocerán aquellas controversias de orden civil donde el Estado está actuando como autoridad, por lo que debe proceder como órgano jurisdiccional, cuyo cumplimiento esté regulado en leyes federales.<sup>14</sup>

En caso contrario, cuando el Estado está ejerciendo un papel de parte (con derechos y obligaciones) y cuando son afectados sus intereses particulares, será objeto del conocimiento de los tribunales estatales de cada entidad federativa.

Con base en lo anterior los tribunales locales son competentes para conocer de las controversias que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes locales,

---

<sup>12</sup> PALLARES señala que: "Es la acción real que tiene el propietario de un material mueble o inmueble, contra el poseedor del mismo, para recuperarlo y obtener debe entregar los frutos y accesorios de la cosa". PALLARES, Eduardo. *Diccionario de Derecho Procesal Civil*, séptima edición, editorial Porrúa, México, 1973, página 50.

<sup>13</sup> DE PINA VARA, Rafael. "Dictar sentencia de desahucio, desalojar al inquilino vencido el juicio de desahucio". *Diccionario de Derecho*, vigésima quinta edición, editorial Porrúa, México, 1998, página 244.

<sup>14</sup> MONROY J. V. *Para qué sirve el Código Civil (versión electrónica)*. México. Recuperado de <http://www.monroyabogados.com.mx/pgscc.pdf>. Fecha de consulta\_19 de noviembre de 2014.

puesto que esta materia no es competencia de los tribunales de la Federación; lo anterior está establecido en la siguiente jurisprudencia:

Competencia federal o concurrente en un juicio civil: hipótesis en que se presentan controversias sobre la aplicación de leyes federales o tratados internacionales.

El artículo 104, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los tribunales federales conocerán de todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, y añade que cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer también de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal. Por tanto, para que se surta la competencia federal en las controversias citadas, es preciso que no se afecten sólo intereses particulares; en cambio, en el supuesto de que únicamente se afecten éstos, la competencia será concurrente quedando a elección del actor el fuero al que desee someterse.<sup>15</sup>

El cumplimiento y la aplicación de leyes federales está establecido en el artículo 104, fracción II<sup>16</sup> en relación con el artículo 124 de la Constitución Federal,<sup>17</sup> cuyos textos señalan que las facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas para los Estados.

La diferencia sustancial entre el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí, reside en el núcleo que resulta ser el tipo de pretensión que viene a individualizar al proceso en cuanto a lo civil.

---

<sup>15</sup> Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, novena época, tomo VII, marzo de 1998, página 196.

<sup>16</sup> La fracción II señala: "De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. A elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común. Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado." *Op. cit.*

<sup>17</sup> El artículo 124 indica: "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados." *Op. cit.*

En base a estas pretensiones, las partes de un juicio van a fundamentar su acción o la contestación a esa acción y, en el caso concreto de los interdictos, encuentran cobijo legal en las legislaciones procesales estatales.

El Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí, en su artículo 465 indica: “que quien es vencido, ya sea actor o demandado en el juicio de interdicto, o interpuesta la demanda y en la etapa procesal de ofrecimiento o desahogo de pruebas, no se acredita el despojo o el hecho mismo, obtiene o se da la posibilidad legal de entablar la acción plenaria de posesión o la reivindicatoria, sin establecer un orden de prioridad entre estas dos acciones”.<sup>18</sup> En cambio, el que es vencido en juicio plenario de posesión o de propiedad no puede entablar el juicio de interdicto.

Dentro de la serie diversa de interdictos contemplados en la normatividad Procesal Civil del Estado de San Luis Potosí, encontramos dos interdictos que, por sus características jurídicas, son adecuados para presentarse ante el órgano jurisdiccional por un daño ambiental, los cuales son: el interdicto de retener la posesión y el de obra peligrosa, independientemente de la responsabilidad civil que pueda generar un daño ambiental.

### **1.3 La acción de interdicto de retener la posesión**

La particularidad de este interdicto es que es conferido al poseedor en nombre propio o en nombre ajeno, encontrando su fundamento en el artículo 16 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí que establece: “Al perturbado en la posesión jurídica o derivada de un bien inmueble, compete el interdicto de retener la posesión contra el perturbador, el que mandó tal perturbación o contra el que, a sabiendas y directamente, se aproveche de ella y contra el sucesor del despojante. El objeto de esta acción es poner término a la perturbación, indemnizar al poseedor, y que el demandado no vuelva a perturbar y sea conminado con multa, o arresto para el caso de reincidencia”.

---

<sup>18</sup> Lo anterior queda establecido en la siguiente jurisprudencia: “ACCIÓN PUBLICIANA. NO IMPIDE SU EJERCICIO LA PROMOCIÓN ANTERIOR DE JUICIO REIVINDICATORIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla no contiene disposición legal alguna que prohíba la promoción del juicio plenario de posesión de un inmueble, si previamente se ha intentado juicio reivindicatorio respecto del mismo y tampoco se establece en dicho cuerpo legal que deba seguirse un orden para la promoción de tales procedimientos, pues el artículo 808 del Código citado solamente señala que el vencido en un interdicto de retener o recuperar la posesión, puede con posterioridad promover indistintamente juicio plenario de posesión o juicio reivindicatorio. Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, novena época, tomo V, página 767.

Del análisis del artículo 16 podemos obtener las siguientes conclusiones para su procedencia:

- I. Los que están legitimados para interponer una demanda de interdicto de retener la posesión, son los propietarios, arrendatarios, comodatarios, usufructuarios y depositarios. Es decir, toda aquella persona física o moral que tenga un título que le otorgue la posesión originaria o derivada; los simples detentadores están impedidos para interponer una demanda de esta acción.
- II. Sólo procede en contra del perturbador o en contra del sucesor del despojante para el derecho civil. Para el derecho ambiental se agregarían los colindantes: aquellas personas físicas o morales de acuerdo a su actividad, procesos productivos o materia prima empleada.
- III. Condenar al perturbador al pago de costas e indemnizaciones de daños y perjuicios. Además de la remediación del daño ocasionado.

En el Derecho ambiental, los tratadistas han escrito que el ambiente es un bien jurídico protegido, cuya legitimación recae en la sociedad en general para lo cual el Derecho Procesal Civil debe establecer que la acción para compensar un daño ambiental puede ser intentada a título personal o colectivo.

Para Sánchez Narciso el Derecho Ambiental “debe verse como un derecho concomitante a la propia vida”.<sup>19</sup> Concordamos con dicha opinión y se debe partir del ser humano y su vínculo existente con el ambiente para reconocer y confirmar ante la normatividad civil la legitimación para interponer una demanda de compensación por un daño ambiental.

Recordemos que el ambiente es un sistema (conjunto de elementos que están interrelacionados) que tiene las siguientes características:<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> SÁNCHEZ GÓMEZ, Narciso, *Temas Selectos de Derecho Ambiental*, primera edición, editorial Porrúa, México, 2008, página 229.

<sup>20</sup> MARTÍN MATEO, Ramón, *Manual de Derecho Ambiental*, tercera edición, editorial Aranzadi, España, 2003, página 24.

- a. Constituyen el soporte de vida.
- b. Interaccionan con los organismos naturales.
- c. Tienen ámbito planetario.

Cualquier tipo de variación en sus componentes trae por consecuencia modificaciones en sus patrones; estas situaciones son procreadas por la conducta humana<sup>21</sup> y el ser humano es el primer afectado en su interés de sobrevivencia por las mismas afectaciones que sufre el ambiente.

Este interés de sobrevivencia se debe traducir en el ámbito jurídico como un interés legítimo para proceder legalmente.

Este reconocimiento y confirmación a los intereses particulares y colectivos por parte del órgano jurisdiccional en juicios civiles de índole ambiental se logra en la adecuada aplicación de los artículos 46 y 51 del Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí que dicen:

Artículo 46.- “Los interesados y sus representantes legítimos podrán comparecer en juicio por sí, o por medio de procurador con poder bastante”.

Artículo 51.- “Siempre que dos o más personas ejerciten una misma acción u opongan la misma excepción, deberán litigar unidas y bajo una misma representación. A este efecto deberán, dentro de tres días, nombrar un procurador judicial que los represente a todos con las facultades necesarias para la continuación del juicio; o elegir de entre ellos mismos, un representante común...”

Bernard Frank sostiene que “la situación jurídica corresponde a aquellos particulares susceptibles de resultar afectados por la contaminación industrial, podrían verse

---

<sup>21</sup> MARTÍN MATEO menciona: “Para el derecho lo relevante es la alteración externamente inducida de estos grandes sistemas, inhabilitándolos o perjudicándolos en la materialización de sus imprescindibles funciones de apoyo a los ecosistemas menores, lo que puede producirse por causas ajenas al hombre, como las que han desencadenado los grandes episodios de extinción de especies, o las que se siguen produciendo por fenómenos como el vulcanismo o la transmisión por ciertas rocas de radioactividad a los mares, pero sobre todo como consecuencia de conductas humanas, la contaminación, que el Derecho Ambiental se propone impedir o reducir”. *Ídem*, p. 25.

afectados directamente en su esfera de derechos e intereses”.<sup>22</sup> De estas ideas se marca la legitimación a personas físicas que resulten perturbados directamente por el resultado de las actividades industriales (contaminación).

El Derecho Administrativo en comparación con el Derecho Civil, cuando aborda temas ambientales, permite a toda persona iniciar un trámite administrativo, es decir la legitimación activa es más amplia.

En el artículo 189 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente<sup>23</sup> se plantea la posibilidad de que cualquiera realice una denuncia popular ante cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales.

Otro ejemplo lo hallamos en el artículo 107 Ley General de Vida Silvestre,<sup>24</sup> que contempla que cualquier persona puede denunciar cuando existan daños a la vida silvestre y su hábitat.

Resulta imprescindible crear y mantener una uniformidad de criterios jurídicos tanto en el Derecho Administrativo como en el Derecho Procesal Civil, que reconozcan el derecho y la facultad a toda aquella persona o grupo de personas para que tenga la legitimación suficiente y necesaria para presentar, interponer una demanda o denuncia cuando el bien tutelado es el ambiente.<sup>25</sup>

Como hemos visto, la novedad no radica tanto en el hecho de que se confiera legitimación al grupo, pues como se ha visto, esa legitimación está regulada en diversos cuerpos normativos, sino que se confiera capacidad para ser parte.

---

<sup>22</sup> FRANK MACERA, Bernad, *El Deber Industrial de Respetar el Ambiente*, primera edición, Marcial Pons ediciones jurídicas y sociales, S.A., España, 1998, página 57.

<sup>23</sup> El artículo 189 señala textualmente: “Toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y sociedades podrán denunciar ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o ante otras autoridades todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales, o contravenga las disposiciones de la presente Ley y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico”. *Op. cit.*

<sup>24</sup> El artículo 107 indica: “Cualquier persona física o moral podrá denunciar ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente daños a la vida silvestre y su hábitat sin necesidad de demostrar una afectación personal y directa en razón de dichos daños”. *Op. cit.*

<sup>25</sup> NARCISO SÁNCHEZ sostiene: “Es indudable que todas las leyes de carácter ambiental se contemplan el mismo espíritu normativo, que faculta a la población en general y a título particular para que denuncien los hechos o actos que atenten contra el medio ambiente y el equilibrio ecológico...”, SÁNCHEZ GÓMEZ, Narciso, *Op. cit.*, p. 114.



Y es este el principal problema para la actuación procesal de los grupos, ya que al ser el grupo un ente sin personalidad jurídica y sin una estructura organizativa (sociedad, asociación), tiene altibajos jurídicos como para ser sujetos de derechos y obligaciones en un proceso.

La Ley de Enjuiciamiento Civil de España contempla en el capítulo I “De la capacidad para ser parte, la capacidad procesal y la legitimación”, y en el artículo 11, los intereses colectivos o difusos.<sup>26</sup>

Para los efectos jurídico-ambientales en caso de daño ambiental, el inciso 2 en su parte final es el adecuado para indicar la legitimación y correspondiente capacidad jurídica.

Aunque es preciso señalar que para algunos autores de Derecho Procesal, esta innovación jurídica ha generado otras cuestiones procesales que el legislador no ha resuelto, estos escenarios son:

- I. Los ciudadanos son contemplados bajo una perspectiva de consumidores y usuarios.
- II. La capacidad para actuar válidamente en el proceso.
- III. La intervención procesal.
- IV. La posible intervención del Ministerio Público.
- V. El reconocimiento de una acción popular *quivis ex populo*.
- VI. Los poderes procesales del juez.
- VII. La acumulación de diversos procesos.
- VIII. La extensión y límites subjetivos de la cosa juzgada.
- IX. Los que se plantean en sede de la ejecución de la sentencia.

---

<sup>26</sup> El artículo 11 se compone de tres numerales que indican: “Legitimación para la defensa de derechos e intereses de consumidores y usuarios.

1. Sin perjuicio de la legitimación individual de los perjudicados, las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas estarán legitimadas para defender en juicio los derechos e intereses de sus asociados y los de la asociación, así como los intereses generales de los consumidores y usuarios.

2. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean un grupo de consumidores o usuarios cuyos componentes estén perfectamente determinados o sean fácilmente determinables, la legitimación para pretender la tutela de esos intereses colectivos corresponde a las asociaciones de consumidores y usuarios, a las entidades legalmente constituidas que tengan por objeto la defensa o protección de éstos, así como a los propios grupos de afectados.

3. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean una pluralidad de consumidores o usuarios indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos corresponderá exclusivamente a las asociaciones de consumidores y usuarios que, conforme a la Ley, sean representativas”. *Boletín Oficial del Estado*, enero 8, 2000, Madrid, España.

### 1.3.1 El carácter de perturbador ambiental

La acción interdictal de retener la posesión debe intentarse demandando al tercero que ha amenazado grave e ilegalmente de despojo o ha ejecutado o hecho ejecutar actos preparatorios tendentes directamente a una usurpación violenta, por lo que esta acción, debe deducirse, se lleva a cabo exclusivamente contra el perturbador que ejecutó actos tendentes a privar de la posesión.

Al analizar la figura del perturbador en un juicio interdictal por daños ambientales, acerca de quiénes pueden tener este *status*, debemos considerar a aquellas personas (físicas o morales) que cubran los siguientes supuestos:

- a. A todos aquellos(as) que tienen los medios adecuados (maquinaria, equipo y herramienta) cuya operación interactúe con el ambiente o alguno de sus elementos y que en un momento determinado genere un daño ambiental.<sup>27</sup>
- b. Aquellos(as) que hagan uso de sustancias químicas dentro de sus actividades, servicios o procesos.
- c. Aquello(as) actividad(es) realizada(s) por personal externo denominado contratista<sup>28</sup> en una negociación por una actividad determinada o una serie de trabajos encomendados derivado de un contrato de prestación de servicios.

El carácter de perturbador en el Derecho Civil se refiere al que ejecuta actos tendentes a privar de la posesión a otra persona, por lo que forzosamente existe una relación de vecinos o colindantes. Como excepción a la regla del perturbador, cuando se ven juicios por daños ambientales, no tiene que existir una relación de vecinos o colindantes en razón que el despojo versa sobre uno o varios elementos del ambiente y por sus tipicidades no tienen que suscribirse a un espacio o territorio determinados,

---

<sup>27</sup> JORGE BUSTAMANTE manifiesta: "El creciente dominio de las fuerzas naturales por parte del hombre mediante una tecnología avanzada, no permite, sin embargo, un control absoluto de aquellas, haciendo surgir riesgos que son inherentes a las modalidades actuales de la producción y el desarrollo, escapando de la posibilidad de su previsión y, por lo tanto, de la imputación culposa de las consecuencias". BUSTAMANTE ALSINA Jorge, *Derecho Ambiental*, primera edición, editorial Abeledo Perrot, Argentina, 1995, página 151.

<sup>28</sup> La NOM-018-STPS-2000 indica en el punto 4.1 definiciones que contratista es: "Patrón o trabajador ajeno al centro de trabajo que labora temporalmente en éste, y que está involucrado directa o indirectamente con el proceso, y que con motivo de su trabajo puede agregar o incrementar factores de riesgo". *Diario Oficial de la Federación*, marzo 10, 2000, México, D.F.

ya que pueden efectuarse actividades cuyas repercusiones se pueden manifestar en otro lugar.

El carácter de perturbador lo tienen la o las personas que se van a mencionar en la demanda civil por daños ambientales lo cual se estudiará más adelante.

### **1.3.2 Tipos o clases de actos perturbatorios en materia ambiental**

El artículo 16, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí<sup>29</sup> hace una especificación general de los actos de perturbación, que consisten en diversos trámites, a realizar ante las autoridades administrativas y judiciales para hacer valer un presunto derecho; esto elimina que esos supuestos actos de perturbación se aleguen para impedir el ejercicio de un derecho y queden comprendidos dentro de la segunda hipótesis del artículo citado, puesto que se solicita la intervención de las autoridades consideradas competentes para dilucidar la existencia de un presunto derecho.

Los actos de perturbación realizados deben inclinarse al despojo, es decir, deben ser actos graves que amenacen la posesión, que preparen en forma directa la usurpación violenta o que impidan el ejercicio de un derecho.

En este sentido la jurisprudencia ha señalado lo siguiente:

Interdicto de retener la posesión. Para su procedencia se requiere de actos de perturbaciones reales y concretas, no sólo intencionales (legislación del Estado de México).<sup>30</sup>

Los presupuestos que deben ser acreditados por el actor para que pueda prosperar el interdicto para retener la posesión, conforme lo dispone el artículo 488, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, son: a) que la perturbación consista en actos preparatorios tendientes directamente a la usurpación violenta o a impedir el ejercicio de un derecho; b) que se reclame dentro de un año; y c) que el poseedor no haya obtenido la posesión de un contrario

<sup>29</sup> El artículo 16 señala en su párrafo segundo que: "...la perturbación consiste en actos preparatorios tendientes directamente a la usurpación violenta, o a impedir el ejercicio del derecho; que se reclame dentro de un año y el poseedor no haya obtenido la posesión de su contrario por fuerza, clandestinamente o a título precario". *Op. cit.*

<sup>30</sup> Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, novena época, tomo XIII, página 1157.

por la fuerza, clandestinamente o a ruegos. De lo anterior se desprende que los actos desplegados por el demandado deben ser una manifestación de voluntad directamente encaminada a producir una perturbación en la posesión con consecuencias jurídicas, es decir, que para que pueda considerarse cierta su existencia deben ser reales y externados esos actos, y no quedarse en la sola intención, puesto que la esencia de esta figura jurídica estriba en la necesidad de evitar que los particulares se hagan justicia por sí mismos; es decir, su objeto es poner término a dicha perturbación, indemnizar al poseedor y que el demandado afiance no volver a perturbar y sea conminado con multa o arresto para el caso de reincidencia. En ese orden de ideas, para que de acuerdo con su génesis se actualice la acción interdictal que nos ocupa, es obvio que el demandado debe desplegar actos que trasciendan al mundo material de manera efectiva, lesionándose el derecho real de posesión que dice tener el actor sobre el inmueble, pues el orden jurídico no se ocupa de conductas internas del individuo, sino de manifestaciones de voluntad que traigan aparejada una consecuencia legal; en esas condiciones, resulta claro que si no existen dichas manifestaciones de voluntad, no puede considerarse que existan actos perturbatorios del derecho de posesión que amerite tutela jurisdiccional.

Como lo plantea Araujo Valdivia,<sup>31</sup> basta con el inicio de los actos o hechos de perturbación, sin que exista una consumación completa por parte del perturbador, para que su prosecución ante el órgano jurisdiccional sea procedente. Sobre el particular es importante que en el ámbito jurídico-ambiental se configure el inicio de las actividades para la procedencia legal del interdicto, sin que se considere si el acto o hecho son únicos o consisten en una serie de actos o hechos que no hayan cesado.

Los actos perturbatorios en bienes inmuebles procedentes del interdicto de retener la posesión se encuentran en el título segundo ("clasificación de los bienes"), Capítulo I

---

<sup>31</sup> ARAUJO VALDIVIA manifiesta que: "Este interdicto es interesante en su procedencia en razón que comienza mediante vías de hecho o cuando se ha consumado un despojo parcial por parte del perturbador, pues tales actos impiden al poseedor el libre ejercicio de su posesión, sin que hayan llegado a constituir el despojo total". ARAUJO VALDIVIA, Luis, *Derechos de las Cosas y de las Sucesiones*, tercera edición, editorial Cajica, México, 1982, página 187.

(“de los bienes inmuebles”) del Código Civil de San Luis Potosí, en el artículo 697,<sup>32</sup> en el que se hace una especificación de los bienes inmuebles y sus características:

- I.- El suelo y las construcciones adheridas a él.
- II.- Las plantas y árboles, mientras estuvieren unidos al inmueble, y los frutos pendientes de los mismos árboles y plantas, mientras no sean separados de ellos por cosechas o cortes regulares.
- III.- Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de modo que no puede separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto a él adherido.
- IV.- Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de ornamentación, colocados en edificios o heredades por el dueño del inmueble, en tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo permanente al inmueble.
- V.- Los palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos análogos, cuando el propietario los conserve con el propósito de mantenerlos unidos al inmueble y formando parte de ella de un modo permanente.
- VI.- Las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados por el propietario de la finca directa y exclusivamente a la industria o explotación de la misma.
- VII.- Los abonos destinados al cultivo de una heredad, que estén en las tierras donde hayan de utilizarse, y las semillas necesarias para el cultivo de la finca.
- VIII.- Los aparatos eléctricos y accesorios adheridos al inmueble por el dueño de éstos, salvo convenio en contrario.

---

<sup>32</sup> Reformas *Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí*, octubre 03, 2000, S.L.P.

- IX.- Los manantiales, estanques, aljibes y corrientes de agua, así como los acueductos y las cañerías de cualquiera especie que sirva para conducir los líquidos o gases a un inmueble o para extraerlo de él.
- X.- Los animales que formen el pie de cría en los predios rústicos destinados total o parcialmente al ramo de ganadería; así como las bestias, tractores y demás implementos mecanizados, de trabajo indispensables para el cultivo del inmueble, mientras están destinadas a ese objeto.
- XI.- Los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén destinados por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, laguna o costa.
- XII.- Los derechos reales sobre inmuebles.
- XIII.- Las vías de los ferrocarriles, los cables de transmisiones y de comunicaciones electrónicas las líneas telefónicas, telegráficas, televisivas y de comunicación en general y las estaciones radiotelegráficas y radiotelefónicas fijas.

Para la procedencia del interdicto de retener la posesión en el ámbito ambiental sólo pueden ser invocadas las fracciones I, II, V, IX y X del artículo de referencia, pero, por la naturaleza del ambiente, se requiere de ampliar las hipótesis de los actos perturbatorios.

Podemos considerar que los actos perturbatorios ambientales consisten en: *“aquellas actividades industriales y no industriales, hechos o actos ejercidos por persona física o moral cuyo resultado se traduce en un detrimento en el ambiente o en alguno de sus elementos que imposibilitan su funcionamiento adecuado y su correcta correlación entre ellos”*.

Estos actos perturbatorios al ambiente se traducen en la disminución a los servicios ambientales que tienen los elementos ambientales.

En este contexto proponemos que los actos perturbatorios ambientales en un juicio de interdicto ambiental consideren las siguientes actividades:

- I. Las señaladas en las fracciones I, II, V, IX y X del artículo 697 del Código Civil de San Luis Potosí.
- II. Las actividades señaladas en el artículo 5º del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental.<sup>33</sup>
- III. Las actividades señaladas en el artículo 17 bis del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente en materia de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica.<sup>34</sup>
- IV. Las actividades señaladas en el artículo 5º. del Reglamento de la Ley Ambiental en materia de Evaluación de Impacto Ambiental y Riesgo del Estado de San Luis Potosí.<sup>35</sup>

En este sentido Narciso Sánchez indica: “todos aquellos actos que, por los efectos negativos o dañinos que se producen en el entorno natural o social, como resultado de las conductas ilícitas de personas físicas y morales que destruyen o agotan los recursos naturales, propician la contaminación del agua, aire y suelos o atentan contra la vida de los seres humanos o especies de flora y fauna”.<sup>36</sup>

El referirnos a estas actividades establecidas en diversos reglamentos ambientales, nos permite establecer un indicio de que, al efectuarlas, se tiene la presunción legal de origen del daño ambiental. En los incisos a) y b), encontramos actividades que se desarrollan en parques industriales. En el inciso c), son actividades que no siempre requieren ser realizadas en un parque industrial; pueden desarrollarse dentro de una negociación dentro de la ciudad.

Ahora bien, los actos perturbatorios de carácter ambiental que indicamos en los incisos a, b, c y d son efectuados por empresas que tienen los medios adecuados para

---

<sup>33</sup> *Diario Oficial de la Federación*, mayo 30, 2000, México, D.F.

<sup>34</sup> *Diario Oficial de la Federación*, junio 03, 2004, México, D.F.

<sup>35</sup> *Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí*, noviembre 07, 2007, S.L.P.

<sup>36</sup> SÁNCHEZ GÓMEZ, Narciso, *Temas Selectos de Derecho Ambiental*, Op. cit., p. 231.

inducir directa e indirectamente sobre el ambiente, por la maquinaria o equipo que cuentan para elaborar sus productos o subproductos<sup>37</sup> y que al no tener un control adecuado y sistematizado, pueden generar daños ambientales porque han sobrepasado los parámetros establecidos en las normas oficiales mexicanas en materia ambiental, como emisiones a la atmósfera y gestión de residuos peligrosos.

#### 1.4 La posesión ejercida en el ambiente y sus elementos

La etimología de posesión proviene de *posestón*, la cual es una palabra que parece encontrarse en la locución latina *possessio* que deriva de la palabra *possidere*, que a su vez se compone de *sedere* y del prefijo *pos* o *posse* que equivale a poder.<sup>38</sup>

Históricamente los romanos consideraban la posesión como la relación o estado que permitía ejercer un poder físico exclusivo para ejecutar actos materiales sobre la cosa, es decir, el *animus domini*.<sup>39</sup>

Es menester precisar que la teoría objetiva de la posesión de Rudolf Von Ihering, fue acogida por nuestro legislador, plasmándola en el Derecho Civil Mexicano. Dice Ihering que hay un choque de intereses apareciendo entre el poseedor no propietario y el propietario que no posee: hecho y derecho, el conflicto se presenta entre posesión como poder de hecho y la propiedad como poder de derecho.

Doctrinal y normativamente encontramos que la posesión está constituida por dos elementos: el material llamado "*corpus*" y el psicológico llamado "*animus*".

- a). *Corpus*: Comprendiendo este elemento como el conjunto de actos materiales que demuestran la existencia del poder físico que ejerce

---

<sup>37</sup> BERNAD MACERA indica que: "La industria como titular del deber aquí estudiado, engloba el conjunto de empresas que realizan *operaciones predominantemente mecanizadas y unitariamente destinadas a transformar* (mediante procedimientos mecánicos, químicos, eléctricos, térmicos o mixtos) directa o indirectamente (dependiendo de si se requiere o no una operación de elaboración o transformación previa) *los productos naturales y las materias primas vegetales, animales y minerales –obtenidas por una actividad del sector primario-, o las sustancias generadoras de energía con el fin de conseguir un producto acabado* (destinado directamente al mercado) o *semi-acabado* (sometido a transformación ulterior) *de naturaleza tangible o no*. Son también industriales las *operaciones comerciales*". FRANK MACERA, Bernad, *Op. cit.*, p. 50.

<sup>38</sup> MAGALLON IBARRA, Jorge Mario, *Instituciones de Derecho Civil Tomo IV Derechos Reales*, primera edición, editorial Porrúa, México, 1990, página 106.

<sup>39</sup> CABANELLAS GUILLERMO señala: "Si el ánimo constituye intención y voluntad, el *animus domini* representa textualmente la intención del dominio. La voluntad de retener lo poseído esta expresión latina se emplea para indicar la voluntad de un sujeto de tratar una cosa como suya". CABANELLAS, Guillermo, *Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual tomo I A-B*, vigésima primera edición, editorial Heliasta, Argentina, 1989, página 296.



el poseedor sobre la cosa para retenerla en forma exclusiva. Es decir, la posibilidad de disponer de ella en forma directa e inmediata. Esta concepción es recogida en el artículo 736, segundo párrafo del Código Civil de San Luis Potosí.<sup>40</sup>

- b). *Animus*: Es de carácter psicológico, se denomina así porque consiste en tener el *corpus* con la intención de conducirse como propietario o porque es dueño. En otras palabras, es el propósito exteriorizado por hechos concretos por el que posee como dueño material de ella. Lo anterior se encuentra establecido en el artículo 736, primer párrafo, del Código Civil de San Luis Potosí que indica: “posesión es la tenencia o goce por una persona, o por otra en su nombre, de un bien corpóreo o de un derecho, respectivamente, con el ánimo de comportarse como propietarios de ese bien o como titulares de ese derecho”.

La normatividad civil reconoce la existencia en la posesión de los dos elementos: *corpus* y *animus*, considerando al primero como la manera de exteriorizar el *animus* mediante un conjunto de hechos que demuestran una explotación económica de la cosa y que también son la forma visible de la propiedad.

Otro aspecto relevante de la teoría defendida por Ihering es que mientras no exista un texto expreso que declare que un caso de detentación no es posesión, debe reputarse a quien aparece como detentador con el carácter de poseedor y si el legislador dispone en forma expresa que el detentador no será poseedor, se tendrá que acoger a lo formulado en la ley.

Como lo hemos planteado, el Derecho Positivo mexicano se acoge a la teoría objetiva o teoría de Ihering, consistente en que el derecho sustantivo es un interés jurídicamente protegido; lo anterior implica que el poder de hecho que alguien tiene sobre una cosa comprende los derechos normalmente atribuidos a la propiedad, total o parcialmente, como son: disfrutar, usar y disponer.

---

<sup>40</sup> El artículo 736 segundo párrafo indica “... Es poseedor de un bien el que ejerce sobre él un poder de hecho, salvo lo dispuesto en el artículo 739. Posee un derecho el que goza de él”. *Op. cit.*

Para Rojina Villegas, la posesión es “una relación o estado de hecho, que confiere a una persona el poder exclusivo de retener una cosa para ejecutar actos materiales de aprovechamiento, *animus domini* o como consecuencia de un derecho real o personal, o sin derecho alguno”.<sup>41</sup>

En los Códigos Civiles Federales de 1870 y 1884, que estuvieron vigentes en México, se definió la posesión como la tenencia de una cosa o el goce de un derecho por nosotros mismos o por otro en nuestro nombre, incorporando en esta definición los elementos: *corpus* y *animus*. El *corpus* queda constituido por la tenencia de una cosa y el *animus* por el hecho de ejecutar esa tenencia o goce por nosotros mismos o por otra persona.

Los anteriores Códigos Civiles señalaban que la posesión da como resultado un estado que genera consecuencias jurídicas, como por ejemplo las cosas que no tienen dueño y se empieza a tener uso y disfrute de un bien para crear consecuencias legales.

El concepto genérico de cosa, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española es “todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, real o abstracta”.<sup>42</sup> Tal enunciado no puede ser aceptado por el Derecho, en razón que abarca todo lo que se puede pensar en un sentido técnico jurídico, ya que cosa es todo aquello susceptible de ser objeto de derechos y, por tanto, es aquella parte de la naturaleza capaz de ser sometida al poder del hombre y revestida de una utilidad económica.<sup>43</sup>

El artículo 740 del Código Civil de San Luis Potosí<sup>44</sup> no concibe una especificación de las cosas, sino que se limita a indicar las que son aptas de tomarse para sí, haciéndonos dueños de ella. Es decir, al referirse a las cosas, se puede convertir en dueño en razón a una relación contractual o por medio de la prescripción positiva.<sup>45</sup>

Para que tal poder de hecho constituya lo que jurídicamente conocemos como

---

<sup>41</sup> ROJINA VILLEGAS, Rafael, *Op. cit.*, p. 189.

<sup>42</sup> *Diccionario de la Lengua Española*, primera edición, editorial Océano, México, 1990, página 135.

<sup>43</sup> MUÑOZ, Luis, *Derecho Civil Mexicano*, primera edición, ediciones Modelo, México, 1971, página 339.

<sup>44</sup> El artículo 740 establece: “Sólo pueden ser objeto de posesión de las cosas y derechos que sean susceptibles de apropiación”. *Op. cit.*

<sup>45</sup> La prescripción positiva es la adquisición de bienes en virtud de la posesión. Lo anterior está establecido en el artículo 1081 del Código Civil de San Luis Potosí. *Op. cit.*

posesión, debe, necesariamente, tener una causa, un origen; se trata de la denominada *causa possessionis* que por su naturaleza jurídica sea capaz de generar derechos para quien tiene ese poder de hecho, dando lugar a la posesión originaria o posesión derivada.

Contrariamente a lo que sucede con la simple tenencia material u ocupación no legitimada por alguna causa, que jurídicamente sea apta para otorgar al poseedor alguno o todos los derechos que emanan de la posesión, razón por la cual la simple tenencia material u ocupación no están salvaguardadas por la Constitución Federal.

Debemos considerar la circunstancia o hecho de que existe una posesión ejercida por el ser humano respecto al ambiente y a sus elementos.

Cualquier persona tiene el derecho de ejercer una posesión sobre el ambiente ya que el hombre forma parte del ambiente y el ambiente es sustento de vida para el ser humano, por lo que el concepto de posesión manejado por el Derecho Civil queda rebasado y limitado al umbral del ambiente.

Establece Ernesto Gutiérrez en este sentido: “habrá posesión en todo caso en que se ejerza un poder de hecho y no haya una de derecho que prive a ese poder de hecho de la calidad de posesión”.<sup>46</sup> A pesar de lo anterior, al hablar de la posesión del ambiente o de alguno de sus elementos, no existe norma jurídica alguno que prive ese poder de hecho que se ejerce por parte del ser humano.

La figura de la posesión también se encuentra en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como derechos humanos que tiene el gobernado, pero tal análisis se expondrá en líneas posteriores.

La figura de la posesión tiene en la Ciencia del Derecho diversas funciones y al trasladarla al ámbito del Derecho Ambiental como existencia para la vida y sustentabilidad, podemos señalar:

---

<sup>46</sup> GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto, *El Patrimonio*, sexta edición, editorial Porrúa, México, 1999, página 566.

I. Contenido de un derecho:

Es el medio necesario para realizar todos los fines que permite el derecho ambiental, ya que sin el uso o disfrute del ambiente, se negaría la existencia y el derecho a la vida.

II. Requisito para el nacimiento de un derecho:

Sirve o desempeña la función jurídica de punto de partida para adquirirlo, ya que la pérdida de la posesión del ambiente o sus elementos, engendra consecuencias legales para su restitución.

III. Fundamento de un derecho:

La posesión en sí misma, sin ser necesario el dominio u otro factor extraño, merece el amparo de la ley, cualquiera que sea su naturaleza; además, nadie puede perturbarla arbitrariamente y dejar al ser humano sin los beneficios que sólo el ambiente puede otorgar.

En base a lo anterior, podemos indicar que toda persona despliega actos posesorios sobre el ambiente o sus elementos, ya que sin estos actos le sería imposible contar con una vida plena con un adecuado desarrollo físico y emocional, siendo transferida de generación en generación y que trasciende a la posesión originaria o derivada.

Basta indicar en la demanda interdictal que es para reparar un daño ambiental para que el juzgador omita requerir en el auto de radicación el origen de la posesión (originada o derivada) del promovente de la demanda.

Lo estudiado podríamos sintetizarlo bajo una perspectiva jurídica en un nuevo concepto denominado *posesión ambiental* que podría definirse como: “*es aquella tenencia permanente, inalienable e intransferible que es ejercida directa e indirecta por todos los seres humanos en forma individual o colectiva en los elementos que integran el ambiente y que son la fuente, soporte de vida, crecimiento y desarrollo físico y psicosocial de las personas*”.

Luis Muñoz revela, en este sentido, que “las cosas pueden ser bienes cuando han sido objeto de apropiación humana y entrando en el comercio de los hombres, no sólo un objeto individualizado, como un caballo, un carro, sino también determinada

cantidad de agua envasada, un volumen de aire sustraído a la atmósfera; basta que exista y que pueda ser objeto de apropiación”.<sup>47</sup>

Diferimos de lo anterior, ya que muchos de los elementos que integran el ambiente no son susceptibles de comercio. Su cualidad apreciada por el ser humano es la generación, cimiento de vida, de prosecución a la sostenibilidad para otros elementos, un valor *per se*. Es decir, no se necesita que nadie y nada se lo confiera esa particularidad.

En base a lo anterior y parafraseando a Diego Azqueta: “... el medio ambiente tiene valor porque cumple una serie de funciones que afectan positiva y determinantemente al bienestar de las personas que componen la sociedad”.<sup>48</sup>

Debemos considerar que muchos de los recursos naturales tienen como característica la libertad de acceso, lo que implica que su uso y disfrute no tiene costo alguno. Es probable que esta situación reduzca su disponibilidad para otras personas, podríamos poner como ejemplo cuando se pesca una trucha se impide que otro pescador lo haga. Como indica Tania García: “Además, es necesario considerar que muchos de los elementos ambientales son bienes públicos y estos tienen la propiedad de ser no exclusivos y no rivales en su consumo”.<sup>49</sup>

Los recursos naturales, cuando son utilizados por personas físicas o morales por cualquier medio, se presenta la figura de la externalidad,<sup>50</sup> en razón de que los recursos naturales no tienen un valor económico por lo que se consideran como gratuitos.

---

<sup>47</sup> MUÑOZ, Luis, *Op. cit.*, p. 340.

<sup>48</sup> AZQUETA OYARZUN, Diego, *Valoración Económica del Medio Ambiente*, primera edición. editorial McGraw Hill, España, 1994, página 12.

<sup>49</sup> GARCIA LÓPEZ Tania, *Derecho Ambiental Mexicano Introducción y principios*, primera edición, editorial Bosch, México, 2013, página 79.

<sup>50</sup> AZQUETA OYARZUN, Diego dice que “Estamos en presencia de una externalidad (economía externa), cuando la actividad de una persona (o empresa) repercute sobre el bienestar de otra (o sobre su función de producción), sin que se pueda cobrar un precio por ello, en uno u otro sentido. Un ejemplo típico es el del ruido: cuando a una persona se le ocurre ponerla radio a todo volumen en una playa, por ejemplo el bienestar de todos los que están tomando el sol, o leyendo tranquilamente en los alrededores, sin que (en ausencia de una intervención gubernamental) pueda exigir al causante una compensación (precio) por ello. Existen externalidades negativas (deseconomías externas) y positivas (economías externas): el ejemplo que suele aparecer en los libros de texto es el de un jardín bien cuidado (si su vecino lo mantiene en estas condiciones genera una externalidad a su favor, ya que hace más agradable a la vista todo el entorno”, AZQUETA OYARZUN, Diego, *Valoración Económica del Medio Ambiente*, *Op. Cit.*, p. 5.

En este sentido Tania García señala que: “la contaminación económicamente es una externalidad negativa que generan determinados procesos de producción y/o consumo. La externalidad implica, por lo tanto, un coste, siempre que el agente económico que la sufre no sea compensado por el agente que la genera, Cuando se produce la compensación, la externalidad desaparece o, dicho en términos económicos, se internaliza la misma”.<sup>51</sup>

Es necesario distinguir entre el bien jurídico *lato sensu* y aquél con un carácter estrictamente patrimonial.

Cuando hablamos de que es estrictamente patrimonial nos referimos a todo aquello de carácter económico susceptible de apropiación particular. Como lo menciona Jorge Alfredo Domínguez: “lo que por su naturaleza y por no haber una disposición legal que se oponga en su caso, puede pertenecer a una persona en exclusiva, sea ésta de derecho privado o de derecho público; el Estado mismo inclusive”.<sup>52</sup>

Asimismo, Jorge Alfredo Domínguez menciona que no todas las cosas son susceptibles de apropiación particular; el agua, el aire, el mar y la fauna marina, etcétera. Se puede decir que estas cosas son o se convierten en bienes desde el punto de vista económico, porque satisfacen una necesidad; pero no puede considerárseles como bien en el sentido jurídico.<sup>53</sup>

No podemos estar de acuerdo con tal comentario, ya que existen recursos naturales que tienen el privilegio de ser consumidos por el hombre y en otras circunstancias ser entidad de transformación para convertirse como mercancía.

Tomamos como referencia la cita que efectúa Raquel Gutiérrez Nájera de Bassols Batalla que define los recursos naturales como “todo medio de subsistencia de las gentes, que éstas obtienen directamente de la naturaleza”. Los recursos naturales son muchos y variados y su valor reside en ser los medios de subsistencia del ser humano. Es decir, el hecho de *utilizarlos* conservando el mismo carácter en que la naturaleza

---

<sup>51</sup> GARCIA LÓPEZ, Tania, *Quien Contamina Paga Principio Regulator del Derecho Ambiental*, primera edición, editorial Porrúa, México, 2012, página 7.

<sup>52</sup> DOMINGUEZ MARTINEZ, Jorge Alfredo, *Derecho Civil Parte general, Personas, Cosas, Negocio Jurídico e Invalidez*, tercera edición, editorial Porrúa, México, 1992, página 301.

<sup>53</sup> *Ídem*, p. 302.

los ofrece o bien *transformándolos* parcial o totalmente para convertirlos en nuevas fuentes de energía, en subproductos o mercancías manufacturadas.<sup>54</sup>

Por lo que en función a su valor los recursos naturales tienen un *valor de uso o valor de cambio*; el de *uso* se explica en función de la utilidad para el hombre y, el valor de *cambio*, en función de su transformación y explotación en el comercio.<sup>55</sup>

Los recursos naturales se clasifican en dos grupos:

a. Renovables:

Aquellos recursos que pueden volver a obtenerse de la naturaleza en un plazo determinado de tiempo; por ejemplo, los recursos forestales, la flora, la fauna.

b. No renovables:

Por su origen y características, no es posible producirlos o regenerarlos; por ejemplo: los minerales o el petróleo.

Debemos considerar al ambiente y sus elementos de acuerdo a su uso y/o mutación mediante procesos productivos. Por sus características intrínsecas tienen la cualidad inherente de ser contemplados como cosas y bienes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación corrobora esto, sin proporcionar diferencias o categorías entre los elementos del ambiente y los recursos naturales, sino identificándolas como figuras análogas, lo anterior viene señalado en la siguiente jurisprudencia:

Revisión fiscal, procedencia del recurso de. Es importante y trascendente por tratarse de la materia del medio ambiente, no obstante, la autoridad debe razonarlo.<sup>56</sup>

Tratándose de la materia de protección al medio ambiente, se estima que en sí misma reviste importancia y trascendencia, pues la

---

<sup>54</sup> GUTIERREZ NAJERA, Raquel, *Introducción al Estudio del Derecho Ambiental*, sexta edición, editorial Porrúa, México, 2007, página 1.

<sup>55</sup> *Ídem*, p. 2.

<sup>56</sup> Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1994, novena época, tomo XIII, Marzo de 2001, página 1811.

problemática y la dinámica de las circunstancias y necesidades ambientales actuales, respecto de la preservación, aprovechamiento y protección de los recursos naturales, requieren la mayor atención en relación con el cumplimiento a las normas que protejan al medio ambiente y tiendan al equilibrio ecológico. En un Estado de derecho, la única vía para la protección al medio ambiente y de los recursos naturales -como bienes escasos que son y algunos no renovables-, y con ello la protección a la salud a que toda persona tiene derecho, es a través de los ordenamientos jurídicos que los protejan, a que las autoridades administrativas las apliquen estrictamente y las jurisdiccionales resuelvan las controversias que en la materia se presenten, pues como lo establece el quinto párrafo del artículo cuarto constitucional, adicionado en fecha veintiocho de junio de mil novecientos noventa y nueve: "Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar." Asimismo, el cuidado de la salud pública es de orden público e interés social y, desde luego, una de las formas de protegerla es a través de la protección del medio ambiente y buscando el equilibrio ecológico entre el crecimiento económico y la inversión en relación con la protección al ambiente. Sin embargo, las autoridades recurrentes, de conformidad con el artículo 248, fracción II, del Código Fiscal de la Federación deben acatar dicha disposición legal y razonar en el recurso respectivo, la importancia y trascendencia del mismo, pues si no lo hacen, aun cuando es evidente la importancia y trascendencia de dicha materia, contrarían una disposición normativa y, en ese caso, se procederá a declarar improcedente el recurso de revisión interpuesto.

El ambiente requiere ser definido en la doctrina, normatividad civil y ambiental bajo un solo concepto, que sirva de apoyo a otras disciplinas jurídicas como la penal y administrativa y a otras ciencias como la química o la ingeniería.

En virtud de lo anterior podemos proponemos conceptualizar con un enfoque técnico-jurídico los elementos y los recursos naturales y/o ambientales como *"un bien jurídico que, por sus cualidades reales e*



*inmateriales puede ser sujeto de transformación en sus características físicas o químicas, tiene la facultad de satisfacer una necesidad de vida así como de sustentabilidad para otros seres vivos, cuyo contenido de valores, bienes y derechos, son aptos de posesión cuyo goce o disfrute por parte del ser humano, sin fin de propiedad particular, colectiva o de una nación”.*

#### **1.4.1 Clasificación de los bienes del Derecho Civil aplicados en forma supletoria al ambiente**

La clasificación de las cosas actualmente existente en el Código Civil de San Luis Potosí ha tenido variaciones de contenido y alcance a través del tiempo. Como lo indica Luis Muñoz: “las cosas reciben el nombre de bienes cuando han sido objeto de apropiación humana y entrando en el comercio de los hombres”.<sup>57</sup>

Es preciso establecer que no es imperioso que la cosa esté directamente bajo el poder de una persona para que se constituya un bien, basta que exista y que pueda ser objeto de apropiación.

Al respecto hay una distinción entre el ambiente y sus elementos, ya que son de dominio general de las personas por su naturaleza y características. Es decir, no se pueden segregar uno o varios elementos del ambiente proclamándose como propietario a determinada persona.

En cambio, existe normatividad que determina la autorización para el aprovechamiento, explotación y uso de ciertos elementos ambientales.

Podemos citar como ejemplo de lo anterior lo establecido en la Ley Nacional de Aguas,<sup>58</sup> en su título cuarto “Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales”.<sup>59</sup> Capítulo II “Concesiones y asignaciones” artículo 20 que señala: “de conformidad con el carácter público del recurso hídrico, la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales se realizará mediante concesión o asignación otorgada por el Ejecutivo Federal a través de “La Comisión” por medio de

---

<sup>57</sup> MUÑOZ, Luis, p. 340.

<sup>58</sup> *Diario Oficial de la Federación*, diciembre 1º, 1992, México, D.F.

<sup>59</sup> Título reformado, *Diario Oficial de la Federación*, abril 2, 2004, México, D.F.

los Organismos de Cuenca, o directamente por ésta cuando así le competa, de acuerdo con las reglas y condiciones que dispone la presente Ley y sus reglamentos. Las concesiones y asignaciones se otorgarán después de considerar a las partes involucradas, y el costo económico y ambiental de las obras proyectadas”.

La clasificación de las cosas existente en la doctrina y en los Códigos Civiles obedece a que cada clase o especie establecida tiene un valor jurídico diferente en base a su destino y a la persona a la que pertenece.

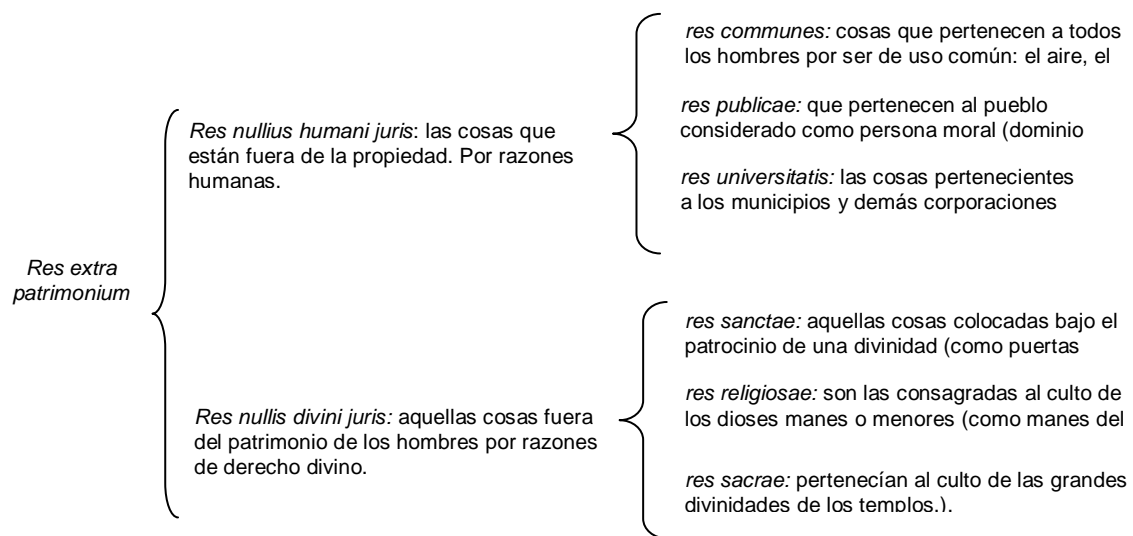
En el Derecho Romano existían dos grupos de cosas: las *res Mancipi*<sup>60</sup> y las *res nec Mancipi*.<sup>61</sup> Posteriormente, en el derecho justiniano hubo una distinción entre los bienes muebles e inmuebles, reemplazando a las primeras y siendo ésta la clasificación que sigue el derecho de cosas en la época actual.

En el Derecho Romano también se distinguía entre las cosas dentro del comercio (*res in patrimonio*) y las que estaban fuera del comercio (*res extra patrimonium*). Estas segundas, por exclusión, determinaban a las primeras.

---

<sup>60</sup> Esta distinción es antiquísima, ya que procede de una época anterior a las XII tablas, y tuvo un sitio importante durante la mayor parte de la historia jurídica de Roma, incluso en la época clásica. Ulpiano dice que: “La *res Mancipi* son los fundos y cosas ubicadas en Italia, las servidumbres, rentas sobre dichos fundos, los esclavos y animales de tiro y carga. Como puede observarse, son bienes propios para la agricultura, los cuales eran de suma importancia para la comunidad de la Roma primitiva que era del todo campesina por lo que dichas *res Mancipi* eran los elementos más importantes de la fortuna privada. Debido a la circunstancia anterior, la venta de estas cosas debía revestir las formalidades prescritas por la ley, siendo estas: pronunciar palabras sacramentales frente a cinco testigos, un *libripens*, una balanza y un pedazo de bronce, negocio conocido como *mancipatio*”. *Diccionario de Derecho Romano Comparado con Derecho Mexicano y Canónico*, primera edición, editorial Porrúa, México, 2000, página 69.

<sup>61</sup> En tanto que las *res nec Mancipi* son todas aquellas cosas que no sean *res Mancipi* (aunque parezca una perogrullada esto era el razonamiento dado por los mismos romanos) y que para su enajenación, sólo exigían la entrega del objeto. *Ibidem*, pp. 69.



La actual doctrina y normatividad civil han determinado la clasificación en sus condiciones físicas o jurídicas (considerándolas en su corporalidad, su consumabilidad, si divisibilidad y su movilidad), según la relación que guardan entre sí (en razón de su composición, porque están adheridas y de pertenencia) y de acuerdo a la persona a quien pertenecen (se determina la cualidad jurídica de los bienes).

De las diversas acepciones y tipos de las cosas, comparadas con los elementos ambientales, como el agua, la atmósfera, el suelo, la biodiversidad, la fauna y la flora, etcétera, existen similitudes en su contexto, función y beneficio generado a otros elementos del ambiente.

La clasificación del Derecho Civil toma en cuenta el criterio de las cosas que se encuentren dentro del comercio; sin embargo y como ya hemos señalado, el ambiente y sus elementos carecen de estos elementos (no son en muchos casos susceptibles de comercio y de propiedad)

Como ya hemos subrayado, el ser humano, como parte de la naturaleza, requiere para su existencia del ambiente y de sus elementos.

Tal y como señala Eva Capitán: “los recursos naturales son medios que suponen su sustento material, al tiempo que le brindan la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral y espiritualmente”.<sup>62</sup>

Por otra parte, Eva Jordán señala: “ya que tales elementos son idóneos en orden a permitir su pleno desenvolvimiento, puede configurarse como un derecho de la persona, en función del cual, ésta gozaría de facultades dirigidas a exigir su protección y en su caso, la indemnización correspondiente en caso de vulneración efectiva”.<sup>63</sup>

De la clasificación de las cosas del Derecho Civil, con la finalidad de invocarlas procesalmente en juicios civiles ambientales, se requiere manejar las similitudes o analogías con el ambiente o sus elementos, por lo que podemos mencionar:

a. Cosas corporales:

Son aquellas cosas fluidas y completamente palpables. Como indica Jorge Alfredo Domínguez “tienen un cuerpo físicamente considerado; ocupan un lugar en el espacio y consecuentemente pueden ser vistos y palpados”.<sup>64</sup>

Dentro de esta categoría estarían: el suelo, la fauna, la flora y el agua.

b. Cosas compuestas:

Son aquellas que están constituidas por la unión de diversas partes que conforman un todo. Ejemplo de ellos es una reserva natural, un ecosistema, entendido como el sistema de relaciones que componen el ambiente.

c. Cosas indivisibles:

Son aquellas cosas que no son susceptibles de ser fraccionadas, mermando su forma y disminuyendo o cambiando considerablemente su valor. Un ejemplo claro de esta categoría sería la atmósfera.

---

<sup>62</sup> JORDAN CAPITAN, Eva, *El Derecho a un Medio Ambiente Adecuado*, primera edición, editorial Aranzadi, Navarra, 2001, página 27.

<sup>63</sup> *Ídem*, p. 136.

<sup>64</sup> DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, Jorge Alfredo, *Op. cit.*, p. 305.

d. Cosas consumibles:

Aquellas cuyo uso altera la sustancia de que están constituidas o ésta queda destruida. Esto se puede relacionar con aquellos recursos naturales como el agua y el suelo.

e. Cosas no fungibles:

Estas cosas tienen como característica que requieren una comparación de ese bien con otro, para determinar con ello si pueden substituirse recíprocamente, por ser ambos de la misma especie, calidad y cantidad.

Por tanto, tienen la posibilidad de ser substituidos por otro u otros de la misma naturaleza y características. En este sentido el ambiente no tiene esta cualidad, en razón de que el hombre no puede sustituir un elemento ambiental de grado por otro que tenga similares características, porque no lo hay.

f. Bienes inmuebles:

Son todas aquellas cosas corporales constituidas por el suelo y adheridas (natural o artificialmente a éste).

g. Inmuebles por naturaleza:

Son exclusivamente el suelo y subsuelo, en razón de la absoluta inmovilidad de los mismos. Tiene el mismo significado y lo delimitaríamos a determinados elementos como las plantas y árboles unidos a la tierra y los frutos pendientes de separarse de los árboles, los manantiales y corrientes de agua.

h. Inmuebles por destino:

Son aquellas cosas muebles por naturaleza, las cuales están unidas total o parcialmente a un inmueble; forman un todo ideal de él. Concretamente podríamos señalar como ejemplo las partes de que se compone un ecosistema natural cualquiera que sea su índole.

i. Inmuebles por incorporación:

Son aquéllos que se hallan unidos o adheridos al suelo o al subsuelo de manera permanente, como árboles, plantaciones y pozos. Por su naturaleza es mueble, cuando son utilizadas en la construcción u ornamento de un inmueble por naturaleza, siendo así, incorporados a él.

Al respecto de las anteriores instituciones jurídicas de la doctrina civil, podemos afirmar que pueden ser utilizadas en un proceso legal por un daño ambiental sirviendo de apoyo en la expresión de motivación y fundamentación.

Estos instrumentos, al ser aplicados en un juicio civil de carácter ambiental, generarán consecuencias legales que habrán de repercutir en una colectividad cuando se dicte la sentencia definitiva.

Las cosas o bienes susceptibles de posesión del Derecho Civil, vinculadas con el ambiente o sus elementos obedecen a la similitud e interrelación de sus características, lo que facilitaría su identificación por analogía con el ambiente o sus elementos con las instituciones del Derecho Civil.

En el Código Civil de San Luis Potosí en su capítulo II “De la apropiación de los animales” artículo 804 dice: “el ejercicio del derecho de cazar se regirá por las leyes y reglamentos administrativos”. Este artículo está vinculado con los artículos 806<sup>65</sup> y 807<sup>66</sup> del mismo cuerpo legal.

El Derecho Ambiental tiene diferentes concepciones en relación con el Derecho Civil respecto a una misma situación, no es procedente separarlas y diferenciarlas. Tal como lo manifiesta Silvia Jaquenod.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Indica el artículo 806: “Se considera capturado el animal que ha sido muerto por el cazador durante el acto venatorio, y también el que está preso en redes”. *Op. cit.*

<sup>66</sup> Señala el artículo 807 “Si la pieza herida muriese en terrenos ajenos, el propietario de éstos o quien lo represente, deberá entregarla al cazador o permitir que entre a buscarla”. *Op. cit.*

<sup>67</sup> SILVIA JAQUENOD refiere: ¿Cuál sería la ubicación del derecho ambiental dentro de las diferentes disciplinas jurídicas? Según se entienden algunos autores, este derecho invade prácticamente todas las ramas conocidas de las ciencias jurídicas, ello en el sentido que lo ambiental, en tanto objeto de tutela jurídica, tiene que ver con el régimen jurídico administrativo del Estado, con el régimen jurídico Estado individuo, y de los individuos entre sí. Igualmente, incursiona en casi todas las ciencias, tomando parte de éstas y, a su vez, permitiendo la intervención de aquellas. JAQUENOD DE ZSÓGÓN, Silvia, *Iniciación al Derecho Ambiental*, primera edición, editorial Dykinson, Madrid, 1996, página 53.

La regulación del Derecho Civil sigue los postulados del Derecho Romano ya que considera los animales como cosas, equiparables al régimen de los bienes muebles y merecedores de regulación jurídica únicamente en cuanto a objetos de posesión, de propiedad o fuentes de responsabilidad.

En materia ambiental estos razonamientos tienen cierta similitud con el Derecho Civil con la salvedad que la normatividad de vida silvestre indica que debe existir por parte del propietario o legítimo poseedor el derecho a realizar su aprovechamiento sustentable con la obligación de contribuir a la conservación del hábitat.

No se pretende que los elementos naturales o el ambiente sean considerados como netamente patrimoniales tal como están concebidas en el Derecho Civil, porque las figuras de “propiedad”, “justo título” y “posesión” quedan limitadas en sus hipótesis y rebasados por las características del ambiente.

Las estructuras jurídicas del Derecho Civil requieren ser visualizadas, actualizadas o establecidas con nuevos supuestos, cuyo efecto legal sean motivo de fundamento y aplicadas como una nueva alternativa jurídico-procesal ante los órganos jurisdiccionales para compensar un daño ambiental.

El ambiente abarca en palabras de Silvia Jaquenod “todo lo que nos circunda, lo que hace posible y agradable nuestra vida, por lo que es necesariamente la formulación o actualización de normas que establezcan los medios para proteger los recursos naturales o en su defecto la compensación por un menoscabo ocasionado al ambiente”.<sup>68</sup>

Para Blanca Lozano “el sistema normativo dirigido es la preservación del entorno humano mediante el control de la contaminación y la garantía de un uso sostenible de los recursos naturales”.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> JAQUENOD DE ZSÓGÓN, Silvia, *Iniciación al Derecho Ambiental*, Ídem p. 21.

<sup>69</sup> LOZANO CUTANDA, Blanca, *Derecho Ambiental Administrativo*, segunda edición, editorial Dykinson, España, 2001, página 20.

#### 1.4.2 La posesión ambiental ¿es una garantía individual?

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla Derechos Humanos, que hacen referencia a la figura de la posesión; esta protección legal está contenida en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y dichos artículos son invocados principalmente en juicios de amparo para establecer una violación a los preceptos constitucionales.

La garantía de audiencia contenida en el segundo párrafo del artículo 14 Constitucional establece: “nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, *posesiones* o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”.

A lo señalado en líneas precedentes y de acuerdo a la teoría de Ihering, la posesión es un poder de hecho ejercido sobre una cosa; pero requiere algunos derechos aplicables a la propiedad. Ese poder de hecho ejercido sobre la cosa forzosamente debe tener una causa y el reconocimiento de un origen (*causa possessionis*).

Sin embargo, el precepto establecido en el artículo 14 Constitucional no hace referencia a ninguna de las dos posesiones (originaria y derivada) por lo que la protección jurídica derivada de la Constitución Federal se refiere a ambas.<sup>70</sup>

En lo referente al artículo 16 Constitucional<sup>71</sup>, éste indica lo siguiente: “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o *posesiones*, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

Es este precepto, según Ignacio Burgoa, el que “imparte mayor protección a cualquier gobernado, sobre todo a través de la garantía de legalidad que consagra, la cual, dadas su extensión y efectividad jurídicas, pone a la persona a salvo de todo acto de mera afectación a su esfera de derecho que no sólo sea arbitrario”.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> IGNACIO BURGOA indica: “Pues bien, no distinguiendo el segundo párrafo de la Constitución sobre si la garantía de audiencia tutelada a la posesión originaria o a la posesión derivada, es lógico concluir que protege ambas”. BURGOA ORIHUELA, Ignacio, *Las Garantías Individuales*, vigésima segunda edición, editorial Porrúa, México, 1989, página 537.

<sup>71</sup> Artículo reformado *Diario Oficial de la Federación*, septiembre 03, 2003, México, D.F., *Op. cit.*

<sup>72</sup> BURGOA ORIHUELA, *Op. cit.*, p. 583.



Abarca el artículo 16 Constitucional protecciones a instituciones como la familia, el domicilio, los papeles o las posesiones. Tiene todo gobernado, ya que dicho precepto legal empieza con el término “nadie”, si se efectúa una interpretación *contrario sensu* de dicho término.

La expresión “mandamiento por escrito”. Se traduce en un acto de autoridad concurriendo en forma indispensable tres requisitos mínimos, a saber:

- I. Que se exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del respectivo funcionario.
- II. Que provenga de autoridad competente.
- III. Que en los documentos escritos en los que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento.

Estas exigencias tienen como propósito dar certeza sobre la existencia del acto de molestia para que el afectado reconozca con precisión de qué autoridad proviene, así como su contenido y sus consecuencias legales.

La exigencia de la fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, supuesto que tiene su origen en el principio de legalidad.

La motivación se traduce como la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son, precisamente, los previstos en la disposición legal que afirma aplicar.

La interpretación del precepto “que nadie puede ser molestado en sus posesiones”, como indica Burgoa Orihuela: “sólo debe suscitar la cuestión de determinar si dicho acto de autoridad se ajusta o no a las exigencias en que tales garantías se traducen, sin poderse discutir ni dirimir la controversias que versen sobre la legitimidad o ilegitimidad, perfección o imperfección, realidad o apariencia, de una determinada posesión”.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> *Ídem*, p. 589.

Al analizar los artículos 14 y 16 Constitucionales, hallamos que el legislador no específico, con respecto a la figura jurídica de la posesión, a la cual se estaba refiriendo, pero la doctrina Constitucional se basa en la posesión originaria y derivada, contenida en el Derecho Civil.

Sin embargo, bajo el Derecho Ambiental, tales artículos constitucionales no excluyen la posesión desplegada por el hombre respecto al ambiente o sus elementos. Por lo anterior es prioridad que la figura de la posesión del ambiente sea plasmada en un cuerpo normativo para ser citada como fundamento en un proceso judicial.

La figura de la posesión del ambiente, o cualquiera de sus elementos, es ejercida por toda persona física o moral; de ahí que tenga fundamento y razón lógica como un derecho protegido en el artículo 4º párrafo quinto de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos que dice: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.<sup>74</sup>

Para algunos autores como Raúl Brañes este derecho consagrado en el artículo 4º es netamente programático, en razón de que no basta que sea reconocido, sino que se hacerlos efectivos.<sup>75</sup>

En este sentido Jesús Quintana Valtierra señala que el derecho al medio ambiente representa un reconocimiento constitucional, tal como una garantía individual pero que falta establecer instrumentos legales para la tutela de tal derecho consagrado en el artículo 4º Constitucional.<sup>76</sup>

Para María del Carmen Carmona es un principio que sirve de fundamento a otra clase de derechos y que no debe considerarse como una garantía individual.<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup> Párrafo adicionado *Diario Oficial de la Federación*, junio 28, 1999 y reformado febrero 08, 2012, *Op. cit.*

<sup>75</sup> RAÚL BRAÑES señala: “cuando se habla del derecho fundamental de todas las personas a un medio ambiente apropiado no se está haciendo referencia a un derecho “programático”, sino que, como se dicho, a un derecho en el sentido propio de la palabra, que requiere de las correspondientes garantías procesales para hacerse efectivo”. BRAÑES Raúl, *Manual de Derecho Ambiental Mexicano*, Fundación Mexicana para la Educación Ambiental, segunda edición, México, 2000, página 105.

<sup>76</sup> QUINTANA VALTIERRA, Jesús, *Derecho Ambiental Mexicano*. Lineamientos Generales, primera edición editorial Porrúa, México, 2000, página 52.

<sup>77</sup> MARIA DEL CARMEN CARMONA LARA indica: “Es un principio que fundamenta a otros derechos como principio rector y no tiene las características de una garantía individual, y que es un principio rector de la política social y económica”. CARMONA LARA, María del Carmen, *Derechos en Relación con el*

Alicia Morales señala que el ambiente está compuesto de tres secciones.<sup>78</sup> Por su parte, José Juan González establece que: “un primer requisito para la consideración del ambiente como bien jurídico propiamente es el reconocimiento, por parte del ordenamiento normativo, de que la conjunción de las interacciones que se establecen entre los diferentes elementos que lo integran constituye en sí misma un bien jurídico diferente y autónomo, es decir, el bien jurídico medio ambiente”.<sup>79</sup>

El bien jurídico tutelado por el Derecho Ambiental puede ser manejado por sus elementos, que poseen la dualidad jurídica de ser de interés particular y colectivo y que la aplicación de un interés no se traduce en dejar sin efecto legal al otro interés, dependiendo de a qué componente del ambiente se haga referencia en un proceso legal.<sup>80</sup>

En conclusión, el caso de excepción al criterio se traduce en que puede tenerse por acreditado el interés jurídico cuando la posesión que se pretende sea protegida a través de la garantía de audiencia, por lo que no se hace necesario que el quejoso aduzca y, por ende, acredite, la causa originadora de la misma, sino que basta que se pruebe el poder de hecho que se ejerce sobre un bien y que la cuestión posesoria se encuentra en controversia ante la potestad común.

En base a que el ambiente y la interrelación de sus elementos no tienen una barrera limitante o un punto de inicio y/o término, esa dependencia derivada de la unión entre elementos provoca que si existe una mejora o afectación en alguno de ellos, esto repercute o repercutirá en otros elementos.

El artículo 25 Constitucional, en su primer párrafo, indica: “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que

---

*Medio Ambiente*, Colección nuestros derechos, cámara de Diputados LVIII legislatura y Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, segunda edición, México, 2001, página 13.

<sup>78</sup> MORALES señala que: “El ambiente involucra a todo aquello que rodea al hombre; se puede dividir mentalmente en tres secciones: una constituiría el ambiente natural: esto es, el aire, el agua, el suelo, la flora y la fauna, interrelacionados entre sí; otra, el ambiente construido por el hombre, y una tercera constituida por el ambiente social, es decir, los sistemas sociales, políticos y culturales, estos dos últimos sectores conforman el ambiente artificial (en su vertiente material e inmaterial), y que se contraponen al ambiente natural”. MORALES LAMBERTI, Alicia, *Derecho Ambiental Instrumentos de Política y Gestión Ambiental*, primera edición, Alveroni editores, Argentina, 1999, página 31.

<sup>79</sup> GONZALEZ MARQUEZ, Juan José, *La Responsabilidad por el Daño Ambiental en México*, primera edición, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2002, página 26.

<sup>80</sup> ALICIA MORALES ha manifestado que “El ambiente como bien jurídico ha estado en consenso en que era un bien de intereses individuales y colectivos, ha sido, sin embargo, afrontada como un bien jurídico unitario, ya que en algunos casos se regula en su conjunto y en otros se hace a partir de sus componentes”. MORALES LAMBERTI, Alicia, *Op. Cit.*, p. 35.

fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución”.

La garantía contenida en el artículo 25<sup>81</sup> se refiere en opinión de Ignacio Burgoa, a la rectoría económica del Estado, cuya inserción en el capítulo de las Garantías es inapropiado porque no establecen ninguna garantía a favor del gobernado.<sup>82</sup>

El legislador pretendió introducir en el artículo 25 en forma escueta y breve el principio de desarrollo sostenible<sup>83</sup> considerándose como la piedra angular en el Derecho Ambiental.<sup>84</sup>

### **1.5 La acción de interdicto de obra peligrosa en materia ambiental**

El interdicto de obra peligrosa encuentra su fundamento legal en el artículo 20 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí que establece: “la acción de obra peligrosa se da al poseedor jurídico o derivado de una propiedad contigua o cercana, que pueda resentirse o padecer por la ruina o derrumbe de la obra, caída de un árbol u otro objeto análogo; su finalidad es adoptar medidas urgentes para evitar los riesgos que ofrezcan el mal estado de los objetos referidos; obtener la demolición total o parcial de la obra, o la destrucción del objeto peligroso.

---

<sup>81</sup> El artículo 25 Constitucional establece: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo”. *Op cit.*

<sup>82</sup> IGNACIO BURGOA indica: “Los nuevos artículos 25, 26 y 28 de la Constitución en que se ha plasmado normativamente la rectoría del Estado, siguen insertos *indebidamente* dentro del capítulo denominado “de las Garantías Individuales” por un error de técnica legislativa, debiendo estar comprendido en un capítulo diferente de nuestra Ley Suprema, ya que, en puridad, no instituyen ni programan ninguna garantía a favor del gobernado frente a las autoridades del Estado, puesto que alinean básicos de la política estatal del área económica...”. BURGOA ORIHUELA, Ignacio, *Op. cit.*, p. 717.

<sup>83</sup> TANIA GARCIA manifiesta que: “El desarrollo sostenible con lleva una política a largo plazo que, tanto en la economía como en el medio ambiente, deberá atender a las necesidades de las generaciones futuras en función de los recursos disponibles, debe ser tanto global como regional y nacional, y debe descansar en principios distributivos, es decir, de equidad”. GARCIA LÓPEZ, Tania, *Op. cit.*, p. 3.

<sup>84</sup> TANIA GARCIA señala: “El principio de desarrollo sostenible o sustentable sea convertido, en el derecho ambiental, en una especie de principio superior que constituye la idea central sobre la cual gravitan, en la actualidad, las políticas, normas y gestiones ambientales de todos los países, por lo menos en teoría”. GARCIA LÓPEZ, Tania, *La Constitución mexicana y los principios rectores del derecho ambiental*, *La Constitución y el medio ambiente*, O. RABASA, Emilio, coordinador, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2007, página 38.

Compete la misma acción a quienes tengan derecho privado o público de paso por las inmediaciones de la obra, árbol u otro objeto peligroso". Cabe indicar que la figura del interdicto no se encuentra regulada en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Del artículo 20 señalado en el párrafo anterior se desprende que la acción interdictal de obra peligrosa debe ser ejercitada por los poseedores jurídicos -propietarios- de una propiedad contigua, que puede resentir un daño con esa construcción.

Para la procedencia del interdicto de obra no resulta indispensable que se realice en terrenos del que lo promueve, ni que sea seguro que el daño va a producirse ya que la ley sólo habla de "propiedad contigua o cercana" y "que pueda resentir o padecer" y no que necesariamente colinden o sufran el daño consiguiente.

Para esta acción no es requisito que exista ya el daño basta con la amenaza del mismo. Su finalidad consiste fundamentalmente en prevenir o evitar ese daño adoptando medidas urgentes que pueden llegar hasta la demolición parcial o total de la obra o a la destrucción del objeto peligroso.

El artículo 20 prevé dos hipótesis configurativas del interdicto de obra peligrosa:

Primera: la acción compete al poseedor jurídico<sup>85</sup> o derivado<sup>86</sup> de una propiedad contigua o cercana que pueda resentirse o padecer por la ruina o derrumbe de la obra, caída de un árbol u otro objeto análogo.

Segunda: la acción se otorga a quienes tengan derecho privado o público de paso por las inmediaciones de la obra, árbol u otro objeto peligroso.

En ambas hipótesis, la acción de interdicto debe ejercitarse para adoptar medidas urgentes que eviten el riesgo que ofrece la ruina o derrumbe de la obra o para obtener su demolición. No se otorga, entonces, para la restitución del inmueble que se

---

<sup>85</sup> ARAUJO VALDIVIA establece que "El poseedor originario o jurídico es que posee a título de propietario. Es decir, la que es dueño o pretende ser dueño, se caracteriza por el conjunto de actos materiales y aparentes de ocupación sin interés preponderante en el aprovechamiento económico de la cosa pero con un propósito claro de apropiación jurídica de la misma". VALDIVIA, Araujo, *Op. cit.*, p. 172.

<sup>86</sup> ARAUJO VALDIVIA indica que "En la posesión derivada el *corpus* se convierte en el aprovechamiento económico siempre temporal y de origen contractual y el *animus* se hace evidente sólo ostentar este derecho a usar o disfrutar de la cosa, sin que jamás se oculte o se trate de disimular el propósito que persigue la posesión". *Ídem*, p. 173.

encuentre en estado ruinoso o amenazado de derrumbe.

Como indica Araujo Valdivia “la finalidad del interdicto de obra peligrosa se reduce a adoptar medidas urgentes para evitar los riesgos que ofrece el mal estado de los objetos referido o para obtener la demolición total o parcial de la obra o del objeto peligroso”.<sup>87</sup>

## **1.6 Ventajas legales de las acciones interdictales ante un daño ambiental**

Del análisis desprendido en las líneas que anteceden, de las acciones interdictales (tanto el de retener la posesión como el de obra peligrosa), se observan ventajas procesales en su aplicación, a través del juicio correspondiente, de las que carece la responsabilidad civil.

Al definir el daño ambiental se debe partir de la base de dos supuestos o categorías distintas en función del ambiente dañado:

En el primer supuesto el daño al ambiente lo localizamos en la categoría de daños personales, patrimoniales o económicos, aunque para los tratadistas ambientales estos supuestos no caben dentro del concepto de daño ambiental, sino patrimonial.

- I. Los daños a la salud y a la integridad física de las personas, por ejemplo el asma provocada por la contaminación atmosférica.
- II. Los daños a sus bienes, por ejemplo el medio ambiente dentro de la propiedad de un individuo y los daños a sus bienes.
- III. Los daños al ejercicio de actividades económicas, por ejemplo: la pesca, todos ellos sometidos al ámbito del derecho privado.

En este sentido, José Juan González ha expresado que: “si ese daño a las personas o su patrimonio se produce como consecuencia de un daño al ambiente es necesario primero resolver todos los problemas jurídicos que el tratamiento de este último involucra, para poder luego deslindar los alcances del daño propiamente civil”.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> *Ídem*, p. 189.

<sup>88</sup> GONZÁLEZ MARQUEZ, José Juan, *Op. cit.*, p. 96.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el artículo 4 párrafo quinto lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

Por su parte, la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente no establece un concepto de daño ambiental, únicamente hace referencia a que toda persona que contamine o deteriore el ambiente o afecte los recursos naturales o la biodiversidad, será responsable y estará obligada a reparar los daños causados.<sup>89</sup>

En lo que respecta a la Ley Ambiental de San Luis Potosí<sup>90</sup> en su artículo 3º fracción XVI, se establece como daño ambiental: “el perjuicio que se ocasiona o que puede provocarse u ocasionarse a futuro, a los intereses particulares o colectivos, públicos o privados, que han sido sometidos a los efectos del ambiente deteriorado o en proceso de deterioro, que afecten la calidad de vida, en sus diversas formas”.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 203 primer párrafo indica la vía de reparar un daño ambiental mediante la responsabilidad civil.

En la Ley Ambiental de San Luis Potosí esto se establece en el artículo 173.

Algunos tratadistas, como Silvia Jaquenod, señalan la responsabilidad civil a través de sus disposiciones legales, donde su procedencia legal en un juicio ante el órgano jurisdiccional es difícil de cumplir, en virtud, de que sus resultados son a *posteriori*.<sup>91</sup>

Para llegar a tales conclusiones, los juristas ambientales se basan en lo siguiente:

El artículo 1913 del Código Civil Federal<sup>92</sup> señala que la responsabilidad objetiva opera cuando una persona, haciendo uso de mecanismos peligrosos, causa un daño a otro, teniendo la obligación de repararlo, aun cuando no obre ilícitamente.

---

<sup>89</sup> Esta hipótesis está contemplada en el artículo 203 primer párrafo. *Op. cit.*

<sup>90</sup> *Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí*, diciembre 15, 1999, S.L.P.

<sup>91</sup> SILVIA JAQUENOD manifiesta: “Hay que señalar que la responsabilidad civil es una vía de carácter limitado, porque logra unos resultados a *posteriori*, que en ocasiones pueden no ser suficientes”. JAQUENOD DE ZSOGÓN, Silvia, *Op. cit.*, p. 137.

<sup>92</sup> El artículo 1913 indica: “Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está

La hipótesis legal de responsabilidad objetiva del artículo 1913 del Código Civil Federal es idéntica en contenido y alcance al artículo 1749 del Código Civil del Estado de San Luis Potosí.

Los artículos 1913 del Código Civil Federal y 1719 del Código Civil del Estado de San Luis Potosí adoptan la teoría del riesgo, al establecer que cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad en que se desarrollan los procesos, mecanismos o actividades, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan, o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente.

Como se ve, esta aceptación de la teoría de la responsabilidad objetiva o de riesgo, indica la obligación de reparar el daño, nace del solo hecho de haberlo causado, sustituyéndose la idea de culpa por la de riesgo y creando una relación obligatoria de patrimonio a patrimonio, para resarcir los daños causados en la víctima.

La diferencia esencial entre la teoría del riesgo y la de la culpa, es que en esta última, para que una persona incurra en responsabilidad, es preciso que sea autora del hecho dañoso y que lo haya cometido con culpa (intencionalmente o por imprudencia), y en aquélla, basta que a la persona le sea imputable el hecho, para que incurra en responsabilidad, por la sola circunstancia de haberse producido el daño en una industria o actividad creadas en su provecho.

En este sentido José Juan González ha expresado, citando a Hutchinson, que “el perjudicado debe probar que el daño es consecuencia de un acto u omisión de un sujeto pasivo”.<sup>93</sup>

Tanto en una como en otra teoría, sólo puede hacerse efectiva la responsabilidad contra quien directa o indirectamente sea el autor del hecho material que causó el daño.

---

obligada a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente, a no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima”. *Diario Oficial de la Federación*, mayo 26, julio 14, agosto 3 y 31, 1928, México, D.F.

<sup>93</sup> GONZÁLEZ MARQUEZ, José Juan, *Op. cit.*, p. 160.



Por consiguiente, cuando dos mecanismos peligrosos intervienen en la producción de un daño, es necesario estudiar si la causa del daño fue solamente uno de ellos o ambos para determinar quién es el responsable de la reparación del daño o del pago de la indemnización correspondiente.

La responsabilidad civil objetiva debe entenderse en el sentido de que el daño causado es consecuencia de una relación directa entre la condición y el resultado dañoso, o sea, que no haya mediado algún otro suceso que fracture dicha vinculación.

Un recto análisis del artículo 1913 del Código Civil Federal<sup>94</sup> revela que la acción que regula es autónoma y no comprendida ni derivada de un contrato, pues en la responsabilidad civil objetiva los partícipes o sujetos de la misma son: el que por el empleo o uso de mecanismos peligrosos u otras conductas análogas, causa el daño y aquel al que se le causa; consecuentemente el único responsable directo del pago de la indemnización es el sujeto activo de la conducta dañosa.

Del artículo 1913 del Código Civil Federal se desprenden los siguientes elementos:

- 1o. Que se haga uso de un mecanismo peligroso.
- 2o. Que se cause daño.
- 3o. Que haya una relación de causa a efecto entre el hecho y el daño y
- 4o. Que no exista culpa inexcusable de la víctima.

El hacer uso de mecanismos peligrosos que causen daño, obliga al propietario a responder de los mismos daños, pero el precepto debe entenderse en el sentido de que el daño es causado por el mecanismo de una manera que permita establecer una relación de causalidad entre su funcionamiento y el daño.

Si, por el contrario, se demuestra que el mecanismo no estaba en funciones, debe concluirse que éste no fue el causante directo del daño y, por lo tanto, el dueño del mismo no está obligado a indemnizar a la víctima.

---

<sup>94</sup> La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en su artículo 12 fracción IV contempla los supuestos el artículo 1913 del Código Civil Federal. *Op. cit.*

Demostrada la relación jurídica entre el agente y el daño causado, queda probada la existencia de la acción de responsabilidad objetiva de daños y perjuicios por culpa extracontractual.

Para que sea legalmente exigible la obligación de responder del daño causado por el empleo de los mecanismos peligrosos a que se refiere el artículo 1913 del Código Civil Federal, es necesario que se demuestre el nexo causal, que en la responsabilidad objetiva se forma automáticamente, entre el autor del hecho y la lesión, requisito que es elemento constitutivo de la acción y que, por tanto, debe ser justificado por el reclamante.

Por otro lado, para que opere la eximente de la responsabilidad objetiva se requiere la concurrencia de los siguientes elementos:

- I. Que el demandado demuestre que existió culpa o negligencia inexcusable de la víctima.
- II. Que exista una relación de causalidad entre esa culpa o negligencia inexcusable y el daño producido.

Si el demandado a quien se reclama la reparación del daño por causa de responsabilidad objetiva opone la excepción prevista en el artículo 1913 del Código Civil Federal, relativa a que esa responsabilidad no existe, cuando el daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, debe precisar los hechos y circunstancias constitutivos de la causa de exoneración que aduzca, pues sobre ellos debe versar la prueba a su cargo.

La responsabilidad objetiva es exigible directamente a los dueños de mecanismos peligrosos, aunque ellos no los manejen personalmente, ya que es el que recibe los beneficios económicos de su explotación, "usa" del mecanismo más aún que el que lo maneja además, los artículos 1924<sup>95</sup> y 1932 fracción VI<sup>96</sup> del Código Civil son más

---

<sup>95</sup> El artículo 1924 señala: "Los patrones y los dueños de establecimientos mercantiles están obligados a responder de los daños y perjuicios causados por sus obreros a dependientes, en el ejercicio de sus funciones. Esta responsabilidad cesa si demuestran que en la comisión del daño no se les puede imputar ninguna culpa o negligencia". *Op. cit.*

explícitos que el 1913 del mismo, ya que establecen que los patrones están obligados a responder de los daños y perjuicios causados por su obrero o dependientes en el ejercicio de sus funciones, y que los propietarios responderán de cualquier daño que sin derecho causen las máquinas de su propiedad.

Cabe indicar que el artículo 1932 maneja en sus fracciones I, II, VI más supuestos legales que encuadran en un juicio de responsabilidad por daño ambiental ya que indican conceptos generales aplicables al daño ambiental.

Como hemos indicado, el contenido de los artículos 1924 y 1932 del Código Civil Federal, se encuentra en los artículos 1760 y 1768 del Código Civil de San Luis Potosí.

En la vía de la responsabilidad civil, a pesar de la evolución que ha tenido en los últimos tiempos y siguiendo los lineamientos procesales que rigen esta materia, encontramos los siguientes problemas para reparar un daño ambiental:

- I. La frecuente imposibilidad de reparar o restaurar los daños que causan al medio ambiente. hace que no sea un instrumento adecuado para resolver problemas ambientales, materia en la que “prevenir” es mucho más eficaz que “curar”.
- II. La dificultad de probar la relación de causalidad entre la acción u omisión y el daño ambiental, a pesar de los adelantos técnicos, todavía hay muchos casos en que resulta imposible determinar con certeza la causalidad entre la acción contaminante y el daño producido.
- III. La enorme dificultad existente para establecer criterios de valoración del daño sobre los que basar el cálculo de la indemnización.

Por otra parte, como lo menciona Paz Vizcaíno: “debido a su carácter reparatorio, es absolutamente necesario que se haya producido un daño para que pueda ponerse el sistema de responsabilidad civil. A veces los daños ambientales, por su propia

---

<sup>96</sup> El artículo 1932 fracción IV indica: “Igualmente responderán los propietarios de los daños causados: IV. Por las emanaciones de cloacas o depósitos de materias infectantes”. *Op. cit.*

naturaleza, hacen que resulte imposible su restauración. Otras veces, resulta imposible cuantificarlos a efectos de fijar una indemnización sustituida al no disponer de criterios que permitan traducir a términos económicos las consecuencias o perjuicios que derivan de ese daño ambiental”.<sup>97</sup>

Hemos realizado una breve reseña del daño ambiental vía responsabilidad civil y las dificultades jurídicas para su procedencia. Ahora nos centraremos en las ventajas procesales que tienen los interdictos (de retener la posesión como de obra peligrosa) para compensar un daño ambiental.

Las acciones de los interdictos de retener la posesión y el de obra peligrosa tienen como característica la figura de la posesión, la cual, como hemos observado, se convierte en una posesión ambiental.

La falta de esta posesión se traduce en un detrimento en la funcionalidad, disfrute y soporte que tiene el hombre respecto al ambiente y sus elementos, así como la interrelación que guardan entre sí.

La pérdida o falta de disposición a los beneficios del ambiente que directa e indirectamente es ejercida por todos los seres vivos es motivo suficiente para interponer la acción interdictal ante el órgano jurisdiccional.

Para la procedencia del interdicto de retener la posesión, de acuerdo al supuesto del artículo 273 en relación con el artículo 16 del mismo Código Civil de San Luis Potosí, se requiere la existencia de tres elementos:

- a). Que el actor tenga la posesión del bien inmueble de que se trata.
- b). Que el demandado *motu proprio*, intente despojar a quien ejercita la acción.
- c). Que la acción se haga valer en el término señalado por la ley. De lo anterior se desprende que el ejercicio de la acción interdictal sólo procede entre particulares.

---

<sup>97</sup> SÁNCHEZ RODRIGO, Paz Vizcaíno, *Introducción al Derecho del Medio Ambiente*, primera edición, editorial Cto medicina, España, 1996, página 401.

Para compensar un daño ambiental mediante esta vía debemos entender que la posesión versará sobre alguno de los elementos del ambiente que, de acuerdo a sus características, pueden ser materiales e inmateriales, estableciéndose como excepción a la regla para su procedencia lo siguiente:

- I. La existencia lato *sensu* de una posesión del ambiente o cualquiera de sus elementos por cualquier persona.
- II. En consecuencia lógica de lo anterior, dejar sin efecto la obligación procesal de acreditar mediante título la posesión derivada u originaria de la cosa, evitando, por consiguiente, la improcedencia de la acción.

Por lo tanto, al demandar un juicio interdictal de retener la posesión para compensar un daño ambiental, debemos entender *la posesión ambiental* como aquella que se ejerce sobre el ambiente o sus elementos cuyo uso, disfrute y soporte de vida que ofrece es derivado del sistema de interrelación en que se compone el ambiente la cual es desplegada por todos los seres humanos.

La posesión ambiental no surge ni da lugar a una posesión original o derivada. Sirve de apoyo a estas ideas la siguiente jurisprudencia:

Posesión, concepto de, susceptible de tutela constitucional. Caso de excepción.<sup>98</sup>

Este Tribunal Colegiado ha sostenido reiteradamente el criterio que se resume en la tesis que aparece publicada en la página 193, Tomo VII-Marzo, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "POSESIÓN, CONCEPTO DE. SUSCEPTIBLE DE TUTELA CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).-El derecho positivo mexicano se acoge a la teoría objetiva o teoría de Ihering, consistente en que el derecho sustantivo es un interés jurídicamente protegido; de manera que la posesión prevista por los artículos 833 y 834 del Código Civil para el Estado de Jalisco, implica

---

<sup>98</sup> Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, novena época, tomo IX, Junio de 1999, página 965.

que el poder de hecho que alguien tiene sobre una cosa comprende los derechos normalmente atribuidos a la propiedad, total o parcialmente, como son disfrutar, usar y disponer. Así, para que tal poder de hecho constituya lo que jurídicamente se conoce como posesión, debe necesariamente tener una causa, un origen, causa *posesionis* que por su naturaleza jurídica sea capaz de generar para quien tiene ese poder de hecho, el derecho de ejercer cualquiera de las facultades que implica (dando así origen a la posesión originaria) o cualesquiera de ellas excepto la de enajenar o gravar la cosa (surgiendo así la posesión derivada) posesiones ambas que se encuentran tuteladas por la Carta Magna; contrariamente a lo que sucede con la simple tenencia material u ocupación no legitimada por alguna causa, que jurídicamente sea apta para otorgar al poseedor alguno o todos los derechos que emanan de la posesión, razón por la cual la simple tenencia material u ocupación no están salvaguardadas por la Constitución Federal; por ello, para que el poder de hecho que alguien se arrogue sobre un bien sea susceptible de la tutela constitucional, requiere que se acredite la causa que le dio origen y que ésta, además, se encuentre amparada por la ley.". Sin embargo, una nueva reflexión sobre ese tópico, motivada por la materia del presente recurso, conduce a establecer que el criterio de mérito, tiene como caso de excepción, cuando se trata de conflictos posesorios, es decir, en los que exista disputa de dos o más personas por la posesión de un bien, pues en tal hipótesis, debe respetarse la garantía de audiencia, que es eficaz para preservar cualquier posesión, independientemente del título o la causa de la misma. Lo anterior debe entenderse así, porque, tal como sucede con la propiedad, mediante el juicio de amparo, por lo que toca a la violación de dicha garantía constitucional, no se deciden cuestiones posesorias, esto es, controversias entre sujetos que se disputan la posesión de una cosa, pues en ese supuesto lo que se persigue con el juicio de garantías, es tutelar a cualquier poseedor, en el caso de excepción planteado, con abstracción de la causa de la misma, a condición de que dicha posesión se alegue, contra actos de autoridad que no hubieren observado las condiciones o exigencias de la citada garantía individual. Lo anterior no implica, sin embargo, que en el juicio

de amparo no puedan abordarse cuestiones netamente posesorias, pero ello sólo ocurre en el caso de que la acción constitucional se incoe contra una resolución violatoria de la garantía de legalidad y no de la de audiencia, tal como acontece, análogamente, tratándose de propiedad; esto es, cuando ante la potestad común, se ventilan acciones posesorias, y es la resolución que las dirime la que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, en el que se aduce violación a la garantía de legalidad. En conclusión, el caso de excepción al criterio que ha sido reiteradamente sustentado por este Tribunal Colegiado, se traduce en que, puede tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso, cuando la posesión que se pretende sea protegida a través de la garantía de audiencia, es objeto de controversia entre partes, por lo que no se hace necesario que el quejoso aduzca y, por ende, acredite, la causa originadora de la misma, sino que para ello, basta que se pruebe el poder de hecho que se ejerce sobre un bien, y que la cuestión posesoria se encuentra en controversia ante la potestad común.

En consecuencia es improcedente la aplicación del artículo 467 del Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí<sup>99</sup> en razón de que estaríamos admitiendo la figura de propiedad sobre el ambiente que tiene el ser humano.

En el caso del inciso b, podemos decir que la perturbación consiste en actos tendentes de modo directo a realizar el despojo mediante una usurpación violenta, esto es, por la coacción moral o material, usando la fuerza física o moral para despojar al poseedor.

En el caso del concepto de perturbación debemos considerar un tipo de perturbación ambiental ocasionada hacia alguno de los elementos del ambiente, la cual puede consistir en: *“la realización de actos o hechos de origen industrial y no industrial efectuados de modo directo e indirecto, mediante actividad única o reiterada en un lapso de tiempo, cuya consecuencia prive, altere la funcionalidad o menoscabe la capacidad de goce o sustentabilidad de uno o varios elementos del ambiente”*.

---

<sup>99</sup> El artículo 467 señala: “A falta de títulos que funden el ejercicio de la acción y que deben acompañarse a la demanda, se ofrecerá previamente información testimonial sobre el hecho de la posesión y una vez acreditado, se dará curso a la demanda. La información se recibirá con sola intervención del promovente, tan pronto como se presenten los testigos”. *Op. cit.*

La perturbación realizada al ambiente se puede referir a la privación, tranquilidad, funcionalidad, sustentabilidad, calidad de vida, al vínculo de relaciones con otros elementos ambientales; de ahí su importancia, ya que se está haciendo un menoscabo a la sustentabilidad del ambiente.

Este menoscabo al ambiente se deriva de riesgos debidos a la acción humana; esta acción humana consiste en todas aquellas actividades humanas que tienen una incidencia directa e indirecta sobre el ambiente, por lo que su tratamiento es una cuestión ineludible al ser objeto del derecho.

Por último, en el inciso c prevalece la situación que es de particular a particular. En un asunto ambiental el juez debe considerar aquellas repercusiones al ambiente o sus elementos, de oficio. Tal situación debe plantearse como excepción en caso de perjudicar al ambiente, ampliando su cobertura de demandar no sólo a particulares, sino a cualquier autoridad judicial, administrativa o laboral debido a que en ellas se está emitiendo la determinación de efectuar actos perturbatorios.

Para la procedencia del interdicto de obra peligrosa de acuerdo al artículo 273 se requiere de la existencia de los siguientes elementos:

- a. La acción compete al poseedor jurídico o derivado de una propiedad contigua o cercana que pueda resentirse o padecer por la ruina o derrumbe de la obra, caída de un árbol u otro objeto análogo.<sup>100</sup>
- b. La acción se otorga a quienes tengan derecho privado o público de paso por las inmediaciones de la obra, árbol u otro objeto peligroso.

En lo que respecta al inciso a, éste es igual en su contenido y alcance que el interdicto de retener la posesión, por lo que en caso de ser un juicio interdictal por daños ambientales, no se debe acreditar la posesión y el tipo de ésta.

Además se tiene que atender a lo previsto por el punto 1.5 de este capítulo para la procedencia de este interdicto de obra peligrosa.

---

<sup>100</sup> La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en su artículo 13 párrafo tercero establece: "Los propietarios o poseedores de los inmuebles en los que se haya ocasionado un daño al ambiente, deberán permitir su reparación, de conformidad a esta Ley. El incumplimiento a dicha obligación dará lugar a la imposición de medios de apremio y a la responsabilidad penal que corresponda". *Op. cit.*



Por último, el inciso b no es aplicable al referirnos a un juicio por daños ambientales ya que es diferente en su contenido y alcance a los daños ambientales a una servidumbre.

#### **1.6.1 La legitimación colectiva ante un daño ambiental**

No son lo mismo los presupuestos para el ejercicio de la acción, que las condiciones para la procedencia de ésta. Los primeros son los requisitos para ejercer la acción y necesarios para la admisión de la demanda y la validez del procedimiento, mientras que las segundas constituyen las condiciones necesarias para el acogimiento de la acción en la sentencia definitiva.

Una de esas condiciones es la legitimación en la causa o relación jurídica sustancial (activa o pasiva), que se refiere a la calidad de las partes en el juicio e implica que la acción debe ser intentada por el titular del derecho y contra la persona obligada por la ley para satisfacerlo.

Esa relación jurídica sustancial se establece como una de las condiciones para acoger la acción y en principio corresponde al actor acreditarla, demostrando su calidad de titular del derecho y la calidad de obligado del demandado; sin embargo debe analizarla el juzgador aun de oficio e incluso el tribunal de alzada, aunque no haya sido tema de la apelación.

Por legitimación entendemos la causa o relación jurídica sustancial (activa o pasiva) que se refiere a la calidad de las partes en el juicio e implica que la acción debe ser intentada por el titular del derecho y contra la persona obligada por la ley para satisfacerlo.

Para tener una sentencia favorable en un juicio interpuesto de oficio se estudia la legitimación de acuerdo a lo establecido en jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece:

Legitimación pasiva. Es una condición necesaria para la procedencia de la acción, no un presupuesto para el ejercicio de ésta y su estudio es de oficio en cualquier etapa del procedimiento.<sup>101</sup>

No son lo mismo los presupuestos para el ejercicio de la acción, que las condiciones para la procedencia de ésta. Los primeros son los requisitos para ejercer la acción y necesarios para la admisión de la demanda y la validez del procedimiento, mientras que las segundas constituyen las condiciones necesarias para el acogimiento de la acción en la sentencia definitiva. Una de esas condiciones es la legitimación en la causa o relación jurídica sustancial (activa o pasiva) que se refiere a la calidad de las partes en el juicio e implica que la acción debe ser intentada por el titular del derecho y contra la persona obligada por la ley para satisfacerlo; esa relación jurídica sustancial, como una de las condiciones para acoger la acción, en principio corresponde al actor acreditarla demostrando su calidad de titular del derecho y la calidad de obligado del demandado; sin embargo, debe analizarla el juzgador aun de oficio e incluso el tribunal de alzada aunque no haya sido tema de la apelación. Por tanto, al determinar la Sala responsable que la demandada en la reconvención carecía de legitimación pasiva para responder por la acción de prescripción positiva, no analizó un presupuesto procesal para el ejercicio de la acción ni un elemento de ésta sino una condición necesaria para su satisfacción en la sentencia y la podía analizar aunque no haya sido tema de apelación, pues no podía pronunciar un fallo declarando procedente la acción que ejerció el demandado en vía de reconvención, si no se llamó a juicio a una parte interesada y la persona a quien se reconvino no es la persona que vincula la ley con relación a la prescripción positiva.

Es conveniente determinar en un mismo nivel de estructura jurídica al referirnos a la posesión de cosas o bienes conforme a la clasificación y definición del Derecho Civil sobre cosas corporales, cosas compuestas, cosas indivisibles, cosas consumibles, cosas accesorias, bienes muebles, inmuebles por naturaleza, inmuebles por destino,

---

<sup>101</sup> Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación, novena época, tomo X, noviembre de 1999, página 993.

con el ambiente y sus elementos. Ante estas circunstancias se tiene la posibilidad jurídica de ampliar legalmente la legitimación de los interdictos hacia un daño ambiental.

El interés colectivo que existe sobre el ambiente, entonces, es una posesión de goce y disfrute a título de dueño, sin que exista un documento privado o escrito que así lo estipule ya que estamos ante un nuevo elemento jurídico que se puede denominar: patrimonio ambiental.<sup>102</sup>

La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental plantea en su artículo 28<sup>103</sup> quiénes tienen la legitimación para presentar una demanda por daño ambiental. Después del análisis al referido artículo, no podemos estar de acuerdo con éste, ya que no se prevén a las siguientes personas:

- I. Si son personas físicas.
- II. Si son propietarios particulares.
- III. Si es una persona moral que no tiene tres años de antigüedad.

---

<sup>102</sup> JORGE BUSTAMANTE plantea “Una idea de patrimonio ambiental, el cual a nuestro punto de vista corrobora lo señalado en este capítulo, la prosecución hereditaria de generaciones en generaciones, sin la existencia de un título y con la plena posesión del mismo. Por otro lado, abarca puntos que se exceden los límites imaginarios del ambiente, sin embargo, es una aportación que debe observarse como un nuevo concepto legal, y Jorge nos dice que patrimonio ambiental es: “esencial en la conservación del medio ambiente, y, en efecto, se acude a la idea de una herencia legada por las generaciones que nos han precedido y que debemos transmitir intacto a las generaciones que nos seguirán. Es así que incumbe al conjunto de la colectividad preservar o tutelar el patrimonio ambiental que comprende: el patrimonio biológico, el patrimonio cultural, el patrimonio arquitectónico o urbano, el patrimonio rural, y el patrimonio que conforman los ecosistemas regionales que exhiben las bellezas naturales en los llamados parque nacionales”. BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, *Op. cit.*, p. 43.

<sup>103</sup> El artículo 28 menciona: “Se reconoce derecho e interés legítimo para ejercer acción y demandar judicialmente la responsabilidad ambiental, la reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente, el pago de la Sanción Económica, así como las prestaciones a las que se refiere el presente Título a: I. Las personas físicas habitantes de la comunidad adyacente al daño ocasionado al ambiente; II. Las personas morales privadas mexicanas, sin fines de lucro, cuyo objeto social sea la protección al ambiente en general, o de alguno de sus elementos, cuando actúen en representación de algún habitante de las comunidades previstas en la fracción I; III. La Federación a través de la procuraduría, y IV. Las Procuradurías o instituciones que ejerzan funciones de protección ambiental de las entidades federativas y del Distrito Federal en el ámbito de su circunscripción territorial, conjuntamente con la procuraduría.

Las personas morales referidas en la fracción II de este artículo, deberán acreditar que fueron legalmente constituidas por lo menos tres años antes de la presentación de la demanda por daño ocasionado al ambiente. Asimismo deberán cumplir por los requisitos previstos por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Los legitimados en las fracciones I y II tendrán además derecho e interés legítimo para reclamar el pago de las erogaciones que hayan hecho para acreditar la responsabilidad ambiental”. *Op. cit.*

Ante la introducción de un nuevo concepto legal, la posesión ambiental, bajo la estructura doctrinal y normativa del Derecho Civil y Ambiental, los interdictos ofrecen la ventaja jurídica de ser poseedores y no encontrarse dentro de los lineamientos de los artículos 27<sup>104</sup> y 28 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, es decir, se puede actuar por su propio derecho.

Podemos indicar que el interés legítimo ante un daño ambiental corresponde, en su calidad de titular, a toda persona física o moral; no importa si se ubica en la ciudad, el campo o algún parque industrial ya que, en términos de los artículos 27 y 28 de la referida Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, se ve disminuida y carente de legitimación activa y sólo puede prevalecer el criterio del daño ambiental ocasionado a la salud y bienes de las personas, el cual tiene el carácter de individual, tal y como lo plantea José Juan González Márquez.<sup>105</sup>

La hipótesis del artículo 27 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental donde se plantea la legitimación colectiva tiene relación con el artículo 579<sup>106</sup> del Código Federal de Procedimientos Civiles.<sup>107</sup>

En una sentencia dictada en un juicio de responsabilidad civil en términos de los artículos 27 y 28 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental no se puede hablar de que los efectos y alcances sólo van a beneficiar y/o perjudicar a los promoventes de la demanda, sino que van a existir efectos indirectos de dicha sentencia que benefician a la sociedad en general.

El hecho de que se considere que el alcance de la sentencia de un juicio de responsabilidad sólo surte efectos para la parte actor; se puede apreciar en la siguiente jurisprudencia:

---

<sup>104</sup> El artículo 27 establece: "Las personas e instituciones legitimadas conforme al artículo 28 de la presente Ley, podrán demandar la responsabilidad ambiental y el cumplimiento de las obligaciones, pagos y prestaciones previstos en este Título, en términos de lo dispuesto por la presente Ley, el Código Federal de Procedimientos Civiles, o de conformidad a la ley federal que regule los procedimientos judiciales a los que hace referencia el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". *Op. cit.*

<sup>105</sup> GONZÁLEZ MÁRQUEZ indica: "Podemos llamar *daño civil por influjo medioambiental* queda plenamente integrado en la categoría de daños a la salud y a la integridad física de las personas (por ejemplo el asma provocado por la contaminación atmosférica), los daños a sus bienes (por ejemplo, el medio ambiente propiedad de un individuo) y los daños al ejercicio de las actividades económicas (por ejemplo la pesca), todos son sometidos al ámbito del derecho privado". GONZÁLEZ MÁRQUEZ, *Op. cit.*, p. 96.

<sup>106</sup> El artículo 579 indica: "La acción colectiva es procedente para la tutela de las pretensiones cuya titularidad corresponda a una colectividad de personas, así como para el ejercicio de las pretensiones individuales cuya titularidad corresponda a los miembros de un grupo de personas". *Op. cit.*

<sup>107</sup> *Diario Oficial de la Federación*, febrero 24, 1943, México, D.F.

Ecología. El interés jurídico para promover el amparo en contra de leyes de esa materia, corresponde a la comunidad como titular de los derechos colectivos (legislación del Estado de México).<sup>108</sup>

La noción de interés jurídico se encuentra estrechamente vinculada con el principio de relatividad establecido en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los efectos de una sentencia de amparo. La fracción II del citado precepto constitucional señala que "La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.". Asimismo, cuando se otorga el amparo en contra de una ley, el efecto de la sentencia es proteger al quejoso en contra de su aplicación presente y futura, con lo que se respeta el principio de relatividad citado, como lo ha determinado este alto tribunal en la tesis que lleva por rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. LOS EFECTOS DE UNA SENTENCIA QUE OTORGA EL AMPARO SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. ". Lo anterior significa que la sentencia que otorgue el amparo y protección de la Justicia de la Unión, tendrá un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo respectivo, mas no así a personas ajenas al mismo, circunscribiéndose, por tanto, la declaración de inconstitucionalidad de la ley, al caso concreto. Ahora bien, los artículos 9o. de la Ley de Protección al Ambiente del Estado de México; 1o. , fracción VIII, 15, fracciones I y II, 18 y 157 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, (vigentes en febrero de 1993), contienen disposiciones en materia ecológica relativas a una comunidad determinada, estableciendo derechos a favor de las personas físicas y morales que la integran y residen en el lugar, lo que podría considerarse como un derecho colectivo que da interés jurídico a la propia colectividad para que por sí misma o por medio de su representante legítimo pueda promover el juicio de amparo. De ello se sigue que cuando lo promueve una asociación cuya pretensión radica, no en salvaguardar algún derecho que le otorgue la ley por

---

<sup>108</sup> Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, novena época, tomo V, Junio de 1997, página 156.

encontrarse dentro de su hipótesis, sino en que se proteja a la colectividad que no representa y se haga una declaración general respecto de la ley y decreto reclamados, se está en la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues de admitirse la procedencia del amparo y en el supuesto de que el mismo tuviera que otorgarse, se estaría ante el problema de determinar los efectos de la sentencia, los cuáles no podrían ser otros que los señalados y que vulnerarían claramente la fracción II del artículo 107 constitucional, lo que jurídicamente no puede acontecer.

El ejercicio, de hecho, de la posesión basta para tener la legitimación en el interdicto de retener la posesión tratándose de un daño ambiental, circunstancia ésta que se justifica de pleno derecho sin prueba en contrario por el simple hecho de la existencia de la persona. Dando origen a probar el primer elemento de procedencia, para apoyar estas ideas invocamos la siguiente jurisprudencia titulada:

Interdicto de retener la posesión. Legitimación para promover el.<sup>109</sup>

De acuerdo con el artículo 698 del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León, en ningún interdicto se admitirán pruebas sobre la propiedad sino sólo las que versen sobre el hecho de la posesión, y según es de verse del artículo 708 de la invocada codificación adjetiva, uno de los requisitos para la procedencia de la acción interdictal es que se pruebe el hecho de la posesión. De la interpretación sistemática de estos dispositivos podemos deducir que la finalidad del interdicto responde principalmente al propósito de proteger al que está de hecho en la posesión, de ataques a esta emanados de actos de otro particular, por lo que si la acción interdictal de retener la posesión la intenta persona diversa a quien tiene materialmente dicha posesión, la misma carece de legitimación para deducir la acción.

A pesar de lo anterior, cuando hablamos de la posesión ambiental, establecemos de pleno derecho la presencia de un sistema de relaciones entre los componentes del ambiente, sin establecer técnica ni jurídicamente una separación de los mismos. Se

---

<sup>109</sup> Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, octava época, tomo XII, Agosto de 1993, página 459.

puede indicar que todas las personas poseen una parte alícuota<sup>110</sup> del ambiente o de sus elementos.

Otra cuestión a destacar es que nos referimos al término de ambiente o sus elementos en repetidas ocasiones sin hacer distinción de flora, fauna, suelo, agua o atmósfera, en virtud de que se perdería la esencia del nuevo componente jurídico (posesión ambiental).

Un distinto y nuevo concepto legal (posesión ambiental) con la finalidad de ser aplicado en forma general para contar con más herramientas legales en defensa del ambiente, y que no signifique la sustitución de una vía por otra, o la pérdida de medios legales.

Además, hay que considerar en un proceso legal que un daño causado a un elemento del ambiente o su alteración, puede tener una afectación individual, sin que su alcance sea colectivo. Tal como lo indica Eva Jordán: “la alteración de alguno de los elementos que componen el medio ambiente puede no afectar a un colectivo y sí a un sujeto concreto y determinado”.<sup>111</sup> Ante esta situación tendría más firmeza la legitimación de una acción interdictal.

En conclusión, todo ser humano tiene la posesión ambiental y por consiguiente el derecho o facultad legítima de interponer una demanda interdictal de retener la posesión sobre un daño ambiental generado ya sea en forma individual o colectiva, en este último caso, se seguirían las reglas de la representación, mediante carta poder.

### **1.6.2 La vía procesal de los interdictos de cualidad ambiental**

En materia procesal civil hay diversas vías legales para la pretensión de un derecho. El Código Procesal Civil define las de principal importancia por su contenido y alcance legal, siendo estas: la ordinaria civil y la extraordinaria civil.

---

<sup>110</sup> ROJINA VILLEGAS señala que “La parte alícuota es una parte ideal determinada desde el punto de vista mental aritmético, en función de una idea de proporción. Podría decirse que es una parte que sólo representa mentalmente, que se expresa por un quebrado y que permite establecer sobre cada molécula de la cosa una participación de todos y cada uno de los copropietarios”. ROJINA VILLEGAS, Rafael, *Op. cit.*, p. 112.

<sup>111</sup> JORDAN CAPITAN, Eva, *El Derecho a un Medio Ambiente Adecuado*, *Op. cit.*, p. 143.

La primera representa el patrón y modelo de los demás juicios contemplados en la legislación procesal civil, es decir, todo lo que se diga de él será aplicable en la parte respectiva a los demás juicios, ofreciendo mayores garantías de seguridad jurídica y ventilándose las cuestiones o conflictos de relevancia jurídica más importantes y trascendentales de los hombres. Lo anterior queda especificado en el artículo 252 del Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí.<sup>112</sup>

En la segunda vía se ventilan negocios que, por la naturaleza u objeto, suponen un proceso sencillo o menos complejo que requiere de una solución más rápida.

Los juicios extraordinarios exigen, debido al asunto que está en litis, ser resueltos a la brevedad; por ello, se da una disminución en los términos de las etapas procesales y una limitación para presentar los medios de defensa, como el recurso de revocación o las excepciones.

Las situaciones tramitadas por la vía extraordinaria civil están en el título séptimo: “de los extraordinarios”, en las veinte hipótesis establecidas del artículo 414 del Código Adjetivo Civil de San Luis Potosí.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> El artículo 252 señala: “Todas las contiendas entre partes que no tengan señalada en este Código tramitación especial, se ventilarán en juicio ordinario”. *Op. cit.*

<sup>113</sup> El artículo 414 indica: “Se tramitarán como juicios extraordinarios:

- I.- Aquellos cuyo interés no exceda de diez días de salario mínimo vigente en la región;
- II.- Los que versen sobre el pago o aseguramiento de alimentos;
- III.- Los que versen sobre cualquier cuestión relativa a los contratos de alquiler, depósito, comodato, aparcería, transportes, hospedajes y arrendamiento, excepto en los casos previstos por el artículo 448 de este Código;
- IV.- Los juicios que tengan por objeto la firma de una escritura, la elevación de minuta a instrumento público o el otorgamiento de documentos y el caso del artículo 2065 del Código Civil;
- V.- Los que tengan por objeto el cobro de honorarios debidos a peritos o personas que ejerzan una profesión mediante título expedido por autoridad competente;
- VI.- Los que deban seguirse para la calificación de algún impedimento de matrimonio;
- VII.- Cualquier controversia relativa a la constitución, modificación o extinción del patrimonio de la familia. No habiendo contienda, todo lo relativo al patrimonio familiar se sustanciará en jurisdicción voluntaria;
- VIII.- Las diferencias que surjan entre marido y mujer sobre disposición y administración de bienes comunes, educación de hijos, oposiciones de maridos, padres y tutores, y en general todas las cuestiones familiares que reclamen intervención judicial;
- IX.- La rendición de cuentas por tutores, administradores y por todas aquellas personas a quienes la Ley o el contrato imponen esa obligación;
- X.- Cuando tenga por objeto la constitución, ampliación o división de una hipoteca, así como su registro o cancelación;
- XI.- Los interdictos;
- XII.- La acción rescisoria de enajenaciones pactadas bajo condición resolutoria o con cláusula de reserva de dominio;
- XIII.- La responsabilidad civil que provenga de causa extra-contractual así como la que se origine por incumplimiento de los contratos enumerados en este artículo;
- XIV.- La división de cosa común y las diferencias que entre los copropietarios surgieren en la administración, disfrute y en todo lo relativo a la cosa común;



En la doctrina civil mexicana los interdictos son juicios sumarísimos, encontrándose esta rapidez procesal en los juicios extraordinarios civiles.

En vía extraordinaria civil los términos son más cortos en comparación con la vía ordinaria civil; esto está fundamentado en el artículo 416 del mismo Código Procesal Civil.<sup>114</sup> Las dos vías procesales (ordinaria y extraordinaria) tienen en común las etapas procesales, que son:

- Demanda.
- Emplazamiento.
- Contestación de demanda.
- Ofrecimiento de pruebas.
- Desahogo de pruebas.
- Alegatos.
- Sentencia.

Los interdictos constituyen procedimientos especiales y se les reconoce cierto grado de preferencia en su trámite y resolución por la naturaleza de las instituciones que protegen, existiendo urgencia en su resolución sin dilación alguna, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 460 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí.<sup>115</sup>

El juez que conozca del juicio de interdicto de retener la posesión para compensar un daño ambiental, debe decretar medidas provisionales de acuerdo a lo establecido en el artículo 231 del Código Adjetivo Civil de San Luis Potosí que indica: “las providencias precautorias establecidas por este código podrán decretarse tanto como

---

XV.- Los que tengan por objeto reclamar la entrega de la porción que se haya designado a un heredero en la partición;

XVI.- La consignación en pago;

XVII.- Las acciones relativas a servidumbres legales o que consten en títulos públicos;

XVIII.- Los que tengan por objeto la acción *ad-exhibendum* en el caso del artículo 198;

XIX.- Los que tengan por objeto las inscripciones o cancelaciones de las mismas, en las oficinas del Registro Público de la Propiedad;

XX.- Los demás en que así lo determine la Ley. *Op. cit.*

<sup>114</sup> El artículo 416 establece: “En los juicios extraordinarios, el término para contestar la demanda será de tres días, el de ofrecimiento de pruebas de cinco, el de recepción de las mismas de quince, el de alegar de cinco para cada parte y de cinco para que el juez dicte la sentencia”. *Op. cit.*

<sup>115</sup> El artículo 460 dice: “Los juicios que tengan por objeto retener o recobrar la posesión interina de una cosa, suspender la ejecución de una obra nueva, o que se practiquen respecto de la que amenaza ruina o de un objeto que ofrece riesgo, las medidas conducentes a precaver el daño se tramitarán con sujeción a las reglas generales de los juicios extraordinarios y a las especiales de este capítulo”. *Op. cit.*

actos prejudiciales, como después de iniciado el juicio respectivo; en este segundo caso, la providencia se substanciará en incidente por cuerda separada, y conocerá de ella el juez que, al ser presentada la solicitud, esté conociendo del negocio”.

Lo anterior es preciso solicitarlo en el escrito inicial de demanda para su procedencia, con ciertas salvedades y situaciones, mismas que se detallarán en el capítulo III de este trabajo.

Una diferencia procesal y preferencial en los juicios extraordinarios civiles en relación a los ordinarios, es la que se refiere a las excepciones.

En toda contienda judicial se precisa de figuras legales que ayuden a las partes a realizar o efectuar manifestaciones a lo planteado en el escrito inicial de demanda o contestación de demanda. A este derecho se le denomina *excepciones* que, de acuerdo a su naturaleza, son perentorias y dilatorias.<sup>116</sup>

A las excepciones perentorias se les denomina de “previo y especial pronunciamiento”; su trámite es por separado, en cuadernillo denominado *incidente*, y se harán valer ante el juez del conocimiento, debiéndose agotar procesalmente en una sentencia interlocutoria,<sup>117</sup> continuando el proceso en lo principal, si así se contempla en dicha resolución.

El artículo 36 del Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí señala: “en los juicios ordinarios, sólo formarán artículo de previo y especial pronunciamiento la incompetencia, la litispendencia, la conexidad y la falta de personalidad. En los juicios extraordinarios sólo impiden el curso del juicio la incompetencia y la falta de personalidad en el actor...”; lo anterior origina que el juicio no se dilate y las etapas procesales se lleven en un tiempo corto.

La excepción de falta de personalidad en el actor consiste en carecer éste de la calidad necesaria para comparecer en juicio o en no acreditar el carácter o

---

<sup>116</sup> En opinión del maestro LEYVA TORRES, las excepciones perentorias si tienen por objeto anular el derecho material o el juicio en que se han hecho valer. Y las dilatorias tienden a retrasar el ejercicio del derecho material o de retardar la entrada del demandado al juicio. LEYVA TORRES, Roberto, *Derecho Procesal Civil*, primera edición, editorial Universitaria Potosina, México, 1980, página 129.

<sup>117</sup> EDUARDO PALLARES explica que una sentencia interlocutoria, “Que decide alguna cuestión incidental surgida durante el proceso”. PALLARES, Eduardo, *Derecho Procesal Civil*, décimo segunda edición, editorial Porrúa, México, 1986, página 432.

representación con que reclame y, por lo mismo, no se debe confundir esta excepción con la falta de acción y de derecho a la cosa litigiosa, pues la primera se refiere a la calidad de los litigantes y no a la sustancia del pleito.

Al referirse un interdicto de índole ambiental de pleno derecho debe operar el principio jurídico de la preclusión, cuando se trate expresamente de la personalidad del demandante por encausarse como un interés individual o colectivo, aun cuando el demandado impugne esa determinación, procediendo el juez de la causa a desechar dicha excepción por frívolo o improcedente.<sup>118</sup>

Las bases de la competencia se fundamentan en el artículo 144 del Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí.<sup>119</sup> En caso de incompetencia se le solicita al juez que deje de conocer el juicio y remita los autos al que considere competente.

La incompetencia del juez es una excepción dilatoria, debiéndose proponer al contestar la demanda y, si ello no es así, obviamente el juez del conocimiento no podrá advertirla de oficio ni está obligado a analizarla, resultando improcedente su pretensión en la segunda instancia,<sup>120</sup> en caso de un recurso de apelación.<sup>121</sup>

#### **1.6.4 La competencia de los interdictos por daños ambientales**

Ha señalado Eduardo Pallares que competencia: “es el conjunto de normas que determinan, tanto el poder-deber que se atribuye a los tribunales en la forma que dicha, como el conjunto de negocios de que puede conocer un juez o tribunal competente”.<sup>122</sup>

---

<sup>118</sup> El juez que conozca un juicio donde intervenga el ambiente, posee la facultad de aplicar el artículo 70 del Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí que dice: “Los tribunales no admitirán nunca promociones de incidentes o recursos notoriamente frívolos o improcedentes; los desecharán de plano, sin necesidad de substanciación alguna; y, en su caso, consignarán el hecho al Ministerio Público para lo que fuere procedente”. Este artículo podría servir de mucha ayuda ya que faculta al juez de desechar promociones o incidentes en que se visualice la intención de retardar el juicio en lo principal. *Op. cit.*

<sup>119</sup> El artículo 144 indica: “La competencia de los tribunales se determinará por la materia, la cuantía, el grado y el territorio”. *Op. cit.*

<sup>120</sup> La segunda instancia es un procedimiento que se sigue ante un tribunal superior con objeto de que anule modifique o reforme la sentencia dictada por otro inferior en la jurisdicción. *Gran Diccionario Jurídico de los Grandes Juristas*, primera edición, editores libros técnicos, México, 2003, página 1207.

<sup>121</sup> El Diccionario Jurídico de los Grandes juristas menciona que el recurso de apelación es “Un medio de defensa que tienen las partes el que se entabla a fin de que una resolución sea revocada, total o parcialmente por autoridad o tribunal superior al que la dicto”. *Ídem*, p. 1129.

<sup>122</sup> *Ídem*, p. 83.

Así, la competencia es una facultad que tienen los jueces para conocer de ciertos negocios basándose por materia, cuantía, grado y territorio, estas cualidades de la competencia las analizaremos en forma detallada en el capítulo III.

Al trasladar la figura de la competencia, cuando verse sobre un daño ambiental, en principio, debemos partir de que la mayor parte de las actividades desarrolladas por el hombre tienen incidencia, directa o indirecta sobre el ambiente o alguno de sus elementos.

En la mayoría de los casos esta incidencia es negativa, traduciéndose en la producción de fenómenos de contaminación ambiental.

En materia de los interdictos, el artículo 157 del Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí<sup>123</sup> especifica la competencia de toda clase de interdictos, estableciendo que solo los jueces de primera instancia conocerán de este tipo de acciones.

La hipótesis legal contempla la ubicación física que tiene el inmueble materia del interdicto. Al respecto consideramos que esta competencia del juez de primera instancia no debe modificarse por razones de prontitud, agilidad y economía procesal que le puede imponer al proceso judicial al tratarse de un daño ambiental.

Otro razonamiento para que el juez de primera instancia sea el competente de conocer un juicio por daño ambiental, cuando se invoque un interdicto (de obra peligrosa o de retener la posesión), es porque se debe hacer la reparación en el lugar donde se produjo el daño.<sup>124</sup>

Por su parte, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental indica en su artículo 30 lo siguiente:

“El Poder Judicial de la Federación contará con juzgados de Distrito con jurisdicción especial en materia ambiental.

---

<sup>123</sup> El artículo 157 señala. “En las contiendas sobre propiedad o posesión de un inmueble, la competencia se determinará por el valor que tenga. Si se trata de usufructo o derechos reales sobre inmuebles, por el valor de la cosa misma. Pero de los interdictos conocerán siempre los jueces de primera instancia de la ubicación de la cosa”. *Op. cit.*

<sup>124</sup> Al respecto la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental contempla esta situación en su artículo 13 segundo párrafo que a la letra dice: “La reparación deberá llevarse a cabo en el lugar en el que fue producido el daño”. *Op. cit.*

En ausencia de los anteriores serán competentes para conocer de los procedimientos judiciales de responsabilidad ambiental a que hace referencia el presente Título los jueces de distrito que correspondan según la materia”.

No podemos estar de acuerdo con lo estipulado en dicho precepto legal en base a los siguientes criterios:

1. No existen juzgados de Distrito con jurisdicción especial en materia ambiental.<sup>125</sup>
2. Al no existir los juzgados de distrito de acuerdo al segundo párrafo del artículo 30, quienes conocerán los procedimientos de responsabilidad ambiental, serían los jueces de distrito que correspondan según la materia.

Al efectuar una interpretación a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación<sup>126</sup> quienes pueden ser competentes para conocer de estos juicios de responsabilidad ambiental, son los jueces de distrito civiles federales, en virtud de que se está configurando la acción colectiva establecida en el artículo 53 fracción VII<sup>127</sup> en relación con los artículos 27<sup>128</sup> y 28<sup>129</sup> de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

---

<sup>125</sup> La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación contempla los jueces federales por materia en los siguientes artículos 50, 50 quáter, 51, 52, 53, 53 bis, 54 y 55 y en ningún precepto legal se contempla la figura de los jueces en materia ambiental. *Op. cit.*

<sup>126</sup> *Diario Oficial de la Federación*, mayo 26, 1995, México, D.F.

<sup>127</sup> El artículo 53 señala: “Los jueces de distrito civiles federales conocerán: VII. De las acciones colectivas a que se refiere el Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles”. *Op. cit.*

<sup>128</sup> El artículo 27 indica: “Las personas e instituciones legitimadas conforme al artículo 28 de la presente Ley, podrán demandar la responsabilidad ambiental y el cumplimiento de las obligaciones, pagos y prestaciones previstos en este Título, en términos de lo dispuesto por la presente Ley, el Código Federal de Procedimientos Civiles, o de conformidad a la ley federal que regule los procedimientos judiciales a los que hace referencia el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. *Op. cit.*

<sup>129</sup> El artículo 28 establece: “Se reconoce derecho e interés legítimo para ejercer acción y demandar judicialmente la responsabilidad ambiental, la reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente, el pago de la Sanción Económica, así como las prestaciones a las que se refiere el presente Título a: I. Las personas físicas habitantes de la comunidad adyacente al daño ocasionado al ambiente; II. Las personas morales privadas mexicanas, sin fines de lucro, cuyo objeto social sea la protección al ambiente en general, o de alguno de sus elementos, cuando actúen en representación de algún habitante de las comunidades previstas en la fracción I; III. La Federación a través de la procuraduría, y

3. Por otro lado, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental contempla a los jueces federales para procedimientos ambientales, sin embargo, en la citada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en su artículo 53, se abre la posibilidad de que el titular de la acción pueda acudir ante los tribunales del fuero común,<sup>130</sup> por la razón de que se afectan intereses particulares.
4. Y por último, no en todos los Municipios de San Luis Potosí se tiene establecido un juzgado de distrito.<sup>131</sup>

Asimismo, podemos establecer que la competencia en un juicio por daño ambiental, puede ser de competencia federal y estatal, sin afectar su procedencia y legalidad para ello se observará la vía legal invocada en el juicio:

- I. *Responsabilidad Civil*: será de competencia federal de acuerdo a lo señalado en los artículos 11,<sup>132</sup> 12<sup>133</sup> y 28<sup>134</sup> de la Ley Federal de

---

IV. Las Procuradurías o instituciones que ejerzan funciones de protección ambiental de las entidades federativas y del Distrito Federal en el ámbito de su circunscripción territorial, conjuntamente con la procuraduría.

Las personas morales referidas en la fracción II de este artículo, deberán acreditar que fueron legalmente constituidas por lo menos tres años antes de la presentación de la demanda por daño ocasionado al ambiente. Asimismo deberán cumplir por los requisitos previstos por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Los legitimados en las fracciones I y II tendrán además derecho e interés legítimo para reclamar el pago de las erogaciones que hayan hecho para acreditar la responsabilidad ambiental". *Op. cit.*

<sup>130</sup> El artículo 53 señala: "Los jueces de distrito civiles federales conocerán: I. De las controversias del orden civil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares podrán conocer de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal". *Op. cit.*

<sup>131</sup> Se publicó el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Y en dicho Acuerdo se observa claramente que no hay juzgados de distrito en cada uno de los Municipios de San Luis Potosí. *Diario Oficial de la Federación*, febrero 15, 2013, México, D.F.

<sup>132</sup> El artículo 11 manifiesta: "La responsabilidad por daños ocasionados al ambiente será subjetiva, y nacerá de actos u omisiones ilícitos con las excepciones y supuestos previstos en este Título". *Op. cit.*

<sup>133</sup> El artículo 12 indica "Será objetiva la responsabilidad ambiental, cuando los daños ocasionados al ambiente devengan directa o indirectamente de:

- I. Cualquier acción u omisión relacionada con materiales o residuos peligrosos;
- II. El uso u operación de embarcaciones en arrecifes de coral;
- III. La realización de las actividades consideradas como Altamente Riesgosas, y
- IV. Aquellos supuestos y conductas previstos por el artículo 1913 del Código Civil Federal".

<sup>134</sup> Este artículo 28 estipula: "Se reconoce derecho e interés legítimo para ejercer acción y demandar judicialmente la responsabilidad ambiental, la reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente, el pago de la Sanción Económica, así como las prestaciones a las que se refiere el presente Título a:

- I. Las personas físicas habitantes de la comunidad adyacente al daño ocasionado al ambiente;

Responsabilidad Ambiental, observando y cumpliendo los supuestos legales contenidos en el Código Federal Civil y en el Código Federal de Procedimientos Civiles.<sup>135</sup>

II. *Interdictos de obra peligrosa y de retener la posesión y negatoria*: serán de competencia y procedencia estatal, para ello se observarán y cumplirán las hipótesis sustantivas y adjetivas contenidas en el Código Civil y de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí respectivamente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º.<sup>136</sup> De la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

El juez que conozca de un juicio de interdicto (retener la posesión o de obra peligrosa), en materia ambiental debe tener en cuenta las características del responsable generador de la actividad, la infraestructura con que cuenta (maquinaria y equipo) y sustancias químicas que intervienen en su proceso productivo o de actividades y quien lleva a cabo estas actividades.<sup>137</sup>

---

II. Las personas morales privadas mexicanas, sin fines de lucro, cuyo objeto social sea la protección al ambiente en general, o de alguno de sus elementos, cuando actúen en representación de algún habitante de las comunidades previstas en la fracción I;

III. La Federación a través de la procuraduría, y

IV. Las Procuradurías o instituciones que ejerzan funciones de protección ambiental de las entidades federativas y del Distrito Federal en el ámbito de su circunscripción territorial, conjuntamente con la procuraduría.

Las personas morales referidas en la fracción II de este artículo, deberán acreditar que fueron legalmente constituidas por lo menos tres años antes de la presentación de la demanda por daño ocasionado al ambiente. Asimismo deberán cumplir por los requisitos previstos por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Los legitimados en las fracciones I y II tendrán además derecho e interés legítimo para reclamar el pago de las erogaciones que hayan hecho para acreditar la responsabilidad ambiental". *Op. cit.*

<sup>135</sup> La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en su artículo 9º dice: "En lo no previsto por esta Ley, se aplicarán las disposiciones del Código Civil Federal y del Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que no contravengan lo dispuesto en esta Ley." Con dicho supuesto legal afirmamos que la responsabilidad civil por un daño ambiental debe observarse los referidos cuerpos legales. *Op. cit.*

<sup>136</sup> El artículo 4 señala: "La acción y el procedimiento para hacer valer la responsabilidad ambiental a que hace referencia el presente Título, podrán ejercerse y sustanciarse independientemente de las responsabilidades y los procedimientos administrativos, las acciones civiles y penales procedentes". *Op. cit.*

<sup>137</sup> CORDERO LOBATO, Encarna señala: "La responsabilidad corresponde, en principio, al titular de la actividad o al propietario de las sustancias químicas. Pero dado que, en los modernos procesos de producción, las mismas pueden ser objeto de manipulación por varias personas (piénsese en el producto, el transportista, el almacenista)". CORDERO LOBATO, Encarna, *Derecho de Daños y Medio ambiente, Lecciones de Derecho del Medio Ambiente*, ORTEGA ALVARES, Luis, coordinador, tercera edición, editorial Lex nova, España, 2002, página 487.

Cuando la parte actora observe que la conducta del juez sea procesalmente torpe y que retarde la prosecución del mismo podrá hacer uso de las hipótesis planteadas en el artículo 163 del Código de Procedimientos Civiles.<sup>138</sup>

Las incompetencias por declinatoria o inhibitoria<sup>139</sup> dan por consecuencia, en caso procedente, de alguna excusa del juez,<sup>140</sup> quien remitirá los autos al Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí y que a su vez será enviado a otro juez de primera instancia, en caso que la parte demandada presente la incompetencia por declinatoria o inhibitoria

Con la finalidad de que al juez que conozca de un juicio interdictal de obra peligrosa no se le formule una incompetencia por declinatoria o inhibitoria, la demanda interdictal se debe promover en el lugar donde se desarrolla la obra peligrosa.

En el caso del interdicto de retener la posesión se observará la situación física y material del demandado, identificándose claramente como responsable mediante el modelo de sistema de canalización estricta.

Este sistema se centra fundamentalmente en una persona que, por regla general, tendrá el control absoluto sobre la actividad de riesgo. La principal ventaja estriba en que, desde un primer momento, se identifica claramente a un responsable (por ejemplo el explotador).

El actor tiene la facultad legal de interponer una demanda interdictal, en caso de confusión de responsable del daño ambiental, a quien considere que afecta, con más firmeza por medio de sus actividades o procesos, al ambiente o sus elementos ejercitándose el sistema de canalización múltiple.

---

<sup>138</sup> El artículo 163 establece: "Las cuestiones de competencia podrán promoverse por inhibitoria o por declinatoria". *Op. cit.*

<sup>139</sup> ROBERTO LEYVA explica que las incompetencias de inhibitoria se intentará ante el juez a quien se considere competente pidiéndole que dirija oficio al que se estima no serlo, para que se inhíba y remita los autos. Y la declinatoria se propondrá ante el juez a quien se considere incompetente, pidiéndole que se abstenga del conocimiento del negocio y remita los autos al considerado competente. LEYVA TORRES, Roberto, *Op. cit. pp. 199.*

<sup>140</sup> Abstención o evasiva legal de un juez para conocer de cierto juicio o asunto en el que por algún motivo (familiar, amistoso, económico, político, etc.) podría estar comprometida o en duda su objetividad o imparcialidad. MARTINEZ MENDOZA, Rafael, *Diccionario Jurídico General*, primera edición, Iuhe editores, México, 2006, página 564.



El sistema de canalización múltiple se sitúa en un mismo plano para una serie de personas potencialmente responsables,<sup>141</sup> de manera que la víctima o el poder público pueden dirigirse indistintamente frente a cualquiera de ellas.

La parte actora de un juicio de índole ambiental tiene la herramienta de la canalización de la responsabilidad, el cual constituye uno de los elementos básicos de los sistemas de responsabilidad objetiva que rigen las actividades de riesgo y mediante la figura de la canalización establecer la competencia del órgano jurisdiccional.

Como lo establece Lucía Gómiz<sup>142</sup> el mecanismo de canalización ofrece diversas ventajas para la parte actora y al juez para que motive la causa procesalmente: el primero para saber y delimitar a quién o quiénes va dirigida la demanda y el segundo de los mencionados para admitir la demanda y declararse competente para conocer el juicio, teniendo como premisa que la demanda interpuesta es por daños al ambiente, circunstancia que imposibilita el disfrute adecuado del ambiente, no sólo del promotor sino de la sociedad en general.<sup>143</sup>

Ante esta situación el juez de la causa, sin tener conocimiento de la disponibilidad económica o tecnológica de la parte actora en un juicio por daño ambiental, por

---

<sup>141</sup> Esta situación se encuentra establecida en el artículo 26 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental que indica: "Cuando se acredite que el daño o afectación, fue ocasionado dolosamente por dos o más personas, y no fuese posible la determinación precisa del daño aportado por cada responsable, todas serán responsables solidariamente de la reparación o compensación que resultare, sin perjuicio, en su caso, del derecho de repetición entre sí". *Op. cit.*

<sup>142</sup> "El mecanismo de la canalización posee sin lugar a dudas numerosas ventajas, entre las cuales merece la pena destacar las siguientes: a) *Contribuye a la aplicación del principio "Quien contamina, paga"*. En efecto, la canalización *a priori* de la responsabilidad estimula el *procedimiento de internalización de costes* por otra parte de la persona predeterminada que, a su vez debe ser la más relacionada y la más beneficiada de la actividad de riesgo, atendiendo a las circunstancias particulares del sector. b) *fomenta el aspecto preventivo de la responsabilidad objetiva*. Evidentemente, como consecuencia de la ventaja anterior, la canalización incentivará a los que son capaces de disminuir los riesgos. c) *Atribuye la responsabilidad únicamente a la persona que posee el control de la actividad de riesgo*. La canalización evita que toda una serie de personas relacionadas o asociadas a una actividad potencialmente peligrosa, que normalmente no tienen ni el mínimo control sobre la misma, se vean inmersas en un proceso de atribución de responsabilidad (proveedores, empleados, etc.). d) *Concentra la necesidad de asegurarse o proceder a otro tipo de garantía financiera* en manos de una única persona. Efectivamente, si cada una de las personas a las que nos hemos referido en el apartado c fuera susceptible de ser declarada responsable y, en consecuencia, tuviera que asegurar su actividad, repercutiría mediante el procedimiento de internalización de costes el precio del seguro en el precio del seguro en el precio del producto resultado de la actividad dañina". GÓMIZ CATALA, Lucía, *Responsabilidad por Daños al Medioambiente*, primera edición, editorial Aranzadi, España, 1998, página 148.

<sup>143</sup> CECILIA manifiesta: "La inmisión de sustancias tóxicas, emisión de gases nocivos u olores nauseabundos, la manipulación artificiosa de unos terrenos, incluso de ruidos, etc., suponen, a medio o largo plazo, elementos dañinos no sólo contra el patrimonio de las personas sino contra su propia entidad humana. En medida en que tales efectos sean probados, no hay razón jurídica que impida invocar este derecho fundamental...". BALLESTER CECILIA, Rafael, *Responsabilidad Civil por Daños al Medio Ambiente. Mecanismos y Elementos, Apuntes de Derecho Medioambiental*, BRIONES VIVES, Felipe, coordinador, editorial Graficas Díaz, España, 1996, página 114.

derecho le insta a la presentación de la demanda y, por su parte, la parte demandada debe probar en autos, mediante la inversión tecnológica, que sus actividades no son causantes del daño ambiental.<sup>144</sup>

---

<sup>144</sup> El Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí indica en el artículo 273 lo siguiente: “El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones”. Lo anterior significa una nueva regla procesal-jurídica. *Op. cit.*

## **CAPÍTULO II      Acción negatoria como medio legal para reparar un daño ambiental**

### **2.1 Introducción**

En el capítulo anterior hemos hecho referencia a las acciones interdictales como una vía alterna para reparar un daño ambiental; en éste nos centraremos en el estudio de otra vía civil: la acción negatoria.

Empezaremos por abordar en qué consiste el derecho real y cómo la acción negatoria forma parte del mismo. Posteriormente, analizaremos, en el derecho real, cómo está concebida la acción negatoria en la doctrina del Derecho Civil y, por último, estudiaremos las características de un derecho real ambiental y plantearemos un nuevo concepto de derecho real ambiental.

Expondremos una nueva conceptualización de la acción negatoria en la que se abarcan los puntos inherentes para reparar un daño ambiental; ello con la finalidad de que resulte fácil su interposición ante el órgano jurisdiccional competente.

También abordaremos el tema de las emisiones y su consideración dentro del Derecho Civil y cuándo es que pueden ser consideradas como un abuso del derecho y cómo este tiene relación inmediata y directa con los impactos ambientales que se generan.

Finalmente realizaremos un análisis de lo que se requiere para la reparación de los daños al ambiente.

### **2.2 La acción negatoria en la doctrina civil mexicana**

La acción negatoria, según Pallares es: “una acción real, que la ley concede al propietario, al poseedor jurídico de un inmueble o al que tenga un derecho real sobre él para obtener la declaración de libertad o reducción de gravámenes del inmueble y las consecuencias jurídicas que de esta declaración dimanen”.<sup>145</sup>

---

<sup>145</sup> PALLARES, Eduardo, *Tratado de las Acciones Civiles*, edición novena, editorial Porrúa, México, 2000, página 143.

Para tramitar la acción negatoria es necesario estar en posesión de la cosa y su finalidad es la de defender ésta contra quien perturbe en el ejercicio de propiedad.<sup>146</sup>

La acción negatoria tiene su origen como una acción real o, en su defecto, un derecho real.<sup>147</sup>

Al efecto podemos indicar que los derechos reales son clasificados desde el punto de vista general como:

- I. Principales o absolutos, como es la propiedad, considerada como un derecho real esencial autónomo.
- II. Absolutos relativos, limitados de goce o limitados, como el usufructo, el uso, la habitación, las servidumbres o la copropiedad.
- III. Relativos, limitados o accesorios: son los derechos reales de garantía, como la prenda o la hipoteca.

El Código Civil de San Luis Potosí se refiere a los diversos derechos reales como: la posesión, la propiedad, el uso, el usufructo, la habitación, las servidumbres, la prenda y la hipoteca.

La acción negatoria abarca la figura de la propiedad. Lo anterior lo podemos observar en el título primero “de las acciones y excepciones”, capítulo I “de las acciones”, en el artículo 10 del Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí que indica: “Procederá la acción negatoria para obtener la declaración de libertad, o la de reducción de gravámenes de bien inmueble y la demolición de obras o señales que importen gravámenes, la tildación o anotación en el Registro de la Propiedad, y conjuntamente, en su caso, la indemnización de daños y perjuicios. Cuando la sentencia sea condenatoria, el actor puede exigir del reo que caucione el respeto de la

---

<sup>146</sup> CASTAN TOBEÑAS, José, *Derecho Civil Español Común y Formal Tomo II Derecho de las Cosas*, décima edición, editorial Reus, S.A. DE C.V., España, 1971, página 148.

<sup>147</sup> TAPIA señala que: “Un derecho real es el poder jurídico directo, inmediato, pleno de dominio, que las personas tienen sobre las cosas. Es un vínculo de pertenencia que sujeta las cosas a las personas”. TAPIA RAMIREZ, Javier, *Bienes (Derecho Real, Derechos de Autor y Registro Público de la Propiedad)*, primera edición, editorial Porrúa, México, 2004, página 94.

libertad del inmueble. Sólo se dará esta acción al poseedor a título del dueño, o que tenga derecho real sobre la heredad".<sup>148</sup>

La acción negatoria *stricto sensu*, al interponerse para reparar un daño ambiental, no va a perseguir la declaración de libertad o, en su defecto, la reducción de gravámenes del inmueble porque estas cuestiones no tienen relación directa e indirecta con el ambiente o sus elementos; solamente se concentrará en la suspensión de las obras o actividades, en la demolición de obras o señales y en la indemnización de daños y perjuicios.

### **2.3 La acción negatoria y su procedencia para la reparación de un daño ambiental**

En la acción negatoria el actor está obligado a acreditar los siguientes presupuestos:

- I. La existencia de un bien inmueble por naturaleza: ya sea rústico o urbano del que se pretenden derechos sobre ella.
- II. Que el demandante sea propietario, poseedor jurídico o titular de un derecho real sobre el inmueble: para lo cual debe justificarse, en principio, su derecho de propiedad, mediante la presentación del correspondiente título de adquisición del inmueble.
- III. Que otra persona (la parte demandada) afirme tener un derecho real sobre el inmueble: procede contra actos de un tercero, mediante los cuales pretende sobre el inmueble una servidumbre que no corresponde (inexistente) o pretende asignarle un contenido mayor a la servidumbre que tiene sobre dicho fundo.<sup>149</sup>

Es necesario, así, probar que la perturbación se haya causado en el goce de su propiedad (perturbación que ha de ser realizada con pretensión de ostentar un derecho real). Al demandado le corresponde, por consiguiente, justificar que su pretendido derecho tiene fundamento y motivo para que la acción proceda.

---

<sup>148</sup> Artículo reformado, *Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí*, febrero 16, 2012, S.L.P.

<sup>149</sup> C. MARTINEZ, Víctor, *Temas de Derechos Reales*, primera edición, editorial duarte Quiroz, Argentina, 2000, página 218.

En sustancia, el objeto de la acción negatoria en palabras de Víctor C., consiste en *“Restablecer la libertad de los derechos reales sobre inmueble propio o ajeno que se ejercen mediante la posesión”*.<sup>150</sup> El damnificado es el titular del derecho real, por lo que está impedido de ejercer libremente tal derecho.

Por ello, la sentencia definitiva dictada en este juicio tiene dos efectos legales: es declarativa y condenatoria.

- I. En la declarativa, el juez declara la libertad del derecho real.
- II. En la condenatoria, se ordena al demandado que reduzca a sus verdaderos límites el ejercicio de su servidumbre o en su defecto que cese en el ejercicio de tal servidumbre. Esta circunstancia la abordamos ampliamente en el capítulo VI.

En base a lo analizado de la acción negatoria y, desde el punto de vista jurídico-ambiental, el derecho es un producto que tiene su origen en la sociedad y lo que regula tiende a su desarrollo y perfeccionamiento.

En este sentido, el derecho tiene que servir, sin importar la materia que regule, para cubrir las necesidades a que está sujeto el hombre.<sup>151</sup>

Al efecto resaltamos la opinión vertida por Jordán en el sentido de que: *“la respuesta jurídica medioambiental requiere, en orden a su efectividad y en primer término, determinar los concretos ámbitos en los cuales, aquella habrá de desarrollarse siendo entonces conveniente tener presente lo siguiente: partiendo de elementos a los que hemos dicho queda circunscrita la protección medioambiental y fundamentalmente del esquema trazado en la Conferencia de Estocolmo”*.<sup>152</sup>

La ciencia del derecho, en base a estas necesidades, debe cumplir con las expectativas que rodean al hombre para su supervivencia. A nuestro juicio, la acción

---

<sup>150</sup> *Ídem*, p. 217.

<sup>151</sup> JORDÁN CAPITÁN señala: “No puede obviarse, y es bien sabido, que el Derecho no es sino un producto de una determinada sociedad, nace, evoluciona y crece con ella, siendo el reflejo de las necesidades que a cada momento histórico le corresponden”. JORDAN CAPITAN, Eva, *El Derecho a un Medio Ambiente Adecuado*, primera edición, editorial Aranzadi, Navarra, 2001, página 114.

<sup>152</sup> *Ídem*, p. 115.

negatoria requiere de ciertas excepciones y actualizaciones en sus supuestos, al tratar de aplicarla al ámbito del bien jurídico tutelado por el Derecho Ambiental.

La acción negatoria *stricto sensu*, al interponerse para reparar un daño ambiental, no va a perseguir la declaración de libertad o, en su defecto, la reducción de gravámenes del inmueble, porque estas cuestiones no tienen relación directa e indirecta con el ambiente o sus elementos y solamente se concentrará en la suspensión de las obras o actividades, en la demolición de obras o señales y en la indemnización de daños y perjuicios.

Una cuestión legal que resalta la acción negatoria es la existencia de un derecho real, sin embargo, esto no es obstáculo en un juicio donde intervenga la tutela del ambiente.

Lo anterior lo podemos observar al entrar al análisis del concepto del derecho real en lo siguiente:

1. El derecho real proviene del Derecho Romano (*ius in re*) que consiste en una relación jurídica inmediata entre una persona y una cosa.

Al entrar en su análisis, vemos que en las características del ambiente o sus elementos, existe una relación de vida y que, mediante el Derecho Ambiental, se ha visto al hombre como parte en esa relación de vida entre el ambiente y sus elementos.

2. La doctrina civil ha manifestado que el derecho real es un derecho absoluto, de contenido patrimonial, cuyas normas son, substancialmente, de orden público y establecen entre una persona (sujeto activo) y una cosa (objeto) una relación inmediata que, previa publicidad, obliga a la sociedad (sujeto pasivo) a abstenerse de realizar cualquier acto contrario al uso y goce del derecho real.

Por lo tanto, como se desprende del estudio del concepto de derecho real, se requiere de determinadas modificaciones en su contenido y alcance para usarlo como instrumento jurídico para la protección del ambiente.

Como lo indicamos en líneas anteriores, es innegable la certeza jurídica de que el hombre tiene instituido un derecho real sobre el ambiente.

Eduardo Pallares define el derecho real como: *un derecho absoluto que se tiene contra todos. El propietario de una cosa, lo es no sólo respecto a Fulano o a Zutano, sino con respecto a todos los habitantes del país.*<sup>153</sup>

Por otro lado, la acción real es la que tiene por objeto el ejercicio de un derecho real y, como consecuencia, exige el cumplimiento de una obligación ideal.<sup>154</sup>

En vista de lo analizado en la definición legal e hipótesis normativa de la acción negatoria, se puede afirmar que esta se compone de una acción y derecho real. Sin embargo, al observarse la acción y el derecho real en su contenido y alcance dentro de la Ley sustantiva y adjetiva civil, se entiende que son figuras jurídicas que requieren de un replanteamiento en su concepción y finalidad, al formularse como soporte legal en un juicio por daño ambiental.

En consecuencia, proponemos un nuevo concepto jurídico de derecho real ambiental que consiste en el siguiente: *“aquella relación o vínculo jurídico-ambiental absoluto e inmediato existente entre las personas y el ambiente o cualquiera de sus elementos de carácter extra patrimonial, intransferible, público e inalienable”.*

La finalidad de este nuevo concepto legal es hacer visible y palpable una situación legal que puede ser invocada como fundamento y soporte en una demanda civil de índole ambiental.

Mediante la tabla 1 establecemos las características del derecho real, tal como está concebido en el Derecho Civil. Por otro lado, proponemos un nuevo concepto denominado derecho real ambiental, para lo cual efectuamos un análisis de sus elementos:

---

<sup>153</sup> PALLARES, Eduardo, *Op. cit.*, p. 46.

<sup>154</sup> *Ídem*, p. 47.



Derecho real	Derecho real ambiental
Intervienen un solo sujeto activo determinado y un sujeto pasivo colectivo e indeterminado	Los sujetos activo y pasivo los hallamos en el ambiente.
El objeto es una cosa corporal, específica y determinada	Como lo hemos señalado en el capítulo primero, el ambiente cumple con estos requisitos y cualidades, así como otros aspectos que no han sido reconocidos en la legislación civil.
El poder sobre una cosa	Este poder lo tiene el ser humano sobre el ambiente; en caso contrario, no gozará del desarrollo físico o intelectual que posee o no habría de tener soporte de vida.
Al poder ejercitarse y hacerse efectivo <i>erga omnes</i> su sujeto activo es el titular, quien ejerce sus derechos sobre la cosa; la colectividad actuaría como sujeto pasivo, al verse obligada a no perturbar las potestades que el titular ejerce sobre la cosa	La concepción del sujeto activo y pasivo la identificamos al hacer referencia al ambiente. Como ejemplo podemos señalar el contenido del artículo 4º de la Constitución Federal a través de otro supuesto jurídico.
Toma su configuración de la Ley y obedece al principio de orden público. <sup>155</sup> Los diferentes derechos reales y los modos de adquirirlos, por su relevancia suelen estar establecidos exclusivamente en la ley.	El ambiente se encuentra regulado en diversas legislaciones de índole federal y estatal, y en reglamentos y normas oficiales mexicanas.
Precisan de un título y de un modo de adquirir	Como hemos señalado en el capítulo primero, el ambiente, por sus características, no requiere de un título de propiedad por parte de una persona física o moral.
Es de naturaleza perpetua; su ejercicio lo consolida, pero, pereciendo la cosa, se produce la extinción del derecho	El ambiente tiene la característica de perpetuidad, aunque depende del elemento ambiental que haya sufrido algún impacto, ya que puede funcionar con ciertas y limitadas características. Además, no se extingue el

<sup>155</sup> PALLARES señala que el orden público es “La actuación individual y social de orden jurídico establecido en una sociedad. Si se respeta dicho orden, si tanto las autoridades como los particulares lo acatan debidamente, entonces se produce el orden público, que en definitiva consiste en no violar las leyes del Derecho Público”. PALLARES, Eduardo, *Diccionario de Derecho Procesal Civil*, decimoquinta edición, editorial Porrúa, México, 1983, página 584.

	derecho al referirnos al ambiente.
Es de naturaleza inmueble; suele estar protegido por el ordenamiento jurídico mediante su inscripción en un registro especial de naturaleza pública, lo que acredita su dominio o, en su caso, su posesión	Depende del elemento ambiental; puede ser inmueble, pero, como lo analizamos en el capítulo primero puede ser mueble, con la diferencia que el ambiente no requiere de inscripción en un registro

**Tabla 1. Diferencias entre un derecho real civil y un derecho real ambiental.**

De acuerdo a lo observado, el concepto tradicional de derecho real no es opuesto ni ajeno en su interpretación y aplicación a la cuestión ambiental; por el contrario, con adaptar esta figura legal a los cánones del Derecho Ambiental, se podría invocar fácilmente en una demanda por daño ambiental.

A pesar de lo anterior, hay que tomar en cuenta que para que la acción negatoria alcance plena efectividad jurídica, podríamos sintetizarlas en la siguiente tabla:

<b>Acción negatoria civil</b>	<b>Acción negatoria ambiental</b>
Un bien inmueble por naturaleza (rústica o urbana) sobre el que se pretenden derechos.	En forma directa quedan protegidos los suelos y subsuelos e indirectamente otros elementos ambientales como: la fauna, la flora, la atmósfera y el agua.
El demandante es propietario, poseedor jurídico o titular de un derecho real sobre el inmueble	Como lo analizamos en el capítulo primero al referirnos al ambiente, el demandante puede ser una persona física o colectiva, esto va a depender de la ubicación física del suelo. Quedaría vigente lo del propietario, así como cualquier colindancia donde se efectúe la perturbación. (Con la aclaración de que el colindante o el grupo de personas carecen de propiedad ya que hablaríamos de la posesión ambiental).
Que otra persona (la parte demandada) afirme tener un derecho real sobre el inmueble	Como lo establecimos en párrafos anteriores, estamos ante una nueva estructura legal: un derecho real ambiental. Actor y demandado, tienen

	inalienablemente, un derecho real ambiental. Este supuesto no requiere prueba en contrario, por el simple hecho de tener el ser humano una relación directa con el ambiente.
--	--

**Tabla 2. Diferencias entre la acción negatoria civil y la acción negatoria ambiental.**

El derecho de propiedad se justifica mediante el correspondiente título de adquisición del inmueble.

## **2.4 La acción negatoria y sus beneficios para reclamar la reparación de un daño ambiental**

Cabe recordar que mediante la responsabilidad civil solamente se persigue la afectación del interés privado, donde esté de por medio la propiedad o la salud;<sup>156</sup> sin embargo, en un caso concreto, la acción negatoria ofrece posturas jurídicas adecuadas que son procedentes ante un daño ambiental.

Una de estas situaciones la encontramos en las perturbaciones a que es sujeto el poseedor del bien; estas perturbaciones, lejos de analizarlas bajo una visión netamente civilista, tienen particularidades en el ámbito ambiental.

Francisco Alenza invoca el término “perturbación” que es propio del interdicto de retener la posesión. En lo particular compartimos esta analogía empleada entre el interdicto y la acción negatoria, ya que es mediante actos (traduciéndose estos como perturbaciones) procedentes de un tercero que no permite el uso pleno del derecho real.

<sup>156</sup> ENCARNA CORDERO señala: “Los particulares sólo tienen pretensiones civiles frente a otros particulares o la Administración en la medida en que la agresión medioambiental afecte a un interés privado perfectamente individualizado (por ejemplo, la propiedad, la salud), carácter que no tiene el mero interés ciudadano en la calidad del medio ambiente”. CORDERO LOBATO, Encarna, Derechos de Daño y Medio Ambiente, *Lecciones de Derecho del Medio Ambiente*, ORTEGA ALVAREZ, Luis, Coordinador, tercera edición, editorial Lex Nova, España, 2002, página 479.

Francisco Alenza García señala que la perturbación:<sup>157</sup>

1. Ha de ser cierta entidad (con independencia a los estándares ambientales fijados en el Derecho Ambiental).
2. Debe tener cierta continuidad o permanencia.
3. Debe tratarse de una perturbación y no de una desposesión.

A estos tres puntos le agregaríamos uno más, consistente en los derivados del artículo 845 del Código Civil Federal.<sup>158</sup>

Una opinión en el mismo sentido la manifiesta Encarna Cordero, quien señala una serie de situaciones que se derivan de los actos perturbatorios que no se encuentran en los estándares ambientales, fundamental para saber la procedencia de la acción negatoria.<sup>159</sup>

En este sentido, no compartimos lo señalado por ambos autores y consideramos que los actos perturbatorios tienen que ser hechos, operaciones o actividades que estén contempladas en la normatividad ambiental. Todo acto perturbatorio debe tener un cuerpo normativo que lo regule, ya que en caso contrario, estaríamos ante una laguna del derecho.

En México, el Derecho Ambiental se basa en normas oficiales mexicanas (NOM)<sup>160</sup> en rubros como agua, emisiones a la atmósfera y residuos peligrosos. Estas normas

---

<sup>157</sup> ALENZA GARCÍA, José Francisco, *Manual de Derecho Ambiental*, primera edición, editorial Universidad Pública de Navarra, España, 2004, página 114.

<sup>158</sup> El artículo 845 indica: "Nadie puede construir cerca de una pared ajena, o de copropiedad, fosos, cloacas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos; ni instalar depósitos de materias corrosivas, máquinas de vapor o fábricas destinadas a usos que puedan ser peligrosos o nocivos, sin guardar las distancias prescritas por los reglamentos, o sin construir las obras de resguardo necesarias con sujeción a lo que prevengan los mismos reglamentos, o a falta de ellos, a lo que se determine por juicio pericial". *Diario Oficial de la Federación*, mayo 26, 1928, México, D.F.

<sup>159</sup> ENCARNA CORDERO manifiesta: "No toda incomodidad permite instalar la acción negatoria. En este punto hay que distinguir las injerencias directas en finca ajena (por ejemplo depositar basuras en el jardín del vecino), de lo que constituyen inmisiones, esto es, las injerencias que se producen indirectamente mediante propagación por medios naturales (en caso contrario, la injerencia es directa) de elementos materiales apreciables (humos, gases, polvo, ruido, etc.) procedentes de actividades realizadas en finca distinta a la dañada. La distinción es fundamental, pues si bien las injerencias directas, causen o no daño, pueden ser siempre excluidas por interferir injustificadamente el dominio". CORDERO LOBATO, Encarna, *Op. cit.*, p. 482.

<sup>160</sup> Las normas oficiales mexicanas encuentran su definición legal en la fracción XI del artículo 3º de la Ley Federal de Metrología y Normalización indicando que es: "La regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el

constituyen un punto de partida para verificar el grado de perturbación cuando la conducta se encuentre fuera de los rangos establecidos.<sup>161</sup>

Respecto al segundo punto puntualizado por Alenza, consideramos que éstas perturbaciones, cuya frecuencia puede ser continua o permanente, se deben ampliar e incluirse aquéllos daños o perturbaciones que son repentinos o espontáneos, es decir, cuyo origen sea sorpresivo o de acuerdo a lo siguiente:

- I. Los procesos productivos y/o procesos de servicios que están operando.
- II. La maquinaria o el equipo empleados en los procesos productivos o procesos de servicios.
- III. Las sustancias químicas que, por error en su manejo, transporte, almacenaje y uso y/o no son compatibles.
- IV. Cuando se efectuó un cambio de sustancia(s) química(s) dentro de un proceso productivo.

Dentro de esta misma línea de exposición, Encarna Cordero hace mención de la palabra inmisión, la cual presenta determinadas cualidades jurídicas en el contexto ambiental.

---

artículo 40, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación". (Fracción fue reformada en el *Diario Oficial de la Federación* el día 20 de mayo del 1997). Ahora bien, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es la dependencia de gobierno federal encargada de expedir las normas oficiales mexicanas en materia ambiental, lo anterior está dispuesto en el artículo 5º fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que señala: "La expedición de las normas oficiales mexicanas y la vigilancia de su cumplimiento en las materias previstas en esta Ley". *Diario Oficial de la Federación*, julio 1o, 1992, México, D.F.

<sup>161</sup> Al respecto, se encuentra establecido en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en su artículo 6º fracción II que a la letra dice: "No se considerará que existe daño al ambiente cuando los menoscabos, pérdidas, afectaciones, modificaciones o deterioros no sean adversos en virtud de: II. No rebasen los límites previstos por las disposiciones que en su caso prevean las Leyes ambientales ó las normas oficiales mexicanas". *Diario Oficial de la Federación*, junio 7, 2013, México, D.F.

Con base a lo planteado en párrafos precedentes, los términos de perturbaciones e inmisiones llegan a tener cierta similitud en su contenido y alcance, sin embargo, no se deben considerar estas dos expresiones en forma análoga.

Pueden existir actos perturbatorios que, en base a su naturaleza u origen, lleguen a generar inmisiones. Las perturbaciones son el arranque de los actos de molestia y las inmisiones son una consecuencia de éstas.

Francisco Díaz realiza un cuadro de las características que contienen las inmisiones.<sup>162</sup>

Así, la inmisión será legítima cuando obedezca a un uso normal del derecho de propiedad, a pesar de las incomodidades que pueda ocasionar al propietario vecino.<sup>163</sup>

Por otra parte, Francisco Díaz señala que, al hablar de inmisiones, forzosamente tiene que existir la relación de vecindad.

Cordero, por su parte, señala que además de que la inmisión no está normada, debe ser constante generando un menoscabo, existiendo, por consiguiente, la relación entre la actividad generadora y el daño inminente. Esta relación de causalidad no se produce cuando ocurre por fuerza mayor, por culpa de un tercero o por injerencia de la víctima.<sup>164</sup>

No compartimos estas opiniones, ya que las inmisiones pueden presentar un daño más grave y extendido que sobrepase o rebase los límites de vecindad establecida.

---

<sup>162</sup> Al respecto DIAZ BRITO señala que “Inmisión es un concepto sin duda de origen romano que ha sido sucesivamente acotado y perfilado, la inmisión se caracteriza por la propagación de sustancias perjudiciales de un fundo a otro y entre sus características señala las siguientes: 1. Debe tratarse de injerencias de carácter material, es decir, físicamente apreciables y susceptibles de ser registradas mediante aparatos científicos; 2. La injerencia debe suponer una verdadera intromisión o invasión del fundo vecino; 3. Las injerencias deben tener carácter indirecto e inmediato; 4. Que la inmisión sea ocasionada por la actividad desarrollada en un fundo por su propietario o por quien esté facultado para realizarla como consecuencia del disfrute del correspondiente derecho; 5. Las injerencias deben causar un daño en el fundo vecino, de manera que se interfiera en el disfrute pacífico del mismo; 6. Las injerencias derivadas de la actividad emisiva deben tener cierta continuidad o periodicidad; y 7. El fundo inminente y el fundo que sufre la inmisión deben ser vecinos”. *DÍAZ BRITO, Francisco, El límite de tolerancia en las inmisiones y relaciones de vecindad*. Cuadernos de Aranzadi Civil. Navarra, Aranzadi, España, 1999, páginas 21-29.

<sup>163</sup> GONZALEZ MARQUEZ, José Juan, *La responsabilidad por el daño ambiental en México*, primera edición, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2002, página 150.

<sup>164</sup> ENCARNA CORDERO manifiesta: “La acción negatoria requiere que la inmisión no esté legitimada en la ley ni en pacto, que la misma será reiterada, que haya producido un daño, que éste sea grave, y que exista relación de causalidad entre la actividad del inminente y el daño, relación que queda rota cuando concurre fuerza mayor, culpa de un tercero o exclusiva de la víctima, pero no por caso fortuito”. CORDERO LOBATO, Encarna, *Op. cit.*, p. 483.

Considerándose la relación de vecindad como un punto de referencia, más no como el único a considerar. Asimismo, esta autora manifiesta que el generador de la inmisión debe probar la inocuidad de la misma, ya que en caso contrario se estaría ante la presunción *iuris tantum*.<sup>165</sup> Esta presunción se establece en la ley y admite prueba en contra, es decir, permite probar la inexistencia de un derecho o hecho

Compartimos esta opinión, ya que el responsable de la inmisión debe probar que dicha emisión no es dañina a la salud o al ambiente. El juez que conozca del asunto debe prestar especial cuidado en este rubro.

Cuando la inmisión esté ocasionada por una actividad por parte de su propietario o por quien esté facultado para realizarla como consecuencia de su uso o disfrute de su derecho, ésta no puede considerarse como legítima cuando ocasione daños. Es decir, se requiere que la conducta del generador constituya un ejercicio abusivo del derecho de propiedad.<sup>166</sup>

Podemos establecer que existe un abuso del derecho en las inmisiones:

- I. Cuando están fuera de rango de los estándares ambientales de las normas oficiales mexicanas.
- II. Cuando se encuentren dentro de los parámetros de las normas oficiales mexicanas, pero generan daños a la salud, patrimonio de un propietario o de una comunidad.
- III. Cuando tienen el carácter de ser incesantes, permanentes o sorpresivas.
- IV. Cuando no exista o dejó de seguirse un control, gestión administrativa o de ingeniería por parte del generador de las inmisiones.

---

<sup>165</sup> ENCARNA CORDERO sostiene: "Probada la inmisión, incumbe al inminente la carga de probar la inocuidad de la misma, pues en caso contrario se estaría presumiendo *irus tantum* la legitimación de una injerencia sobre la finca ajena..." *Ibídem*, pp. 483.

<sup>166</sup> ENCARNA CORDERO expresa: "Existe abuso de derecho cuando la inmisión no reporta utilidad alguna a su autor y se realiza con la sola intención de causar daño (actos de emulación), y también cuando, dada la gravedad de los daños, la conducta del inminente sobrepasa manifiestamente los límites normales del ejercicio del derecho de propiedad". CORDERO LOBATO, Encarna, *Ibídem*, pp. 483.

Ahora bien, una circunstancia que puede desencadenar un abuso del derecho se origina cuando se sobrepasan los límites establecidos en las normas oficiales mexicanas en materia ambiental. En este sentido, la Ley de Responsabilidad Ambiental en su artículo 6º fracción II, lo establece y menciona cuándo existe un daño ambiental.<sup>167</sup>

El abuso del derecho en el Derecho Civil está contemplado en el artículo 1912 del Código Civil Federal<sup>168</sup> o en su defecto dentro del numeral 1748 del Código Civil de San Luis Potosí. El contenido de estas hipótesis legales tiene una aplicación plena en materia ambiental.

El artículo 845 del Código Civil Federal y artículo 791 del Código Civil de San Luis Potosí<sup>169</sup> (contemplan el mismo supuesto legal bajo diferente numeral) establecen una serie de hipótesis, que son la base para derivar las perturbaciones, siendo estas las siguientes.

“Nadie puede construir cerca de una pared ajena o de copropiedad, fosos, cloacas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos; ni instalar depósitos de materiales corrosivos, máquinas de vapor o fábricas destinadas a usos que puedan ser peligrosos o nocivos, sin guardar las distancias prescritas por los reglamentos, o sin construir las obras de resguardo necesarias, con sujeción a lo que prevengan los mismos reglamentos, o a falta de ellos, a lo que se determine por juicio pericial”.

Al observar este artículo se percibe que todas estas situaciones tienen un resultado adverso que recae sobre el ambiente o alguno de sus elementos; sin embargo, no sólo la normatividad ambiental contempla su regulación, sino que también es abordada en el ámbito de seguridad e higiene.

---

<sup>167</sup> La fracción II del artículo 6º dice: “No se considerará que existe daño al ambiente cuando los menoscabos, pérdidas, afectaciones, modificaciones o deterioros no sean adversos en virtud de: II. No rebasen los límites previstos por las disposiciones que en su caso prevean las Leyes ambientales o las normas oficiales mexicanas”. *Op. cit.*

<sup>168</sup> El artículo 1912 del Código Civil Federal indica: “Cuando al ejercitar un derecho se cause daño a otro, hay obligación de indemnizarlo si se demuestra que el derecho sólo se ejercitó a fin de causar el daño, sin utilidad para el titular del derecho”. *Diario Oficial de la Federación*, mayo 26, julio 14, agosto 3 y 31, 1928. México, D.F.

<sup>169</sup> *Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí*, abril 18, 1946, S.L.P.



La maquinaria y el equipo que intervienen en el contexto de los artículos 845 del Código Civil Federal y 791 del Código Civil de San Luis Potosí tienen repercusiones ambientales cuando no cumplen los límites establecidos en las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad e higiene.<sup>170</sup> Podemos citar los siguientes ejemplos:

1. En un centro de trabajo,<sup>171</sup> cuando existen contaminantes del medio ambiente laboral<sup>172</sup> que no están controlados a través de medidas de ingeniería. La verificación de sus estatus se realiza mediante un estudio técnico;
2. A la maquinaria y/o equipo que no se les realice un mantenimiento (preventivo o correctivo) pueden generar una explosión, fuga o derrame de su contenido o desequilibrios en su operación que dé, acuerdo a su lugar de ubicación o almacenaje, llega a producir un incidente ambiental.<sup>173</sup>

Este tipo de información documental puede ser de utilidad en el momento procesal oportuno dentro del juicio por acción negatoria; estas circunstancias se abordarán ampliamente en el capítulo V.

---

<sup>170</sup> PIERRE FOY VALENCIA señala en su artículo “Consideraciones sobre la función político ambiental del abogado” que la higiene y seguridad de los trabajadores está directamente relacionado con las condiciones ambientales en escenarios o locales ocupacionales. Existen importantes reglamentaciones nacionales para actividades minera, energética o industrial. De otra parte, cabe que un conjunto de consideraciones ambientales puedan disenter con exigencias de orden laboral (vg. épocas de veda y paralización de actividades). Se trata pues de un espacio normativo y doctrinario que requiere profundización”. FOY VALENCIA, P. *Consideraciones sobre la función político ambiental del abogado*. España. [http://derechoambiental.iespana.es/ABOGADO.html#\\_ftn1](http://derechoambiental.iespana.es/ABOGADO.html#_ftn1). Fecha de consulta 22 de octubre del 2014.

<sup>171</sup> La NOM-001-STPS-2008 en el punto 4.4 define lo que es un centro de trabajo: “Todos aquellos lugares tales como edificios, locales, instalaciones y áreas en los que se realicen actividades de producción, comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios, o en los que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo”. *Diario Oficial de la Federación*, noviembre 24, 2008, México, D.F.

<sup>172</sup> Los contaminantes del medio ambiente laboral de acuerdo a la NOM-010-STPS-1999 en su punto h. “Son todas las sustancias químicas y mezclas capaces de modificar las condiciones del medio ambiente del centro de trabajo y que, por sus propiedades, concentración y tiempo de exposición o acción, puedan alterar la salud de los trabajadores”. *Diario Oficial de la Federación*, julio 8, 1993, México, D.F.

<sup>173</sup> RAFAEL BALLESTER hace mención a lo que los tratadistas ambientales consideran como una característica daño ambiental, al mencionar: “Entre otras cosas, por sufrir una “sinergia positiva”; es decir, desde que nace, el daño mutua de forma progresiva al entrar en contacto con otros elementos no se trata de una adición aritmética de resultados. Lo cual dificulta gravemente no sólo su averiguación objetiva sino la determinación del responsable primario del daño”. BALLESTER CECILIA, Rafael, *Apuntes sobre Derecho Medioambiental*, primera edición, editorial Graficas Díaz, S.L. España, 1996, página 119.

El juez que conozca del asunto judicial-ambiental debe poseer conocimientos en los parámetros establecidos en las normas oficiales mexicanas aplicables a las actividades desarrolladas por el inminente,<sup>174</sup> donde identifique la existencia de que tales actividades están fuera de rango de las normas oficiales mexicanas.

Alenza señala que la acción negatoria puede servir a tres tipos de objetivos, los dos primeros preventivos y principales, separados o simultáneos y el tercero, resarcitorio y secundario.<sup>175</sup>

- 1ª. Pretensión de *cesación*: cesación de la perturbación actual y futura;
- 2ª. Pretensión de *abstención*: tiene la misma eficacia que la cesión, pero parte de un supuesto distinto, la perturbación todavía no se ha producido pero se teme;
- 3ª. Pretensión *resarcitoria*: el resarcimiento de los daños y perjuicios se incluye en la eficacia de la acción negatoria, si bien de forma subsidiaria, pues los daños (además de la molestia) no tienen necesariamente que concurrir para ejercitarla.

#### **2.4.1 Reparación de los elementos ambientales a su estado original**

En el ámbito del Derecho Civil, cuando se promueve la acción negatoria se pretende lo siguiente:

- I. Que el inmueble tenga las características previas a los actos que originaron la demanda.
- II. Que sean demolidas o destruidas las obras o señales y signos que originaron la perturbación.
- III. Que se condene al demandado al pago de los daños y perjuicios ocasionados por el ejercicio de las perturbaciones.

---

<sup>174</sup> ENCARNA CORDERO señala: "La actividad del demandado debe ser la causa del daño, pues si falta relación de causalidad no habrá lugar a responsabilizar, aunque resulte probada la conducta contaminante". CORDERO LOBATO, Encarna, *Op. cit.*, p. 489.

<sup>175</sup> ALENZA GARCÍA, José Francisco, *Op. cit.*, p. 114 - 115.

IV. Que se imponga al demandado la obligación de no perturbar más al actor en el ejercicio de sus derechos.

La acción negatoria emplea la palabra restituir, por lo que es menester especificar el término a emplear entre reparar y restituir cuando hagamos referencia a un daño ambiental.

La palabra restituir significa: “dar a alguien lo que tenía antes, restablecer, volver a poner algo en el estado que tenía antes”.<sup>176</sup>

Por otra parte, el vocablo reparar significa: “arreglar algo roto o estropeado, remediar un daño o falta”.<sup>177</sup>

Con base al significado de ambos términos, la palabra adecuada es la de “reparar” y no “restituir”; en este sentido, es emplear el término “reparar” en la sentencia dictada en un juicio por acción negatoria cuando se involucre al ambiente o alguno de sus elementos y restituir cuando el objeto de la acción negatoria es netamente civil.

El término “reparar” al referirse un daño ambiental, es el más empleado en la legislación ambiental, tal es el caso de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 203 donde remite el daño causado a su reparación a través de la aplicación de la legislación civil.<sup>178</sup>

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 78 bis establece la expedición de declaratorias cuyo objeto es proteger el ambiente o sus elementos después de que se haya efectuado una reparación.<sup>179</sup>

---

<sup>176</sup> *Diccionario de la Lengua Española*, primera edición, editorial Larousse, México, 1994, página 577.

<sup>177</sup> *Idem*, p. 572.

<sup>178</sup> El artículo 203 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece: “Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona que contamine o deteriore el ambiente o afecte los recursos naturales o la biodiversidad, será responsable y estará obligada a reparar los daños causados, de conformidad con la legislación civil aplicable”. *Diario Oficial de la Federación*, enero 28, 1988, México, D.F.

<sup>179</sup> Las declaratorias vienen contempladas en el artículo 78 BIS de la Ley General del equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que dice: “En aquéllos casos en que se estén produciendo procesos acelerados de desertificación o degradación que impliquen la pérdida de recursos de muy difícil regeneración, recuperación o restablecimiento, o afectaciones irreversibles a los ecosistemas o sus elementos, la Secretaría, promoverá ante el Ejecutivo Federal la expedición de declaratorias para el establecimiento de zonas de restauración ecológica. Para tal efecto, elaborará previamente, los estudios que las justifiquen. Las declaratorias deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y serán inscritas en el Registro Público de la Propiedad correspondiente.

La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental<sup>180</sup> en su artículo 1º regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como su reparación y compensación.

Por su parte, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos,<sup>181</sup> en su artículo 68, hace una referencia en su contenido y alcance al artículo 203 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.<sup>182</sup>

El artículo 69 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos hace hincapié en la remediación del suelo por la contaminación del sitio derivado del manejo y gestión de los residuos.<sup>183</sup> Nos puede servir como referencia el hecho de que habla de un elemento ambiental: el suelo.

La Ley de Vida Silvestre, por su parte, señala en el título VI “conservación de la vida silvestre”, capítulo IV “restauración”, artículo 70 lo siguiente:

*“Cuando se presenten problemas de destrucción, degradación, desertificación o desequilibrio del hábitat de la vida silvestre, la Secretaría formulará y ejecutará a la brevedad posible, programas de prevención, de atención a emergencias y de restauración para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales de la vida silvestre, tomando en cuenta lo dispuesto por los artículos 78, 78 bis, y 78 bis I de*

---

Las declaratorias podrán comprender, de manera parcial o total, predios sujetos a cualquier régimen de propiedad, y expresarán:

I.- La delimitación de la zona sujeta a restauración ecológica, precisando superficie, ubicación y deslinde;  
II.- Las acciones necesarias para regenerar, recuperar o restablecer las condiciones naturales de la zona;  
III.- Las condiciones a que se sujetarán, dentro de la zona, los usos del suelo, el aprovechamiento de los recursos naturales, la flora y la fauna, así como la realización de cualquier tipo de obra o actividad;  
IV.- Los lineamientos para la elaboración y ejecución del programa de restauración ecológica correspondiente, así como para la participación en dichas actividades de propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas, gobiernos locales y demás personas interesadas, y

V.- Los plazos para la ejecución del programa de restauración ecológica respectivo”. *Op. cit.*

<sup>180</sup> *Diario Oficial de la Federación*, junio 7, 2013, México, D.F.

<sup>181</sup> *Diario Oficial de la Federación*, octubre 8, 2003, México, D.F.

<sup>182</sup> El artículo 68 señala: “Quienes resulten responsables de la contaminación de un sitio, así como de los daños a la salud como consecuencia de ésta, estarán obligados a reparar el daño causado, conforme a las disposiciones legales correspondientes”. *Op. cit.*

<sup>183</sup> El artículo 69 establece: “Las personas responsables de actividades relacionadas con la generación y manejo de materiales y residuos peligrosos que hayan ocasionado la contaminación de sitios con éstos, están obligadas a llevar a cabo las acciones de remediación conforme a lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables”. *Op. cit.*

*la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de conformidad con lo establecido en el reglamento y demás disposiciones aplicables”.*

Como hemos señalado en los párrafos que anteceden, la finalidad de la acción negatoria es la reparación del o los elementos ambientales y el fin de la reparación es que los elementos ambientales vuelvan a un estado base.

El término “estado base” está contemplado en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en su fracción VIII del artículo 2º.<sup>184</sup>

Otro aspecto importante de la acción negatoria es que las obras, instalaciones, maquinaria o equipo van a ser removidos del lugar donde generaron el daño ambiental y, por ende, su instalación en dicho lugar no debe volver a presentarse.

Por consecuencia, la persona física o moral que sea condenado mediante sentencia a cambiar sus instalaciones, debe ser vigilada concienzudamente por las dependencias ambientales de gobierno federal y estatal, en cuanto a sus permisos, licencias y estudios en el nuevo lugar donde se instale.

En consecuencia, la reparación de los elementos ambientales a su estado base mediante la acción negatoria debe considerarse lo siguiente:

1. Reparar los elementos ambientales afectados para que vuelva a poseer las características de sustentabilidad, funcionamiento y equilibrio en su interacción con otros elementos ambientales.
2. Para reparar el ambiente o sus elementos se debe partir de:

---

<sup>184</sup> Este término de estado base viene contemplado en la fracción VIII del artículo 2º. De la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental que a la letra dice: “Para los efectos de esta Ley se estará a las siguientes definiciones, así como aquellas previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las Leyes ambientales y los tratados internacionales de los que México sea Parte. Se entiende por: “VIII. Estado base: Condición en la que se habrían hallado los hábitat, los ecosistemas, los elementos y recursos naturales, las relaciones de interacción y los servicios ambientales, en el momento previo inmediato al daño y de no haber sido éste producido”. *Op. cit.*

- a. Segregar los elementos ambientales afectados (de manera teórica para observar de mayor a menor cual es el más dañado).
- b. Planificar la remediación (cuando aplique) de los elementos ambientales, del más afectado, al que tenga menor grado de perjuicio.
- c. Establecer un programa de acción fijando: responsables, fechas de cumplimiento, descripción de las actividades y vincularlo a cada elemento ambiental.
- d. Elaborar un presupuesto donde se incluya los materiales que se vayan aplicar y los estudios técnicos antes y posteriores a las actividades a desarrollar.

Es importante resaltar que debemos plantear dos situaciones dirigidas a los elementos ambientales afectados por un daño ambiental y que están estipuladas en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental:

Primero.- Buscar la reparación de los elementos ambientales dañados.

Segundo.- En caso que no sea posible física y técnicamente la reparación, debe aplicarse el criterio de equivalencia.<sup>185</sup>

Como ya se ha puesto de relieve, la reparación del ambiente o sus elementos debe efectuarse sobre aquel o aquellos elementos con más grado de afectación, dirigiendo los esfuerzos de rehabilitación al elemento más dañado.

Para ello, se debe observar y cumplir con el artículo 39 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental; este precepto legal determina las medidas de reparación y compensación ambiental.<sup>186</sup>

---

<sup>185</sup> En la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en el artículo 2º fracción II establece lo que es el criterio de equivalencia y señala que es: "El lineamiento obligatorio para orientar las medidas de reparación y compensación ambiental, que implica restablecer los elementos y recursos naturales o servicios ambientales por otros de las mismas características". *Op. cit.*

Debemos recordar que el contenido técnico de las normas oficiales mexicanas está basado en criterios técnicos basados en ciencias como la ingeniería y la química.

Por citar un ejemplo, podemos indicar la figura del agua residual<sup>187</sup> contenida en la NOM-001-SEMARNAT-1996.<sup>188</sup> Esta norma establece las características que debe contener el agua para ser descargada a un cuerpo receptor.<sup>189</sup>

No se cuentan con las características del agua, antes de convertirse en agua residual, sólo se puede asumir su estado posterior a su contaminación, cuyo origen se deriva de su uso en procesos productivos o de otra naturaleza.

Por ello, se debe procurar que la reparación del elemento ambiental contenga los parámetros de las normas oficiales mexicanas, o, en su defecto, exigir más efectividad a tales estándares ambientales.

---

<sup>186</sup> El artículo 39 señala: "En la determinación de las medidas de reparación y compensación ambiental se considerará:

- I. El criterio de equivalencia recurso-recurso o servicio-servicio;
- II. Las acciones que proporcionen recursos naturales o Servicios Ambientales del mismo tipo, calidad y cantidad que los dañados;
- III. Las mejores tecnologías disponibles;
- IV. Su viabilidad y permanencia en el tiempo;
- V. El costo que implica aplicar la medida;
- VI. El efecto en la salud y la seguridad pública;
- VII. La probabilidad de éxito de cada medida;
- VIII. El grado en que cada medida servirá para prevenir daños futuros y evitar riesgos como consecuencia de su aplicación;
- IX. El grado en que cada medida beneficiará al ecosistema dañado;
- X. El grado en que cada medida tendrá en cuenta los correspondientes intereses sociales, económicos y culturales de la localidad;
- XI. El periodo de tiempo requerido para la recuperación de los ciclos biológicos que fueron afectados por el daño causado al ecosistema;
- XII. El grado en que cada una de las medidas logra reparar el lugar que ha sufrido el daño ambiental, y
- XIII. La vinculación geográfica con el lugar dañado". *Op. cit.*

<sup>187</sup> El concepto de agua residual viene contenido en la Ley de Aguas Nacionales el artículo 3º. fracción VI que señala: "Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos público urbano, doméstico, industrial, comercial, de servicios, agrícola, pecuario, de las plantas de tratamiento y en general, de cualquier uso, así como la mezcla de ellas". *Diario Oficial de la Federación*, diciembre 1º, 1992, México, D.F.

<sup>188</sup> Esta norma oficial mexicana establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las aguas, residuales en las aguas y bienes nacionales, en ella se establecen las condiciones particulares de descarga para lo cual deben de contener parámetros físicos, químicos y biológicos y de sus niveles máximos de descargas, determinados por la Comisión Nacional del Agua, para el responsable o grupo de responsables de dicha descarga a un cuerpo receptor específico, con el fin de preservar y controlar la calidad de las aguas conforme a la Ley de aguas Nacionales y su reglamento. *Diario Oficial de la Federación*, junio 24, 1996, México, D.F.

<sup>189</sup> El término de cuerpo receptor de acuerdo a la NOM-001-SEMARNAT-1996 queda establecida en el capítulo de definiciones punto 3.10 que señala: "Son las corrientes, depósitos naturales de agua, presas, cauces, zonas marinas o bienes nacionales donde se descargan aguas residuales, así como los terrenos en donde se infiltran o inyectan dichas aguas cuando puedan contaminar el suelo o acuíferos". *Op. cit.*

Después de ejecutar la rehabilitación del ambiente o sus elementos es prioridad desarrollar y/o ejecutar estudios técnicos, de acuerdo al elemento ambiental, con la finalidad de que se demuestre claramente que dicho elemento se encuentra en una condición previa inmediata al daño, es decir: como si este daño no se hubiere producido. Lo anterior encuentra su fundamento en los artículos 13,<sup>190</sup> 35<sup>191</sup> y 36<sup>192</sup> de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

En cuanto a la remediación que no haya sido la adecuada o que quede fuera de los límites establecidos, el juez debe decidir con base a determinaciones técnicas, la aplicación del “criterio de equivalencia”.

Por otro lado, el juzgador puede tomar como puntos de referencia lo estipulado en la responsabilidad civil para la reparación del ambiental, sólo para fines de analogía.

En palabras de Cordero, la responsabilidad civil tiene como finalidad tres supuestos:<sup>193</sup>

- a. Indemnización.
- b. Restauración.
- c. Cesación y/o adopción de medidas cautelares o preventivas.

Para los tratadistas tiene prioridad la reparación *in natura*<sup>194</sup> respecto a la indemnización compensatoria,<sup>195</sup> en virtud, que la primera es más razonable y lógica desde el punto de vista ecológico.

---

<sup>190</sup> El artículo 13 indica: “La reparación de los daños ocasionados al ambiente consistirá en restituir a su Estado Base los hábitat, los ecosistemas, los elementos y recursos naturales, sus condiciones químicas, físicas o biológicas y las relaciones de interacción que se dan entre estos, así como los servicios ambientales que proporcionan, mediante la restauración, restablecimiento, tratamiento, recuperación o remediación”. Op cit.

<sup>191</sup> El artículo 35 manifiesta: “Para acreditar los hechos o circunstancias en relación al estado base, el daño ocasionado al ambiente, así como el nexo causal, las partes y las autoridades podrán utilizar fotografías, imágenes de satélite, estudios de poblaciones y en general toda clase de elementos aportados por la técnica y la ciencia. Salvo en los casos en que el Código Federal de Procedimientos Civiles otorgue mayor valor probatorio, estos medios de prueba constituirán indicios”. Op cit.

<sup>192</sup> El primer párrafo del artículo 36 señala: “El estado base se determinará a partir de la mejor información disponible al momento de su valoración”. Op cit.

<sup>193</sup> CORDERO LOBATO, Encarna, *Op. cit.*, p. 126.

<sup>194</sup> La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental indica en su artículo 13 primer párrafo señala: “La reparación de los daños ocasionados al ambiente consistirá en restituir a su Estado Base los hábitat, los ecosistemas, los elementos y recursos naturales, sus condiciones químicas, físicas o biológicas y las relaciones de interacción que se dan entre estos, así como los servicios ambientales que proporcionan, mediante la restauración, restablecimiento, tratamiento, recuperación o remediación”. *Op. cit.*

<sup>195</sup> La compensación viene contemplada en el artículo 17 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental que a la letra dice: “La compensación ambiental consistirá en la inversión o las acciones que el responsable haga a su cargo, que generen una mejora ambiental, sustitutiva de la reparación total o parcial del daño ocasionado al ambiente, según corresponda, y equivalente a los efectos adversos ocasionados por el daño”. *Op. cit.*



La reparación *in natura*, en palabras de González Márquez, es la restitución exacta del medio a su estado de origen es, evidentemente imposible; es decir, la reparación *in natura* siempre será una reparación relativa, una reparación parcial.<sup>196</sup>

En consecuencia, la reparación *in natura* implica:

- I. Garantizar que la actividad que causa el daño ambiental debe cesar.
- II. El inicio de las tareas tendientes a la reconstrucción del bien dañado.<sup>197</sup>

Por otro lado, la indemnización compensatoria ambiental<sup>198</sup> demuestra dificultades en la práctica, la más importante de ellas es la valoración de los daños ambientales que, por definición, son invaluable, ya que se trata de bienes y valores que están fuera del mercado y no tienen un valor monetario.

Alenza plantea una serie de formas para determinar la indemnización compensatoria.<sup>199</sup> Es más apropiada si los daños son elevados o llevan un tiempo para su ejecución.

La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental contempla en su artículo 19 el pago y sus montos equivalentes como sanción económica.<sup>200</sup>

---

<sup>196</sup> González Márquez, Juan José, *Op. cit.*, p. 213.

<sup>197</sup> *Idem*, p. 214.

<sup>198</sup> El artículo 17 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental menciona: "La compensación ambiental consistirá en la inversión o las acciones que el responsable haga a su cargo, que generen una mejora ambiental, sustitutiva de la reparación total o parcial del daño ocasionado al ambiente, según corresponda, y equivalente a los efectos adversos ocasionados por el daño". *Op. cit.*

Dicha inversión o acciones deberán hacerse en el ecosistema o región ecológica en donde se hubiese ocasionado el daño. De resultar esto materialmente imposible la inversión o las acciones se llevarán a cabo en un lugar alternativo, vinculado ecológica y geográficamente al sitio dañado y en beneficio de la comunidad afectada. En este último caso serán aplicables los criterios sobre sitios prioritarios de reparación de daños, que en su caso expida la Secretaría en términos de lo dispuesto por la Sección 5, Capítulo Tercero del presente Título. El responsable podrá cumplir con la obligación prevista en el presente artículo, mediante la contratación de terceros". *Op. cit.*

<sup>199</sup> Este autor manifiesta que estas formas pueden ser mediante: 1. La negociación entre responsables y los afectados; 2. La determinación legal de tarifas preestablecidas para daños ambientales, igual que se ha hecho en el ámbito de los seguros o en el mundo laboral; 3. La evaluación administrativa, que es la más frecuente en nuestra legislación ambiental, al estar prevista como medida accesoria a las sanciones. ALENZA GARCÍA, José Francisco, *Op. cit.*, p. 124.

<sup>200</sup> El artículo 19 menciona: "La sanción económica prevista en la presente Ley, será accesoria a la reparación o compensación del Daño ocasionado al ambiente y consistirá en el pago por un monto equivalente de:

I. De trescientos a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción, cuando el responsable sea una persona física, y II. De mil a seiscientos mil días de

Creemos que esta hipótesis legal requiere de una aplicación en forma conjunta con el artículo 7º del mismo ordenamiento, ya que se contemplan montos, pero no se tiene la certeza jurídica y física de que dicha cantidad de dinero sea suficiente y completa, se debe evitar la situación que indique que no fue suficiente el monto, en base a la magnitud del daño causado a uno o varios elementos ambientales.

Por otro lado, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en su artículo 7º dispone que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá emitir normas oficiales mexicanas con la finalidad de otorgar certidumbre al sector privado, esto a través del establecimiento de cantidades mínimas de deterioro, pérdida, afectación y modificación y se consideren como adversos y dañosos y se estipule una cantidad económica.<sup>201</sup>

Consideramos que tal disposición legal es lo más apropiado para determinar el grado de afectación que tienen los elementos ambientales y que debe existir un conjunto de reglas o estándares surgidos de la ingeniería ambiental que establezcan información, medidas o parámetros y cuya aplicación esté a cargo del juez que conozca el juicio por daño ambiental.

En nuestra opinión, debe dársele prioridad al desarrollo y publicación de estas normas oficiales mexicanas para aterrizar conceptos establecidos en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental como “estado base” y “criterio de equivalencia”.

Mientras se publican las normas de referencia y para los efectos legales de ejecutar la reparación del ambiente y sus elementos en un juicio interdictal y acción negatoria, ésta debe basarse en lo siguiente:

- I. Aplicar las normas oficiales mexicanas pertinentes.

---

salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción, cuando la responsable sea una persona moral. Dicho monto se determinará en función de daño producido”. *Op. cit.*

<sup>201</sup> El artículo 7º señala: “A efecto de otorgar certidumbre e inducir a los agentes económicos a asumir los costos de los daños ocasionados al ambiente, la Secretaría deberá emitir paulatinamente normas oficiales mexicanas, que tengan por objeto establecer caso por caso y atendiendo la Ley de la materia, las cantidades mínimas de deterioro, pérdida, cambio, menoscabo, afectación, modificación y contaminación, necesarias para considerarlos como adversos y dañosos. Para ello, se garantizará que dichas cantidades sean significativas y se consideren, entre otros criterios, el de la capacidad de regeneración de los elementos naturales”. *Op. cit.*

II. Aplicar normas internacionales, cuando no existieran normas mexicanas.

III. A falta de normas mexicanas y normas internacionales, aplicar parámetros establecidos en la ingeniería y la química ambiental.

Por último, se debe tramitar, gestionar y ejecutar lo contemplado en el artículo 78 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,<sup>202</sup> contando con la participación a nivel estatal de la Secretaría de Gestión Ambiental<sup>203</sup> y demás organismos para el caso de la rehabilitación del ambiente o de sus elementos.

---

<sup>202</sup> El artículo 78 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece: “En aquellas áreas que presenten procesos de degradación o desertificación, o graves desequilibrios ecológicos, la Secretaría deberá formular y ejecutar programas de restauración ecológica, con el propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en ella se desarrollaban”. *Op. cit.*

En la formulación, ejecución y seguimiento de dichos programas, la Secretaría deberá promover la participación de los propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas, gobiernos locales, y demás personas interesadas”.

<sup>203</sup> Para la determinación de la competencia de las secretarías, deben observarse los artículos 5º y 7º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. *Op. cit.*

## **CAPÍTULO III      Aplicación de presupuestos y principios procesales en un juicio interdictal y de acción negatoria para reparar un daño ambiental.**

### **3.1 Introducción**

En este capítulo abordaremos la importancia del contenido y el alcance que ofrecen determinados presupuestos y principios procesales, aplicados a una demanda civil por un daño ambiental.

Analizaremos que el Derecho Procesal Civil requiere de modificaciones cuando sea invocado en un juicio por daño ambiental.

Entre las instituciones procesales que replantearemos se encuentra la referente a la carga de la prueba, que, desde el punto de vista de la doctrina procesal civil y su aplicación en un juicio interdictal y de acción negatoria, son reglas doctrinales que no han cambiado a través de los años, pero que a la luz de las peculiaridades del Derecho ambiental, es necesario que dicho concepto se reforme para poder ser valorado y aplicado en juicios donde se reclame la reparación de un daño ambiental.

Abordaremos el tema de las pruebas supervinientes y expondremos sus características y su naturaleza jurídica para determinar cómo es que esta prueba influye dentro un juicio civil, vinculándola en un juicio por daño ambiental.

La prueba superviniente es una prioridad en un juicio por daño ambiental en el que los puntos de controversia consistan en la reparación del daño al ambiente. Ello se debe a que hay situaciones graves para el ambiente y ello debe conllevar consecuencias legales.

Abordaremos los principios del derecho aplicables al juzgador y a las partes en un proceso civil. Intentaremos explicar cómo es que determinados principios, sin que sea preciso alterar su naturaleza y contenido jurídico, pueden ser invocados dentro de un juicio de índole ambiental, tanto por las partes como por el juzgador.

Por último, acerca de las autoridades administrativas, plantearemos la situación jurídica que tienen en su papel rector y vigilante en materia ambiental, analizaremos su

desempeño a través de sus diferentes departamentos internos y la forma de interrelación con otros entes administrativos. Asimismo visualizaremos la forma en la que estos entes administrativos pueden formar parte de un juicio por daño ambiental y abordaremos los efectos legales que tendrían estos, en un juicio de esta índole.

### **3.2 Los presupuestos procesales en un juicio interdictal y de acción negatoria por un daño ambiental**

Los presupuestos procesales son los hipotéticos sin los cuales no puede iniciar ni desenvolverse válidamente un proceso; son condiciones que deben ser observadas por el juez para la procedencia de las demandas que llega a conocer.

En palabras de Pallares los presupuestos son: *“requisitos sin los cuales no puede iniciarse ni tramitarse con eficacia jurídica un proceso”*.<sup>204</sup>

El Derecho Procesal Civil contempla una amplia gama de presupuestos procesales; sin embargo, nos enfocaremos en aquellos que son idóneos y que pueden ser invocados en un juicio de interdicto de obra peligrosa, de retener la posesión y la acción negatoria por un daño ambiental.

Por ello, el Derecho Procesal Civil se debe ampliar y actualizar sus estructuras y dirigirlas a los paradigmas del Derecho Ambiental, con la finalidad de que se emita una sentencia en la que se condene a una debida reparación de un daño ambiental.<sup>205</sup>

#### **3.2.1 El órgano jurisdiccional competente ante un daño ambiental**

Como señalamos en el capítulo primero, la competencia es la atribución legítima a un juez u otra autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto.

---

<sup>204</sup> PALLARES Eduardo, *Diccionario de Derecho Procesal Civil*, séptima edición, editorial Porrúa, México, 1973, página 19.

<sup>205</sup> SERRANO establece: “Si introducimos la idea de justicia aún nos aparecerá otra importante función para la dogmática ambientalista. Se puede decir que la justicia ambiental consistiría en una perfección contra fáctica de la unidad del sistema, referida siempre al cumplimiento de las exigencias ecológicas de la sociedad sobre el derecho; y que, la dogmática del Derecho Ambiental, representaría el plano interno al sistema jurídico en el cual se traducen y hacen jurídicamente operativas tales exigencias”. SERRANO MORENO, José Luis, *Ecología y Derecho: Principios de Derecho Ambiental y Ecología Jurídica*, primera edición, editorial Comares, España, 1992, página 81.

La competencia es la medida de jurisdicción asignada a un órgano jurisdiccional para los efectos de la determinación genérica de los asuntos que ha de conocer por razón de la materia, de la cantidad y del lugar.

Eduardo Pallares define como competencia *“al conjunto de normas que determinan, tanto el poder-deber que se atribuye a los tribunales en la forma dicha, como el conjunto de jueces o negocios de que pueden conocer un juez o un tribunal”*.<sup>206</sup>

En el capítulo I planteábamos que los interdictos (de obra peligrosa y de retener la posesión) y la acción negatoria son de competencia estatal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.<sup>207</sup>

Además, sostenemos que los interdictos (de obra peligrosa y de retener la posesión) y la acción negatoria deberán considerarse de competencia estatal, en razón al origen de la ubicación del responsable del daño ambiental, es decir, a la característica de la vecindad.

La facultad de un juez para conocer de los juicios interdictales y de acción negatoria por daño ambiental comprende lo siguiente:

#### I. Territorio:

La regla general es que la competencia se fija de acuerdo al domicilio del demandado; al ampliar el concepto de territorio por daño ambiental podemos indicar que es el lugar donde se ubica la persona física o jurídica y efectúa sus actividades o servicios altamente peligrosos.<sup>208</sup>

---

<sup>206</sup> PALLARES Eduardo, *Op. cit.*, p. 83.

<sup>207</sup> El artículo 4 señala: “La acción y el procedimiento para hacer valer la responsabilidad ambiental a que hace referencia el presente Título, podrán ejercerse y sustanciarse independientemente de las responsabilidades y los procedimientos administrativos, las acciones civiles y penales procedentes”. Ley publicada en el *Diario Oficial de la Federación* del 07 de junio del 2013. *Diario Oficial de la Federación*, junio 7, 2013, México, D.F.

<sup>208</sup> La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental contempla en su artículo 2, fracción I, las actividades altamente peligrosas, señalando que consisten en: “I. Actividades consideradas como altamente riesgosas: Las actividades que implican la generación o manejo de sustancias con características corrosivas, reactivas, radioactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas en términos de lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente”. *Op cit.*

Entonces, el juez de primera instancia es competente por razón de territorio; pues es en esta competencia donde se ubica la fuente generadora del daño ambiental dentro del distrito<sup>209</sup> de su jurisdicción.

En el estado de San Luis Potosí hay 13 distritos judiciales y cada distrito abarca determinado número de municipios de acuerdo a su jurisdicción. Lo anterior está estipulado en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí.<sup>210</sup>

## II. Funcionalidad o Grado:

Es la determinación del órgano jurisdiccional que ha de conocer como instancia inicial un proceso específico.

En este sentido el juez debe identificar, conocer y analizar las características de los procesos productivos del generador de ese daño,<sup>211</sup> así como aquellos elementos ambientales que están interactuando y son afectados (directa e indirectamente) por tales procesos.

Generalmente la infraestructura que tiene una persona física o moral generadora de un daño ambiental, es la siguiente:

Tema	Características
Maquinaria	Tiene ductos generadores de emisiones a la atmósfera.
	Genera agua contaminada mezclada con sustancias químicas derivadas del funcionamiento de la maquinaria o equipo.
	Generan calor.
	Generan ruido perimetral.

<sup>209</sup> Para JUAN PALOMAR un distrito es “Cada una de las demarcaciones en que se subdivide una población o un territorio con el fin de ordenar y distribuir el ejercicio de los derechos civiles y políticos, o de las funciones públicas”. PALOMAR DE MIGUEL Juan, *Diccionario para Juristas*, primera edición, editorial Porrúa, México, 2000, página 540.

<sup>210</sup> *Periódico Oficial*, octubre 15, 2005, S.L.P.

<sup>211</sup> CORDERO LOBATO, Encarna señala “La responsabilidad corresponde, en principio, al titular de la actividad o al propietario de las sustancias químicas. Pero dado que, en los modernos procesos de producción, las mismas pueden ser objeto de manipulación por varias personas (piénsese en el producto, el transportista, el almacenista)”. CORDERO LOBATO, Encarna, *Derecho de Daños y Medio Ambiente, Lecciones de Derecho del Medio Ambiente*, ORTEGA ALVARES, Luis, coordinador, tercera edición, editorial Lex Nova, España, 2002, página 487.

Instalaciones	Eléctricas.
	Almacenes de materia prima.
	Almacén de residuos peligrosos.
	Almacén de producto terminado.
	Funcionamiento de planta de tratamiento de aguas residuales.
Sustancias químicas	Uso de sustancias corrosivas.
	Uso de sustancias inflamables.
	Las sustancias tienen un riesgo especial en su interacción con otras sustancias, forma de manejo o forma de almacenarse.
	Las sustancias generan afectaciones a la salud de las personas que las manejan o almacenan.
Equipos	Recipientes sujetos a presión <sup>212</sup> (calderas, compresores, compresores clase II y tanques pulmón).
	Montacargas (eléctricos y de gas LP).

Además, el juez debe conocer e identificar aquellos elementos ambientales que están alrededor de la fuente generadora del daño ambiental, tales como:

1. La existencia de algún vaso de lago, laguna o estero acuífero en los alrededores del demandado.<sup>213</sup>
2. Los recursos forestales, recursos forestales maderables, recursos forestales no maderables, terrenos de aptitud preferentemente forestal, terrenos forestales y vegetación forestal que existan en la circunferencia del demandado.<sup>214</sup>

<sup>212</sup> En la NOM-020-STPS-2010 en el punto 4.29 define lo que es un recipiente sujeto a presión y a la letra dice: "El aparato construido para operar a una presión superior a la atmosférica o sometido a vacío. La presión puede ejercerse sobre la superficie interior, la exterior y/o los componentes del equipo. Dicha presión puede provenir de fuentes externas o mediante la aplicación de calor, desde una fuente directa, indirecta o cualquier combinación de éstas". *Diario Oficial de la Federación*, agosto 28, 2002, México, D.F.

<sup>213</sup> En la Ley de Aguas Nacionales, en el artículo, 3º contempla las características físicas de acuífero, vaso de agua, laguna. *Diario Oficial de la Federación*, diciembre 1º, 1992, México, D.F.

<sup>214</sup> En la Ley Forestal, en su artículo 3º, en sus fracciones VIII, IX, X, XIV, XV, XVI, especifica las características físicas de estos elementos ambientales. *Diario Oficial de la Federación*, diciembre 22, 1992, México, D.F.



### 3.2.2 Casos de incompetencia en el juez por un daño ambiental

Para que la incompetencia de un juez prospere dentro de un proceso por daño ambiental, debe observarse su actuación en el desarrollo del juicio; en este sentido, su desempeño no debe encuadrarse en los siguientes supuestos:

- I. Que el proceso se vuelva lento, es decir, que las promociones sean acordadas en un lapso excesivo de tiempo, sin un motivo o justificación.
- II. Se actúe fuera de los términos legales.
- III. Sean continuos los motivos para oponerse a las resoluciones a través de los recursos de inconformidad establecidos.
- IV. Que el juez no motive ni fundamente sus actuaciones, que se equivoque en la aplicación de los artículos procedentes, de acuerdo a la etapa procesal que concluyó o sigue, o a solicitud de alguna de las partes.
- V. Predomine un interés económico con la parte demandada.<sup>215</sup>

En tales situaciones, la parte actora en un juicio interdictal y de acción negatoria podrá hacer uso de las hipótesis planteadas en el artículo 163 del Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí.<sup>216</sup>

En el caso concreto de un juicio interdictal de obra peligrosa, para que al juez no le promuevan una incompetencia (declinatoria<sup>217</sup> o inhibitoria<sup>218</sup>), se determinará en razón

---

<sup>215</sup> MARTINEZ MENDOZA señala que es: "Abstención o evasiva legal de un juez para conocer de cierto juicio o asunto en el que por algún motivo (familiar, amistoso, económico, político, etc.) podría estar comprometida o en duda su objetividad o imparcialidad". MARTINEZ MENDOZA, Rafael, *Diccionario Jurídico General*, primera edición, Iuhe editores, México, 2006, página 564.

<sup>216</sup> El artículo 163 establece: "Las cuestiones de competencia podrán promoverse por inhibitoria o por declinatoria". *Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí*, junio 19, 1947, S.L.P.

<sup>217</sup> Para LEYVA TORRES la incompetencia inhibitoria es: "La que se promueve ante el juez que se considera competente, él que mandará librar el oficio requiriendo al juez que estime incompetente para que se abstenga de conocer del negocio, y remita desde luego las actuaciones respectivas al superior". LEYVA TORRES, Roberto, *Op. cit.*, p. 141.

<sup>218</sup> ROBERTO LEYVA explica que la incompetencia declinatoria se "Propondrá ante el juez a quien se considere incompetente, pidiéndole que se abstenga del conocimiento del negocio y remita los autos al considerado competente". *Ídem*, pp. 199.

de la ubicación del lugar donde se efectúa la obra. Es obligación del actor promover la demanda ante el juez donde se localiza la obra peligrosa.

### **3.2.3 El sistema de canalización múltiple en un juicio interdictal por un daño ambiental**

Este sistema de canalización múltiple consiste en la facultad legal del actor de interponer una demanda interdictal en caso de confusión del responsable del daño ambiental, considerándose a quién afecta con más firmeza y gravedad: al ambiente o a sus elementos por medio de las actividades o procesos.

En el interdicto de retener la posesión se observa la situación física y material del demandado, es decir, se identifica plenamente al responsable mediante el modelo de sistema de canalización estricta.

El sistema de canalización múltiple sitúa en un mismo plano a una serie de personas potencialmente responsables: la demanda está dirigida, indistintamente, a cualquiera de ellas.

Actualmente el sistema de canalización está establecido en el artículo 26, primer párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental;<sup>219</sup> por consiguiente, deben ser llamadas a juicio todas aquellas personas (físicas o morales) involucradas, cuando se tenga la certeza de quién o quiénes originaron el daño ambiental.

No consideramos acertado los supuestos de inexistencia de la responsabilidad solidaria contenidos en las fracciones del referido artículo 26 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental por las siguientes razones:

- I. En lo que respecta a la fracción I,<sup>220</sup> el control, seguimiento y renovación de las obligaciones de la normatividad ambiental a nivel

---

<sup>219</sup> El artículo 26 señala: "Cuando se acredite que el daño o afectación, fue ocasionado dolosamente por dos o más personas, y no fuese posible la determinación precisa del daño aportado por cada responsable, todas serán responsables solidariamente de la reparación o compensación que resultare, sin perjuicio, en su caso, del derecho de repetición entre sí". *Op cit.*

<sup>220</sup> La fracción I del artículo 26 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental indica: "Ha contado por lo menos con tres años de anterioridad a la conducta que ocasionó el daño, con un órgano de control interno dedicado de hecho a verificar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones de la persona moral derivadas de las Leyes, licencias, autorizaciones, permisos o concesiones ambientales; así como con un sistema interno de gestión y capacitación ambiental en funcionamiento permanente". *Op cit.*

federal no deben estar sujetos al tiempo, ni a las condiciones de organización, ni a la estructura interna de la persona física o moral. Lo anterior queda especificado claramente en los artículos 1754<sup>221</sup> y 1760<sup>222</sup> del Código Civil de San Luis Potosí.

- II. En relación a la fracción II del artículo 26,<sup>223</sup> que se refiere a la certificación de industria limpia, cabe mencionar que la persona moral, al contar con esta clase de certificación, muestra un compromiso con la preservación del ambiente y de sus elementos pero, al mismo tiempo, debe continuar con ese comportamiento de cuidado al ambiente a través del tiempo.

Al no existir una continuidad en las actividades, controles y procedimientos que marca la certificación ambiental, se demuestra que la persona moral se preocupa por mantener la recertificación y no por la protección del ambiente.

- III. Por último, la fracción III del citado artículo 26,<sup>224</sup> demuestra, de una manera clara y contundente, la evasión de una responsabilidad ambiental cuando la persona física o moral consigna determinada cantidad de dinero como fianza y con pleno conocimiento operativo y jurídico de sus actos, realiza perturbaciones y operaciones productivas, generando un daño ambiental, ya que está al tanto de la existencia y alcance de la fianza al ser contemplada como una atenuante<sup>225</sup> en el juicio ambiental.

---

<sup>221</sup> El artículo 1754 indica: "Las personas morales son responsables de los daños y perjuicios que causen sus representantes legales en el ejercicio de sus funciones". *Periódico Oficial*, abril 18, 1946, S.L.P.

<sup>222</sup> El artículo 1760 manifiesta: "Los patrones y los dueños de establecimientos mercantiles están obligados a responder de los daños y perjuicios causados por sus obreros o dependientes, en el ejercicio de sus funciones". *Op cit.*

<sup>223</sup> La fracción II del artículo 26 señala: "Cuenta con alguno de los certificados resultado de la auditoría ambiental a la que hace referencia el artículo 38 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente". *Op cit.*

<sup>224</sup> La fracción III establece: "Cuenta con la garantía financiera prevista en el artículo 8o. de esta Ley". *Op cit.*

<sup>225</sup> Para PALOMAR una atenuante es: "Poner tenue, fina o sutil alguna cosa, aminorar o disminuir alguna cosa". PALOMAR DE MIGUEL Juan, *Op. cit.*, p. 154.

### **3.2.4 Los presupuesto de las partes en un juicio interdictal y acción negatoria por un daño ambiental**

La doctrina sostiene que para lograr una sentencia favorable o en contra, es necesario que existan o concurren una serie de requisitos, tales como el derecho, la legitimación y el interés.

Estos requisitos deberán ser examinados previamente por el juez para estar en condiciones de resolver lo planteado en la demanda.

La sola presencia de las partes no es suficiente para generarlas, si es que carecieren de capacidad para actuar en juicio o si faltare en el juez la competencia para conocer del mismo.

Tales requisitos no afectan a la acción intentada; su ausencia sólo impide la constitución de la relación procesal; de ahí su denominación de presupuestos procesales.

Toda persona puede ser titular de un derecho sustancial (*legitimatío ad causam*) y siempre debe tener la aptitud necesaria para defenderlo personalmente en caso de litigio (*legitimatío ad procesum*).

El primer presupuesto de la relación procesal es la capacidad de los sujetos para estar en un proceso; si esa capacidad falta en el actor o demandado; su contrario podrá oponerse ante la falta de capacidad.<sup>226</sup>

Si procede la falta de capacidad, esto impedirá la prosecución del proceso. La capacidad procesal es, por consiguiente, uno de los capítulos de estudio del proceso que realiza el juez de oficio.

---

<sup>226</sup> A través de la siguiente jurisprudencia establecemos la diferencia entre falta de personalidad y de acción. La excepción de falta de personalidad en el actor consiste “Según doctrina uniforme, en carecer éste de la calidad necesaria para comparecer en juicio o en no acreditar el carácter o representación con que reclame y, por lo mismo, la excepción de falta de personalidad no puede oponerse al que comparece en juicio por su propio derecho, no debiéndose confundir, por otra parte, la falta de personalidad con la falta de acción y de derecho a la cosa litigiosa, pues la primera se refiere a la calidad de los litigantes y no a la sustancia del pleito”.

Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, novena época, tomo X, noviembre de 1999, tesis VI.2o.C. J/178, página 910.

La doctrina sostiene que la capacidad es un atributo de la personalidad y que, por tal razón, viene con el ser humano desde su aparición en este mundo.

No obstante, para fines explicativos diferenciaremos, tal como está en la norma sustantiva civil de San Luis Potosí, la capacidad de ejercicio y capacidad de goce o de derecho.

I. Capacidad de goce.

Es la aptitud jurídica para ser titular de derechos y obligaciones; esta capacidad es un atributo de la personalidad y pertenecerá a todas las personas, incluso a las personas jurídicas.

II. Capacidad de ejercicio.

Es la aptitud para ejercer sus derechos, esto es, para actuar por sí mismo dentro del proceso o fuera de él. Puede decirse que las personas con capacidad de ejercicio pueden comparecer por sí en el proceso, en la medida que pueden disponer de sus derechos. Las demás personas deben comparecer en el proceso a través de sus representantes.<sup>227</sup>

Atendiendo a la capacidad de goce o de ejercicio, se puede decir que toda persona tiene derecho a ser parte material de un proceso, sea como actor o demandado, por el hecho de haber sido parte de la relación material que subyace al proceso.

La persona jurídica o moral es una ficción y, como tal, no tiene capacidad de ejercicio, pues ello estaría reservado para las personas naturales, pero si tendría capacidad de goce.

Las personas jurídicas tienen capacidad y personalidad jurídica, siempre que existan jurídicamente y hagan valer sus derechos a través de sus representantes, quienes, obviamente, deben tener capacidad para comparecer al proceso.

---

<sup>227</sup> NICETO ALCALÁ hace una crítica al mencionar que se debe hablar de capacidad procesal, ya que indica “Que si fuera necesario poseerla en el momento de la comparecencia y no fuere, en realidad, indispensable a todo lo largo del proceso, ya que si se estuvo en aquél y luego se pierde, habrá que suplirla mediante la representación legal pertinente y no de capacidad para comparecer en juicio”. ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO, Niceto, *Derecho Procesal Mexicano, tomo II*, primera edición, editorial Porrúa, 1977, México, página 164.

Con base en lo anterior estimamos que los presupuestos de las partes en un juicio interdictal y acción negatoria son los siguientes:

I. Capacidad para ser parte:

Es la aptitud para ser parte en el proceso y corresponde a las personas físicas y a las jurídicas.

Esta situación está prevista en el artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.<sup>228</sup> Por consiguiente, toda persona física o moral que ocasione daños al ambiente es responsable de su reparación.

Por otra parte, el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en sus párrafos tercero<sup>229</sup> y cuarto,<sup>230</sup> establece en forma indirecta que los propietarios o poseedores tienen la capacidad de parte.

II. Capacidad Procesal:

Es la aptitud para realizar actos y/o negocios jurídico-procesales con eficacia, a nombre propio o a cuenta de otra persona.

En materia federal, al Código Federal de Procedimientos Civiles se le efectuaron reformas y adiciones en lo que respecta a la legitimación, estas adiciones se publicaron en el Diario Oficial de la Federación en agosto de 2011.<sup>231</sup>

Estas reformas y adiciones establecen las acciones colectivas, planteando situaciones como el interés difuso y colectivo.<sup>232</sup>

---

<sup>228</sup> El artículo 10 señala: "Toda persona física o moral que con su acción u omisión ocasione directa o indirectamente un daño al ambiente, será responsable y estará obligada a la reparación de los daños, o bien, cuando la reparación no sea posible a la compensación ambiental que proceda, en los términos de la presente Ley". *Op cit.*

<sup>229</sup> El párrafo tercero del artículo 12 indica: "Los propietarios o poseedores de los inmuebles en los que se haya ocasionado un daño al ambiente, deberán permitir su reparación, de conformidad a esta Ley. El incumplimiento a dicha obligación dará lugar a la imposición de medios de apremio y a la responsabilidad penal que corresponda". *Op cit.*

<sup>230</sup> El párrafo cuarto indica: "Los propietarios y poseedores que resulten afectados por las acciones de reparación del daño al ambiente producido por terceros, tendrán derecho de repetir respecto a la persona que resulte responsable por los daños y perjuicios que se les ocasionen". *Op cit.*

<sup>231</sup> Se publicaron el 30 de agosto del 2011, y entraron en vigor a los seis meses siguientes al día de su publicación.

<sup>232</sup> Se adicionó un título quinto "de las acciones colectivas" donde los artículos indican lo siguiente: Artículo 578.- La defensa y protección de los derechos e intereses colectivos será ejercida ante los Tribunales de la Federación con las modalidades que se señalen en este Título, y sólo podrán promoverse en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y medio

En el mismo sentido la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en su artículo 28 menciona:

*“Se reconoce derecho e interés legítimo para ejercer acción y demandar judicialmente la responsabilidad ambiental, la reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente, el pago de la sanción económica, así como las prestaciones a las que se refiere el presente título a:*

- 1. Las personas físicas habitantes de la comunidad adyacente al daño ocasionado al ambiente.*
- 2. Las personas morales privadas mexicanas, sin fines de lucro, cuyo objeto social sea la protección al ambiente en general, o de alguno*

---

ambiente. Artículo 579.- La acción colectiva es procedente para la tutela de las pretensiones cuya titularidad corresponda a una colectividad de personas, así como para el ejercicio de las pretensiones individuales cuya titularidad corresponda a los miembros de un grupo de personas. Artículo 580.- En particular, las acciones colectivas son procedentes para tutelar: I. Derechos e intereses difusos y colectivos, entendidos como aquéllos de naturaleza indivisible cuya titularidad corresponde a una colectividad de personas, indeterminada o determinable, relacionadas por circunstancias de hecho o de derecho comunes. II. Derechos e intereses individuales de incidencia colectiva, entendidos como aquéllos de naturaleza divisible cuya titularidad corresponde a los individuos integrantes de una colectividad de personas, determinable, relacionadas por circunstancias de derecho. Artículo 581.- Para los efectos de este Código, los derechos citados en el artículo anterior se ejercerán a través de las siguientes acciones colectivas, que se clasificarán en: I. Acción difusa: Es aquélla de naturaleza indivisible que se ejerce para tutelar los derechos e intereses difusos, cuyo titular es una colectividad indeterminada, que tiene por objeto reclamar judicialmente del demandado la reparación del daño causado a la colectividad, consistente en la restitución de las cosas al estado que guardaren antes de la afectación, o en su caso al cumplimiento sustituto de acuerdo a la afectación de los derechos o intereses de la colectividad, sin que necesariamente exista vínculo jurídico alguno entre dicha colectividad y el demandado. II. Acción colectiva en sentido estricto: Es aquélla de naturaleza indivisible que se ejerce para tutelar los derechos e intereses colectivos, cuyo titular es una colectividad determinada o determinable con base en circunstancias comunes, cuyo objeto es reclamar judicialmente del demandado, la reparación del daño causado consistente en la realización de una o más acciones o abstenerse de realizarlas, así como a cubrir los daños en forma individual a los miembros del grupo y que deriva de un vínculo jurídico común existente por mandato de ley entre la colectividad y el demandado. III. Acción individual homogénea: Es aquélla de naturaleza divisible, que se ejerce para tutelar derechos e intereses individuales de incidencia colectiva, cuyos titulares son los individuos agrupados con base en circunstancias comunes, cuyo objeto es reclamar judicialmente de un tercero el cumplimiento forzoso de un contrato o su rescisión con sus consecuencias y efectos según la legislación aplicable. Artículo 582.- La acción colectiva podrá tener por objeto pretensiones declarativas, constitutivas o de condena. Artículo 583.- El juez interpretará las normas y los hechos de forma compatible con los principios y objetivos de los procedimientos colectivos, en aras de proteger y tutelar el interés general y los derechos e intereses colectivos. Artículo 584.- Las acciones colectivas previstas en este título prescribirán a los tres años seis meses contados a partir del día en que se haya causado el daño. Si se trata de un daño de naturaleza continua el plazo para la prescripción comenzará a contar a partir del último día en que se haya generado el daño causante de la afectación. *Diario Oficial de la Federación*; agosto 30, 2011, México, D.F.

*de sus elementos, cuando actúen en representación de algún habitante de las comunidades previstas en la fracción I.*

*3. La Federación a través de la procuraduría.*

*4. Las Procuradurías o instituciones que ejerzan funciones de protección ambiental de las entidades federativas y del Distrito Federal en el ámbito de su circunscripción territorial, conjuntamente con la procuraduría.*

*Las personas morales referidas en la fracción II de este artículo, deberán acreditar que fueron legalmente constituidas por lo menos tres años antes de la presentación de la demanda por daño ocasionado al ambiente. Asimismo, deberán cumplir por los requisitos previstos por el Código Federal de Procedimientos Civiles.*

*Los legitimados en las fracciones I y II tendrán además derecho e interés legítimo para reclamar el pago de las erogaciones que hayan hecho para acreditar la responsabilidad ambiental”.*

En lo particular, consideramos que esta reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles y expedición de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, presentan dos situaciones a destacar:

I. Se reconoce la capacidad de ejercicio a una colectividad, es decir, es procedente para la tutela de las pretensiones a una colectividad o grupo de personas.

El ejercicio de pretensiones individuales cuya titularidad corresponde a los miembros de un grupo de personas. Esta titularidad atañe a una colectividad de personas indeterminada o determinable, relacionadas por circunstancias de hecho o de derecho comunes.

II. Se limita la forma de comparecer por propio derecho, al convertirlo en un derecho colectivo, ya que, de acuerdo al adicionado artículo



585 del Código Federal de Procedimientos Civiles,<sup>233</sup> si una persona física por cuestiones de territorio o costumbre no se encuentra en los referidos supuestos no le está permitido ejercer un interés colectivo.

No estamos de acuerdo con ambos preceptos, en virtud de que no contemplan el interés individual que cada persona posee<sup>234</sup> en relación con el ambiente o sus elementos.

La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en su artículo 28 no prevé ni menciona aquellos casos en los que una persona física no encuadre dentro de estos lineamientos.

Al percatarse de los errores o lagunas de derecho existentes en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental respecto a la legitimación, podemos observar y citar como fundamento en una demanda por daño ambiental al artículo 4º,<sup>235</sup> en relación directa con los párrafos tercero y cuarto del artículo 13 de la citada Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.<sup>236</sup>

Al invocar ambos preceptos legales, reafirmamos que la capacidad procesal de las acciones interdictales (de obra peligrosa y de retener la posesión) y la acción negatoria, se presentan como propietario o poseedor, ante un juez de competencia estatal para pedir judicialmente la reparación de un daño ambiental.

---

<sup>233</sup> El artículo 585 señala: "Tienen legitimación activa para ejercitar las acciones colectivas: I. La Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Comisión Federal de Competencia; II. El representante común de la colectividad conformada por al menos treinta miembros; III. Las asociaciones civiles sin fines de lucro legalmente constituidas al menos un año previo al momento de presentar la acción, cuyo objeto social incluya la promoción o defensa de los derechos e intereses de la materia de que se trate y que cumplan con los requisitos establecidos en este Código, y IV. El Procurador General de la República". *Diario Oficial de la Federación*, febrero 24, 1943, México, D.F.

<sup>234</sup> Esta situación está establecida plenamente en el artículo 46 del Código de Procedimientos Civiles que indica: "Los interesados y sus representantes legítimos podrán comparecer en juicio por sí, o por medio de procurador con poder bastante". *Op cit.*

<sup>235</sup> El artículo 4º señala: "La acción y el procedimiento para hacer valer la responsabilidad ambiental a que hace referencia el presente Título, podrán ejercerse y sustanciarse independientemente de las responsabilidades y los procedimientos administrativos, las acciones civiles y penales procedentes". *Op cit.*

<sup>236</sup> El artículo 13 establece: "Los propietarios o poseedores de los inmuebles en los que se haya ocasionado un daño al ambiente, deberán permitir su reparación, de conformidad a esta Ley. El incumplimiento a dicha obligación dará lugar a la imposición de medios de apremio y a la responsabilidad penal que corresponda.

Los propietarios y poseedores que resulten afectados por las acciones de reparación del daño al ambiente producido por terceros, tendrán derecho de repetir, respecto a la persona que resulte responsable por los daños y perjuicios que se les ocasionen". *Op cit.*

Estas situaciones parten de la estructura jurídica que tienen los interdictos y la acción negatoria, en que sólo le competen al propietario o poseedor, dejando a un lado las acciones colectivas contempladas en el Código Federal de Procedimientos Civiles y en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

### **3.2.5 El presupuesto procesal del procedimiento ante un daño ambiental**

Como señalábamos anteriormente, la falta de presupuestos procesales tiene como consecuencia que se vicie el proceso y éste sea declarado nulo.

Por lo tanto, la doctrina procesal considera que el cumplimiento cabal de los presupuestos procesales dentro del juicio, más que una excepción o defensa o impedimento procesal, puede ser alegado en cualquier estado y grado de la causa.

Los presupuestos se deben cumplir una vez admitida la demanda por parte del juez y están constituidos por:

- I. La práctica de ciertas medidas preventivas, con la finalidad de evitar la violación de un precepto.
- II. La citación o emplazamiento de todos los demandados.<sup>237</sup> En una demanda civil por daño ambiental tiene el carácter de demandado toda persona, que por sus actividades o procesos productivos, maneje sustancias químicas y/o haga uso de maquinaria o equipo, cuya finalidad sea la elaboración de un producto o servicio.<sup>238</sup>

En la mayor parte de las ocasiones, quien realiza estas actividades es personal interno de una empresa y/o los contratistas. En el primer caso, las personas internas que ocupan un puesto laboral dentro de una organización, por sus conocimientos, competencias y habilidades.

---

<sup>237</sup> Según PALLARES por demandado entendemos “Aquella persona contra la cual se endereza una demanda judicial, exigiéndole alguna cosa o prestación determinada”.<sup>237</sup> PALLARES, Eduardo, *Op. cit.*, p. 233.

<sup>238</sup> Esta situación también la contempla el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental que indica: “Los daños ocasionados al ambiente serán atribuibles a la persona física o moral que omita impedirlos, si ésta tenía el deber jurídico de evitarlos. En estos casos se considerará que el daño es consecuencia de una conducta omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello derivado de una Ley, de un contrato, de su calidad de garante o de su propio actuar precedente”. *Op cit.*

A efectos legales del emplazamiento en un juicio por daño ambiental, quienes son llamados a juicio son los administradores, gerentes y directores; lo anterior está contemplado en el artículo 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.<sup>239</sup>

Para el caso de los contratistas, quienes realizan actividades de mantenimiento a la maquinaria o equipo, manejan recipientes sujetos a presión, instalan estaciones de trabajo, dan mantenimiento a la subestación eléctrica o tienen a su cargo los almacenes de producto terminado y de residuos peligrosos o no.

En este sentido, los contratistas también son corresponsables de un daño ambiental; lo anterior está establecido en el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley Federal.<sup>240</sup>

III. La no caducidad de la instancia. Por caducidad Pallares indica *“la extinción de la instancia judicial porque las dos partes abandonen el ejercicio de la acción procesal”*.<sup>241</sup>

Cuando exista una demanda interdictal o acción negatoria por daño ambiental, el daño ocasionado puede extenderse por tiempo indefinido y afectar a otros elementos ambientales; en consecuencia, el juez debe actuar de oficio en el expediente para que no exista la caducidad de la instancia; la actuación del juez debe ser una excepción al principio de impulso procesal que opera en el Derecho Procesal Civil.

IV. El cumplimiento de los trámites procesales. El Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí contempla, en el artículo 271,<sup>242</sup> que el juez está facultado para actuar en forma rápida y

---

<sup>239</sup> El artículo 24 indica: “Las personas morales serán responsables del daño al ambiente ocasionado por sus representantes, administradores, gerentes, directores, empleados y quienes ejerzan dominio funcional de sus operaciones, cuando sean omisos o actúen en el ejercicio de sus funciones, en representación o bajo el amparo o beneficio de la persona moral, o bien, cuando ordenen o consientan la realización de las conductas dañosas”. *Op cit.*

<sup>240</sup> El segundo párrafo del artículo 24 señala: “Las personas que se valgan de un tercero, lo determinen o contraten para realizar la conducta causante del daño serán solidariamente responsables, salvo en el caso de que se trate de la prestación de servicios de confinamiento de residuos peligrosos realizada por empresas autorizadas por la Secretaría”. *Op cit.*

<sup>241</sup> *Ídem*, p. 119.

<sup>242</sup> El artículo 271 establece: “Los tribunales podrán decretar en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica o ampliación de cualquiera diligencia probatoria, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados. En la práctica de estas diligencias, el juez obrará como estime procedente para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar el derecho de las partes oyéndolas y procurando en todo su igualdad”. *Op cit.*

expedita en caso que le falte información o prueba que le ayude al dictar una sentencia.

El artículo 92 del Código Federal de Procedimientos Civiles<sup>243</sup> le sirve de fundamento al juez para solicitar la prontitud en el desahogo de una prueba o, en su defecto, adelantar el desahogo de dicha probanza.

### **3.3 Casos de excepción del proceso civil interdictal y de acción negatoria ante un daño ambiental**

#### **3.3.1 La carga de la prueba para el actor en un juicio de interdicto y acción negatoria por un daño ambiental**

El artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles y el artículo 273 del Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí establecen en sus hipótesis legales que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y, el reo, los de sus excepciones.<sup>244</sup>

Para acreditar los hechos mencionados en la demanda, el actor debe ofrecer las pruebas pertinentes para obtener una sentencia favorable.

Para Vizcarra, las pruebas son condiciones para la admisión de sus pretensiones, pero no constituyen una obligación; ellas pueden no sólo ser omitidas, sino que se puede renunciar a las que se tuviesen ofrecidas.<sup>245</sup>

Al efecto, es pertinente establecer que al entablarse una demanda interdictal o acción negatoria por un daño ambiental, la carga de la prueba debe ser impuesta al demandado, en virtud de que tiene información y documentos de cumplimiento a la normatividad ambiental a nivel federal o estatal, tales como:

---

<sup>243</sup> El artículo 92 indica: "En cualquier momento del juicio o antes de iniciarse éste, cuando se demuestre que haya peligro de que una persona desaparezca o se ausente del lugar del juicio, o de que una cosa desaparezca o se altere, y la declaración de la primera o la inspección de la segunda sea indispensable para la resolución de la cuestión controvertida, podrá el tribunal ordenar la recepción derecho a pedir alguna cosa en litigio de la prueba correspondiente". *Op cit.*

<sup>244</sup> Becerra BAUTISTA indica que excepción es: "El título o motivo jurídico que alega el demandado con el fin de hacer ineficaz la acción del demandante". BECERRA BAUTISTA, José, *El Proceso Civil en México*, dúo décima edición, editorial Porrúa, 1986, México, página 81.

<sup>245</sup> No compartimos la opinión de VIZCARRA en forma plena, ya que es una obligación de demostrar al órgano jurisdiccional lo que está reclamando, en caso contrario está haciendo un abuso del derecho. VIZCARRA DAVALOS, José, *Teoría General del Proceso*, sexta edición, editorial Porrúa, México, 2003, páginas 209 - 210.

1. Estudios técnicos en ruido perimetral (NOM-081-SEMARNAT); análisis de agua residual (NOM-001-SEMARNAT); estudios CRETIB de sustancias químicas y para determinar si los residuos son peligrosos o no (NOM-052-SEMARNAT); vapores orgánicos (NOM-089-SEMARNAT), de partículas (NOM-043-SEMARNAT); estudios de tierras físicas (NOM-022-SEMARNAT) y análisis de sustancias químicas (NOM-005-STPS).
2. Permisos de autorización de descarga de agua residual; alta como generadora de residuos peligrosos; alta como generadora de residuos no peligrosos; bitácoras y manifiestos de recolección de residuos peligrosos y no peligrosos; reportes semestrales de generación de residuos no peligrosos y planes de manejo de residuos peligrosos.
3. Estudios ambientales, como por ejemplo: el informe preventivo de impacto ambiental; el estudio de riesgo ambiental; el programa de prevención de accidentes y el programa interno de protección civil. Estos estudios, cuando se resuelven, contienen determinado número de condicionantes que se deben cumplir mediante un plan de trabajo y reportar a la autoridad el seguimiento de los mismos.
4. Cédula de operación anual (estatal y federal); licencia ambiental única o permiso de operación.
5. Programas de capacitación ambiental (manejo, almacenaje de sustancias químicas, residuos peligrosos, residuos no peligrosos, comunicación de riesgos e ISO 14001, etc.).
6. Información de emergencias: simulacros, programa de contingencias, programa ante emergencias, programas internos de protección civil, formación y capacitación de brigadas (NOM-002-STPS-2010).
7. Layout (planos) de la planta de sus extintores, sistema contra incendio (hidrantes), de los recipientes sujetos a presión clase II o clase III, de la ubicación de los almacenes de materia prima, de

sustancias químicas, de residuos peligrosos, diagrama unifilar de las rutas de evacuación y salidas de emergencia, de los procesos productivos, del sistema de drenaje, del suministro de gas natural y de los tanques donde almacenen sustancias inflamables.

Además de lo anterior, el demandado:

1. En el caso de ser una persona moral cuenta con personal interno (encargado de vigilar, cumplir y tramitar todo lo obligatorio que se deriva de la normatividad ambiental).
2. Cuenta con maquinaria, equipo, estaciones de trabajo o instalaciones de su propiedad, las cuales son operadas y monitoreadas conforme a la normatividad ambiental (federal y estatal) y de seguridad.
3. Tiene celebrados contratos de arrendamiento para el uso de maquinaria y equipo, donde el arrendador se compromete a darle mantenimiento periódico a la maquinaria o equipo objeto del contrato.
4. Cuenta con las acreditaciones (ISO 14001 e industria limpia) para ser proveedor de productos o servicios a otras empresas.

Es importante resaltar que la persona física o moral que genera un daño ambiental por el uso de maquinaria o equipo, manejo, almacenamiento y transporte de sustancias químicas, está obteniendo utilidades, lo que le da la posibilidad financiera de realizar estudios técnicos ambientales cuyo costo puede ser elevado.<sup>246</sup>

Por ello, el que tiene el carácter de demandado en un juicio interdictal o de acción negatoria por un daño ambiental, debe acreditar que sus procesos productivos, maquinaria o equipo, instalaciones y almacenes (de producto terminado, sustancias

---

<sup>246</sup> Coincidimos con la opinión de ÁNGEL ASECIO que menciona: “Cuando aparentemente en una relación con determinado hecho controvertido, ambas partes parecen estar en la misma situación, decidiéndose en este caso por atribuir dicha carga probatoria a la parte que se encuentre en mejores circunstancias para proporcionar dicha prueba”. ASCENSIO ROMERO, Ángel, *Teoría General del Proceso*, segunda edición, editorial Trillas, 1998, México, página 139.

químicas, residuos peligrosos y no peligrosos), no fueron los generadores del daño ambiental y, por consiguiente, probar su no responsabilidad.

Esta circunstancia de acreditar que está actuando conforme a la normatividad ambiental no es nueva: en el Derecho Ambiental, a la empresa o persona física que se le efectúa una inspección ambiental en ese momento de la visita o 5 cinco días después de la inspección, debe acompañar a la autoridad administrativa y presentar los documentos, estudios, bitácoras y fotografías para desvirtuar los hechos u omisiones plasmadas en el acta de inspección.<sup>247</sup>

En consecuencia, los artículos 81 y 272 del Código Federal de Procedimientos Civiles y del Código Procesal Civil de San Luis Potosí, respectivamente, deben quedar de la siguiente manera:

*“El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones. Excluyéndose de lo anterior cuando el juicio proceda de un daño ambiental, el demandado debe probar con los medios de prueba pertinentes que los hechos constitutivos del daño ambiental no son atribuibles a él”.*

Con ello, se podría cumplir con lo establecido en el artículo 36 segundo párrafo de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.<sup>248</sup>

### **3.3.2 Las pruebas supervinientes en un juicio por daño ambiental: presentación y desahogo**

Tienen el carácter de pruebas supervinientes<sup>249</sup> aquellas con las que se pretende demostrar hechos ocurridos con posterioridad a la presentación de la demanda, o bien aquellos hechos que, existiendo al momento en que se promueve el juicio, la parte interesada no pudo tener conocimiento de su existencia.

---

<sup>247</sup> El artículo 68 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo señala: “Los visitados a quienes se haya levantado acta de verificación podrán formular observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación a los hechos contenidos en ella o bien, por escrito, hacer uso de tal derecho dentro del término de cinco días siguientes a la fecha en que se hubiere levantado”. *Diario Oficial de la Federación*, agosto 4, 1994, México, D.F.

<sup>248</sup> El segundo párrafo del artículo 36 establece: “El nexo de causalidad entre el daño ocasionado y la conducta imputada al demandado debe probarse en la sustanciación del juicio. El juez considerará en su valoración la naturaleza intrínseca de la conducta y la forma en que se ha desarrollado para generar o causar el daño”. *Op. cit.*

<sup>249</sup> PALOMAR señala que una prueba superviniente es: “*Aquella que tiene lugar durante la litiscontestación o después de ella*”, PALOMAR DE MIGUEL Juan, *Op. cit.*, p.1272.

Según Chacón,<sup>250</sup> coincide con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en su artículo 2º fracción III.<sup>251</sup>

Ambos mencionan que existe una alteración, transformación o disminución a que es sujeto el ambiente o a sus elementos. Estos hechos adversos no tienen implícitamente una fecha de inicio o término.

Por ello, la normatividad procesal civil en un juicio interdictal o de acción negatoria por daño ambiental, debe considerar en forma prioritaria el uso de pruebas supervinientes para acreditar la existencia de los mismos.

El artículo 294 del Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí<sup>252</sup> contempla las situaciones que generan sanciones a la parte que no ofreció las pruebas propuestas.

Consideramos que este artículo no debe aplicarse en una demanda interdictal o de acción negatoria por daño ambiental por las siguientes razones:

- I. La parte actora no está en posesión de información acerca de los estudios técnicos, carece de la ubicación de la maquinaria o equipos. Por ello y para su ofrecimiento y desahogo puede faltarle información pertinente para su conformación.

---

<sup>250</sup> Para PEÑA CHACON un daño ambiental es: "Toda acción, omisión, comportamiento u acto ejercido por un sujeto físico o jurídico, público o privado, que altere, menoscabe, trastorne, disminuya o ponga en peligro inminente y significativo, algún elemento constitutivo del concepto ambiente, rompiéndose con ello el equilibrio propio y natural de los ecosistemas". PEÑA CHACÓN, M. *Daño ambiental y prescripción* (versión electrónica). España. Recuperado de [http://huespedes.cica.es/aliens/gimadus/19/06\\_mario\\_penia\\_chacon.html](http://huespedes.cica.es/aliens/gimadus/19/06_mario_penia_chacon.html). Fecha de consulta: 05 de mayo del 2011.

<sup>251</sup> El artículo 2º fracción II dice: "Para los efectos de esta Ley se estará a las siguientes definiciones, así como aquellas previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las Leyes ambientales y los tratados internacionales de los que México sea Parte. Se entiende por: III. Daño al ambiente: Pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación adversos y mensurables de los hábitat, de los ecosistemas, de los elementos y recursos naturales, de sus condiciones químicas, físicas o biológicas, de las relaciones de interacción que se dan entre éstos, así como de los servicios ambientales que proporcionan. Para esta definición se estará a lo dispuesto por el artículo 6o de esta Ley". *Op cit.*

<sup>252</sup> El artículo 294 del Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí indica: "El litigante a quien se hubiere concedido la dilación extraordinaria y no rindiere las pruebas que hubiere propuesto, sin justificar el que tuvo para ello impedimento bastante a juicio del juez, será condenado, al concluir el período probatorio, a pagar a su contraparte una indemnización de diez a treinta días de salario mínimo vigente en la región". *Op cit.*



- II. El titular del órgano jurisdiccional debe cerciorarse de las características y alcance que va a tener dicha probanza para estar en posibilidades de sancionar al oferente de la prueba.

En caso contrario, procesalmente, debería sancionarse a la parte demandada, toda vez que ésta cuenta con recursos humanos y financieros, con personal con conocimientos técnicos y con un archivo documental del cumplimiento a la normatividad ambiental.

Por otra parte, el juez que conozca del proceso debe considerar lo que implica el daño ambiental respecto a las pruebas supervinientes para su admisión y desahogo; en tal sentido, las pruebas supervinientes pueden surgir:

- I. Porque se toman muestras físicas de agua residual, del suelo, de sustancias químicas, de residuos peligrosos, residuos no peligrosos, de materia prima, de producto o de emisiones a la atmósfera. Sus resultados se contemplan en un plazo de uno a dos meses naturales.
- II. El perito o especialista no se encuentra en la lista de peritos de San Luis Potosí.
- III. El especialista o perito es funcionario público de una dependencia ambiental.
- IV. Porque se encuentran en una dependencia de gobierno federal o estatal y no constan en el expediente.

El juzgador debe contemplar aquellas pruebas, además de darles el valor pleno cuando:

- I. No las tiene la parte actora ni demandada.
- II. Surgen de análisis técnicos y son motivo de una prueba pericial.
- III. El juzgador considera pertinente su desahogo.

El juez que conozca un juicio interdictal o acción negatoria por daño ambiental, respecto a las pruebas supervinientes, fundamentará su actuación en lo dispuesto en el artículo 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles<sup>253</sup> y en el artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí (ambos ordenamientos contemplan la misma hipótesis legal).

### **3.3.3 Las medidas precautorias y su procedencia en el juicio por daño ambiental**

Es preciso indicar que el elemento ambiental que resulta afectado por un daño ambiental va a originar una variación en el funcionamiento o en las características propias del elemento y que pueden percibirse en el color, la forma, el olor y el tamaño, existentes entre el momento de la presentación de la demanda y el momento en que se dicte la sentencia definitiva.

Las medidas precautorias<sup>254</sup> pueden definirse como los medios que la ley otorga al demandante para que asegure el resultado de la acción que ha interpuesto.

El Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí no contempla tácitamente esta figura legal, en cambio, el Código Federal de Procedimientos Civiles manifiesta en su artículo 389 las clases de medidas precautorias, las cuales son las siguientes:

- I. Embargo de bienes suficientes para garantizar el resultado del juicio.<sup>255</sup>
- II. Depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos o papeles sobre los que verse el pleito.

En la fracción I, el embargo de bienes, debe ser en forma provisional hasta en tanto no se resuelva el juicio en lo principal. Con el resultado de la sentencia definitiva, este

---

<sup>253</sup> El artículo 80 señala: "Los tribunales podrán decretar, en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que se estime necesaria y sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos. En la práctica de esas diligencias, obrarán como lo estimen procedente, para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar los derechos de las partes, y procurando en todo su igualdad". *Op cit.*

<sup>254</sup> Para EDUARDO PALLARES este tipo de medidas son "Las que autoriza la ley para que el titular de un derecho subjetivo asegure oportunamente su ejercicio cuando carece de un título ejecutivo mediante el cual pueda de inmediato obtener la ejecución judicial del mismo"., PALLARES Eduardo, *Op. cit.*, p. 554.

<sup>255</sup> Fe de erratas, *Diario Oficial de la Federación*, marzo 13, 1943, México, D.F.

embargo perderá su carácter de provisional y se convertirá en definitivo y, en su momento, se ampliará el embargo, según las características del daño ambiental generado que requiera remediación.

El embargo provisional tendría los efectos del pago de la remediación del ambiente o sus elementos y se garantizaría lo siguiente:

- I. Asegurar con bienes inmuebles propiedad de la persona física o moral.
- II. En caso de no contar con bienes inmuebles, el embargo se ejecutaría en bienes muebles, como vehículos, maquinaria o equipos.
- III. Aseguramiento de cuentas bancarias de la persona moral o física para evitar el cambio de una cuenta a otra.

En el caso de embargo de bienes muebles, debe requerirse el nombramiento de uno o más interventores. El interventor judicial es la persona que designa el juez con el objeto de que controle la administración de los bienes materia del juicio y los que aún se hallan en poder del demandado.<sup>256</sup>

Cuando las medidas precautorias versen sobre dinero o cosas muebles, su finalidad es impedir que el demandado disponga, cambie de lugar o desaparezca lo asegurado durante el desarrollo del juicio. Esta medida precautoria no debe confundirse con el “derecho legal de retención”.

Además del embargo, debe existir el aseguramiento de bienes, documentos y registros. Lo anterior está contemplado en la fracción II del artículo 389 del Código Federal de Procedimientos Civiles.<sup>257</sup>

---

<sup>256</sup> PALLARES indica que por interventor judicial podemos entender a: “La persona que designa el juez con el objeto de que controle la administración de los bienes materia del juicio, y que aún se hallan en poder del demandado”. PALLARES Eduardo, *Op. cit.*, p. 445.

<sup>257</sup> El artículo 389 fracción II indica: “Dentro del juicio o antes de iniciarse éste, pueden decretarse, a solicitud de parte, las siguientes medidas precautorias: II.- Depósito o aseguramiento de las cosas, libros, documentos o papeles sobre que verse el pleito”. *Op cit.*

En consecuencia, las medidas precautorias pueden ser aplicables en un juicio interdictal o de acción negatoria por un daño ambiental, con objeto de que la información existente sea resguardada y no sufra su pérdida o extravío.

Las medidas precautorias sobre información y documentos, deben recaer en áreas como calidad, mantenimiento y seguridad.

El embargo judicial decretado y ejecutado dentro del juicio interdictal y de acción negatoria es independiente a la sanción económica que le sea impuesta al demandado; lo anterior está establecido en el artículo 2º fracción XIV<sup>258</sup> en relación con el artículo 19 ambos numerales de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental<sup>259</sup> y tendría el efecto de evitar:

- I. Que se modifiquen características de manejo y patrones de funcionamiento de la maquinaria y el equipo, con la finalidad de evitar que se realice un mantenimiento mecánico, cuya finalidad sea la de cambiar el estado adverso o deficiente de una maquina o equipo a circunstancias de mejora en su funcionamiento.
- II. Que se busque borrar o destruir algún archivo, en memoria electrónica o impreso (reporte de mantenimiento, de calidad y de seguridad), emitido por personal interno (de las áreas de calidad, mantenimiento y seguridad), o por auditores e inspectores que manifiesten indicios o existencia que determinada operación, sustancia, equipo o maquinaria no funcionaba en forma adecuada y que puede generar un impacto o daño ambiental.

Con lo anterior el juzgador tendrá una visión más concreta del daño ambiental, es decir, contaría con evidencia documental del tiempo, lugar y modo de alguna anomalía derivada de la operación de la maquinaria o equipo, del almacenamiento, transporte y uso de sustancias químicas.

---

<sup>258</sup> El artículo 2º fracción XIV indica que la sanción económica es: “El pago impuesto por la autoridad judicial para penalizar una conducta ilícita dañosa, dolosa con la finalidad de lograr una prevención general y especial e inhibir en el futuro comportamientos prohibidos”. *Op cit.*

<sup>259</sup> El artículo 19 señala: “La sanción económica prevista en la presente Ley, será accesoria a la reparación o compensación del Daño ocasionado al ambiente...” *Op cit.*

Las medidas precautorias se pueden solicitar ante el juez pero, lo ideal, es que el juez actúe de oficio en el sentido de dictarlas en el auto de radicación.<sup>260</sup>

La ejecución de las medidas precautorias está establecida en el segundo párrafo artículo 32 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental,<sup>261</sup> bajo los lineamientos del Derecho Procesal Civil.

Los efectos de las medidas precautorias no deben cesar, ni aun cuando desaparezca el daño que se ha generado, ni cuando se hayan otorgado las garantías suficientes.

Esta garantía es de naturaleza diversa y no debe confundirse con la establecida en el artículo 26 fracción III de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.<sup>262</sup>

En el juicio interdictal o de acción negatoria por un daño ambiental, las resoluciones que confieren o deniegan una medida precautoria no producen cosa juzgada,<sup>263</sup> ni siquiera formal.

### **3.3 Aplicación de principios procesales en el juicio de interdicto y acción negatoria por un daño ambiental**

#### **3.4.1 El principio de contracción invocado por la parte demanda en un juicio por daño ambiental**

Los principios procesales pueden concebirse como criterios que regulan las diferentes actuaciones que integran el procedimiento.

Existen diversos principios procesales y su adopción obedece al momento histórico y al sistema político de cada país; los principios se refieren a determinados

---

<sup>260</sup> PALOMAR indica que el auto de radicación "es el que da entrada a un asunto y resuelve que el mismo es de la competencia de determinado juez", PALOMAR DE MIGUEL Juan, *Op. cit.*, p. 162.

<sup>261</sup> El artículo 32 en su segundo párrafo señala: "En adición a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimiento Civiles, durante el procedimiento el juez podrá decretar las medidas precautorias siguientes: fracción II El aseguramiento de documentos, libros, cosas, papeles y bienes relacionados con los daños, así como con el cumplimiento de las obligaciones jurídicas del demandado, previstas por las Leyes ambientales y los tratados internacionales de los que México sea parte". *Op cit.*

<sup>262</sup> El artículo 26 indica: "Cuando se acredite que el daño o afectación, fue ocasionado dolosamente por dos o más personas, y no fuese posible la determinación precisa del daño aportado por cada responsable, todas serán responsables solidariamente de la reparación o compensación que resultare, sin perjuicio, en su caso, del derecho de repetición entre sí. Fracción III. Cuento con la garantía financiera prevista en el artículo 8o. de esta Ley". *Op cit.*

<sup>263</sup> PALLARES manifiesta que la cosa juzgada es: "la autoridad y la fuerza que la ley atribuye a la sentencia ejecutoria. Entendemos por autoridad la necesidad jurídica de que lo fallado en las sentencias se considere como irrevocable e inmutable, ya en el juicio en que aquellas se pronuncia, ya en otro diverso. La fuerza consiste en el poder coactivo que dimana de la cosa juzgada o sea en que debe cumplirse lo que ella ordena". PALLARES Eduardo, *Op. cit.*, p. 209 - 210.

procedimientos cuando su ámbito de actuación es mayor y constituye el medio rector del proceso.

El principio de contradicción es uno de los principios de derecho procesal, que tiene fuerza en función de cada ordenamiento jurídico y de la materia sobre la que verse el litigio.

El principio de contradicción significa que el juez no podrá definir una pretensión o reclamo del actor, si la persona en contra de quien ha sido propuesto no ha tenido oportunidad de ser escuchada en juicio, ya que nadie puede ser condenado sin haber sido oído.<sup>264</sup>

Cabe puntualizar que la contradicción alude a la exigencia de las dos partes contrapuestas en el proceso, en perfecta igualdad de oportunidades y de recíprocas cargas derivadas del mismo proceso.

Por otro lado, el principio de contradicción exige que ambas partes puedan tener los mismos derechos de ser escuchados y de practicar pruebas; esto con la finalidad de que ninguna de las partes se encuentre indefensa frente a la otra; se requiere de una igualdad procesal.

El juez que conozca de un juicio interdictal o de acción negatoria por daño ambiental, debe observar detenidamente en qué consiste este daño para estar en posibilidades jurídicas de llamar a juicio a aquellas personas físicas o morales cuando exista evidencia de que hayan participado en la generación del daño ambiental.<sup>265</sup>

En caso de que el juez identifique circunstancias y requiera llamar a juicio a otras personas (físicas o morales), debe hacer valer la figura de litisconsorcio<sup>266</sup> para cumplir con lo formulado con el principio contradictorio.

---

<sup>264</sup> Para PALLARES el principio de contradicción consiste *“En que el tribunal dé a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, y no se viola cuando ellas no aprovechan esa oportunidad”*, *Ídem*, p. 625.

<sup>265</sup> Esta situación está contemplada en el artículo 26 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental que dice: “Cuando se acredite que el daño o afectación, fue ocasionado dolosamente por dos o más personas, y no fuese posible la determinación precisa del daño aportado por cada responsable, todas serán responsables solidariamente de la reparación o compensación que resultare, sin perjuicio, en su caso, del derecho de repetición entre sí”. *Op cit.*

<sup>266</sup> PALLARES indica que el litisconsorcio es: “Una de las modalidades del proceso que consiste en la pluralidad de actores o demandados. Por lo tanto, hay litisconsorcio cuando varias personas ejercitan una

### 3.4.2 El principio de economía procesal aplicado en un juicio de interdicto y acción negatoria por un daño ambiental

En términos comunes entendemos por el principio de economía procesal como la obtención del máximo resultado posible con el mínimo de esfuerzo. Este principio se refiere no sólo a los actos procesales, sino a las expensas o gastos que ellos impliquen.

Para Pallares este principio consiste *“en que el proceso ha de desarrollarse con la mayor economía de tiempo, de energías y de costos, de acuerdo con las circunstancias de cada paso”*.<sup>267</sup>

Más que un principio es el conjunto de principios de los cuales se deriva el de economía procesal. Mencionamos los siguientes:

1. El de concentración: Consiste en reunir todas las cuestiones debatidas o el mayor número de ellas para ventilarlas y decidir las en el mínimo de actuaciones y providencias. Así, se evita que el proceso se distraiga en cuestiones accesorias que impliquen suspensión de la actuación principal.

En un juicio civil interdictal y de acción negatoria por daño ambiental se debe cumplir con lo anterior porque el daño se puede acrecentar y/o agravar con la interrelación con otros elementos ambientales y así, puede disminuir la capacidad de restauración de los elementos afectados.

2. El de eventualidad: Guarda estrecha relación con el de preclusión y consiste en que, si en determinada etapa o estancia del proceso una parte puede realizar varios actos, debe llevarlos a cabo de manera simultánea y no sucesiva, esto es, todos en el mismo lapso.

Al respecto, la normatividad procesal civil plantea expresamente aquellas etapas que son comunes<sup>268</sup> y las que corresponden, en

---

acción contra un solo demandado, cuando una persona demanda a varias y cuando dos o más demandan a dos o más personas”, PALLARES Eduardo, *Op cit.*, p. 542.

<sup>267</sup> *Ídem* p. 625.

primer lugar, al actor y, en segundo, al demandado con el mismo número de días.<sup>269</sup>

3. El de celeridad: Consiste en que el proceso se concrete a las etapas esenciales y cada una de ellas estará limitada al término perentorio fijado por la norma; en la observancia de este principio se descartan los plazos o términos adicionales a una determinada etapa, esto es, los que se surten como complemento del principal y las prórrogas o ampliaciones. También implica que los actos se surtan en la forma más sencilla posible, para evitar dilaciones innecesarias.

Para aplicar este principio, el artículo 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles<sup>270</sup> establece limitaciones a las prórrogas y otorga al juez la facultad de señalar ciertos términos, fijando el estrictamente necesario y consagra medios sencillos para efectuar la notificación de las providencias. Lo anterior con la finalidad de que el daño ambiental no siga generándose y afecte a otros elementos del ambiente.

4. El de gratuidad de la justicia: Es un servicio que presta el Estado a la colectividad; a éste le corresponde sufragar todos los gastos que esa función entraña, como proporcionar los locales y elementos necesarios, atender la remuneración de los funcionarios, empleados, etc. Aunque el principio, en su acepción más amplia, incluiría las expensas o gastos que implique el proceso, concretamente en lo relativo a honorarios de peritos e inscripción de embargos.

---

<sup>268</sup> Una etapa procesal el ofrecimiento de pruebas, donde el artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí señala: "El período de ofrecimiento de pruebas es de diez días comunes y fatales, que empezarán a contarse desde el día siguiente al en que se notifique el auto que manda abrir el juicio a prueba". *Op cit.*

<sup>269</sup> Como el período de alegatos, tal como está establecido en el artículo 408 que indica: "Concluida la recepción de las pruebas ofrecidas, el juez mandará poner los autos a la vista de las partes, por su orden, primero el actor y después al demandado, por el término de diez días a cada uno, para que aleguen de buena prueba". *Op cit.*

<sup>270</sup> El artículo 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece: "Los tribunales podrán decretar, en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que se estime necesaria y sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos. En la práctica de esas diligencias, obrarán como lo estimen procedente, para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar los derechos de las partes, y procurando en todo su igualdad". *Op cit.*



En el juicio interdictal y de acción negatoria por daño ambiental, estos gastos erogados debieran ser cubiertos por la parte demandada en corresponsabilidad de la autoridad ambiental federal (SEMARNAT y PROFEPA) y estatal (SEGAM).

Lo anterior, se considera porque la parte demandada es quien generó el daño con sus actividades, perturbaciones y/o procesos productivos que desarrolla y la autoridad por no cumplir con sus obligaciones de vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental.

### **3.4.3 El principio inquisitivo en un juicio interdictal y de acción negatoria por daño ambiental aplicado por el juez**

Este principio es muy importante y reviste aún mayor importancia al referirnos a un daño ambiental.

Podemos conceptualizar este principio como la operación mental que hace el juez para determinar si los hechos se encuentran demostrados por los medios o actuaciones realizadas con este objeto.

Se puede clasificar de la siguiente manera:

- I. La libre apreciación o la racional. Consiste en dejarle al juez la autonomía para que, conforme a las reglas, las experiencias y, mediante un raciocinio u operación lógica, determine si un hecho se encuentra o no probado.

Aunque a este sistema se le suele llamar de libre apreciación -por oposición al de la tarifa legal-, no quiere decir que el juez tenga absoluta libertad para determinar el valor de convicción que le suministra las pruebas.

Es indispensable que exponga las razones por las cuales basa o funda su credibilidad y que ellas estén constituidas por las reglas de la experiencia.

Consideramos que la libre apreciación es un medio de ayuda al juez para valorar todas las pruebas desahogadas por las partes dentro de un juicio civil interdictal y de acción

negatoria por daño ambiental. El juez consideraría si determinado elemento ambiental puede dar soporte de funcionalidad a otro elemento.<sup>271</sup>

Sin embargo, hay elementos ambientales que, por sus características (físicas o químicas), cuando se generó el daño, éste o éstos (los elementos ambientales) no se percibieron por medio de la apreciación o la lógica, entonces, se requiere de datos técnicos.

No existen normas oficiales mexicanas<sup>272</sup> que establezcan el punto idóneo de algún elemento ambiental sin daño, al contrario, las normas oficiales mexicanas indican únicamente un grado mínimo o máximo de contaminación.

Existen dificultades para tener el conocimiento pleno y verdadero del estado base<sup>273</sup> que guardaba el elemento ambiental antes de la contaminación.

No coincidimos con este concepto de estado base contemplado en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental porque no explica cuáles son los indicadores o puntos de partida para llegar a dicho precepto.

El artículo 35 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental<sup>274</sup> indica los hechos o circunstancias para acreditar el estado base del ambiente, sin embargo, no se dispone de un archivo electrónico o fotografías y/o imágenes de satélite de los últimos cincuenta años de todo el país (México) para contrastar la existencia de un cambio o daño ambiental.

---

<sup>271</sup> Podemos ilustrar lo anterior con un ejemplo: supongamos que se vierte un tambo de aceite industrial (el tambo tiene una capacidad de 200 litros) en el suelo o la tierra, y que al efecto no se puede sembrar o regar en dicho espacio contaminado porque su funcionalidad o soporte para otro elemento ambiental no se produciría. Es notorio que dicha afectación se percibe por la libre apreciación o racional.

<sup>272</sup> La Ley Federal de Metrología y Normalización señala en su artículo 3º fracción XI lo que es una norma oficial mexicana: "La regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación". *Op cit.*

<sup>273</sup> La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en su artículo 2º en su fracción VII estipula lo que es el estado base y manifiesta que es la: "Condición en la que se habrían hallado los hábitat, los ecosistemas, los elementos y recursos naturales, las relaciones de interacción y los servicios ambientales, en el momento previo inmediato al daño y de no haber sido éste producido". *Op cit.*

<sup>274</sup> El artículo 35 señala: "Para acreditar los hechos o circunstancias en relación al estado base, el daño ocasionado al ambiente, así como el nexo causal, las partes y las autoridades podrán utilizar fotografías, imágenes de satélite, estudios de poblaciones y en general toda clase de elementos aportados por la técnica y la ciencia. Salvo en los casos en que el Código Federal de Procedimientos Civiles otorgue mayor valor probatorio, estos medios de prueba constituirán indicios". *Op cit.*

Por otro lado, el artículo 36 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental señala que “el estado base se determinará a partir de la mejor información disponible al momento de su valoración”.

Con esto se corrobora que la mejor información disponible es la que ha surgido del auge informático, situación con la que hace treinta años no se contaba.

Lo mencionado en el artículo 35 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental se puede aplicar al referirnos a los suelos y al agua; sin embargo, no es posible esta circunstancia al referirnos a la atmósfera.

El juez requiere tener un vasto conocimiento de la normatividad ambiental, que le permitan identificar y conocer los elementos de un daño ambiental y que le permita aplicarlos cuando una persona física o moral se excede de los límites permitidos en las normas oficiales mexicanas.

Coincidimos con Alsina en que el juez tiene, inevitablemente, que apoyarse en las pruebas aportadas en el proceso y estimarlas de acuerdo a las reglas de la experiencia, conocimiento de la normatividad ambiental y la lógica.<sup>275</sup>

### **3.5 La intervención de las autoridades administrativas ambientales como parte en un juicio por daño ambiental**

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo 1º señala el término de “orden público”.<sup>276</sup>

En términos comunes, el orden público es “un conjunto de principios e instituciones que se consideran fundamentales en la organización social de un país y que inspiran su ordenamiento jurídico”.

Para el Derecho Público, el orden público está representado por la tranquilidad y paz social que proviene del respeto generalizado al ordenamiento jurídico. El

---

<sup>275</sup> ALSINA, Hugo, *Fundamentos de Derecho Procesal*, primera edición, Editorial Jurídica Universitaria, México, 2001, página 176.

<sup>276</sup> El artículo 1º establece: “La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto”. *Op cit.*

mantenimiento de este orden público habilita a la administración pública, a través de la ley, para imponer órdenes, prohibiciones y sanciones.<sup>277</sup>

En la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en sus artículos 70<sup>278</sup> y 80<sup>279</sup> se establecen las facultades de la formulación, conducción y evaluación del orden público a nivel estatal y municipal respectivamente.

---

<sup>277</sup> Lo anterior se puede apreciar en las 10 fracciones del artículo 1º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en el sentido de facultar al Estado por medio de la administración pública garantizar determinadas situaciones. Las fracciones de tal artículo señalan: “Propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:

- I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar;
- II.- Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación;
- III.- La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente;
- IV.- La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas;
- V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas;
- VI.- La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo;
- VII.- Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente;
- VIII.- El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX - G de la Constitución;
- IX.- El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y concertación entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así como con personas y grupos sociales, en materia ambiental, y
- X.- El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se deriven, así como para la imposición de las sanciones administrativas y penales que correspondan.

En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones contenidas en otras leyes relacionadas con las materias que regula este ordenamiento”. *Op cit.*

<sup>278</sup> El artículo 7º manifiesta: “Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

- I.- La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental estatal;
- II.- La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la materia, así como la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realice en bienes y zonas de jurisdicción estatal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación;
- III.- La prevención y control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como por fuentes móviles, que conforme a lo establecido en esta Ley no sean de competencia Federal;
- IV.- La regulación de actividades que no sean consideradas altamente riesgosas para el ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 de la presente Ley;
- V.- El establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas previstas en la legislación local, con la participación de los gobiernos municipales;
- VI.- La regulación de los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley;
- VII.- La prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como, en su caso, de fuentes móviles que conforme a lo establecido en esta Ley no sean de competencia Federal;
- VIII.- La regulación del aprovechamiento sustentable y la prevención y control de la contaminación de las aguas de jurisdicción estatal; así como de las aguas nacionales que tengan asignadas;
- IX.- La formulación, expedición y ejecución de los programas de ordenamiento ecológico del territorio a que se refiere el artículo 20 BIS 2 de esta Ley, con la participación de los municipios respectivos;

X.- La prevención y el control de la contaminación generada por el aprovechamiento de las sustancias no reservadas a la Federación, que constituyan depósitos de naturaleza similar a los componentes de los terrenos, tales como rocas o productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales para la construcción u ornamento de obras;

XI.- La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico o el ambiente de dos o más municipios;

XII.- La participación en emergencias y contingencias ambientales, conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;

XIII.- La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Federación, en las materias y supuestos a que se refieren las fracciones III, VI y VII de este artículo;

XIV.- La conducción de la política estatal de información y difusión en materia ambiental;

XV.- La promoción de la participación de la sociedad en materia ambiental, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;

XVI.- La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades que no se encuentren expresamente reservadas a la Federación, por la presente Ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 BIS 2 de la presente Ley;

XVII.- El ejercicio de las funciones que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente les transfiera la Federación, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de este ordenamiento;

XVIII.- La formulación, ejecución y evaluación del programa estatal de protección al ambiente;

XIX.- La emisión de recomendaciones a las autoridades competentes en materia ambiental, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación ambiental;

XX.- La atención coordinada con la Federación de asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más Entidades Federativas, cuando así lo consideren conveniente las Entidades Federativas respectivas;

XXI.- La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente les conceda esta Ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a la Federación". *Op cit.*

<sup>279</sup> El artículo 8º señala: "Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I.- La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal;

II.- La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la materia y la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación o a los Estados;

III.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como de emisiones de contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles que no sean consideradas de jurisdicción federal, con la participación que de acuerdo con la legislación estatal corresponda al gobierno del estado;

IV.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley;

V.- La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas por la legislación local;

VI.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones electromagnéticas y lumínica y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes móviles excepto las que conforme a esta Ley sean consideradas de jurisdicción federal;

VII.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como de las aguas nacionales que tengan asignadas, con la participación que conforme a la legislación local en la materia corresponda a los gobiernos de los estados;

VIII.- La formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico local del territorio a que se refiere el artículo 20 BIS 4 de esta Ley, en los términos en ella previstos, así como el control y la vigilancia del uso y cambio de uso del suelo, establecidos en dichos programas;

IX.- La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros de población, en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transporte locales, siempre y cuando no se trate de facultades otorgadas a la Federación o a los Estados en la presente Ley;

X.- La participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más municipios y que generen efectos ambientales en su circunscripción territorial; XI.- La participación en

En materia ambiental, dicho orden público se entiende de ejecutado a nivel federal por la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) y PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) y a nivel estatal a través de SEGAM (Secretaría de Gestión Ambiental).

Estas instituciones administrativas están facultadas con una amplia gama de recursos disponibles para observar y requerir el cumplimiento de la normatividad ambiental a toda persona física o moral que realice actividades que tengan incidencia en el ambiente.

Por citar un ejemplo, las inspecciones ambientales y procedimientos administrativos son unos instrumentos manejados por PROFEPA y SEGAM dentro de sus respectivas esferas de competencia.<sup>280</sup>

Además de SEMARNAT, CONAGUA, PROFEPA y SEGAM se incluye, en el campo jurídico-ambiental del cumplimiento normativo, a toda persona física o moral que opere y almacene sustancias químicas y/o residuos peligrosos.

---

emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;

XII.- La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Federación, en las materias y supuestos a que se refieren las fracciones III, IV, VI y VII de este artículo;

XIII.- La formulación y conducción de la política municipal de información y difusión en materia ambiental;

XIV.- La participación en la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades de competencia estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito de su circunscripción territorial;

XV.- La formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de protección al ambiente, y XVI.- La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente les conceda esta Ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a la Federación o a los Estados". *Op cit.*

<sup>280</sup> A nivel federal la inspección y vigilancia se basa en los artículos 161 primer párrafo y 162 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Tales artículos señalan lo siguiente: artículo 161 "La Secretaría realizará los actos de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, así como de las que del mismo se deriven". Artículo 162 "Las autoridades competentes podrán realizar, por conducto de personal debidamente autorizado, visitas de inspección, sin perjuicio de otras medidas previstas en las leyes que puedan llevar a cabo para verificar el cumplimiento de este ordenamiento". A nivel estatal, las inspecciones tienen su fundamento legal en los artículos 149 y 150 que textualmente señalan: artículo 149. "Las disposiciones contenidas en este Capítulo se aplicarán en la realización de actos de inspección y vigilancia, ejecución de medidas de seguridad, determinación de infracciones y aplicación de sanciones administrativas, instrumentación de procedimientos y recursos administrativos correspondientes". Artículo 150. "Corresponderá a la SEGAM, a los ayuntamientos y en su caso a los organismos operadores del agua, en el ámbito de su competencia, realizar actos de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley y en la LGEEPA; en este último caso, conforme a los términos contemplados en los acuerdos de coordinación que se establezcan. Para efectuar las visitas de inspección la autoridad podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando se obstaculice o se oponga resistencia a la práctica de la diligencia, independientemente de resultar aplicables las sanciones administrativas previstas en este ordenamiento". *Op cit.*

Toda persona física o moral tiene la obligación de gestionar licencias, evaluaciones, estudios y registros al inicio de operaciones y posteriormente, por aumento de producción o cambio de procesos para iniciar operaciones. Por consiguiente, opinamos que las autoridades administrativas debieran intervenir como parte en un juicio interdictal o de acción negatoria para reparar un daño ambiental.

Sostenemos que esta intervención de las autoridades administrativas ambientales dentro del juicio interdictal o de acción negatoria por daño ambiental tiene lugar porque poseen documentos, licencias, permisos, estudios técnicos e informes de personas físicas y morales, tales como:

- I. Registro como generador de residuos peligrosos y registro como generador de residuos no peligrosos.
- II. Recibir reportes trimestrales y/o semestrales en la generación de residuos no peligrosos.
- III. Expedientes conformados por certificaciones otorgadas como industria limpia.
- IV. Registro de inspecciones y procedimientos administrativos realizados.
- V. Denuncias populares generadas en contra de personas físicas o morales.
- VI. Trámite del permiso de descarga de agua residual.
- VII. Resoluciones de estudios de riesgo y de impacto ambiental.

Las autoridades administrativas (SEMARNAT, CONAGUA, PROFEPA y SEGAM), en consecuencia, deben participar en una intervención en un juicio interdictal o de acción negatoria por daño ambiental debido a las siguientes razones:

- I. En primer lugar, porque cuentan con esta información ambiental de la persona física o moral derivada de diversos trámites administrativos.

- II. En segundo lugar, deben ser llamadas a un juicio como corresponsables del daño,<sup>281</sup> no porque hayan generado directamente el daño ambiental, sino porque hubo negligencia en la observación del cumplimiento de la normativa ambiental. Lo anterior debido a que no existió de parte de las autoridades una adecuada observación a las instalaciones, operaciones y procesos productivos de la persona física o moral generadora del daño ambiental o bien porque no se observó una adecuada atención a los resultados que le arrojaron los estudios técnicos realizados por la persona física o jurídica como ruido perimetral, emisiones a la atmósfera (de partículas o vapores orgánicos), análisis de aguas residuales, de riesgo ambiental, de impacto ambiental, etcétera.

### **3.5.1 ¿Las autoridades administrativas deben considerarse como parte en un juicio interdictal y de acción negatoria por un daño ambiental?**

Parte es quien reclama y frente a quien se reclama la satisfacción de una pretensión. En todo proceso intervienen dos partes: una que pretende en nombre propio o en cuyo nombre se pretende la actuación de una norma legal, denominada actora y otra frente a la cual esa conducta es exigida, llamada demandada.

Se nombran partes al actor o demandante (sujeto activo) y al demandado (sujeto pasivo), en el proceso civil, laboral y contencioso administrativo.

A nuestro parecer, el que mejor define el concepto de parte es Chivenda, que la define, con los siguientes términos: *"el que demanda en nombre propio (o cuyo nombre es demandada) una actuación de ley y aquel frente al cual ésta es demandada"*.<sup>282</sup>

Se advierte en este concepto que se establece una separación entre el que pide y aquel por quien se pide la actuación de la ley; como consecuencia, la doctrina admite la distinción entre parte en sentido material, directamente vinculada en la relación de

<sup>281</sup> GABINO FRAGA manifiesta: "...se hace indispensable estructurar un régimen de responsabilidad que al mismo tiempo que garantice los patrimonios privados contra una carga no proporcional ni equitativa que resulte de la actuación administrativa, constituya un medio de obligar a la Administración a sujetarse estrictamente a la Ley formando así otra garantía del regular funcionamiento del Poder Público". FRAGA, Gabino, *Derecho Administrativo*, vigesimocuarta edición, editorial Porrúa, México, 1985, página 426.

<sup>282</sup> CHIOVENDA, José, *Principios de Derecho Procesal Civil Tomo II*, primera edición, editorial Reus, Madrid, 2000, página 6.



derecho sustantivo y parte en sentido formal, en tanto cuanto actúa en el proceso y realiza actos procesales.

El concepto de parte es estrictamente procesal y esa calidad está dada por la titularidad activa o pasiva de una pretensión y es totalmente independiente de la efectiva existencia de la relación jurídica sustancial, sobre cuyo mérito se pronunciará la sentencia.

Debemos señalar que el concepto de parte se utiliza con más frecuencia en el ámbito procesal, de modo que parte en el proceso es quien reclama y contra quien se reclama la satisfacción de una pretensión procesal.

Los terceros incorporados al proceso suelen considerarse como parte en el proceso, dependiendo de la naturaleza del interés con que se incorporan a él.

La capacidad de ser parte en el proceso implica en principio aptitud de ser titular de los derechos materiales o sustantivos en controversia o mejor, aptitud para afirmar en un proceso en que se tiene la calidad de titular de tales derechos. También se dice que quien es parte en un proceso es quien tiene la *legitimatio ad causam*.<sup>283</sup>

El Estado y sus dependencias también pueden ser parte en el proceso civil, ya sea como demandantes o como demandados.

El Código Federal de Procedimientos Civiles, en el artículo 4º<sup>284</sup> señala que el Estado y sus dependencias pueden intervenir en un proceso civil, cualquiera que sea la

---

<sup>283</sup> Para poder entender en forma plena como visualiza la legitimación de la causa por la Suprema Corte de Justicia de la Nación invocamos la siguiente jurisprudencia:

Legitimación activa en la causa. es una condición necesaria para la procedencia de la acción y sólo puede analizarse de oficio por el juzgador al momento de dictar sentencia.

“La legitimación activa en la causa no es un presupuesto procesal sino una condición para obtener sentencia favorable, esto es, se trata de una condición necesaria para la procedencia de la acción, y consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley, por lo que el actor estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde, de tal manera que la legitimación *ad causam* atañe al fondo de la cuestión litigiosa y, por ende, es evidente que sólo puede analizarse de oficio por el juzgador en el momento en que se pronuncie la sentencia definitiva y no antes”. Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, novena época, tomo XVI, tesis I.110.C.36 C, página 1391.

<sup>284</sup> Esta situación legal la encontramos en el artículo 4º que indica: “Las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, tendrán dentro del procedimiento judicial, en cualquier forma en que intervengan, la misma situación que otra parte cualquiera; pero nunca podrá dictarse, en su contra, mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y estarán exentos de prestar las garantías que este Código exija de las partes. Las resoluciones

calificación o ubicación procesal que se le asigne, sometiéndose al Poder Judicial sin más privilegios que los expresamente señalados en el Derecho Procesal Civil.

El Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí no contempla alguna hipótesis legal similar a la establecida en el artículo 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles, sin embargo, menciona en forma indirecta que la autoridad puede ser parte en un proceso civil.<sup>285</sup>

El sentido de considerar a las autoridades administrativas ambientales (SEMARNAT, PROFEPA y SEGAM) como parte dentro de un juicio interdictal o de acción negatoria por daño ambiental, es porque desde su esfera jurídica de actuación, no observaron y/o no cumplieron con la tutela que les otorgó la Ley Federal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente así como la Ley Ambiental de San Luis Potosí.

La dependencia ambiental con la información, documentos y registros que tiene de una persona física o moral, no visualizó ni analizó si está es falsa, correcta o errónea, o no concuerda con los procesos productivos, listado de maquinaria o equipo o el uso, transporte y almacenamiento de sustancias químicas.

Por consiguiente, como se mencionó, la autoridad administrativa en materia ambiental debe ser considerada como parte demandada en un juicio de daño ambiental, en razón de su ineficacia e inobservancia de sus atribuciones.

Cuando el juez identifique la existencia de una corresponsabilidad derivada de la información proporcionada por las autoridades ambientales, debiera de llamarlas comparecer a juicio a través de la figura jurídica del litisconsorcio pasivo.<sup>286</sup>

---

dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. La intervención que, en diversos casos, ordena la ley que se dé al Ministerio Público, no tendrá lugar cuando, en el procedimiento, intervenga ya el Procurador General de la República o uno de sus Agentes, con cualquier carácter o representación". *Op cit.*

<sup>285</sup> Esta inserción la establece en la forma de desahogarse la prueba confesional, lo anterior está contemplada en el artículo 322 que indica: "Las autoridades, las corporaciones y los establecimientos que formen parte de la administración pública no absolverán posiciones en la forma que establecen los artículos anteriores; pero la parte contraria podrá pedir que se les libre oficio, insertando las preguntas que quiera hacerles para que, por vía de informe, sean contestadas dentro del término que designe el tribunal y que no excederá de ocho días. En el oficio se apercibirá a la parte absolvente de tenerla por confesa si no contestare dentro del término que se le haya fijado, o si no lo hiciera categóricamente afirmando o negando los hechos". *Op cit.*

<sup>286</sup> Por litisconsorcio pasivo necesario podemos entenderlo de acuerdo a la siguiente jurisprudencia:

Litisconsorcio pasivo necesario, integración de la (legislación del Estado de Guerrero).

"El artículo 84 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, expresamente señala que cuando en la acción que se promueva exista conexión con el objeto o sobre el título del cual dependa, cuando la

La intervención de las autoridades administrativas federales y estatales en un juicio interdictal y de acción negatoria por un daño ambiental empieza a partir de que el juez conoce la demanda, en el auto de radicación debiera ordenarse el emplazamiento a juicio de las dependencias respectivas.

### 3.5.2 La obligación de las autoridades ambientales de suministrar información y documentos en un juicio de interdicto de obra peligrosa y de retener y acción negatoria por daño ambiental

Como hemos indicado anteriormente existen autoridades administrativas que cuentan con la información apropiada para conocer el historial ambiental de una persona física o moral en relación con el cumplimiento de la normatividad ambiental.

En la siguiente tabla describimos las dependencias y la información ambiental ó de seguridad que se tiene, o de las personas físicas o morales que realizan gestiones de autorización para sus operaciones, procesos productivos, tipo, forma de almacenamiento de sustancias químicas, de producto terminado, de residuos peligrosos y de residuos no peligrosos.

Dependencia	Tipo de dependencia	Trámite, permiso, estudio	Respuesta de la dependencia por trámite, permiso, estudio
SEMARNAT	Federal	Registro como generador de residuos peligrosos	Aprueba el listado que le adjunta la persona física o moral de los residuos peligrosos que van a generar por sus procesos productivos o servicios.
		Estudio de impacto ambiental	Emite una resolución que contiene condicionantes.
		Estudio de riesgo ambiental	Emite una resolución que contiene condicionantes.
		Programa de prevención de accidentes	Únicamente lo recibe, como pre-requisito del estudio de riesgo.
		Cédula de operación anual	Recibe la información impresa y electrónica, no se emite respuesta.
		Plan de manejo de residuos peligrosos	Emite una resolución que contiene condicionantes.

decisión esté subordinada total o parcialmente a la resolución de cuestión idéntica, cuando tenga un mismo derecho o se encuentre obligada por una misma causa, se estará en presencia de una litisconsorcio pasivo necesario y entonces no podrá dictarse sentencia en relación con alguna de esas partes, porque debe accionarse en contra de todas, pues la resolución, en caso de declararse procedente la acción deducida por el demandante, sí podría parar perjuicio a aquélla". Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación, novena época, página 872.

		Autorización como recolector de residuos peligrosos	Emite autorización en base a la documentación de las operaciones de la persona física o moral.
		Autorización como centro de acopio de residuos peligrosos	Emite autorización en base a la documentación de las operaciones de la persona física o moral.
		Autorización para reutilizar, tratar, reciclar residuos peligrosos	Emite autorización en base a la documentación de las operaciones de la persona física o moral.
		Estudios técnicos de emisiones a la atmosfera	Se establece información en la cédula de operación anual.
		Estudios de análisis de agua residual	Se establece información en la cédula de operación anual.
CONAGUA	Federal	Permiso de descarga de aguas residuales	Permiso donde se cerciora el tipo de tratamiento, lugar de descarga de las aguas residuales.
		Licencia de uso de pozo	Permiso donde se decreta la cantidad permitida de extracción de agua de pozo.
PROFEPA	Federal	Inspecciones ambientales y procedimientos administrativos	Son aleatorias y, en caso de hechos u omisiones, se asientan en el acta de inspección, genera un procedimiento administrativo, estableciéndose sanciones.
		Certificación "industria limpia"	Es una certificación donde, a través de una auditoría ambiental en todos los rubros ambientales, se califica el cumplimiento normativo ambiental.
S.T.P.S	Federal	Certificación "empresa segura"	Es una certificación donde, a través de una auditoría en todos los rubros de seguridad e higiene, se califica el cumplimiento normativo en seguridad.
		Autorización de recipientes sujetos a presión	Se realizan una inspección y pruebas para determinar que el recipiente sujeto a presión no tenga ninguna fuga.
		Análisis de maquinaria y equipo	Es un análisis donde se describe la maquinaria y equipo y la probabilidad de que pueda generar un daño a la salud como al medio ambiente laboral.
SEGAM		Registro como generador de residuos no peligrosos	Aprueba el listado que le adjunta la persona física o moral de los residuos industriales no peligrosos generados en sus procesos productivos o servicios. A partir del año 2014 se renueva anualmente este registro.

	Estatal	Estudio de impacto ambiental	Emite una resolución que contiene condicionantes.
		Estudio de riesgo ambiental	Emite una resolución que contiene condicionantes.
		Reporte semestral de residuos no peligrosos	No hay respuesta.
		Reporte trimestral de residuos no peligrosos	No hay respuesta.
		Cédula de operación anual	Recibe información documental y electrónica, no se emite respuesta.
		Autorización como recolector de residuos no peligrosos	Emite autorización con base a la documentación de la persona física o moral.

Además, se debe aportar la siguiente información:

1. El número de verificaciones o inspecciones se le han realizado.
2. El número de procedimientos administrativos que se le han interpuesto y cuáles son sus resultados.
3. Información acerca de si dio cumplimiento a las condicionantes del estudio de impacto ambiental y de riesgo.
4. Información acerca del cumplimiento a las condicionantes del estudio de impacto ambiental y de riesgo y si éstas se llevan a cabo en término o de manera extemporánea.
5. Información acerca de si se ha revocado algún registro o licencia por falta de cumplimiento de reportes o requerimientos.

Por consiguiente, es necesario que el juez requiera en la etapa procesal correspondiente (ofrecimiento de pruebas), toda la documentación e información que tiene de la parte demandada (SEMARNAT, CONAGUA, PROFEPA, SEGAM, S.T.P.S., etcétera) y demás dependencias que considere pertinente.

En este sentido la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental señala, en el párrafo primero del artículo 34,<sup>287</sup> la necesidad procesal de requerir a SEMARNAT,

<sup>287</sup> El artículo 34 en su párrafo segundo establece: "El juez requerirá a la Secretaría y a la Procuraduría para que aporten todos los elementos periciales, testimoniales, documentales y demás indicios y

CONAGUA, PROFEPA y SEGAM para que envíen a los autos<sup>288</sup> del expediente todo medio de prueba que posean y que esté relacionado con el demandado.

Con lo anterior, el juez durante el proceso judicial identificará, conocerá y analizará lo siguiente:

- I. El desempeño ambiental que ha desarrollado la persona física o moral dentro de sus procesos productivos.
- II. La elaboración y resultados de los análisis de agua residual, emisiones a la atmósfera y CRETIB de los nuevos residuos que se vayan generando.
- III. Verificará que los estudios técnicos estén dentro de los parámetros establecidos en las normas oficiales mexicanas. En caso contrario con el resultado adverso, solicitará el plan de acción implementado y responsable de seguimiento para corregir la desviación (problema).
- IV. Tendrá conocimiento de las sustancias químicas empleadas, los tipos y cantidades de los residuos peligrosos y no peligrosos generados.
- V. Verificará que la información técnica proporcionada para solicitar permisos, licencias y certificaciones no sea errónea o esté falseada.
- VI. Se percatará si hubo planes de acción y cumplimiento de las condicionantes fijadas en las resoluciones de impacto ambiental y de riesgo ambiental.
- VII. Observará el seguimiento a determinadas situaciones que por su naturaleza requirieron monitoreo.

---

elementos de prueba con los que cuenten. Los servidores públicos estarán obligados a cumplir con dicha obligación". *Op cit.*

<sup>288</sup> Por auto entendemos lo siguiente: "Una resolución judicial, es decir, es un pronunciamiento de un juez o tribunal en donde se deciden cuestiones planteadas por las partes dentro de una secuela procesal". COLEGIO DE PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM, *Diccionario de Derecho Procesal*, segunda edición, editorial Oxford University Press México, 2000, página 44.

Una vez que el juez aplique los presupuestos procesales, los casos de incompetencia, y analice las pruebas aportadas y la documentación aportada en el juicio, tendrá la posibilidad de determinar de manera específica y clara el grado de corresponsabilidad de las autoridades ambientales a nivel federal y estatal en un juicio interdictal y de acción negatoria para reparar un daño ambiental.

## **CAPÍTULO IV Ofrecimiento y desahogo de la prueba pericial en un juicio interdictal y de acción negatoria por un daño ambiental**

### **4.1 Introducción**

En este capítulo abordaremos la prueba pericial que, por su naturaleza, se considera idónea para comprobar un daño al medio ambiente o a sus elementos, en virtud de que ésta se basaría, para su elaboración, en los estándares máximos permisibles contemplados en las normas oficiales mexicanas en materia ambiental y en estudios técnicos a través de los cuales se acreditaría la existencia del daño ambiental.

Para hacer más eficaz e idóneo, desde el punto de vista ambiental, el trámite de la prueba pericial en un juicio interdictal y de acción negatoria es necesario que determinados puntos sean transformados jurídicamente, en lo que se refiere al ofrecimiento y desahogo de esta importante prueba. Además, en este capítulo haremos referencia a la implementación de una audiencia para clarificar las cuestiones técnicas que contiene el informe pericial.

En lo que respecta al desahogo de la prueba pericial, se expondrá la necesidad procesal de ciertos cambios legales a las disposiciones legales aplicables; ello con la finalidad de que dicha prueba sea una herramienta jurídica de utilidad para el juzgador al momento de resolver un juicio de índole ambiental.

Otro punto importante que se plantea en este capítulo es el relativo a que es el juez quien debe conocer la normatividad ambiental y de seguridad para poder resolver correctamente un juicio interdictal y de acción negatoria. Si esto último el juez no será capaz de deducir, identificar e interpretar el contenido y alcance del peritaje ambiental y éste no será un instrumento jurídico que le ayude a visualizar la existencia del daño ambiental.

Asimismo, abordaremos la facultad y los requisitos para ser perito. Al respecto se indicará la existencia de situaciones específicas en las que prevalezca un control adecuado, con la finalidad de evitar que determinadas personas (funcionarios públicos ambientales) sean quienes realicen peritajes ambientales, impidiendo así que el



contenido se incline hacia la parte (actor o demandado) que solicitó sus servicios para elaborar el informe pericial.

Por último, se analizarán algunas situaciones en las cuales al informe pericial, debido a su contenido y conclusiones, no se le deba otorgar valor probatorio.

## 4.2 La prueba pericial en la doctrina mexicana

Los medios de prueba del Derecho Procesal Civil<sup>289</sup> tienen como finalidad el producir un estado de certidumbre en la mente de una o varias personas respecto de la existencia o inexistencia de un hecho, de la verdad o falsedad de una proposición.<sup>290</sup>

Como indica Hutchinson “no hace falta mayor imaginación para comprender la enorme importancia que la prueba tiene en la vida jurídica. Sin ella los derechos subjetivos de una persona serían simples apariencias, sin solidez ni eficacia alguna”.<sup>291</sup>

En un juicio por daño ambiental el juez, al momento de valorar las pruebas, debe tener en cuenta el principio *actori incumbit probatio*<sup>292</sup>. Al respecto se considera que el medio de prueba que puede brindar una mayor certeza acerca de las características del daño ambiental es la prueba pericial.

Mediante esta prueba, cuyo contenido es técnico, se aporta información relevante y concisa para determinar si se generó o no un daño ambiental, al tiempo que pueden mostrarse planteamientos, conclusiones y resultados que, según la apreciación del juzgador, se consideren como hechos ciertos.

---

<sup>289</sup> En el Código Federal de Procedimientos Civiles, en su artículo 93 y el Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí, en el artículo 280 indican: “Los medios de prueba que son reconocidos. Los cuales son idénticos, estas pruebas reconocidas son: I.- La confesión; II.- los documentos públicos; III.- los documentos privados; IV.- los dictámenes periciales; V.- el reconocimiento o inspección judicial; VI.- los testigos; VII.- las fotografías, escritos y notas taquigráficas, y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia; y VIII.- las presunciones”. El Código Federal se publicó en el *Diario Oficial de la Federación*, febrero 24, 1943, México, D.F. Y el Código de Procedimientos en el *Periódico Oficial*, febrero 27, 1947, S.L.P.

<sup>290</sup> PALLARES, Eduardo, *Diccionario de Derecho Procesal Civil*, décimo quinta edición, editorial Porrúa, México, 1984, página 657.

<sup>291</sup> HUTCHINSON, Tomás, *Daño Ambiental tomo II*, primera edición, Rubinzal – Culzoni Editores, Argentina, 1999, página 193.

<sup>292</sup> Para HUTCHINSON este principio exige al juez que la falta, el daño y el perjuicio serán establecidos con certeza, pues no puede contentarse con indicios; no se puede aceptar comprometer la responsabilidad del demandado sino cuando la prueba lo acredite. *Ídem*, p. 194.

De tal forma el juzgador, a través de la prueba pericial, obtiene una certeza real del daño ambiental ocasionado y, a partir de entonces, no debe considerarlo como un indicio.

Por ello, en toda controversia judicial, que por su naturaleza requiera de la opinión especializada de una persona sobre un determinado tema, se requiere que tal probanza y el dictamen pericial que se emita al respecto, incluyan ciertas cuestiones que no dejen dudas en el criterio del juzgador.

La prueba pericial, por su contexto y alcance, es un medio de prueba apropiado para acreditar un daño ambiental; es decir, se puede evidenciar una situación específica y lograr que la mente la perciba con la misma claridad con que los ojos ven las cosas materiales.

Para el desarrollo de esta prueba se requiere de ciertos puntos para que tenga validez plena y produzca las consecuencias de derecho en el juicio respectivo.

#### **4.2.1 Definición**

La prueba pericial es el examen y estudio que realiza el perito sobre el problema encomendado, para luego entregar su informe o dictamen pericial con sujeción a lo dispuesto por la ley.

De tal manera, Pina Vara indica que la prueba pericial es aquella que se lleva a efecto mediante el dictamen de peritos.<sup>293</sup>

En lo particular, consideramos la definición ofrecida por Mateo Alarcón,<sup>294</sup> ya que es más amplia, pues en ella se resalta la importancia de la utilización de conocimientos científicos o técnicos.

---

<sup>293</sup> PINA VARA, Rafael de, *Diccionario de Derecho*, decimoprimer edición, editorial Porrúa, México, 1983, página 407.

<sup>294</sup> MATEOS indica que la prueba pericial es “El dictamen de las personas versadas en una ciencia, en un arte, en un oficio con el objeto de ilustrar a los tribunales sobre un hecho cuya existencia no puede ser demostrada ni apreciada sino por medio de conocimientos científicos o técnicos; o bien un medio de descubrir la verdad de un hecho, y la forma especial de su demostración deducida de los fenómenos de él o de sus efectos”. MATEOS ALARCÓN, Manuel, *Las pruebas en materia civil, mercantil y federal*, sexta edición, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 2001, página 242.

La prueba pericial surge del dictamen de los peritos, que son personas llamadas a informar ante el juez o tribunal por razón de sus conocimientos especiales, siempre que sea necesario un dictamen científico, técnico o práctico sobre los hechos en litigio.

Cabe indicar, como característica, que los conocimientos especializados son temas que por su naturaleza no son de dominio público, ya que se requiere dominar el aspecto técnico.

Al hacer referencia al medio ambiente, además de la cuestión técnica, debe observarse la normatividad aplicable, asunto sobre el cual profundizaremos en líneas posteriores al tratar el daño ambiental.<sup>295</sup>

#### **4.2.2 La prueba pericial y sus características procesales**

La prueba pericial es idónea en un juicio para conocer o apreciar algún hecho de influencia en el pleito, de manera que son necesarios y convenientes los conocimientos científicos, artísticos o prácticos,<sup>296</sup> según sea el caso.

En un juicio interdictal y de acción negatoria para reparar un daño ambiental, debe considerarse y plantearse que, en materia ambiental, se cuenta con un caudal científico (técnico) en su accionar, de modo que no se limita a una pura interpretación de la norma jurídica.

En la mayor parte de los juicios de índole ambiental, la parte actora y el juzgador<sup>297</sup> no reúnen la sapiencia técnica, ni tienen a su alcance los instrumentos de medición en materia ambiental.

---

<sup>295</sup> CARLOS ARELLANO indica que “Esa posesión de conocimientos específicos que no todo el mundo posee es lo que da a un sujeto el carácter de perito”. ARELLANO GARCÍA, Carlos, *Derecho Procesal Civil*, sexta edición, editorial Porrúa, México, 1998, página 339.

<sup>296</sup> ARELLANO GARCÍA manifiesta que “No en todos los asuntos contenciosos se requiere la intervención de peritos, solo en aquellos donde la comprensión de los hechos controvertidos no está al alcance de todo individuo, por sea necesario conocimientos especializados”. *Ibidem*, pp. 339.

<sup>297</sup> BECERRA BAUTISTA manifiesta que “El juez tiene conocimientos generales que le proporciona su formación universitaria y especializados en la ciencia del derecho; sin embargo, en determinadas controversias necesita de personas que tengan otro tipo de conocimientos que son indispensables para el esclarecimiento de un problema judicial concreto, no acudir a ellas sería cerrar los ojos a una realidad lo que redundaría en perjuicio de la administración de justicia”. BECERRA BAUTISTA, José, *El proceso civil en México*, decimoséptima edición, editorial Porrúa, México, 2000, página 134.

La materia ambiental está revestida de estándares científicos que son fundamentales en el cumplimiento de lo señalado en la normatividad ambiental y, como lo indicamos en el capítulo III, en muchas ocasiones un daño ambiental puede tener su origen en una deficiente administración en materia de seguridad y ambiental por parte de una persona física o moral.

En un juicio por daño ambiental, ambas partes (actor y demandado), al momento de ofrecer la prueba pericial, tienen trazado el contenido y alcance de dicha probanza.

A la parte actora le interesa que este medio de prueba exponga con precisión y claridad el daño que se ha generado en uno o varios de los elementos ambientales, cuál es el que presenta más afectación y qué factores generaron el daño ambiental.

Por otro lado, el objetivo de la parte demandada es acreditar mediante la prueba pericial que el referido daño inferido al ambiente no es producto de sus operaciones, almacenes, maquinaria o equipo.

Consideramos la oportunidad de que el juzgador decrete de oficio<sup>298</sup> la prueba pericial mediante una determinación judicial, cuando ninguna de las partes lo haya ofrecido o bien estén de acuerdo en la intervención de una sola persona.<sup>299</sup>

En este sentido, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental,<sup>300</sup> en su artículo 34 párrafo primero,<sup>301</sup> indica que se puede actuar de oficio, pero con las limitaciones establecidas en la ley.

Tal precepto legal no es claro en su contenido. Por un lado manifiesta una libertad al juzgador para hacerse de pruebas, actuando de oficio y, por otro, lo limita al cuerpo normativo procesal civil, donde la mayor parte de los medios de prueba son a petición de parte.

---

<sup>298</sup> CABANELLAS indica que “Es la facultad de los jueces o tribunales para interponer su autoridad espontáneamente, sin requerimiento o instancia de parte, tanto en las causas civiles, donde tal potestad es más restringida, como en el proceso penal, donde el interés público autoriza mayores atribuciones”. CABANELLAS, Guillermo, *Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, vigésima edición*, editorial Heliasta S.R.L., Argentina, 1981, página 6x66.

<sup>299</sup> En el capítulo III, manifestamos que el juez debe tener facultades y convicción expresa de hacerse llegar de pruebas que le permitan auxiliarse, conocer la existencia o inexistencia del daño ambiental.

<sup>300</sup> *Diario Oficial de la Federación*, junio 07, 2013, México, D.F.

<sup>301</sup> El artículo 34 señala que “El órgano jurisdiccional podrá allegarse oficiosamente de los medios de prueba que considere necesarios, sin más limitación que las establecidas en la ley”. *Op cit.*

El procedimiento para el ofrecimiento de la prueba pericial como requisito legal y como orientación para las partes en el proceso está clara y expresamente establecido en el artículo 143 del Código Federal de Procedimientos Civiles.<sup>302</sup>

El Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí plantea otro tipo de hipótesis para su ofrecimiento;<sup>303</sup> sin embargo, no interfiere con la naturaleza de dicha probanza.

Proponemos entonces que en el juicio interdictal y de acción negatoria para reparar un daño ambiental el ofrecimiento de la prueba pericial deba plantearse por el actor en su escrito de demanda y por el demandado en su escrito de contestación de la misma, por las siguientes razones:

- I. Para acortar el tiempo de su ofrecimiento, es decir, sin esperar hasta el periodo de ofrecimiento de pruebas, tal como viene contemplado en la legislación procesal de San Luis Potosí.<sup>304</sup>

Cabe mencionar que las etapas de los juicios civiles son: demanda, emplazamiento, contestación de demanda, ofrecimiento de pruebas, desahogo de pruebas, alegatos y sentencia.

De tal modo, el juicio se podría dilatar procesalmente por excepciones o defensas planteadas en la contestación de demanda, lo que originaría que la etapa de ofrecimiento de pruebas no se decrete al concluir el término para contestar la demanda.

- II. El daño ambiental está intacto o en su defecto incrementándose.
- III. El informe pericial se realice con más prontitud y contar con las conclusiones a la brevedad ya que depende del elemento ambiental

---

<sup>302</sup> El artículo 143 de dicho cuerpo legal señala que “La prueba pericial tendrá lugar en las cuestiones de un negocio relativas a alguna ciencia o arte, y en los casos en que expresamente lo prevenga la ley”. *Op cit.*

<sup>303</sup> El artículo 341 del Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí indica que “Los peritos deberán tener título en la ciencia, arte o industria a que pertenezca el punto sobre el que ha de oírse su parecer, si la profesión, el arte o la industria estuvieren legalmente reglamentados”. *Op cit.*

<sup>304</sup> Los interdictos se tramitan en la vía extraordinaria civil, por lo que se aplica el artículo 416. La acción negatoria procede en la vía ordinaria civil y el periodo de ofrecimiento de pruebas está contenido en los artículos 264 y 269. *Op cit.*

dañado donde el estudio técnico requiere de tiempo para demostrar resultados.

En caso de que las partes o el juez nombren a uno o varios peritos, con el conocimiento de la parte contraria, estos pueden ser recusados o tachados en razón de causas anteriores o posteriores al nombramiento.<sup>305</sup>

El artículo 346 del Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí<sup>306</sup> plantea los casos de recusación de un perito. Consideramos pertinente que en un asunto por daño ambiental estas causales se amplíen y proponemos las siguientes:

- I. Haber realizado algún permiso, plan o reporte del demandado ante alguna dependencia administrativa de índole ambiental.
- II. Haber efectuado algún estudio técnico en materia ambiental o de seguridad a la parte demandada.
- III. Haber efectuado o formado parte del equipo de auditores en una auditoría ambiental de la parte demandada.
- IV. Formar parte integrante de una unidad de verificación o haber participado en alguna evaluación de maquinaria, equipo o instalaciones, acreditado ante EMA<sup>307</sup> o haber trabajado directamente para el demandado.

---

<sup>305</sup> El artículo 346 del Código de Procedimientos Civiles señala los casos de recusación y que tal objeción debe realizarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que se notifique su nombramiento. Cabe indicar que el Código Federal de Procedimientos Civiles no especifica nada al respecto. *Op cit.*

<sup>306</sup> El artículo 346 indica que “Los peritos que nombren las partes y el juez pueden ser recusados dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la en que se notifique su nombramiento a los litigantes y siempre que concurra alguna de las causas siguientes:

I.- Consanguinidad hasta del cuarto grado.

II.- Interés directo o indirecto en el pleito.

III.- Ser socio, inquilino, arrendador o tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las partes”. *Op cit.*

<sup>307</sup> EMA es la Entidad Mexicana de Acreditación, y todas aquellas personas físicas o morales que pretendan ser unidades de verificación o laboratorios acreditados, deben de seguir los lineamientos establecidos por dicha organización. Con la acreditación que otorga tal entidad, tiene valor legal de hacer estudios, planos o pruebas, y cuya decisión o dictamen están avalados en forma plena por la misma entidad y por las autoridades administrativas, es decir, por el simple hecho de que un plano, estudio o dictamen haya sido realizado por un ente acreditado ante EMA, la autoridad administrativa no entra al estudio de veracidad o falsedad de lo presentado por la unidad de verificación o laboratorio acreditado. Proceso de Acreditación, [www.ema.org.mx](http://www.ema.org.mx), fecha de consulta: 23 de octubre el 2014.

- V. Haber sido asesor externo en materia ambiental, seguridad e higiene de la parte demandada.
- VI. Ser funcionario público que ejerza actividades de perito por parte de alguna autoridad administrativa (SEMARNAT, CONAGUA, PROFEPA y SEGAM).

Es prioridad que la autoridad judicial asegure en autos el proceso judicial, de acuerdo con los documentos del demandado o las evidencias presentadas, que el perito no haya incurrido en alguna de las hipótesis anteriormente planteadas.

Compartimos la opinión de Santo sobre la importancia de la característica de imparcialidad que debe tener el perito dentro de un juicio interdictal o de acción negatoria, donde se reclame la reparación de un daño ambiental, toda vez que no deben existir cuestiones personales que lo unan con las partes.<sup>308</sup>

Así, cuando se comprueben antecedentes deshonestos del perito durante el ejercicio de su profesión o en dictámenes anteriores en juicios de índole ambiental donde haya tomado parte, o cuando haya cometido algún delito (grave o no),<sup>309</sup> que le quiten credibilidad a su informe pericial o pongan en duda su imparcialidad y veracidad, el juez nombrará a otro perito por su cuenta, manifestando la circunstancia de que el perito considerado previamente no es apto debido a sus antecedentes.

---

<sup>308</sup> DE SANTO señala que “Los vínculos de amistad íntima o enemistad, las relaciones familiares del perito con las partes, el interés económico que pueda tener en el resultado del litigio, constituyen razones para dudar de su sinceridad”. DE SANTO, Víctor, *El Proceso Civil tomo VII prueba de peritos, reconocimiento judicial*, primera edición, editorial Universidad, Argentina, 2002, página 65.

<sup>309</sup> El artículo 407 del Código Adjetivo Penal de San Luis Potosí, establece cuáles son los delitos que son considerados graves, mientras que los que están fuera de este artículo se estiman como no graves. Este artículo menciona: “Todo inculcado tendrá derecho a ser puesto en libertad bajo caución, siempre que no se trate de los siguientes delitos considerados como graves: homicidio simple intencional; homicidio calificado; parricidio; aborto; ataque peligroso; secuestro; secuestro Express; robo de infante; tráfico de menores; asalto; violación; violación equiparada; abuso sexual calificado; corrupción de personas menores de dieciocho años; o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, o de personas que no tienen capacidad para resistirlo -pornografía de personas menores de dieciocho años, o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, o de personas que no tienen capacidad para resistirlo- turismo sexual de personas menores de dieciocho años, o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, o de personas que no tiene capacidad para resistirlo- lenocinio de personas menores de dieciocho años o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, o de personas que no tienen capacidad para resistirlo- trata de personas de menores de dieciocho años o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo- robo calificado; robo equiparado que señala el artículo 195 BIS del Código Penal para el Estado; abigeato; extorsión, previsto en los artículos, 212 en sus párrafos segundo y tercero, y 212 BIS del Código Penal para el Estado; rebelión; motín; terrorismo; asociación delictuosa; evasión; tortura; ataque a las vías de comunicación y medios de transporte; y homicidio por culpa a que se refiere el artículo 64 del Código Penal para el Estado”. *Op cit.*

El artículo 145 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por otra parte, indica: “Cada parte nombrará un perito, a no ser que se pusieren de acuerdo en el nombramiento de uno solo”.

Por otro lado, el artículo 342 del Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí señala: “Cada parte, dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que ordene el dictamen pericial, nombrará un perito, a no ser que se pusieren de acuerdo en el nombramiento de uno solo. El tercero en discordia será nombrado por el juez”.

De ambos ordenamientos legales se contempla la hipótesis de nombrar a un solo perito. Por lo anterior planteamos que el juez debería tomar en cuenta lo siguiente al nombrar un solo perito:

- I. La existencia o inexistencia de peritos ambientales inscritos en el Registro Estatal de Peritos de San Luis Potosí.
- II. Sobre qué punto versará la elaboración del informe pericial; es decir, sobre qué rubro ambiental (suelo, atmósfera, residuos peligrosos o agua) se desahogará el peritaje.
- III. En consecuencia del punto dos, arriba mencionado, el término para su desahogo, considerando que no todos los dictámenes periciales de índole ambiental, tienen el mismo tiempo de ejecución.

Además, los peritos realizarán el estudio del problema encomendado en forma rigurosa, para dar una explicación clara y adecuada al caso concreto.

Esa actividad será concentrada en un documento que muestre en forma sucesiva los pasos del estudio efectuado, con una exhibición razonada y coherente de la técnica, conclusiones y recomendaciones y al cual se conoce generalmente con el nombre de dictamen pericial o informe pericial.



El Código Federal de Procedimientos Civiles no es claro ni enfático pero sí aborda, de manera general, los puntos precisos sobre los que versará el peritaje.<sup>310</sup> Por su parte, el Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí no indica nada al respecto, dejando al albedrío, tanto de las partes como del perito su alcance y desarrollo.

El artículo 148 del Código Federal de Procedimientos Civiles<sup>311</sup> y el artículo 344 del Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí contemplan la misma hipótesis legal, indicando que se fijará fecha y hora para la celebración de la diligencia de la prueba pericial.

Al respecto, las partes actora y demandada, en sus respectivos escritos de demanda y contestación, deben ofrecer la prueba pericial al tratarse de un juicio por daño ambiental.

El juez, en su auto de radicación,<sup>312</sup> fijará fecha para el desahogo de la prueba pericial, manifestándole a la parte demandada lo establecido en el artículo 145 del Código Federal de Procedimientos Civiles;<sup>313</sup> es decir, si expresa su conformidad en que sólo sea nombrado un perito.

Planteamos que el momento idóneo para el desahogo de la prueba pericial en un juicio interdictal y de acción negatoria para reparar un daño ambiental debe ser el del vencimiento del término de contestación de la demanda.

Este planteamiento obedece a que el desahogo de la prueba pericial empieza a ejecutarse a los tres días después de vencido el término de contestación; de lo contrario, si transcurre más tiempo, el demandado tendrá la oportunidad de planear actividades con la finalidad de remediar o dar mantenimiento a patios, tuberías, maquinaria o equipos, toda vez que el daño es aun relativamente reciente, está “intacto” o incrementándose; salvo que en el resultado que arroje la prueba pericial se

---

<sup>310</sup> Lo anterior se localiza en el artículo 146: “... por medio de un escrito en que formulará las preguntas o precisará los puntos sobre que debe versar; hará la designación del perito de su parte, y propondrá un tercero para el caso de desacuerdo”. *Op cit.*

<sup>311</sup> El artículo 148 indica: “El tribunal señalará lugar, día y hora para que la diligencia se practique, si él debe presidirla”. *Op cit.*

<sup>312</sup> PALOMAR indica que “Se refiere al que da entrada a un asunto y resuelve que el mismo es de la competencia de determinado juez”. PALOMAR DE MIGUEL, Juan, *Diccionario para Juristas tomo I*, segunda edición, editorial Porrúa, México, 2003, página 162.

<sup>313</sup> El artículo 145 señala: “Cada parte nombrará un perito, a no ser que se pusieren de acuerdo en el nombramiento de uno solo”. En el auto de radicación le indicará a la parte demandada si está de acuerdo en que se nombre un solo perito. *Op cit.*

pueda tener una variación de valores y de resultados, por la intervención del demandado en la zona afectada o instalaciones, o porque el ambiente se regenere por sí mismo.

En tales supuestos se aplicaría lo establecido en el artículo 148 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como el artículo 344 del Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí.<sup>314</sup> De esta forma, el daño ambiental podría tener las siguientes características:

- I. El daño ambiental se mantuvo intacto.
- II. El daño ambiental se incrementó.
- III. El daño ambiental se trasladó a otros elementos ambientales.

Por lo mencionado, el juzgador y la normatividad procesal civil deben contemplar el desahogo de la prueba pericial, cuando se lleve a cabo el emplazamiento a la contienda judicial o al concluir el término concedido al demandado para contestar la demanda entablada en su contra.

En la mayor parte de los asuntos civiles se nombra a dos peritos, uno por cada parte (actor y demandado). En caso de conflicto sobre lo expresado en el dictamen pericial se plantea la pertinencia de nombrar un tercer perito, cuya designación es por parte del juzgador.

En atención a tal circunstancia, no consideramos pertinente, desde el punto de vista legal y ambiental, la intervención de un tercer perito por las siguientes razones:

- I. No habría tiempo, desde que se nombra al tercer perito, para realizar las evaluaciones, análisis y conclusiones del informe pericial.
- II. Las condiciones del daño pueden llegar a variar, generando incertidumbre en la existencia del daño ambiental.

---

<sup>314</sup> Cabe indicar que tales artículos contemplan idéntica hipótesis legal. El artículo 148 indica: “El tribunal señalará lugar, día y hora para que la diligencia se practique, si él debe presidirla”. Por su parte el artículo 344 manifiesta que: “El juez señalará lugar, día y hora para que la diligencia se practique, si debe presidirla o estima pertinente asistir a ella”. *Op cit.*

III. El daño ambiental puede extenderse a otros elementos ambientales.

IV. La falta de peritos ambientales, pues actualmente no existen un gran número de tales expertos.

La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en el párrafo segundo del artículo 34<sup>315</sup> establece que el juzgador requerirá a la SEMARNAT y la PROFEPA para que aporten todos los elementos periciales y demás pruebas.

Al respecto, no podemos coincidir con dicha hipótesis legal, al menos en lo concerniente a la probanza pericial, en razón de que el criterio emitido por dichas autoridades ambientales no se reviste de la imparcialidad necesaria en el juicio interdictal y de acción negatoria para reparar un daño ambiental.

#### **4.3 Puntos relevantes de la prueba pericial en un juicio interdictal y de acción negatoria por un daño ambiental**

##### **4.3.1 Contenido de la prueba pericial en un juicio por daño ambiental**

En la prueba pericial se le solicita al perito un criterio, una apreciación realizada mediante la invocación de la ciencia.<sup>316</sup> Esta valoración recae sobre los hechos y no sobre el ámbito jurídico.<sup>317</sup>

De esta forma, los hechos controvertidos, materia de peritaje, son la evaluación del daño ambiental existente y el grado de afectación que los elementos ambientales tienen en ese momento.

Asimismo, cabe mencionar que, actualmente, no existe una metodología determinada y general que sirva como modelo al momento de elaborar un dictamen pericial en materia ambiental.

---

<sup>315</sup> El artículo 34 segundo párrafo establece: "El juez requerirá a la Secretaría y a la Procuraduría para que aporten todos los elementos periciales, testimoniales, documentales y demás indicios y elementos de prueba con los que cuenten. Los servidores públicos estarán obligados a cumplir con dicha obligación". *Op cit.*

<sup>316</sup> VIZCARRA DAVALOS, José, *Teoría General del Proceso*, sexta edición, editorial Porrúa, México, 2003, página 235.

<sup>317</sup> DE SANTO manifiesta que "el peritaje debe versar sobre hechos y no sobre cuestiones jurídicas, ni sobre exposiciones abstractas que no influyan en la comprobación, la apreciación o la interpretación de los hechos del proceso". DE SANTO, Víctor, *Op. cit.*, p. 26.

Cada ciencia plantea y desarrolla una serie de pasos en la elaboración y conclusiones de dictámenes periciales cuando son requeridos en juicios civiles, fiscales o penales, según el tema que se pretenda demostrar.

Cabe indicar que los requerimientos del informe pericial deben seguir una argumentación propia, es decir, un proceso cognitivo especializado que se realiza mediante la articulación de inferencias diagnósticas concatenadas con los datos de la causa judicial, coherentes y exhaustivas, basadas en la razón suficiente y con conocimiento idóneo sobre el caso que se trata para llegar, así, a conclusiones fundadas.

Por ello, para el peritaje en el juicio interdictal y de acción negatoria por daño ambiental, la valoración debe seguirse mediante la ayuda de diversas disciplinas del conocimiento (ingeniería, química, legal y económica), convirtiéndose a la postre en un eficaz medio de convicción para el juez sobre la magnitud del daño ambiental generado.

De tal manera, el peritaje ambiental, en nuestra opinión, debe tener las siguientes características:

- I. Debe abordar lenguaje técnico, jurídico y general. No se puede delimitar a una sola disciplina científica.

Su lenguaje debe ser sencillo y científico, para que lo comprendan el juez y la parte actora, ya que el demandado cuenta con personal que maneja e interpreta el lenguaje científico de la ingeniería y la química. Sin embargo, es necesario destacar que no todas las partes que intervienen en un juicio interdictal o de acción negatoria tienen el mismo nivel de conocimientos técnicos o legales.

- II. Debe contar con una estructura lógica y específica que sirva de apoyo a todo peritaje ambiental, donde únicamente se cambie la evaluación y valoración del elemento o elementos ambientales afectados; es decir, que exista una estructura única y que solo varíe la forma de evaluar los elementos ambientales afectados.

- III. No debe dejar dudas en su conclusión o conclusiones, especificando plenamente la existencia o inexistencia del daño ambiental.

En este sentido, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en su artículo 36 segundo párrafo<sup>318</sup> manifiesta que debe probarse el nexo de causalidad<sup>319</sup> entre el daño y la conducta imputada, por lo que opinamos que el desahogo de la prueba pericial y sus conclusiones pueden acreditar tal situación.

Por esta razón, el informe pericial debe limitarse a los puntos planteados a los peritos en el momento de ofrecerse esta prueba, abarcando en el dictamen cuestiones que los peritos consideren como sus antecedentes, causas o fundamentos necesarios.

En este punto es importante destacar que si el dictamen versa sobre puntos ajenos y diferentes, carecerá de eficacia probatoria, porque no se concentra en lo que se le requirió al perito antes de efectuarse el peritaje.

En nuestra opinión, en los juicios civiles por daño ambiental, todo dictamen pericial debe contener lo planteado en la siguiente tabla:

Ítems generales	Ítems específicos
Descripción de la persona (física o jurídica) a quien se	a) Razón social o denominación / nombre.
	b) Domicilio.

<sup>318</sup> El artículo 36, segundo párrafo señala: "El nexo de causalidad entre el daño ocasionado y la conducta imputada al demandado debe probarse en la sustanciación del juicio. El juez considerará en su valoración la naturaleza intrínseca de la conducta y la forma en que se ha desarrollado para generar o causar el daño". *Op cit.*

<sup>319</sup> En lo que respecta al nexo de causalidad podemos invocar la siguiente jurisprudencia, donde puntualmente se especifica esta figura jurídica: RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. NEXO CAUSAL. Según el artículo 1913 del Código Civil para el Distrito Federal, la responsabilidad civil objetiva, sobreviene al hacer uso de mecanismos, instrumentos, aparatos, o sustancias peligrosas que causan daño y obligan al propietario de ellos a responder del mismo, pero el numeral en cuestión debe entenderse en el sentido de que el daño causado, es consecuencia de una relación directa entre la condición y el resultado dañoso, o sea, que no haya mediado algún otro suceso que fracture dicha vinculación, por lo que si en la especie se reclamó la responsabilidad civil objetiva, con base en que un incendio se originó en el local de la ahora quejosa, esto es lo que debe tenerse en consideración, o sea, determinar con las pruebas de autos si se acredita la circunstancia del nexo causal para la aplicación del aludido artículo 1913, es decir, cuál ha sido la causa del suceso que ocasionó el siniestro, si fue por el uso o manejo de sustancias inflamables, si el incendio se originó en el local de la quejosa, por virtud de sustancias inflamables o se debió a factores externos, para de esa manera determinar cuál fue el origen del incendio y de allí establecer la responsabilidad correspondiente.

Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, octava época, tomo III, segunda parte 2, página 690.

le imputa el daño ambiental.	c) Nombres de los colindantes.
	d) Actividad preponderante.
	e) Descripción de sus instalaciones, procesos e insumos.
Descripción del elemento o elementos ambientales y materia de examen o estudio (forma y estado en que se encontraba al momento de hacer el peritaje).	a) Qué elementos son los afectados.
	b) Cuál refiere más daño y por qué.
	c) Dónde se localizan los elementos ambientales dañados.
	d) En qué parte (físicamente) se localiza el daño.
	e) Evidencia fotográfica del daño ambiental (si es procedente, de acuerdo al elemento ambiental), así como de la maquinaria o equipo e instalaciones. En general del medio ambiente de trabajo <sup>320</sup> que tiene el demandado.
Precisión de los puntos del peritaje ambiental.	a) Se formularán o precisarán los puntos sobre qué debe versar el peritaje.
Relación detallada de todas las operaciones.	a) Describir cada una de las maquinarias o equipos existentes en el lugar (haciendo referencia a la capacidad operativa).
	b) Qué materia prima utiliza y cómo se almacena.
	c) Qué sustancia química emplea (dónde se almacena temporalmente antes y después de su uso).
	d) Qué tipo de residuos peligrosos son generados en cada máquina y equipo (describiendo la forma de almacenamiento, tipo de contenedores, tiempo de almacenamiento y descripción de las condiciones de seguridad de los almacenes).
	e) Si genera calor, ruido o tiene fugas de aceite o agua, y si las mangueras y sistema eléctrico funcionan adecuadamente.
	f) Layout (planos) de la planta donde se ubican la maquinaria, el equipo, almacenes (de residuos peligrosos y de sustancias químicas), recipientes sujetos a presión, contenedores de sustancias altamente peligrosas.

<sup>320</sup> De acuerdo con el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, en su artículo 2º fracción XI, indica lo que es el medio ambiente de trabajo y a la letra dice: "Es el conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre, que interactúan en el centro de trabajo". *Diario Oficial de la Federación*, enero 21, 1997, México, D.F.

Descripción y desarrollo de metodología	<p>a) En primer término, desarrollar diagramas de Pareto<sup>321</sup> y posteriormente la metodología de la estratificación.<sup>322</sup></p> <p>b) Con la información que arrojó la estratificación, realizar diagramas de Ishikawa.<sup>323</sup></p> <p>c) En su defecto, hacer uso de diversa metodología o de un programa electrónico para evaluar el daño ambiental; se debe precisar el alcance y resultado de dicho programa informático.</p> <p>d) Cotejar datos con los estándares de las normas oficiales mexicanas en materia ambiental (ruido, atmósfera, residuos peligrosos, suelo y agua).</p> <p>e) Cotejar datos de los estándares de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad e higiene de la maquinaria, equipo, sustancias químicas e instalaciones.</p>
Resultado.	<p>a) Manifestar la existencia o no del daño a los elementos ambientales.</p> <p>b) Señalar el grado de afectación de mayor a menor de acuerdo con los elementos ambientales dañados.</p> <p>c) Indicar la procedencia o no de la remediación de acuerdo con el elemento ambiental afectado y tiempo de recuperación.</p> <p>d) Cotejo de los estudios técnicos del demandado con el dictamen pericial.</p>
Recomendaciones.	<p>a) De acuerdo con los elementos ambientales dañados.</p>

<sup>321</sup> KUME indica: "En 1897, el economista italiano V. Pareto presento una fórmula que mostraba que la distribución del ingreso es desigual. En 1907, el economista norteamericano M. C. Lorenz expreso una teoría similar por medio de diagramas. Estos dos estudiosos indicaron que una proporción muy grande del ingreso está en manos de muy pocas personas. Mientras tanto, en el campo de control de calidad, el Dr. J. M. Juran aplicó el método de diagrama de Lorenz como fórmula para clasificar los problemas de calidad en los *pocos vitales* y los *muchos triviales*, y llamo este método *análisis de Pareto*. Señalo que, en muchos casos, la mayoría de los defectos y de su costo se deben a un número relativamente pequeño de causas". KUME, Hitoshi, *Herramientas Estadísticas Básicas para el Mejoramiento de la Calidad*, primera edición, editorial norma, Colombia, 2002, páginas 19 y 20.

<sup>322</sup> La estratificación clasifica la información recopilada sobre una característica de calidad. Toda la información debe ser estratificada de acuerdo con operadores individuales en máquinas específicas y así sucesivamente, con el objeto de asegurarse de los factores asumidos. Se observará que después de algún tiempo las piedras, arena, lodo y agua pueden separarse, en otras palabras, lo que ha sucedido es una estratificación de los materiales; este principio se utiliza en manufacturera. Los criterios efectivos para la estratificación son: tipo de defecto, causa y efecto, localización del efecto, material, producto, fecha de producción, grupo de trabajo, operador, individual, proveedor, lote etc. *Metodología de la Estratificación*, <http://www.mitecnologico.com/Main/EstratificacionCalidad>. Fecha de consulta: 10 de enero del 2015.

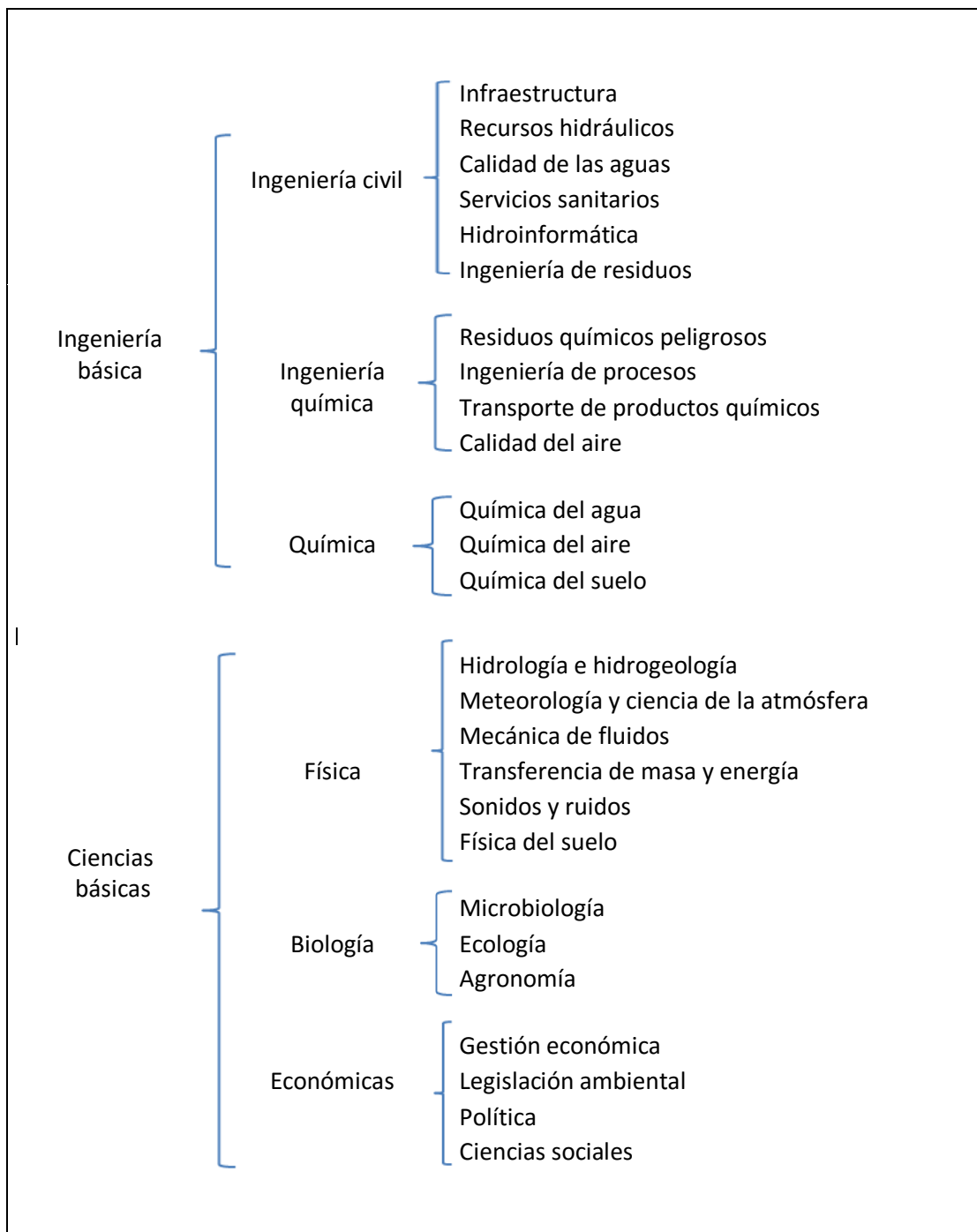
<sup>323</sup> KUME señala que el diagrama de Ishikawa es una metodología donde: "El resultado de un proceso puede atribuirse a una multitud de factores, y es posible encontrar la relación causa-efecto de esos factores. Podemos determinar la estructura o una relación múltiple de causa-efecto observándola sistemáticamente. Es difícil solucionar problemas complicados sin tener en cuenta esta estructura, la cual consta de una cadena de causa y efectos, y el método para expresar esto en forma sencilla y fácil es un diagrama de causa-efecto". KUME, Hitoshi, *Op. cit.*, p. 27.

Para desarrollar las herramientas de estratificación, diagrama de Pareto y diagrama de Ishikawa, se requiere que el perito conozca y desarrolle esta metodología en forma plena y eficaz, para que el resultado brinde una certeza de valoración del daño ambiental ocasionado y manifieste el grado de afectación correspondiente a los elementos ambientales.

Por otro lado, consideramos pertinente hacer uso de herramientas empleadas en la industria, ya que son instrumentos o metodologías que aportarían un valor importante en la identificación de un daño ambiental.

De igual manera, la tabla de Klear expone los bloques constructivos de que se compone el ejercicio de la ingeniería ambiental. Esta tabla puede ser de ayuda en el desarrollo del peritaje por daño ambiental, siempre y cuando sea posible aplicarse al caso concreto.





En la propuesta del formato del peritaje deberían agregarse diversos planos de las instalaciones, maquinaria o equipo de la persona física o moral, donde se contemple la siguiente información:

- I. Superficie de la parte demandada.

- II. La ubicación de la maquinaria o equipo que genera el daño ambiental.
- III. Los almacenes de materia prima, de residuos peligrosos y de los residuos no peligrosos.
- IV. Los recipientes sujetos a presión y tanques de almacenamiento o de los ductos de suministro de sustancias químicas.

Lo anterior debe elaborarlo, formularlo, plantearlo y exhibirlo el perito; por lo que diferimos de lo expresado por De Santo,<sup>324</sup> ya que el perito debe contar con la mayor cantidad de formación y preparación para elaborar por su cuenta el contexto completo del peritaje.

Por otro lado, coincidimos con la opinión de De Santo, en el sentido de que es el juez quien debe contar con el registro actualizado de peritos y el enfoque profesional de cada uno de ellos, en razón de que el perito en cuestión podría ser especialista en materia de residuos peligrosos, sin contar con la experiencia y conocimientos en el tema de la atmósfera o suelos.

Así, el peritaje debe ser un instrumento técnico-jurídico que sirva como medio de enlace entre los hechos y lo que se pretende demostrar, por lo que su contenido abarcaría temas específicos de valoración, los instrumentos, la determinación de la causa, los efectos de los hechos y la metodología para su desarrollo.

De Santo expone en forma clara que el peritaje, en general, tiene determinados fines y su contenido ayuda a esclarecer los hechos controvertidos.

En este tipo de peritajes, como consecuencia de su contenido, el objeto de estudio está impregnado de cuestiones técnicas y de valores numéricos insertos en las normas oficiales mexicanas en materia ambiental y de seguridad.

---

<sup>324</sup> DE SANTO indica: “El perito, para el mejor cumplimiento de su cometido, puede consultar el caso con otros expertos, obtener conceptos u opiniones que lo asesoren, solicitar la preparación de planos o croquis aclarativos de su dictamen y según sus directivas, siempre que luego adopte y explique su personal conclusión”. DE SANTO, Víctor, *Op cit.*, p. 60.

El peritaje ambiental, en su aspecto técnico, debe ser claro en sus conclusiones, que resulten inequívocas y que, por lo tanto, el juez pueda hacerlas suyas en la sentencia definitiva que vaya a dictar.

Otro aspecto importante del peritaje ambiental es que no deben existir limitaciones en la exposición de los conceptos, motivos y conclusiones formulados por parte del perito en su informe. En caso de que un dictamen que careciera de lo anterior, no tendría valor probatorio pleno al dictarse sentencia definitiva.

Asimismo, si el perito no resultase convincente en la formulación de sus conclusiones al emitir su informe pericial, el daño ambiental no quedaría identificado y demostrado al juzgador, por consiguiente no le sería útil al momento de dictar la sentencia definitiva.

Por último, en un juicio interdictal y de acción negatoria para reparar un daño ambiental, en lo que respecta a los honorarios del perito o los peritos, analizamos la importancia de efectuar reformas al artículo 348 de la legislación procesal civil de San Luis Potosí.<sup>325</sup>

Por su parte, el Código Federal de Procedimientos Civiles señala en su artículo 159 que “los honorarios de cada perito serán pagados por la parte que lo nombró o en cuya rebeldía lo hubiere nombrado el tribunal, y, los del tercero, por ambas partes, sin perjuicio de lo que se resuelva definitivamente sobre condenación en costas”.<sup>326</sup>

Vemos entonces una similitud en el contenido y alcance de las hipótesis legales, pero sugerimos la siguiente adición tanto para el ordenamiento procesal federal como del estado de San Luis Potosí, quedando de la siguiente manera:

Artículos 159 y 348 (se adiciona un segundo y tercer párrafo respectivamente).

“En el caso de un juicio interdictal y de acción negatoria para reparar un daño ambiental, los honorarios de cada perito que fuesen designados por

---

<sup>325</sup> El artículo 348 indica: “El honorario de cada perito será pagado por la parte que lo nombró, o en cuyo defecto lo hubiere nombrado el juez, y el del tercero, por ambas partes, sin perjuicio de lo que disponga la resolución definitiva sobre condenación en costas”. Código publicado en el *Periódico Oficial* el 27 de febrero de 1947. *Op cit.*

<sup>326</sup> Fe de erratas, *Diario Oficial de la Federación* el 1º de marzo de 1943.

ambas partes procesales y los del tercero en cuya rebeldía lo hubiere nombrado el tribunal, serán pagados por partes iguales por la parte demandada y por las autoridades administrativas ambientales en el ámbito federal y estatal, sin perjuicio de lo que se resuelva definitivamente sobre condenación en costas y gastos<sup>327</sup>, cuyo concepto es diferente a la reparación del daño ambiental.

Para garantizar el pago del perito ambiental por la parte demandada (persona física o moral), se atenderá al embargo que se hizo sobre bienes muebles e inmuebles, sin que se deje sin efecto el embargo, hasta cubrir los honorarios del perito”.

Observamos entonces que la parte actora se encuentra en desventaja financiera, técnica y logística respecto de su contraparte, ya que esta última, junto con las autoridades administrativas, cuenta con tecnología y recursos financieros más desarrollados y mejor implementados.

Estas variables (financieras y técnicas) son de pleno conocimiento y uso reiterado de la parte demandada y de la autoridad responsable y, debido a la deficiente o nula administración interna de las dos partes, se provoca la generación del daño ambiental. En consecuencia, son ellas las que deberían ser condenadas a cubrir los honorarios de los peritos empleados en el juicio.

Lo anterior obedece a que si se tuviera un control administrativo pleno y seguro en la forma de realizar las operaciones y la vigilancia de las actividades estaríamos en la situación de que el daño ambiental no existiría, al igual que el juicio y, por consiguiente, el nombramiento de peritos.

Para fijar el monto de los honorarios del perito sirve como base lo establecido en el informe pericial; es decir, indicamos que además de las conclusiones, debe existir un apartado de recomendaciones planteadas por el perito o peritos al momento de rendir sus informes periciales.

---

<sup>327</sup> BAÑUELOS SÁNCHEZ indica que “las costas deben entenderse como los gastos que son necesarios hacer para iniciar, tramitar o concluir un juicio, no comprendiéndose en las costas, los gastos innecesarios ni los que estén prohibidos por la ley o sean contrarios a la ética de los empleados y funcionarios judiciales”. BAÑUELOS SÁNCHEZ, Froylan, *Práctica civil forense*, quinta edición, editorial Porrúa, México, 1978, página 233.

El juez, con base en estas recomendaciones y al costo de ejecución de la reparación del daño ambiental, podría fijar un porcentaje proporcional (un 10 % por citar un ejemplo), mismo que serviría como pago por concepto de honorarios al perito o peritos.<sup>328</sup>

#### **4.3.2 Desahogo de una audiencia aclaratoria por el peritaje presentado en un juicio por daño ambiental**

Los artículos 148 y 344 del Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código Adjetivo de San Luis Potosí respectivamente expresan que: “En cualquier caso se fijará a los peritos un término prudente para que presenten su dictamen”.

Es necesario que el tiempo de presentación de los informes periciales se encuentre agregado en autos antes de citar a sentencia definitiva el juicio.

El juez debe observar el contenido del artículo 344 del Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí.<sup>329</sup> Para ello detectará los elementos ambientales dañados, así como la fecha en que se inició la valoración del daño ambiental.

El juzgador, al concluir el periodo otorgado a los peritos para que exhiban el dictamen pericial, sin que se haya presentado en el juicio interdictal y de acción negatoria para reparar un daño ambiental, debería establecer una sanción económica.

---

<sup>328</sup> La jurisprudencia nos puede aportar información vertida sobre el monto de las prestaciones, esta jurisprudencia se llama “COSTAS”: “La cuantía que debe tomarse en cuenta para efectos de su tasación debe ser una sola para ambas partes, y su determinación dependerá de lo resuelto en la sentencia definitiva.

La cuantía que debe tomarse en cuenta para efectos de la tasación de las costas, debe ser una sola para ambas partes, y en todo caso la forma de su determinación (de la cuantía) dependerá de lo resuelto en la sentencia definitiva. Así, el interés del negocio lo representará el monto de las prestaciones reclamadas, cuando el actor obtiene todo lo reclamado y el demandado es condenado a costas, o cuando la sentencia absuelve a este de todas las prestaciones y es el actor quien resulta obligado a la liquidación de costas. En cambio, la cuantía de referencia la constituirá la suma de las prestaciones a cuyo pago se condenó, en aquellos casos en que por sentencia ejecutoriada se condene al demandado a pagar una cantidad menor que la reclamada, reduciéndose el quantum en los términos de la sentencia, con independencia de a cuál de las partes se le haya impuesto el pago de costas, porque tan injusto sería que el reo cubriera las costas sobre la base de las prestaciones reclamadas y respecto de las cuales el actor no probó tener derecho, como que este se viera obligado a cubrir por concepto de costas, también tasadas atendiendo al monto de lo reclamado, una cantidad mayor que la que obtuvo a través de la sentencia”.

Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, octava época, tomo XV-I, febrero de 1995, tesis I.8o.C.96 C, página 162.

<sup>329</sup> El artículo 344 establece: “El juez señalará lugar, día y hora para que la diligencia se practique, si debe presidirla o estima pertinente asistir a ella. En cualquier otro caso fijará a los peritos un término prudente para que presenten su dictamen. En todo caso las partes podrán formular a los peritos las cuestiones que sean pertinentes”. *Op cit.*

Consideramos oportuno que el juez fije fecha y hora para una audiencia, la cual se celebrará a los cinco días de la recepción del informe pericial; lo anterior, para que el perito pueda dar al juzgador las explicaciones detalladas y precisas o aclaraciones que se requieran con respecto al peritaje.

Esta audiencia se establecerá con la finalidad de que el juez formule los cuestionamientos pertinentes a los peritos para clarificar la descripción física, de maquinaria, de sustancias químicas, cuestiones técnicas o de documentos agregados al peritaje, con respecto de las cuales exista alguna duda.

Las partes y sus abogados tienen el derecho de asistir a la audiencia, la cual se desahogará aun sin su presencia. De dicha diligencia, el juez levantará el acta correspondiente, firmando todas las personas que intervinieron.

#### **4.3.3 Conocimientos requeridos para la interpretación y conclusiones de un peritaje por daño ambiental**

Como lo mencionamos en párrafos anteriores, el juez posee conocimientos generales que le son proporcionados a través de su formación universitaria y especializadas en la ciencia del derecho.<sup>330</sup>

Sin embargo el juez, en determinadas y específicas controversias judiciales, requiere de nuevos conocimientos de los que carece y que en su mayor parte son proveídos por terceras personas.

No obstante lo anterior, el juez, ante un juicio tramitado para reparar un daño ambiental, requiere de conocimientos sobre la normatividad ambiental y de seguridad.

En este sentido, el juez requiere conocer, identificar y analizar el organigrama de los ordenamientos jurídicos, qué tipo de esferas o entes son regulados mediante estos ordenamientos legales, la existencia de las leyes federales y sus reglamentos.

---

<sup>330</sup> DE SANTO señala que “la importancia del peritaje para la solución de muchos pleitos lo pone de manifiesto la circunstancia de que el juez, si bien es un técnico en derecho, no lo es por lo general en otras ciencias ni posee conocimiento sobre cuestiones de arte, de mecánica y en numerosas actividades prácticas que exigen estudios especializados o amplia experiencia”. DE SANTO, Víctor, *Op. cit.*, p. 10.

A diferencia de otras disciplinas jurídicas, el Derecho Ambiental, por su propia naturaleza, solicita la incorporación (desde el punto de vista técnico) de otras ciencias del conocimiento como la química o la ingeniería. Esta incorporación técnica se establece en las normas oficiales mexicanas.

Entre los diversos temas manejados en la normatividad ambiental, podemos mencionar los siguientes en forma concreta y general:

- I. Emisiones a la atmósfera.
- II. Generación de residuos peligrosos.
- III. Tratamiento de residuos peligrosos.
- IV. Impacto ambiental.
- V. Riesgo ambiental.
- VI. Descarga de aguas residuales.
- VII. Contaminación de suelo.
- VIII. Afectación a la fauna y flora originaria del lugar.

Además, existen temas que se relacionan con otros elementos ambientales, entre los cuales podemos mencionar los siguientes:

- I. Cantidades de emisión a la atmósfera y transferencia de sustancias contaminantes a los diferentes medios de la naturaleza (aire, agua y suelo).
- II. Cantidades de transferencia de tales sustancias fuera del establecimiento, ya sea para su tratamiento, reciclaje, reutilización o disposición final, en el caso de empresas generadoras.
- III. Información sobre métodos de tratamiento *in situ* de residuos peligrosos, de aguas de proceso y de residuos no peligrosos.
- IV. Cuestiones más complejas como lo señalado en los anexos de la Licencia Ambiental Única<sup>331</sup> que indica que “existen instrumentos

---

<sup>331</sup> La Licencia Ambiental Única (LAU) fue instrumentada principalmente para alcanzar dos objetivos: 1) Crear un procedimiento único para industrias que requieran de algún permiso ambiental de jurisdicción federal; 2) como formato para el inventario de emisiones a la atmósfera de las industrias sujetas a

derivados de la normatividad ambiental que dan un enfoque de multimedios, donde la empresa analiza prioridades en materia de sus procesos promoviendo el uso de *tecnologías limpias* y la detección de problemas ambientales”.<sup>332</sup>

De este modo, se debe ampliar el concepto de lo que actualmente se conoce como tecnologías de control e incorporar la consideración sobre la necesidad de sustitución de materias primas y sustancias peligrosas, el cambio o modernización de procesos, la racionalización del uso del agua y la energía, la utilización de mejores combustibles y el reciclaje de residuos o subproductos.

Por lo anterior, el juez que le dé trámite a un juicio por un daño ambiental, debería identificar, conocer y dominar el aspecto normativo-ambiental a nivel federal y estatal. En lo referente a la cuestión técnica, las dudas e inquietudes relacionadas con el daño ambiental serán clarificadas mediante el informe pericial.

Hay que tomar en cuenta que, además de la normativa propiamente ambiental existe, en México, un buen número de normas jurídicas de seguridad e higiene directamente relacionadas (por ejemplo: en un almacén de residuos peligrosos, los temas ambientales son la separación de los residuos y su clasificación, la compatibilidad, la bitácora y los manifiestos y en materia de seguridad son el apartarrayos, el sistema de tierras, la iluminación y la señalética).

El objeto de estudio que comprenden estas normas de seguridad y dentro de la complejidad del problema (daño ambiental), figura como una consecuencia de la forma en que se manifiestan los fenómenos físicos y químicos, que no se producen generalmente por una causa única y aislada, sino por la interacción de una variedad de causas.<sup>333</sup>

Con base en el conocimiento del juzgador respecto a la normatividad ambiental a nivel federal y estatal, así como en seguridad e higiene, consideramos lo siguiente:

---

jurisdicción federal. WALSS, Rodolfo, *Guía práctica para la gestión ambiental*, primera edición, editorial McGraw Hill, México, 2001, página 63.

<sup>332</sup> Este párrafo viene en el anexo I del formato de la Licencia Ambiental Única.

<sup>333</sup> WALSS, Rodolfo, *Op. cit.*, p. 53.



Si el juez estima que las conclusiones formuladas en el informe pericial son improbables e inverosímiles, según la experiencia o conocimiento del juzgador, este no podrá considerar la existencia de daño ambiental o que el demandado haya ocasionado el daño ambiental que se le reclama en la demanda interdictal o de acción negatoria.

El informe pericial debe ser convincente y brindarle la certeza de la existencia física o técnica del daño generado al ambiente o alguno de sus elementos.

Por otro lado, si dentro del proceso se presentan y desahogan pruebas que desvirtúen las conclusiones del dictamen o dejen al juez en situación de incertidumbre y luego de un análisis del expediente, el juzgador podrá estar en condiciones de fundamentar la ineficacia probatoria del informe pericial.

#### **4.3.4 ¿Quién puede ser perito ambiental: la autoridad administrativa ambiental o un consultor ambiental?**

A nivel federal encontramos la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal,<sup>334</sup> de conformidad con lo dispuesto por los artículos 81, fracción XXIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 52, fracción XVII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y 5, 6, 7, 8, 12, 16 y 21 del Acuerdo General 16/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,<sup>335</sup> que regula la integración de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación.

En el caso federal, dentro Poder Judicial de la Federación está el Consejo de la Judicatura Federal, el cual gestiona, convoca y registra a las personas que cubren los requisitos para ser perito a nivel federal.

---

<sup>334</sup> El Consejo de la Judicatura Federal es un órgano que se encarga de administrar y vigilar la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación. Este Consejo fue creado con las reformas constitucionales de 1994, una actividad importante de este órgano es vigilar y en su caso aplicar las sanciones correspondientes a los servidores públicos, cuando se detecte alguna anomalía en el ejercicio de sus funciones. *Diario Oficial de la Federación*, mayo 26, 1995, México, D.F.

<sup>335</sup> *Acuerdo general que regula la integración de la lista de personas que pueden fungir como peritos*, [www.cjf.gob.mx/noticias/docs\\_noticias/2011/Acuerdo16\\_2011.pdf](http://www.cjf.gob.mx/noticias/docs_noticias/2011/Acuerdo16_2011.pdf), fecha de consulta: 14 de abril del 2014.

Por su parte, en el estado de San Luis Potosí, quien lleva a efecto tales actividades es la Dirección de Peritos, la cual está subordinada al Poder Ejecutivo.

Consideramos que el Poder Judicial de San Luis Potosí, por conducto del Consejo de la Judicatura, es quien debería realizar las actividades de convocar a las personas y registrar a los peritos, ya que es tal autoridad la que durante el desarrollo de sus actividades hace uso de los peritos registrados a nivel estatal.

En San Luis Potosí existe, además, la Ley de Peritos,<sup>336</sup> la cual indica los requisitos para ser perito y cuenta con un Registro Estatal de Peritos, cuyo ámbito de ejercicio es únicamente en el estado, destacando también las diferentes clases de perito.

El artículo 4º en su fracción II de la invocada Ley de Peritos, habla de los peritos dictaminadores,<sup>337</sup> los cuales se ajustan a los criterios de un juicio interdictal o de acción negatoria para reparar un daño ambiental.

Es importante que tanto la parte actora como la parte demandada, respectivamente, que pretendan emplear un perito, se aseguren de que este se encuentre enlistado efectivamente en el Registro Estatal de Peritos.<sup>338</sup>

La laguna existente en el Registro Estatal de Peritos consiste en la falta de peritos de índole ambiental, por lo que estimamos pertinente el que se realicen reformas a la Ley de Peritos en materia ambiental.

El perito ambiental requiere, para el desempeño de su cargo, capacidad intelectual y conocimientos técnicos amplios en este rubro. De igual manera, dentro de estos extremos de reforma y adición, es pertinente considerar ciertos requisitos necesarios para las personas o entidades cuya actividad se relaciona con la materia ambiental,

---

<sup>336</sup> *Periódico Oficial*, mayo 31, 1996, S.L.P.

<sup>337</sup> En dicha fracción II habla de que los peritos dictaminadores, son “los profesionistas, técnicos o prácticos que tienen título o conocimiento en la ciencia, arte o industria sobre la que verse el asunto acerca del cual emiten su dictamen”. *Op cit.*

<sup>338</sup> El artículo 2º establece: “El Registro Estatal de Peritos como un medio de control de orden público e interés general, que estará a cargo de la Secretaría General de Gobierno”. Este artículo está relacionado con el 3º de dicha ley al mencionar: “Los Poderes Legislativo y Judicial y las dependencias de Ejecutivo del Estado, de los Municipios y sus organismos descentralizados, solo admitirán los avalúos y dictámenes periciales que hayan sido expedidos por peritos inscritos en el registro a que se refiere el artículo anterior, así como los avalúos catastrales y los emitidos por corredores públicos de conformidad con lo previsto en sus leyes o reglamentos respectivos”. *Op cit.*

pero que no cuentan con la acreditación como perito ambiental de acuerdo con la Ley de Peritos de San Luis Potosí y podemos mencionar como ejemplo las siguientes:

- I. Colegios.
- II. Empresas de asesoría ambiental.
- III. Personas físicas que son asesores ambientales y en seguridad.
- IV. Laboratorios de análisis (de agua residual, ruido y vapores orgánicos).

Asimismo, existen otras personas o entidades que cuentan con diversas acreditaciones y certificaciones y cuyos estudios o revisiones tienen determinado valor técnico y legal para las autoridades administrativas, entre las que podemos señalar:

- I. Los auditores ambientales acreditados ante EMA.
- II. Unidades de verificación acreditadas ante EMA.
- III. Personas físicas o morales acreditadas como auditores internos o auditores líderes en ISO 14001 u OSHAS 18001.

Estimamos pertinente que las empresas legalmente constituidas, cuyo objeto sea brindar asesoría en seguridad, higiene y medio ambiente, realicen las gestiones correspondientes para constituirse en peritos ambientales.<sup>339</sup>

Esto en virtud de que las personas morales o físicas, para el desarrollo de sus operaciones, tienen la posibilidad de reunir a un grupo de personas especializadas en determinadas áreas ambientales, con lo cual se estructura un grupo de trabajo adecuado para realizar dictámenes periciales en materia ambiental.

---

<sup>339</sup> DE SANTO, alude a este grupo de personas que pueden realizar un peritaje industrial, señalando que este tipo de peritajes “requiere la colaboración de profesionales o técnicos especialistas, y que comprende una materia de relativa complejidad que no puede cubrirse con un solo profesional y generalmente exige un equipo, ya sea para establecer la capacidad técnica de la industria, el cumplimiento de reglamentos”. DE SANTO, Víctor, *Op. cit.*, p. 127.

Por último, se propone a los funcionarios públicos activos en la administración pública federal o estatal de carácter ambiental, o las personas que dejaron de ser tales, para que puedan ser nombrados como peritos ambientales. Es importante mencionar que los referidos no deben incurrir en las adiciones que proponemos al artículo 346 del Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí (lo anterior, se mencionó en el punto 4.2.2 de este capítulo), ya que tendrían que ser recusados de su cargo.

Con base en el párrafo anterior, las áreas administrativas de SEMARNAT, CONAGUA, SEGAM y PROFEPA, no pueden asignar funcionarios como peritos ambientales, ya que estas dependencias tienen el carácter de demandadas en el juicio interdictal y de acción negatoria donde se reclama la reparación de un daño ambiental, debiendo ser el perito ajeno y externo a las partes involucradas en el juicio.

## **CAPÍTULO V    Ofrecimiento y desahogo de las pruebas de inspección judicial y documental en un proceso civil por un daño ambiental**

### **5.1 Introducción**

En el presente capítulo trataremos dos medios de prueba que, por su desenvolvimiento procesal, tienen un papel fundamental para probar la acción y las excepciones planteadas por las partes en un juicio civil de acción negatoria e interdictal, para reparar un daño ambiental: la inspección judicial y la documental.

En lo referente a la prueba de inspección judicial abordaremos, de acuerdo con lo planteado por la doctrina procesal civil, cuestiones relacionadas con su contenido y ofrecimiento, haciendo énfasis en la utilidad procesal que puede tener en un juicio interdictal y de acción negatoria para acreditar el daño ambiental.

A través de la inspección judicial el juez, al constituirse en el domicilio del demandado (quien está generando el daño ambiental) podrá observar las instalaciones, las características de los almacenes de sustancias químicas, de residuos peligrosos, el funcionamiento de la maquinaria, equipo, cuántos y qué clase de procesos productivos existen, cuantas áreas productivas hay en las instalaciones, así como los tipos y cantidades de las sustancias químicas que emplea en sus procesos productivos.

Con el desahogo de la prueba de inspección judicial a las instalaciones, actividades y sustancias químicas empleadas por el demandado, el juez, por medio de sus sentidos, puede tener una apreciación de los elementos ambientales que han sido afectados por las operaciones y procesos productivos del demandado.

Respecto a la prueba documental, exponemos en forma breve en qué consiste y cómo está establecida en la normatividad procesal civil.

Por otra parte, con las pruebas documentales el juez conocerá si el demandado ha cumplido con la normatividad ambiental, verificando además que la información contenida en sus documentos privados o públicos se encuentren apegados y actualizados a sus operaciones, instalaciones o maquinaria empleadas para sus procesos productivos.

Cabe destacar que esta documentación debe estar apoyada en la normatividad ambiental y de seguridad. Esta legislación previene la existencia de los programas, análisis y permisos que deben estar en posesión y a disposición del demandado. Con lo anterior, el juez observará las actividades, instalaciones y materias primas utilizadas en los procesos productivos del demandado, para evaluar la forma en que estas circunstancias pueden contribuir a la generación de un daño ambiental.

Asimismo, creemos pertinente esclarecer cuáles son las pruebas documentales que pueden estar en posesión de la parte demandada y que guardan estrecha relación con sus procedimientos y formatos de control interno, establecidas para mejorar su desempeño en materia ambiental y de seguridad.

Indicaremos los tipos de documentos (privados o públicos) derivados de la normatividad ambiental y de seguridad, cuyo contenido se deriva del cumplimiento o incumplimiento de los requerimientos legales por parte de las personas físicas o morales, cuyas actividades u operaciones tengan incidencia sobre el ambiente.

Otro punto abordado dentro de este capítulo con respecto a la prueba documental es el que se refiere a los documentos que tienen las autoridades administrativas como parte de las gestiones que realizan las personas físicas o morales dentro de sus atribuciones, como parte del cumplimiento de los requerimientos legales ambientales.

En este punto se determinará qué tipo de documentos están en posesión de la parte demandada y de las autoridades administrativas, a la vez que llevaremos a cabo un análisis de los efectos y consecuencias que tendrían estos documentos en los autos del juicio por un daño ambiental.

En resumen, abordaremos la importancia de las pruebas documentales, la inspección judicial desde su ofrecimiento, el desahogo, así como las consecuencias legales que tendrían en la sentencia definitiva.

## 5.2 Definición y características de la inspección judicial

Palomar se refiere a la inspección como un “acto jurisdiccional que tiene como fin que el juez tenga un conocimiento directo y sensible de alguna cosa o persona relacionadas con el litigio”.<sup>340</sup>

Según Mateos Alarcón esta prueba es “el examen que el juez hace en persona y con arreglo a derecho de las costas que son objeto de la contienda”.<sup>341</sup>

Por su parte, Becerra expresa que la inspección es “el examen sensorial directo realizado por el juez, en personas u objetos relacionados con la controversia”.<sup>342</sup>

Para De Pina Vara la inspección es un “medio de prueba que consiste en el examen directo por el juez de la cosa mueble o inmueble, o persona, sobre la que recae, para formar su convicción sobre su estado, situación o circunstancias que tengan relación con el proceso en el momento que se realiza. La inspección puede llevarse a efecto trasladándose el juez al lugar donde se encuentre el objeto o persona que ha de inspeccionar (acceso judicial) o en el juzgado o tribunal”.<sup>343</sup>

De las definiciones antes expuestas, en lo particular, consideramos que la más apropiada, es la sostenida por De Pina.

Partiendo de las anteriores definiciones, la doctrina del Derecho Procesal Civil define la inspección o reconocimiento judicial como el examen sensorial directo realizado por el juez en cosas u objetos que están relacionados con la controversia.

Al trasladar el objeto de una inspección de carácter ambiental, esta debe basarse en la percepción de los hechos o de sus huellas o rastros realizada por el juez con su vista, en la mayoría de los casos, donde observa el daño ambiental y lo que está alrededor de este; empleando en ocasiones el oído para identificar y conocer el sonido generado por las maquinarias y equipo durante su operación o en el lugar del daño, si se emite

---

<sup>340</sup> PALOMAR DE MIGUEL, Juan, *Diccionario para Juristas tomo I*, segunda edición, editorial Porrúa, México, 2003, página 840.

<sup>341</sup> MATEOS ALARCÓN, Manuel, *Las pruebas en materia civil, mercantil y federal*, sexta edición, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 2001, página 299.

<sup>342</sup> BECERRA BAUTISTA, José, *El proceso civil en México*, decimocuarta edición, editorial Porrúa, México, 1992, página 137.

<sup>343</sup> PINA VARA, Rafael de, *Diccionario de Derecho*, decimoprimera edición, editorial Porrúa, México, 1983, página 307.

algún ruido que no sea parte del funcionamiento adecuado de la maquinaria y equipo; su olfato para detectar si existen sustancias químicas que pueda percibir, considerando que éstas despiden cierto olor para identificar su presencia (podemos poner como ejemplo el gas L.P.), si se da el caso de presentarse alguna fuga o derrame; empleando, por último, el juez su tacto, siempre y cuando sea posible entablar un contacto con la maquinaria, equipo o el daño ambiental generado y sea adecuado.

Estos actos tienden a la integración o formación de la convicción en el juzgador sobre su estado, situación o circunstancias que guarden relación con el proceso en el momento en que la misma se realiza.

Así, se tiene que la inspección judicial es un medio de prueba que lleva a cabo el titular del órgano jurisdiccional, consistente en someter a las cosas, los lugares o inclusive a las personas, al examen adecuado con todos los sentidos, dado que la evaluación no solo se concreta a lo apreciable por la vista.<sup>344</sup>

La importancia de la inspección judicial reside en la posibilidad de que en el proceso surja alguna cuestión que deba ser observada directamente por el juzgador; lo anterior quiere decir que este medio de prueba consiste en mostrarle directamente al juez las cosas u objetos relacionados con los puntos del litigio a resolverse, para que de ello pueda obtenerse alguna luz sobre las cuestiones debatidas.

Tiene como tipologías que el juez adquiera un conocimiento inmediato y concreto de la cosa inspeccionada, dándole oportunidad a las partes en el momento procesal oportuno para efectuar las observaciones que estimen convenientes en el acto de su desahogo, tomándose nota de ellas y confrontándolas con la realidad.

### **5.3 Puntos sobresalientes de la inspección en un juicio interdictal y de acción negatoria en un juicio por un daño ambiental**

Como hemos indicado en párrafos anteriores, la inspección recae sobre objetos que son parte de la controversia.

---

<sup>344</sup> DE SANTO, Víctor, *El Proceso Civil tomo VII prueba de peritos, reconocimiento judicial*, primera edición, editorial Universidad, Argentina, 2002, página 563.



Así, el objeto de inspección referido a un daño ambiental, invariablemente incurre sobre dos cuestiones inherentes al referido daño:

I. El que se refiere a los elementos ambientales afectados, siempre y cuando estos, por su naturaleza, sean susceptibles de apreciación a través de los sentidos.

II. Que se desarrolle en las instalaciones del demandado.

En las instalaciones del demandado, con la prueba de inspección judicial, se pueden conseguir, con su desahogo, determinados puntos que proporcionen una referencia al juzgador al momento de hacer una relación de las pruebas aportadas y desahogadas, haciendo posible que se les otorgue un valor probatorio.

Para que el juez declare la existencia o inexistencia de cualquier hecho, es menester que haya adquirido la certeza del mismo (subjettiva o formal, según el sistema aplicable para la valoración de los medios de prueba), es decir, un conocimiento previo del ámbito ambiental.

Existen cuestiones evidentes que no requieren de un conocimiento técnico y normativo en materia ambiental. Podemos citar como ejemplos:

I. Hidrocarburos (gasolina, aceite o diésel) tirados o fugados directamente en la tierra.

II. Basura industrial tirada directamente en la tierra o agua.

III. Sustancias químicas que requieren un almacenamiento especial.

IV. Residuos peligrosos<sup>345</sup> en contacto con suelo, agua, flora y fauna.

---

<sup>345</sup> El artículo 3º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su fracción XXXII define lo que son los residuos peligrosos, y al efecto señala: "Son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que le confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio y por tanto, representan un peligro al equilibrio ecológico o el ambiente". *Diario Oficial de la Federación*, enero 28, 1988, México, D.F.

Es evidente que para obtener la certeza de los anteriores hechos, necesariamente deben reunirse la percepción física y la operación mental que la califica, es decir, los elementos objetivos y subjetivos, pues en estas hipótesis se trata de un estado psíquico; tener convicción sobre la realidad o verdad del hecho.<sup>346</sup>

La certeza del juez se genera, entonces, cuando éste considera que en el proceso existe evidencia necesaria que aborde la existencia o inexistencia del hecho investigado por haberlo verificado mediante la actividad probatoria de la inspección.

Estas circunstancias de certeza no aplican a todos los daños ambientales, ya que estos pueden ser originados por diversas fuentes y tener diferentes características, en cuyo caso requerirán de una prueba más compleja con análisis detallado de sus componentes.<sup>347</sup>

En los objetos cuya valoración sea realizada mediante la inspección, se emplean únicamente los sentidos aplicados directamente o en forma inmediata.

Esta prueba le otorga la certeza al juez por el camino directo, en virtud de un criterio intrínseco de conceptualización y presentando menos posibilidades de error en determinadas situaciones.

Se advierte que también puede surgir la vía inductiva, derivada de un conjunto de elementos y no siempre mediante una prueba directa, por lo cual deben distinguirse las dos clases de examen. En la evidencia existe siempre un razonamiento o una reflexión, inclusive cuando se trata de evidencia física, porque es la razón la que busca o indaga y juzga.

Con la percepción inmediata, el juez únicamente verifica, advierte u observa el hecho; no lo debe probar, porque la simple verificación es suficiente para atestiguarlo. El objeto o el hecho observado presenta la evidencia de sí mismo y la inspección del juez muestra el objeto tal y como es.

---

<sup>346</sup> DE SANTO, Víctor, *Op cit.*, p. 560.

<sup>347</sup> DE SANTO menciona que: "Sin perjuicio, naturalmente, de que si la comprobación o verificación del hecho requiere conocimientos técnicos, científicos o artísticos, que se hallan fuera de la cultura común del juez, este recurra al auxilio de peritos en la materia". *Ídem*, p. 573.

Se ha establecido en la jurisprudencia, que "...de una interpretación armónica, lógica y objetiva de las disposiciones aplicables a la inspección, se obtiene que para que una prueba pueda ser admitida, necesario es que concurran forzosamente las siguientes circunstancias: que su ofrecimiento sea dentro del plazo legal y con sus requisitos formales, que esté prevista en la ley y tenga relación con el objeto del proceso, así como que sea adecuada para los fines perseguidos".<sup>348</sup>

No coincidimos con dicha jurisprudencia, en razón de que está planteada con base en objetos diferentes pero al referirnos a un daño ambiental, por sus características intrínsecas, requerimos de otro paradigma que, al menos en su desahogo, contenga excepciones por ser un juicio de carácter ambiental.

El artículo 352 del Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí indica que "al solicitarse la inspección judicial se determinarán los puntos sobre que deba versar y se practicará siempre, previa citación de las partes, fijándose lugar, día y hora". Por su parte el Código Federal de Procedimientos Civiles no expresa nada al respecto.

De esta forma, al tratarse de un juicio por daño ambiental, no deben existir puntos concretos de la inspección, ya que cada demandado puede contar con determinadas situaciones de las que otro carece. En consecuencia, deben inspeccionarse las instalaciones del demandado en su totalidad.

El juez podrá verificar los siguientes puntos, que pueden variar de acuerdo con las características del demandado:

- I. Si los recipientes sujetos a presión<sup>349</sup> cuentan con instrumentos de medición de presión y dispositivo de seguridad.

---

<sup>348</sup> La jurisprudencia tiene como título "EXCEPCIÓN DE QUITA O ESPERA EN MATERIA MERCANTIL. LA PRUEBA DE INSPECCIÓN JUDICIAL NO ES LA IDÓNEA PARA DEMOSTRARLA". Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, novena época, tomo XVII, enero de 2003, Tesis II.2o.C.394 C, página 1782.

<sup>349</sup> En la NOM-020-STPS-2011, en el punto 4.29, se indica en qué consiste un recipiente sujeto a presión señalando que es "El aparato construido para operar a una presión superior a la atmosférica o sometido a vacío. La presión puede ejercerse sobre la superficie interior, la exterior y/o los componentes del equipo. Dicha presión puede provenir de fuentes externas o mediante la aplicación de calor, desde una fuente directa, indirecta o cualquier combinación de estas". *Diario Oficial de la Federación*, diciembre 27, 2011, México, D.F.

- II. Si los recipientes sujetos a presión cuentan con desfogue de fluidos (si se requiere), a través de válvulas de seguridad, en lugares específicos para evitar riesgos al personal, medio ambiente de trabajo y atmósfera en general.
- III. Si se identifican los recipientes sujetos a presión con etiqueta, placa u otro medio, con el nombre del equipo o número de identificación.
- IV. Si se cuenta con las hojas de seguridad para todas las sustancias químicas peligrosas que se utilizan en el centro de trabajo.
- V. Si se cuenta con señalamiento y acceso restringido a las áreas expuestas y a condiciones térmicas extremas como se establece en la normatividad.
- VI. Si en las áreas de trabajo de aplicación de material radioactivo se distribuyen contenedores para la recolección de desechos, debidamente marcados e identificados. El material del contenedor no debe reaccionar a los desechos.
- VII. Si los contenedores con desechos sólidos cuentan con un sistema para abrirse utilizando el pie, mientras que los empleados para líquidos deben contar con tapa roscada.
- VIII. Si los desechos radioactivos líquidos son separados en el punto de origen como: líquidos no acuosos, acuosos y aceites, sin mezclar las soluciones ácidas con las alcalinas.
- IX. Si se instalan equipos contra incendio, de acuerdo con el grado de riesgo de incendio, a la clase de fuego que se pueda presentar en el centro de trabajo y a las cantidades de materiales en almacén y en proceso.
- X. Si se cuenta con detectores de incendio, acordes al grado de riesgo, en las distintas áreas del centro de trabajo para advertir al personal que se produjo un incendio o que se presentó alguna otra emergencia.

- XI. Si en la instalación de los sistemas fijos contra incendio, se tiene una fuente autónoma y automática para el suministro de la energía necesaria para su funcionamiento; en caso de falla los sistemas automáticos deben contar con un control manual para iniciar el funcionamiento del sistema.
- XII. Si se aíslan las áreas, locales o edificios, separándolos por distancias o por pisos, muros o techos de materiales resistentes al fuego. Uno u otro tipo de separación debe seleccionarse y determinar sus dimensiones tomando en cuenta los procesos o actividades que ahí se realicen, así como las mercancías, materias primas, productos o subproductos que fabriquen, almacenen o manejen.
- XIII. Si se cuenta con detectores de gases en las áreas donde se procesen o almacenen gases combustibles.
- XIV. Si las instalaciones eléctricas cuentan con dispositivos, protecciones de seguridad que señalen su voltaje y corriente de la carga instalada.
- XV. Si se evita la generación o acumulación de electricidad estática en el centro de trabajo, aplicando, en su caso, control de humedad e instalación de dispositivos de conexión a tierra o equipo a prueba de explosión.
- XVI. Si las instalaciones metálicas que no estén destinadas a conducir energía eléctrica, tales como cercas perimetrales, estructuras metálicas, maquinaria y equipo ubicados en zonas en donde se manejen, almacenen o transporten sustancias inflamables o explosivas, se conectan a tierra. Se instalan, en su caso, elementos de captura, sistemas de tierra, sistemas de pararrayos, equipos y dispositivos para proteger al centro de trabajo de la acumulación de cargas eléctricas estáticas y descargas eléctricas atmosféricas.
- XVII. Si las señales de seguridad e higiene se ubican de tal manera que puedan ser observadas e interpretadas por los trabajadores a los que están destinados y se evita que sean obstruidas.

- XVIII. Si se garantiza que la aplicación del color, señalización y la identificación en la tubería esté sujeta a un mantenimiento que asegure en todo momento su visibilidad y legibilidad.
- XIX. Si se identifican los depósitos, recipientes y áreas que contengan sustancias químicas peligrosas o los residuos de éstas.
- XX. Si los recipientes fijos de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas cuentan con cimentaciones a prueba de fuego y sistemas que permitan interrumpir el flujo de dichas sustancias. Asimismo deben estar identificados conforme a la norma correspondiente.
- XXI. Si se cuenta con contenedores de sustancias químicas peligrosas para impedir el escurrimiento o dispersión en caso de derrames o fugas de sustancias líquidas.
- XXII. Si en los recipientes fijos para almacenar líquidos corrosivos, irritantes o tóxicos, el llenado se hace hasta un máximo de 90 % de su volumen, con dispositivos de lectura del nivel de llenado.
- XXIII. Si en las áreas del centro de trabajo donde se manejen, transporten, o almacenen sustancias inflamables o combustibles, se prohíbe el uso de herramientas, zapatos y objetos personales que puedan generar chispa, flama abierta o temperaturas que provoquen ignición.
- XXIV. Si en las áreas de trabajo donde se almacenen sustancias inflamables o combustibles, las cantidades de dichas sustancias que se requieran en el proceso productivo, se limitan a lo necesario para su uso en un día de trabajo.
- XXV. Si el almacenamiento de sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas, se hace en recipientes específicos en función de la sustancia de que se trate y se identifican por medio de avisos y señales de seguridad.
- XXVI. Si los sistemas y equipos que se utilicen para el transporte de materiales en general, materiales o sustancias químicas peligrosas, se verifican en sus elementos de transmisión, carga, protecciones y dispositivos de seguridad.

XXVII. Si las áreas del centro de trabajo, tales como producción, mantenimiento, circulación de personas y vehículos, zonas de riesgo, almacenamiento y servicios para los trabajadores, son delimitadas mediante barandales o cualquier elemento estructural, o bien con franjas amarillas de al menos cinco centímetros de ancho, de tal manera que se disponga de espacios seguros para la realización de las actividades.

XXVIII. Si los patios del centro de trabajo donde normalmente circulen los vehículos y personas, cumplen con el ancho de las puertas, que debe ser como mínimo, igual al ancho del vehículo más grande que circule por ellas más sesenta centímetros, y deben contar con un pasillo adicional de al menos ochenta centímetros de ancho para el tránsito de trabajadores, delimitado o señalado mediante franjas amarillas en el piso o en guarniciones (donde existan), de cuando menos cinco centímetros de ancho.

En caso de aplicarse el artículo 352 del Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí, traería como consecuencia que determinados objetos, procesos y operaciones quedaran sin inspeccionarse por los siguientes motivos:

a) Si la parte actora, al ofrecer la prueba:

- I. Desconoce el funcionamiento de cada una de la maquinaria o equipo.
- II. Desconoce qué maquinaria y equipo están funcionando en turnos completos o únicamente por pedidos o productos especiales.
- III. Desconoce el tipo y número de operaciones que se realizan.
- IV. No tiene conocimiento de la ubicación física interna de cada área.
- V. Desconoce cuántos y qué tipo de almacenes tiene la parte demandada.
- VI. No conoce el tipo o cantidades de las sustancias químicas empleadas en cada máquina u operación.

- VII. Que verse sobre puntos que no estén vigentes (ejemplo: verificar la cantidad de consumo mensual de un tanque con diésel empleado en las calderas, cuando ya no se emplea tal combustible, sino gas natural).
- VIII. Que, por desconocimiento de la materia ambiental o del proceso productivo del demandado, señale puntos que no existan.

b) Si la parte demandada, al ofrecer la prueba:

- I. Propone puntos de inspección de un área o áreas que no tienen relación con el daño ambiental.
- II. Pretende que se inspeccione un área en la cual se utilice una sustancia química cuyo consumo sea mínimo y por tanto incapaz de generar daños al ambiente, en comparación con otra área donde la misma sustancia se emplee en tal cantidad que pueda generar daños a los elementos ambientales.
- III. Propone que se inspeccione un equipo y maquinaria que se emplean esporádicamente.
- IV. Plantea puntos que pretenda hacer válidos, los cuales no tengan relación con el daño ambiental.

Por lo anterior, concluimos que el artículo 352 del Código Adjetivo Civil de San Luis Potosí debe tener adiciones cuando nos referimos al daño ambiental, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 352.- Al solicitarse la inspección judicial se determinarán los puntos sobre los que deba versar y se practicará siempre previa citación de las partes, fijándose lugar, día y hora. *Cuando el asunto verse por daño ambiental, no se hará referencia a puntos de inspección, se requerirá inspeccionar las instalaciones completas de la parte demandada, documentos de control interno y el lugar donde se aprecie el daño ambiental.*



En virtud de que esta prueba aporta una imagen al criterio al juez sobre la magnitud del daño ambiental ocasionado, es importante visualizar la fecha y hora de su desahogo, como se especificó anteriormente. En este sentido, el artículo 352 Código de Procedimientos Civiles indica los aspectos de la fecha y hora para su desahogo.

A consecuencia de lo planteado en esta prueba de inspección, creemos que debe decretarse de oficio por parte del juez para su desahogo, considerando que debe ejecutarse al momento del emplazamiento de la demanda.

La finalidad de ejecutar en forma inmediata este medio de prueba en el emplazamiento, obedece a evitar que el demandado realice actividades de mantenimiento, mejoras al medio ambiente laboral, maquinaria o equipo que está funcionando o en los espacios al aire libre (patios donde pueda haber maquinaria obsoleta y cajas de empaque).

El demandado, al contar con un margen de tiempo para el desahogo de la prueba de inspección, tiene la posibilidad de:

- I. Contratar personal externo que efectúe actividades de mantenimiento a las instalaciones.
- II. Reprogramar sus actividades de producción, cambiando los estándares de consumo de productos químicos, tratamiento de aguas, etcétera.
- III. Cambiar productos químicos de menos afectación al ambiente y que puedan ser soportados por la maquinaria en sus operaciones.
- IV. Disminuir la generación de residuos peligrosos y no peligrosos.

Con los cambios descritos en las líneas precedentes, el juez tendrá un panorama más amplio del área o áreas y de los instrumentos generadores del daño ambiental, lo que sin duda sería trascendente para las conclusiones al momento de dictar la sentencia definitiva.

Al realizar un planteamiento del desahogo de una inspección en un juicio interdictal y de acción negatoria para reparar un daño ambiental, la trascendencia de la prueba radica en que el juez, mediante sus sentidos, detecte el daño ambiental generado y sus posibles causas, por lo que su observación debe abarcar lo siguiente:

- I. Ubicar el lugar o lugares donde se presume el daño ambiental.
- II. Identificar los elementos ambientales involucrados con el daño ambiental.
- III. Identificar si la afectación de alguno de estos elementos ambientales tiene su origen en el lugar señalado para la inspección, o se desprende su existencia en otro lugar.
- IV. Observar alrededor de las instalaciones de la parte demandada (en caso de persona moral).
- V. Visualizar las operaciones o actividades de cada maquinaria y equipo existentes.
- VI. Recorrido por los almacenes de materia prima, de producto terminado, de residuos peligrosos y no peligrosos.
- VII. Identificar las sustancias químicas que se emplean durante las operaciones internas y actividades realizadas por personal externo (contratistas).
- VIII. Identificar aquella maquinaria o equipo que sean arrendados por la parte demandada para el desarrollo de sus actividades u operaciones, cuyo mantenimiento corresponde al arrendador.

Aunado a la verificación de los puntos antes mencionados, el juez tiene la libertad y facultad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la Ley Federal de

Responsabilidad Ambiental,<sup>350</sup> de solicitar de oficio todos los medios de prueba que considere necesarios.

En caso de comprobarse, por medio de la inspección, que el daño ambiental o los elementos ambientales surgen en diverso lugar al manifestado por la parte actora o demandada, el juzgador deberá tomar en cuenta lo siguiente:

1. *Si es un espacio o un lugar sin propietario.*

Se debe continuar con la inspección del lugar donde se inició el daño ambiental, de acuerdo con los elementos ambientales afectados, siempre y cuando el lugar de referencia:

- I. Sea despoblado.
- II. Sea un lugar de paso común.
- III. Sean canaletas pluviales.

2. *Si es un espacio o lugar con propietario.*

El juez debe:

- I. Programar una nueva inspección, decretándola al finalizar el acta que se levante de la inspección judicial y notificando personalmente a las partes que comparecieron a la misma.
- II. La programación de la nueva inspección debe efectuarse dando aviso o notificando, mediante oficio, a la persona física o moral, manifestando el objeto y alcance de la misma.
- III. Según la gravedad del daño ambiental o de los elementos ambientales involucrados, esta segunda inspección deberá efectuarse, aun cuando la persona (física o moral) no haya sido emplazada a juicio y en un lapso de 48 horas después de realizada la primera.

---

<sup>350</sup> El artículo 34 indica: "El órgano jurisdiccional podrá allegarse oficiosamente de los medios de prueba que considere necesarios, sin más limitación que las establecidas en la ley". *Diario Oficial de la Federación*, junio 7, 2013, México, D.F.

- IV. Mediante este reconocimiento de sucesos nuevos, se estaría en posibilidades de ampliar la demanda a esta nueva persona física o moral que no estaba mencionada en autos; esto se hará mediante oficio del juzgador.
- V. En caso de que exista un exhorto para la diligencia de inspección judicial, el juez exhortante deberá otorgarle amplias facultades al juez exhortado para que pueda girar el oficio correspondiente y efectuar una segunda inspección.

El artículo 161 del Código Federal de Procedimientos Civiles<sup>351</sup> señala que la inspección puede celebrarse a petición de parte o por disposición del juzgador. Por su parte el Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí no exterioriza nada al respecto, por lo que la regla es que sea a petición de parte su ofrecimiento y desahogo.

Creemos que, tratándose de un juicio por daño ambiental, esta prueba se debe desahogar por disposición expresa del juez aunque no sea planteada por las partes.<sup>352</sup> Esta iniciativa de oficio por parte del juez de conocer el lugar donde se tiene el daño ambiental es prioritaria para identificar y conocer lo planteado en la demanda.

El propósito de la inspección judicial sólo se limita a que el juez, a través de sus sentidos, compruebe y verifique alguno de los hechos alegados por las partes, siempre y cuando se limite a las cosas o personas relacionadas con la litis y, por consiguiente, a los aspectos relacionados con la generación de un daño ambiental.

---

<sup>351</sup> El artículo 161 señala que “La inspección judicial puede practicarse, a petición de parte o por disposición del tribunal, con oportuna citación, cuando pueda servir para aclarar o fijar hechos relativos a la contienda que no requieran conocimientos técnicos especiales”. *Diario Oficial de la Federación*, febrero 24, 1943, México, D.F.

<sup>352</sup> MATEOS indica que “La inspección para su desahogo sea de oficio, parte del juez, quien puede practicarla o no, según estime conveniente para formar su criterio”, MATEOS ALARCÓN, Manuel, *Op. cit.*, p. 300.

### 5.3.1 ¿Qué tipo de indicios son susceptibles y necesarios para que el juzgador dé por cierto un daño ambiental?

Como lo señalamos en el capítulo IV, es preciso que el juez posea un conocimiento previo y manejo del Derecho Ambiental, así como de instrumentos ambientales planteados por la normatividad ambiental federal, estatal y municipal.

Lo anterior se debe a que las observaciones derivadas de la inspección por parte del juez, sin contar con un conocimiento de la normatividad ambiental, carecerían de importancia al momento de dictar sentencia definitiva.<sup>353</sup>

Sin un conocimiento en temas ambientales o las características de un daño ambiental, el juez percibiría este último sólo mediante sus sentidos y este no trascendería legalmente porque su criterio quedaría rebasado por el daño ambiental.<sup>354</sup>

Dependiendo del elemento ambiental que sea inspeccionado, el juez deberá estar pendiente de algún cambio de color, olor o textura derivado del elemento ambiental.

El juez podrá verificar los siguientes puntos como indicios de un daño ambiental:

- I. Las condiciones físicas y de operación de los recipientes sujetos a presión.
- II. La distribución de los contenedores para la recolección de desechos, debidamente marcados e identificados en las áreas de trabajo de aplicación de material radioactivo.
- III. La separación de los desechos radioactivos líquidos en el punto de origen como: líquidos no acuosos, acuosos y aceites, sin mezclar las soluciones ácidas con las alcalinas.

---

<sup>353</sup> Al efecto se encuentra la jurisprudencia que indica: PRUEBA DE INSPECCIÓN JUDICIAL.

La prueba de inspección judicial no tiene por objeto deducciones que el juez pueda hacer a virtud de razonamientos lógicos, en tanto que dichas deducciones deben dejarse para el momento en que se dicte sentencia.

Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, octava época, tomo IV, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1989, página 400.

<sup>354</sup> Considerando la opinión vertida por MATEOS respecto al valor probatorio de la inspección judicial, que es una prueba por su naturaleza de las más eficaces en cuanto a resultados exactos, qué otro medio podría buscarse para producir el convencimiento en el ánimo del juez, cuando ve brillar la verdad con sus propios ojos con certidumbre completa. MATEOS ALARCÓN, Manuel, *Op. cit.*, p 303.

- IV. Si se cuenta con detectores de gases en las áreas donde se procesen o almacenen gases combustibles.
- V. Que las instalaciones metálicas que no estén destinadas a conducir energía eléctrica, tales como cercas perimetrales, estructuras metálicas, maquinaria y equipo ubicados en zonas en donde se manejen, almacenen o transporten sustancias inflamables o explosivas, se encuentren conectadas a tierra. Deben instalarse, en su caso, elementos de captura, sistemas de tierra, sistemas de pararrayos, equipos o dispositivos para proteger al centro de trabajo de la acumulación de cargas eléctricas estáticas, además de descargas eléctricas atmosféricas.
- VI. Que las señales de seguridad e higiene se ubiquen de tal manera que puedan ser observadas e interpretadas por los trabajadores a los que están destinadas y se evita que sean obstruidas.
- VII. Que la aplicación de color, señalización o identificación en la tubería correspondan a lo establecido en la NOM-026-STPS,<sup>355</sup> la tubería debe estar sujeta a un mantenimiento que asegure en todo momento su visibilidad y legibilidad.
- VIII. La identificación de los depósitos, recipientes y áreas que contengan sustancias químicas peligrosas o los residuos de estas.
- IX. Que los recipientes fijos de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas cuenten con cimentaciones a prueba de fuego y sistemas que permitan interrumpir el flujo de dichas sustancias. Asimismo, deben estar identificados conforme a la norma correspondiente.
- X. Si se cuenta con contenedores de sustancias químicas peligrosas, de igual forma las características físicas y de funcionamiento, que estén

---

<sup>355</sup> La Norma Oficial Mexicana "NOM-026-STPS-1998" tiene como título "Colores y Señales de Seguridad e Higiene, e Identificación de Riesgos por Fluidos Conducidos en Tuberías". *Diario Oficial de la Federación*, mayo 26, 1994, México, D.F.

en condiciones para impedir el escurrimiento o dispersión en caso de derrames o fugas de sustancias líquidas.

- XI. Las cantidades físicas existentes en los almacenes de sustancias inflamables o combustibles, así como el monto requerido para los procesos productivos.
- XII. El almacenamiento de sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas en recipientes específicos en función de la sustancia de que se trate y deben estar identificadas por medio de avisos y señales de seguridad.
- XIII. La verificación, en sus elementos de transmisión, carga, protecciones y dispositivos de seguridad, de los sistemas y equipos que se utilicen para el transporte de materiales en general, materiales o sustancias químicas peligrosas.
- XIV. La delimitación mediante barandales de las áreas del centro de trabajo, tales como producción, mantenimiento, circulación de personas y vehículos, zonas de riesgo, almacenamiento y servicios para los trabajadores; y la delimitación de espacios seguros marcándose los mismos con franjas amarillas de al menos cinco centímetros de ancho o bien algún elemento estructural distintivo.
- XV. Si los patios del centro de trabajo, cumplen con el ancho de las puertas donde normalmente circulen los vehículos y personas. Este ancho debe ser como mínimo, igual al ancho del vehículo más grande que circule por ellas más sesenta centímetros y deben contar con un pasillo adicional para el tránsito de trabajadores de al menos ochenta centímetros de ancho, delimitado o señalado mediante franjas amarillas en el piso o en guarniciones, donde existan, de cuando menos cinco centímetros de ancho.

La observación realizada durante el desahogo de la prueba de inspección judicial arrojará situaciones que le aporten al juez información pertinente y adecuada de las operaciones o maquinaria del demandado.

Así pues, posteriormente, lo asentado en el acta de inspección se relacionaría con el resultado obtenido del dictamen pericial, con ambas pruebas se comprobaría el color, olor o textura que no son apropiados para el elemento ambiental que presenta un daño ambiental.

### **5.3.2 Obligación de la presencia del juez en el lugar a inspeccionar**

Al respecto de esta prueba, su desahogo en un asunto de índole ambiental tiene que llevarse a cabo directa y personalmente por parte del titular del órgano jurisdiccional. El juez puede hacerse acompañar por personal del órgano jurisdiccional (secretario de acuerdos, secretario de estudio y cuenta, actuario y secretarías taquimecanógrafas).

Con el transcurso natural del desahogo de dicha probanza, el juez a través de sus sentidos, de viva voz, se percataría de la situación que guarda el elemento ambiental afectado en el momento de la diligencia.

Esta situación donde el juez debe estar presente, se puede no llevar a efecto, en caso que se tenga que dirigir un exhorto o despacho; sin embargo, el juez exhortado debe acatar el desahogo de dicha probanza.

Esta situación procesal llega a cambiar si es necesario hacer uso de un despacho o exhorto, donde el juez exhortado es quien ejecuta la inspección judicial.

Para que la inspección pueda ser realizada por el juzgador que conoce del juicio y no se empleen instrumentos legales como el exhorto o despacho, la parte actora debe verificar previamente la competencia de los jueces.

Cuando, sin embargo, por cuestiones físicas o de jurisdicción, no sea posible que el juez que conoce del juicio sea quien celebre la inspección judicial y se requiera hacer uso de exhortos o despachos, estos deben contener el emplazamiento y las facultades apropiadas para diligenciarse a la brevedad, con el objetivo de que el daño no continúe afectando elementos ambientales.



### 5.3.3 Anexar al acta de inspección fotografías o videos

El artículo 353 del Código Procesal Civil de San Luis Potosí en su segundo párrafo señala: “Cuando fuere necesario se levantarán planos o se sacarán vistas fotográficas del lugar u objeto inspeccionados”.

De igual forma el Código Federal de Procedimientos Civiles, en su artículo 164, manifiesta: “A juicio del tribunal o a petición de parte, se levantarán planos o se tomarán fotografías del lugar u objetos inspeccionados”.<sup>356</sup>

Sobre el particular consideramos necesario que el juez agote esta facultad contenida en la legislación procesal civil (federal y estatal) y a través del personal del juzgado que acompañe al desahogo de la inspección, tome fotografías y videos respectivos a las instalaciones, maquinaria, formas y características de almacenamiento de sustancias químicas, forma y características del almacenamiento de residuos peligrosos, procesos productivos, etcétera y aquellas áreas o departamentos que estén dentro de las instalaciones del demandado que considere el juez o la parte actora durante la diligencia de inspección.

Al terminar el recorrido por las instalaciones y almacenes, así como la revisión de la documentación relacionada con la maquinaria u operaciones materia de la inspección, teniendo el juez en su poder una copia simple de documentos de los puntos inspeccionados, se trasladarán al juzgado todas las personas que estuvieron presentes en el desahogo de la inspección para elaborar el acta de inspección correspondiente.<sup>357</sup>

Proponemos que el acta de inspección sea levantada el mismo día que se desahogue la inspección o en su defecto al día siguiente, con el consenso de todos los que intervinieron en ella.

---

<sup>356</sup> Fe de erratas al artículo publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el día 1 de marzo de 1943. *Op cit.*

<sup>357</sup> BENTHAM menciona que “Hay que dar cabida a las actas, informes escritos levantados sobre el lugar, con objeto de comprobar hechos que han de surtir efectos legales y que han sido redactados inmediatamente con los requisitos prescritos”, concluimos entonces que, por efectos y naturaleza, el anexo de fotografías y videos al acta no es viable, y tiene mejor sustento que las partes que intervienen en la inspección se trasladen al juzgado para escribir el acta correspondiente. BENTHAM, Jeremías, *Tratado de las Pruebas Judiciales tomo I*, primera edición, Ediciones Jurídicas Europa – América, Buenos Aires, 1971, página 257.

Respecto a los videos que se tomen de las instalaciones, maquinaria o equipo, así como de los elementos ambientales afectados, estos deben ser convertidos a un formato universal para facilitar su reproducción en el interior del juzgado.

El acta que se levante por el desahogo de la inspección debe ser clara para el juzgador, de manera que con ella pueda conocer las características físicas de las instalaciones, almacenes y maquinaria, así como los procesos productivos del demandado. Para ello, el juez se basará en las fotografías y videos tomados durante la inspección, así como en las copias de los documentos que se proporcionaron.

Al acta de inspección deben agregarse en forma impresa las fotografías y una copia de los documentos proporcionados durante su desahogo, anexando contenidos en un CD o memoria USB los videos grabados los cuales se guardarán en el secreto del juzgado. Además se registrarán por escrito las opiniones y objeciones que realicen las partes sobre alguna fotografía, video o documento en particular.

Es importante que en el acta de inspección se vincule el punto inspeccionado con la fotografía o video y la copia del documento existente. Al finalizar la elaboración del acta se recaban las firmas de las partes que intervinieron en la diligencia.

En lo concerniente a la inspección de los documentos que posea el demandado, el acta debe contener la información y características descritas a continuación:

- I. Guardar relación estrecha con algún punto de la maquinaria y equipo, sustancia química, etcétera.
- II. Anotar en forma precisa el nombre del documento, fecha de elaboración, las áreas o personas a las que compete su cumplimiento y el área o persona encargada de los registros.
- III. Indicar si el documento surge por el cumplimiento de una ley federal o estatal en materia ambiental o de una norma oficial mexicana en materia ambiental o de seguridad.

- IV. Especificar si existe algún documento en el cual se manifieste algún tipo de incumplimiento a un requerimiento legal en materia ambiental o de seguridad.
- V. Anotar las razones o motivos de por qué no se está dando cumplimiento al documento.
- VI. Describir la naturaleza del documento, mencionando si corresponde a la empresa, a una autoridad administrativa o bien se trata de una auditoría de cliente, ambiental o de seguridad.
- VII. Hacer referencia a algún elemento ambiental o al daño ambiental.

En caso de hacer referencia a un momento específico de un video presentado, se establecerá en el acta de inspección el momento exacto de reproducción (minuto y segundo) como antecedente de localización en el video.

Si el acta no es clara o congruente entre lo inspeccionado y lo redactado, el juzgador no podrá obtener de ella la indispensable certeza para tener por demostrado el hecho únicamente con la inspección.

En el acta de inspección no deben omitirse detalles ni circunstancias de cantidades, colores, ruidos, olores, texturas o formas de almacenamiento, ya que es evidente que el juzgador considerará lo que conste en ella.

#### **5.4 La prueba documental pública en la doctrina del Derecho Procesal Civil**

José Ovalle se refiere que el documento, además de tener esa aptitud de representación, debe poseer la cualidad de ser un bien mueble, de modo que pueda ser llevado al local del juzgado. De acuerdo con estas ideas, se puede definir al documento como todo objeto apto para representar un hecho.<sup>358</sup>

Continúa Ovalle mencionando que dentro de esta categoría de documentos se encuentran las fotografías y grabaciones.

---

<sup>358</sup> OVALLE FAVELA, José, *Derecho Procesal Civil*, octava edición, editorial Oxford, México, 1999, página 154.

Para Rafael Martínez, un documento es “cualquier escrito público y privado que puede contener una obligación, un derecho, una constancia o una prueba, que tiene consecuencias de derecho. Existe la tendencia a incluir en esta categoría las grabaciones o fotografías”.<sup>359</sup>

Este autor hace más extensivo el contenido y alcance del documento, pues habla de documentos públicos y privados, al tiempo que hace hincapié en las grabaciones; mientras que por su parte, De Santo señala que “el documento es una cosa creada mediante un acto”.<sup>360</sup>

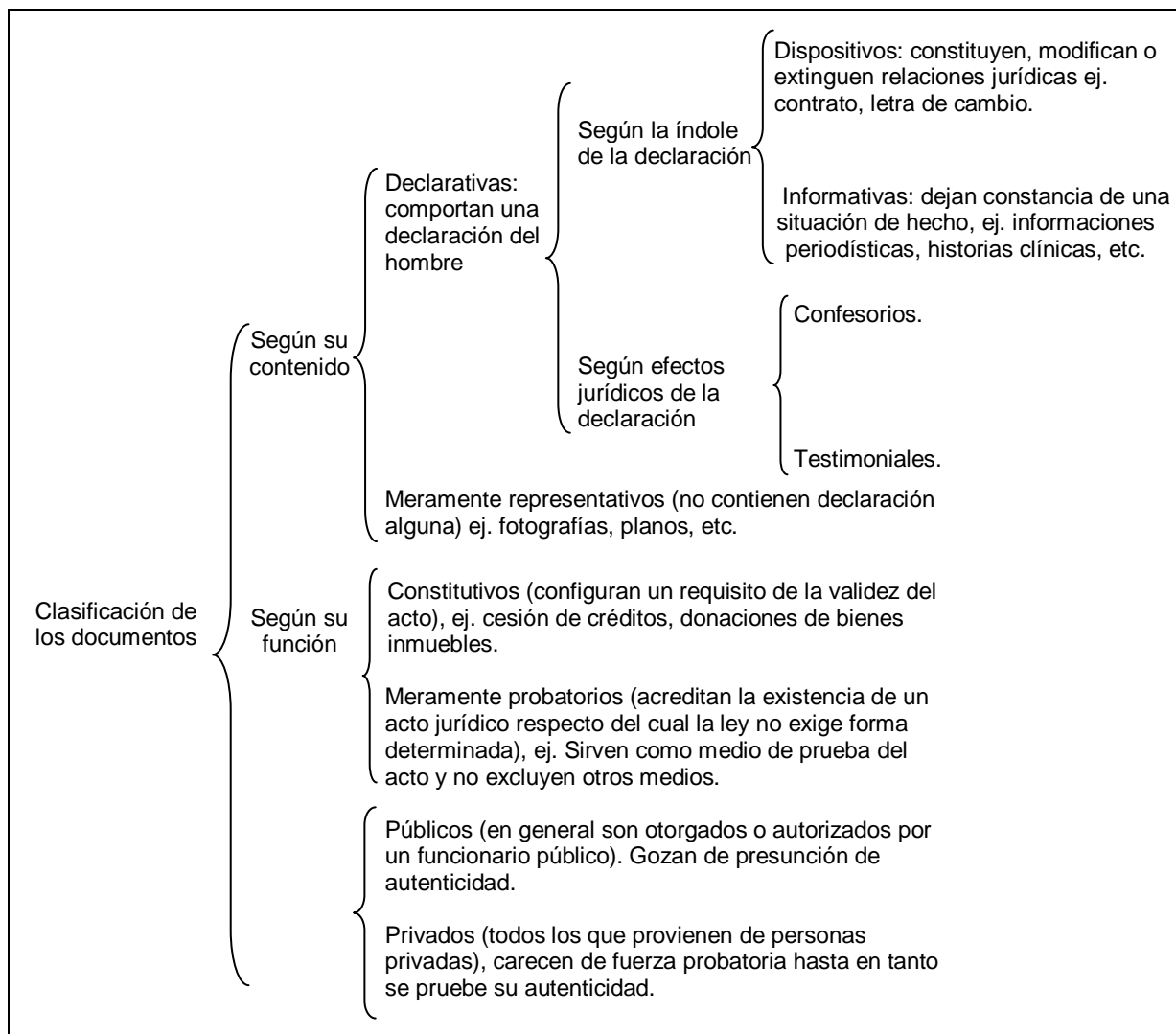
De Santo en su libro presenta un cuadro sinóptico de la documental, efectuando una división completa de su contenido, función e incluso el carácter de los sujetos.<sup>361</sup>

---

<sup>359</sup> MARTÍNEZ MORALES, Rafael, *Diccionario Jurídico General tomo 2 (D-N)*, primera edición, IURE Editores, México, 2006, página 489.

<sup>360</sup> DE SANTO, Víctor, *EL Proceso Civil tomo III*, primera edición, Editorial Universidad, Argentina, 1994, página 2.

<sup>361</sup> *Ídem*, p. 37.



Al analizar la doctrina procesal civil y, para efectos del contenido del presente estudio, nos enfocaremos en las pruebas documentales públicas y privadas.

El Código Federal de Procedimientos Civiles, en sus artículos 129, 130 y 133<sup>362</sup>, señala en qué consiste la prueba documental y al efecto indica:

Artículo 129:

Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones.

<sup>362</sup> Fe de erratas a los artículos 129 y 130, *Diario Oficial de la Federación*, marzo 13, 1943, México, D.F.

La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes.

Artículo 130:

Los documentos públicos expedidos por autoridades de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y Territorios o de los Municipios, harán fe en el juicio, sin necesidad de legalización.

Artículo 133:

Son documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo 129.

Por su parte, el Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí, en sus artículos 323, 324 y 330, manifiesta respecto a la documental lo siguiente:

Artículo 323:

Son documentos públicos:

- I. Los testimonios de las escrituras públicas otorgadas con arreglo a derecho y las escrituras originales mismas.
- II. Los documentos auténticos expedidos por funcionarios que desempeñen cargo público en lo que se refiera al ejercicio de sus funciones.
- III. Los documentos auténticos, libros de actas, estatutos, registros y catastros que se hallen en los archivos públicos o dependientes del Gobierno Federal, o de los Estados, o del Gobierno del Distrito Federal, de los Territorios Federales o de los Ayuntamientos.
- IV. Las certificaciones de actas del Estado Civil expedidas por los funcionarios del Registro Civil, respecto a constancias existentes en los libros correspondientes.

- V. Las certificaciones de constancias existentes en los archivos públicos expedidas por funcionarios a quienes compete.
- VI. Las certificaciones de constancias existentes en los archivos parroquiales y que se refieran a actos pasados antes del establecimiento del Registro Civil, siempre que fueren cotejadas por notario público o quien haga sus veces con arreglo a derecho.
- VII. Las ordenanzas, estatutos, reglamentos y actas de Sociedades, Asociaciones o Universidades, siempre que estuvieren aprobadas por el Gobierno Federal o de los Estados y las copias certificadas que de ellos se expidieren.
- VIII. Las actuaciones judiciales de toda especie.
- IX. Las certificaciones que expidieren las bolsas mercantiles o mineras autorizadas por la Ley y las expedidas por corredores titulados con arreglo al Código de Comercio.
- X. Los demás a los que se les reconozca ese carácter por la Ley.

Artículo 324:

Los documentos públicos expedidos por autoridades federales o funcionarios de las entidades políticas de la República, harán fe en el Estado sin necesidad de legalización.

Artículo 330:

Son documentos privados los que se otorgan entre particulares y sin intervención de notario u otro funcionario legalmente autorizado.

Se puede observar claramente que el cuerpo normativo a nivel federal no especifica qué tipos de documentos se consideran públicos. En cambio, el Código Adjetivo de San Luis Potosí es puntual y concreto en mencionar cuáles son los documentos públicos.

Otra diferencia se presenta en el Código Federal sobre la documental privada, ya que solo indica como tales a los documentos que no son originados por la autoridad. En cambio, la normatividad estatal sí es específica sobre el origen de tales documentos privados.

Además del análisis de los artículos (129, 130 y 133) del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como de los artículos (323, 324 y 330) del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, se arroja que ambos contemplan el mismo supuesto legal, sin que exista variación en su contenido y fin propuesto.

### **5.5 La prueba documental en un juicio interdictal y de acción negatoria para reparar un daño ambiental**

Un aspecto importante a contemplar en un juicio interdictal y de acción negatoria para reparar un daño ambiental es la prueba documental, sin importar si es privada o pública, ya que contiene información valiosa que en su oportunidad, ante una adecuada interpretación del juez, puede arrojar datos (fechas, noticias, avisos o registros) que, al relacionarse con otros medios de prueba, perfeccionan el criterio del juez al momento de dictar la sentencia definitiva.

La prueba documental privada se basa principalmente en procedimientos, formatos, memorándums y planes de acción que tiene la parte demandada como elemento de sus actividades internas y que lleva como control interno de determinadas operaciones.

En materia ambiental podemos mencionar como documentos privados los que están en posesión del demandado, tales como: bitácoras de ingreso de residuos peligrosos, embarque de residuos peligrosos, manifiestos de residuos peligrosos, bitácoras de ingreso de residuos industriales no peligrosos, embarque de residuos industriales no peligrosos, manifiestos de residuos industriales no peligrosos, los reportes semestrales, actas de auditoría por organismo certificador, estudios técnicos de ruido perimetral, de emisiones a la atmósfera, de análisis de agua residual y de estudios CRETIB<sup>363</sup> sobre algún residuo (para determinar si es peligroso o no).

---

<sup>363</sup> La NOM-052-SEMARNAT-2005 que tiene como título "Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos". En el punto 5.2 de



En el punto 5.5.2 de este capítulo ampliaremos las documentales en materia ambiental que deben agregarse al juicio por daño ambiental.

Generalmente, las documentales que contienen información ambiental concreta y oportuna, están en poder de la persona física o moral o de las autoridades administrativas.

En materia de seguridad podemos mencionar como documentos privados los siguientes: determinación de grado de incendio, evidencia de simulacros, análisis de maquinaria y equipo, planos de los recipientes sujetos a presión, análisis de corte y soldadura, de mantenimiento a instalaciones eléctricas, análisis de sustancias químicas, estudios técnicos en ruido y tierras físicas, *layout*<sup>364</sup> de extintores, *layout* del sistema contra incendio, *layout* de las salidas de emergencia y *layout* de la ubicación de los recipientes sujetos a presión. Todas estas documentales están en posesión de la parte demandada.

Las pruebas documentales públicas en materia de seguridad están constituidas por actas de inspección, resoluciones administrativas de estudios técnicos, permisos o concesiones. Todas estas documentales están en posesión de la autoridad administrativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

En el punto 5.5.1 de este capítulo ampliaremos las documentales en materia de seguridad que deben agregarse al juicio por daño ambiental.

Ahora bien, el juez tiene la facultad de solicitar el documento que acredite el formato interno en el que se registra el control de determinada situación donde se vean involucradas diversas áreas y personas (internas o contratistas).

---

definiciones, establece lo que es el CRETIB, y señala que: “El acrónimo de clasificación de las características a identificar en los residuos peligrosos y que significa: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico ambiental, inflamable y biológico-infeccioso”. *Diario Oficial de la Federación*, junio 23, 2006, México, D.F.

<sup>364</sup> “El término *layout* proviene del inglés, que en nuestro idioma español quiere decir diseño, plan, disposición. El vocablo es utilizado en el marketing para aludir al diseño o disposición de ciertos productos y servicios en sectores o posiciones en los puntos de venta en una determinada empresa. Por otra parte, en el ámbito de diseño, también es utilizada la palabra *layout* que corresponde a un croquis, esquema, o bosquejo de distribución de las piezas o elementos que se encuentran dentro de un diseño en particular, con el fin de presentarle dicho esquema a un cliente para venderle la idea, y luego de llegar a un acuerdo y aceptar la idea, poder realizar el trabajo final con base en este bosquejo”. *Definición de Layout*, <http://conceptodefinicion.de/layout/>, fecha de consulta: 11 de septiembre del 2015.

De tal modo, el juez cuenta con varias opciones para conocer qué documentales son apropiadas para el esclarecimiento de la controversia y que en su oportunidad sean aportadas en el juicio que está ventilando.

En lo concerniente a la parte actora, carece en su mayoría de documentos tanto públicos como privados, en virtud de que estos documentos tienen su origen en obligaciones que marca la normatividad ambiental y de seguridad o con base en los sistemas de administración con que cuenta el demandado.

Por su parte, las autoridades administrativas cuentan con parte de las documentales que contienen información precisa e idónea sobre las obligaciones marcadas en los ordenamientos ambientales que tiene que cumplir la persona física o moral.

Así, para poder describir qué documentales se encuentran en poder de la parte demandada (persona física o moral), es preciso establecer lo siguiente:

- I. Qué tipo de documentos son adecuados para el juicio, es decir, que tengan relación inmediata entre las actividades desempeñadas y el daño ambiental.
- II. Qué tipo de documentos son los adecuados para ser presentados en el juicio interdictal y de acción negatoria por daño ambiental.

En este sentido y para iniciar el proceso, el juez debe aplicar el artículo 286 del Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí,<sup>365</sup> esta hipótesis legal está relacionada con el artículo 34 en su segundo párrafo de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.<sup>366</sup> Aunque en la ley federal, el juez requiere a las autoridades administrativas.

---

<sup>365</sup> El artículo 286 menciona: "Las partes están obligadas, al ofrecer la prueba de documentos que no tienen en su poder, a expresar el archivo en que se encuentren, o si se encuentran en poder de terceros y si son propios o ajenos". *Op cit.*

<sup>366</sup> El artículo 34 en su segundo párrafo señala: "El juez requerirá a la Secretaría y a la Procuraduría para que aporten todos los elementos periciales, testimoniales, documentales y demás indicios y elementos de prueba con los que cuenten. Los servidores públicos estarán obligados a cumplir con dicha obligación". *Op cit.*

En base en los referidos artículos, el juez con previo conocimiento de la normatividad ambiental, conoce qué documentos tiene la persona física o moral de acuerdo con sus actividades y por consiguiente está obligado a solicitarla.

El juez al tramitar una demanda interdictal o de acción negatoria por un daño ambiental y en relación con las obligaciones que tiene que cumplir el demandado, puede identificar y saber con qué tipo de documentos cuenta este y con qué tipo de documentos cuentan las autoridades ambientales federales y estatales.

Como lo indicamos en líneas anteriores, la parte actora no puede saber en forma clara y precisa qué tipo de documentos son adecuados para ser presentados dentro del juicio, por lo que el juez debe actuar de oficio al solicitar los documentos que se requieran y sean pertinentes para que obren en autos.

Este requerimiento de oficio que ejerza el juez, debe partir principalmente de la inspección, ya que con base en esto, le será posible requerir la información, aunque no conozca el nombre de dicha documental.

Para ejecutar lo anterior, el juez cuenta con lo establecido en el artículo 279 del Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí que dice:

“Los terceros están obligados, en todo tiempo, a prestar auxilio a los tribunales en la averiguación de la verdad. En consecuencia, deben, sin demora, exhibir documentos y cosas que tengan en su poder, cuando para ello fueren requeridos.

Los tribunales tienen la facultad y el deber de compeler a terceros, por los apremios más eficaces, para que cumplan con esta obligación y, en caso de oposición, oirán las razones en que la funden y resolverán sin ulterior recurso”.

Cabe mencionar que existe una disposición en el Código Federal de Procedimientos Civiles cuyo contenido se expresa el mismo sentido.<sup>367</sup>

---

<sup>367</sup> El artículo 89 manifiesta: “Cuando una de las partes se oponga a la inspección o reconocimiento ordenados por el tribunal, para conocer sus condiciones físicas o mentales, o no conteste las preguntas que le dirija, deben tenerse por ciertas las afirmaciones de la contraparte, salvo prueba en contrario. Lo

De esta manera, el juzgador debe ser suspicaz en el sentido de no olvidar los requerimientos efectuados al demandado y, en caso de incumplimiento, hacer efectiva las medidas de apremio.

#### **5.5.1 Tipo de documentación que posee la parte demandada de acuerdo con la normatividad ambiental**

La importancia de que obre en autos la documentación del demandado, reside en el desempeño ambiental con que se ha desenvuelto la parte demandada en relación con sus obligaciones derivadas de la normatividad ambiental y en seguridad.

Para ello, las principales obligaciones que tiene el demandado respecto a la normatividad ambiental son variadas, pero vamos a inclinarnos por la clasificación establecida por Roberto Walss<sup>368</sup>, es decir:

- I. Impacto ambiental y riesgo de la actividad industrial.
- II. Emisiones a la atmósfera.
- III. Manejo de residuos peligrosos.
- IV. Uso y aprovechamiento de aguas nacionales y descarga de aguas residuales en zonas federales.
- V. Emisiones de ruido.

Las cuales se describen a continuación.

##### *1. Impacto ambiental<sup>369</sup> y riesgo de la actividad industrial.*

Se trata de un estudio técnico que tiene como finalidad resaltar los impactos ambientales que serán generados durante las operaciones y actividades de la empresa. Este informe se presenta al iniciar las operaciones la persona física o moral que implementa nuevos procesos productivos.<sup>370</sup>

---

mismo se hará si una de las partes no exhibe, a la inspección del tribunal, la cosa o documento que tiene en su poder o de que puede disponer". *Op cit.*

<sup>368</sup> WALSS, Rodolfo, *Guía práctica para la gestión ambiental*, primera edición, editorial McGraw Hill, México, 2001, página 11

<sup>369</sup> RODOLFO WALSS indica que: "La evaluación de impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras o actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidas en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente". *Ídem*, p. 12.

<sup>370</sup> En el artículo 3º fracción XX de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente proporciona una definición del manifiesto de impacto ambiental, indicando lo siguiente: "Artículo 3º. Para los efectos de esta Ley se entiende por: XX.- Manifestación del impacto ambiental: El documento

El estudio de impacto ambiental<sup>371</sup> puede ser presentado ante SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) o SEGAM (Secretaría de Gestión Ambiental). Para ello, se determina la competencia de las actividades de la empresa. El resultado que este estudio arroje por parte de la autoridad determinará una resolución donde se impongan ciertas condicionantes durante las operaciones y actividades de la empresa.

Además de indicar los impactos ambientales generados por las actividades productivas, deben mencionarse los medios (técnicos o humanos) con que cuenta la empresa para hacerle frente a los problemas ambientales que se pudieran presentar y cuya incidencia recaiga en el ambiente.

Acerca del estudio de riesgo ambiental,<sup>372</sup> éste recae sobre el efecto negativo de una actividad o proceso productivo que sea considerado como “altamente peligroso”.<sup>373</sup>

Por otro lado, el estudio de riesgo puede ser presentado ante SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales)<sup>374</sup> o SEGAM (Secretaría de Gestión Ambiental).<sup>375</sup>

---

mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo”.

*Op cit.*

<sup>371</sup> El artículo 3º en su fracción XXI de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente indica lo que es una manifestación del impacto ambiental, para lo cual señala que es: “El documento mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo”. Esta fracción fue recorrida y publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el día 28 de enero del 2011.

*Op cit.*

<sup>372</sup> WALSS indica que “El objetivo del estudio de riesgo es determinar tanto el efecto negativo que una actividad considerada como ‘altamente peligrosa’ puede tener sobre el medio ambiente, como los medios para controlarlo. Por tanto, cada industria debe indagar si la obra o actividad que pretende elaborar es considerada ‘altamente peligrosa’, en cuyo caso deberá elaborar el correspondiente estudio de riesgo”, WALSS, Rodolfo, *Op cit.* 24.

<sup>373</sup> El artículo 146 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente menciona: “La Secretaría, previa opinión de las Secretarías de Energía, de Comercio y Fomento Industrial, de Salud, de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social, conforme al Reglamento que para tal efecto se expida, establecerá la clasificación de las actividades que deban considerarse altamente riesgosas en virtud de las características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas para el equilibrio ecológico o el ambiente, de los materiales que se generen o manejen en los establecimientos industriales, comerciales o de servicios, considerando, además, los volúmenes de manejo y la ubicación del establecimiento”. *Op cit.*

<sup>374</sup> El estudio de riesgo de competencia federal presentado ante SEMARNAT tiene su fundamento legal en el artículo 147 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente indica lo siguiente: “Quienes realicen actividades altamente riesgosas, en los términos del Reglamento correspondiente, deberán formular y presentar a la Secretaría un estudio de riesgo ambiental, así como someter a la aprobación de dicha dependencia y de las Secretarías de Gobernación, de Energía, de Comercio y Fomento Industrial, de Salud, y del Trabajo y Previsión Social, los programas para la prevención de accidentes en la realización de tales actividades, que puedan causar graves desequilibrios ecológicos”. *Op cit.*

La definición de la competencia federal o estatal del estudio de riesgo ambiental se da en virtud de las cantidades mencionadas en las cantidades de reportes.<sup>376</sup> Cuando la empresa, ya sea en la producción almacenamiento y/o transporte, utiliza una mayor cantidad de sustancias peligrosas a la establecida en la cantidad de reporte contenida en los listados de actividades altamente riesgosas está obligado a presentarlo ante SEMARNAT. Sin embargo, cuando la cantidad de la sustancia manejada es menor a la cantidad de reporte señalada en los listados a quien le corresponde conocerlo y resolverlo es a SEGAM.<sup>377</sup>

El resultado que este estudio arroje por parte de la autoridad determinará una resolución donde se impongan determinadas condicionantes durante las operaciones y actividades de la empresa.

Igual que sucede con la evaluación de impacto ambiental, la autoridad está obligada a resolver y dictar ciertas condicionantes para que no exista un desequilibrio ambiental derivado de las operaciones por el uso de las sustancias reportadas.

Otra característica del estudio de riesgo es que, en forma paralela, la empresa debe elaborar y presentar ante SEMARNAT o SEGAM un programa de prevención de accidentes.

En este programa de prevención de accidentes se establecen los procedimientos que aplica la empresa: si tiene un sistema de administración ambiental, verificaciones por parte de unidades de verificación sobre sistemas e instalaciones donde se almacenan y transportan las sustancias químicas.

---

<sup>375</sup> El estudio de riesgo de competencia estatal que se presenta ante SEGAM esta establecido en el artículo 99 de la Ley Ambiental del estado de San Luis Potosí, que a la letra dice: "La realización de actividades riesgosas, de llevarse a cabo se harán con apego a lo dispuesto en esta Ley, las disposiciones reglamentarias y la normatividad ambiental que se derive de lo previsto en el artículo anterior. Quienes realicen actividades riesgosas deberán formular y presentar a la SEGAM un estudio de riesgo ambiental bajo la modalidad de informe preliminar; así como someter a su aprobación los programas para la prevención de accidentes en la realización de tales actividades que pudieran causar impactos ambientales adversos". *Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí*, diciembre 09, 1999. S.L.P.

<sup>376</sup> Ambos listados contienen la misma definición de cantidad de reporte, señalando que es: "Cantidad mínima de sustancia peligrosa en producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, uso o disposición final, o la suma de estas, existentes en una instalación o medio de transporte dados, que al ser liberada, por causas naturales o derivadas de la actividad humana, ocasionaría una afectación significativa al ambiente, a la población o a sus bienes".

<sup>377</sup> Lo anterior está establecido en el artículo 3º del Acuerdo Administrativo mediante el cual se expide el primer listado de actividades riesgosas para el estado de San Luis Potosí, así como la guía para la elaboración del estudio de riesgo, modalidad informe preliminar. *Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí*, abril 26, 2003, S.L.P.

Walss ha señalado que en los casos donde el estudio de riesgo se deba presentar junto con el estudio de impacto ambiental, se debe adicionar (en el estudio de riesgo) la siguiente información:<sup>378</sup>

- I. Escenarios y medidas preventivas resultantes del análisis de los riesgos ambientales relacionados con el proyecto.
- II. Descripción de las zonas de protección en torno a las instalaciones.
- III. Señalamiento de las medidas de seguridad en materia ambiental.

Como parte importante de este estudio también habrán de incluirse los diversos rubros de contenidos de la NOM-002-STPS-2010,<sup>379</sup> sobre “Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo”.

---

<sup>378</sup> WALSS, Rodolfo, *Op. cit.*, p. 25.

<sup>379</sup> Entre los que podemos mencionar: 1. Clasificar el riesgo de incendio del centro de trabajo o por áreas que lo integran, tales como plantas, edificios o niveles. 2. Contar con un croquis, plano o mapa general del centro de trabajo, o por áreas que lo integran, actualizado y colocado en los principales lugares de entrada, tránsito, reunión o puntos comunes de estancia o servicios para los trabajadores, que contenga lo siguiente, según aplique: a) El nombre, denominación o razón social del centro de trabajo y su domicilio; b) la identificación de los predios colindantes; c) la identificación de las principales áreas o zonas del centro de trabajo con riesgo de incendio, debido a la presencia de material inflamable, combustible, pirofórico o explosivo, entre otros; d) la ubicación de los medios de detección de incendio, así como de los equipos y sistemas contra incendio; e) las rutas de evacuación, incluyendo, al menos, la ruta de salida y la descarga de salida, además de las salidas de emergencia, escaleras de emergencia y lugares seguros; f) la ubicación del equipo de protección personal para los integrantes de las brigadas contra incendio, y g) la ubicación de materiales y equipo para prestar los primeros auxilios. 3. Contar con las instrucciones de seguridad aplicables en cada área del centro de trabajo y difundirlas entre los trabajadores, contratistas y visitantes, según corresponda. 4. Cumplir con las condiciones de prevención y protección contra incendios en el centro de trabajo. 5. Contar con un plan de atención a emergencias de incendio. 6. Contar con brigadas contra incendio en los centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio alto. 7. Desarrollar simulacros de emergencias de incendio al menos una vez al año, en el caso de centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio ordinario, y al menos dos veces al año para aquellos con riesgo de incendio alto. 8. Elaborar un programa de capacitación anual teórico-práctico en materia de prevención de incendios y atención de emergencias, así como capacitar a los trabajadores y a los integrantes de las brigadas contra incendio, con base en dicho programa. 9. Dotar del equipo de protección personal a los integrantes de las brigadas contra incendio, considerando para tal efecto las funciones y riesgos a que estarán expuestos, de conformidad con lo previsto en la NOM-017-STPS-2008, o las que la sustituyan. 10. Contar en las áreas de los centros de trabajo clasificadas con riesgo de incendio ordinario, con medios de detección y equipos contra incendio, y en las de riesgo de incendio alto, además de lo anteriormente señalado, con sistemas fijos de protección contra incendio y alarmas de incendio, para atender la posible dimensión de la emergencia de incendio, mismos que deberán ser acordes con la clase de fuego que pueda presentarse. 11. Contar con alguno de los documentos que enseguida se señalan, tratándose de centros de trabajo con riesgo de incendio alto: a) El acta y la minuta correspondientes a la verificación satisfactoria del cumplimiento de la presente Norma, que emita la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el marco de las evaluaciones integrales del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, o b) el dictamen de cumplimiento de esta Norma expedido por una unidad de verificación acreditada y aprobada, o c) el acta circunstanciada que resulte de la revisión, verificación, inspección o vigilancia de las condiciones para la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo, por parte de la autoridad local de protección civil que corresponda al

Los documentos que se van a presentar al juez serán. El estudio de impacto ambiental y el estudio de riesgo y ambas resoluciones de la autoridad con las condicionantes, así como las actualizaciones que se hayan realizado y aprobado.

Además de lo anterior, se debe solicitar lo concerniente a lo estipulado en la NOM-002-STPS-2011 sobre las condiciones de seguridad y protección contra incendios en un centro de trabajo.

- a. El estudio de determinación de grado de incendio.
- b. Evidencia de la realización de simulacros.
- c. Evidencia de capacitación de los brigadistas (tiene que efectuarse una capacitación anual en temas como: evacuación, primeros auxilios, incendio y fugas).
- d. Organigrama de las brigadas de emergencia.
- e. Evidencia documental de las revisiones que se realizan en forma mensual a los extintores, anual al mantenimiento de los hidrantes, a los detectores de humo, al sistema de espuma para procesos especiales (en caso que aplique), y al sistema de aspersores en áreas como almacenes de producto terminado y de materia prima.

## *2. Emisiones a la atmósfera.*

La regulación de las emisiones a la atmósfera encuentran su sustento legal en el capítulo II titulado *Prevención y control de la contaminación atmosférica* de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

---

domicilio del centro de trabajo, en el marco de los programas internos, específicos o especiales de protección civil. *Diario Oficial de la Federación*, diciembre 9, 2010, México, D.F.



En forma más detallada, se hace hincapié en el artículo 111 bis de la misma ley en referencia<sup>380</sup> a las fuentes fijas y a las emisiones que habrán de requerir de una autorización.

Esta autorización es la Licencia Ambiental Única, misma que consta de un formato que contiene 6 anexos, abarcando información como datos generales de la empresa, croquis de localización, emisiones a la atmósfera (puntos técnicos de los ductos de las emisiones), descargas de agua y residuos peligrosos.

Es un trámite que únicamente se efectúa ante SEMARNAT y se puede solicitar un relicenciamiento cuando hay aumento de producción o un nuevo proceso productivo.

Anteriormente era conocido como licencia de funcionamiento (antes del año 1988), posteriormente a esa fecha se le conoce como Licencia Ambiental Única. Por ello, las empresas que hayan iniciado operaciones antes del año 1988, suelen tener la licencia de funcionamiento.

Hay que tener en consideración los pormenores que contiene este trámite, ya que es diferente al estudio de riesgo y de impacto ambiental. Son obligaciones independientes que, de acuerdo con sus características particulares, implican que la empresa conozca ante qué dependencia es necesario realizar cada trámite.<sup>381</sup>

Los documentos que pueden presentarse al juez son: el formato de la Licencia Ambiental Única con todos sus anexos, la resolución de la autoridad y las actualizaciones que se hayan efectuado con su resolución correspondiente.

---

<sup>380</sup> El artículo 111 bis indica: "Para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas de jurisdicción federal que emitan o puedan emitir olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera, se requerirá autorización de la Secretaría. Para los efectos a que se refiere esta Ley, se consideran fuentes fijas de jurisdicción federal, las industrias química, del petróleo y petroquímica, de pinturas y tintas, automotriz, de celulosa y papel, metalúrgica, del vidrio, de generación de energía eléctrica, del asbesto, cementera y calera y de tratamiento de residuos peligrosos. El reglamento que al efecto se expida determinará los subsectores específicos pertenecientes a cada uno de los sectores industriales antes señalados, cuyos establecimientos se sujetarán a las disposiciones de la legislación federal, en lo que se refiere a la emisión de contaminantes a la atmósfera". *Op cit.*

<sup>381</sup> WALSS indica que "Si una empresa es de jurisdicción federal en cuanto a sus emisiones a la atmósfera, pero de jurisdicción local para efectos del manifiesto de impacto ambiental, deberá tramitar su licencia de funcionamiento por medio de la Licencia Ambiental Única pero con el manifiesto de impacto ambiental con las autoridades locales, salvo que SEMARNAT haga uso de su facultad de atracción a su jurisdicción del manifiesto de impacto ambiental. Por el contrario, si el manifiesto de impacto ambiental es de jurisdicción federal pero la licencia de funcionamiento es de jurisdicción local, entonces dicha licencia deberá tramitarse ante las autoridades locales y el manifiesto de impacto ambiental ante las federales pero en forma independiente y no mediante la Licencia Ambiental Única", WALSS, Rodolfo, *Op. cit.*, p. 29.

En forma conjunta o como parte final de la Licencia Ambiental Única, está la Cédula De Operación Anual (COA).<sup>382</sup>

Esta cédula se compone de 5 secciones:

1. La primera sección contiene diagramas de flujo y tablas de resumen (de lo presentado en los diagramas de flujo).
2. La segunda sección trata de las emisiones a la atmósfera, donde se especifican las medidas de los ductos, el tipo de emisiones, cantidades y lugar de las emisiones.
3. La tercera sección se ocupa de las descargas de agua, se especifican los tipos de descarga y la forma de obtención del agua empleada en procesos, número de título por uso de pozos o permiso de descarga de agua residual.
4. La cuarta sección se refiere a los residuos peligrosos, en cuestiones como la cantidad anual de generación, quién es el transportista, el centro de acopio y sus respectivas autorizaciones ante SEMARNAT y S.C.T., características del almacén de residuos peligrosos y tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos. Existe un apartado respecto a si el generador realiza dentro de sus instalaciones actividades de tratamiento de residuos peligrosos.
5. La quinta sección se refiere de las sustancias RETC;<sup>383</sup> se trata de un listado de sustancias químicas que deben ser reportadas en caso

---

<sup>382</sup> El artículo 2 fracción IV del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos define lo que es la Cédula de Operación Anual indicando que “es un instrumento de reporte y recopilación de información de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos peligrosos empleado para la actualización de la base de datos del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes”. *Diario Oficial de la Federación*, noviembre 30, 2006, México, D.F.

<sup>383</sup> “El Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) contiene información de sustancias emitidas al ambiente: aire, agua, suelo y subsuelo o que son transferidas en el agua residual o en los residuos peligrosos. La información del RETC es pública y corresponde al nombre del establecimiento, su ubicación y la cantidad emitida o transferida de una lista de 104 sustancias, además de las emisiones de contaminantes criterio de las fuentes fijas. Este registro emana del artículo 109 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) e integrará información de las diferentes fuentes emisoras de competencia de los tres órdenes de gobierno. La información del registro será actualizada anualmente y estará disponible al público a partir del segundo semestre del 2006. El instrumento para recopilar la información del sector industrial de competencia federal es la Cédula de Operación Anual. Con la información del RETC se podrán proponer políticas eficaces para preservar y proteger el medio ambiente, además de apoyar la evaluación de Convenios Internacionales. Asimismo, al disponer de información de emisiones contaminantes que se generan el territorio nacional, se podrá conocer con mayor certeza la infraestructura ambiental que necesita el país. Las fuentes

Esta cédula de operación se presenta en forma anual, durante los primeros cuatro meses del año y reporta las cantidades generadas en el año inmediato anterior, es decir, en el año 2012 se presenta información de la empresa con respecto al año 2011.

Generalmente, la mayor parte de los estudios respecto a las emisiones a la atmósfera son considerados por la NOM-043-SEMARNAT-1993 y la NOM-085-SEMARNAT-2011. Es menester mencionar que a aquellos contaminantes que no estén regulados o estandarizados en una Norma Oficial Mexicana, no se les puede imponer sanción alguna.

emisoras evaluarán su desempeño y podrán identificar sus áreas de oportunidad para la reducción de las emisiones y transferencias. Actualmente el marco legal del RETC hace posible su instrumentación en las entidades federativas y municipios fortaleciendo la obtención de información ambiental para el Registro, permitiendo vincular políticas y estrategias. Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), <http://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/registro-de-emisiones-y-transferencia-de-contaminantes-retc>, fecha de consulta: 24 de mayo del 2014.

207

La Ley General para la Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos establece quiénes están obligados a presentar la Cédula de Operación Anual.<sup>385</sup>

El documento que se puede presentar al juez es la Cédula de Operación Anual (puede ser en papel o formato electrónico), los estudios técnicos de emisiones a la atmósfera y el análisis de agua residual.

A nivel estatal, también se presenta una Cédula de Operación Anual, cuyo contenido y tiempo de presentación es idéntico al del nivel federal.

### *3. Manejo de residuos peligrosos.*

El tema de los residuos peligrosos es uno de los de mayor importancia dentro de la normatividad ambiental en México.

Para cada tema en particular relacionado con los residuos peligrosos se requiere de ciertos parámetros técnicos y legales, tal como lo veremos en los siguientes párrafos.

Respecto a los residuos peligrosos, podemos incluir a toda empresa que dentro de sus procesos productivos requiere de la transformación de materia prima (plástico, vidrio, metal y pintado), dando lugar a un producto o subproducto que requiere, mediante otro proceso, una adición a su naturaleza y que a su vez sea la antesala para otro producto o subproducto. Esto es con base en el tipo de proceso productivo.

Para estar en condiciones de realizar esta transformación de materiales, forzosamente se requiere del empleo de una maquinaria o equipo para obtener un subproducto o producto. Estas metamorfosis de la materia prima, en sus diversos procesos, generan residuos peligrosos: por un lado debido a la transformación y por el otro, por el mantenimiento que requiere dicha maquinaria para que opere dentro de su capacidad.

---

<sup>385</sup> El artículo 46 señala: “Los grandes generadores de residuos peligrosos, están obligados a registrarse ante la Secretaría y someter a su consideración el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, así como llevar una bitácora y presentar un informe anual acerca de la generación y modalidades de manejo a las que sujetaron sus residuos de acuerdo con los lineamientos que para tal fin se establezcan en el Reglamento de la presente Ley, así como contar con un seguro ambiental, de conformidad con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente”. *Diario Oficial de la Federación*, octubre 8, 2003, México, D.F.

El generador de estos residuos peligrosos requiere cumplir con determinadas obligaciones ambientales, tales como:

- I. Inscribir un listado de los residuos peligrosos generados (una cantidad promedio de generación).<sup>386</sup>
- II. Obtener un número como generador de residuos peligrosos.
- III. Contar con transportistas que estén autorizados ante SEMARNAT y S.C.T., instancias a las que compete la expedición de los manifiestos.<sup>387</sup>
- IV. Contar con un almacén de residuos peligrosos que cumpla plenamente con las características requeridas de construcción y funcionamiento.<sup>388</sup>

---

<sup>386</sup> Para elaborar el listado de residuos peligrosos que va a presentar, previamente el generador debe analizar cuáles son los residuos que están considerados como peligrosos para lo cual debe de observar la NOM-052-SEMARNAT-2005.

<sup>387</sup> El artículo 80 de la Ley General para la Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos señala: "Las personas interesadas en obtener autorizaciones para llevar a cabo los servicios a terceros para el transporte, acopio, almacenamiento, reutilización, reciclaje, tratamiento y disposición final de residuos, según sea el caso, deberán presentar ante la Secretaría su solicitud de autorización, en donde proporcionen, según corresponda, la siguiente información:

- I. Datos generales de la persona, que incluyan nombre o razón social y domicilio legal.
- II. Nombre y firma del representante legal o técnico de la empresa.
- III. Descripción e identificación de los residuos que se pretenden manejar.
- IV. Usos del suelo autorizados en la zona donde se pretende instalar la empresa, plano o instalación involucrada en el manejo de los residuos y croquis señalando ubicación. Esta autorización podrá presentarse condicionada a la autorización federal.
- V. Programa de capacitación del personal involucrado en el manejo de residuos peligrosos, en la operación de los procesos, equipos, medios de transporte, muestreo y análisis de los residuos, y otros aspectos relevantes, según corresponda.
- VI. Programa de prevención y atención de contingencias o emergencias ambientales y a accidentes;
- VII. Memoria fotográfica de equipos, vehículos de transporte e instalaciones cuya autorización se solicite, según sea el caso.
- VIII. Información de soporte técnico de los procesos o tecnologías a los que se someterán los residuos, así como elementos de información que demuestren que se propone, en la medida de lo posible, la mejor tecnología disponible y económicamente accesible y formas de operación acordes con las mejores prácticas ambientales.
- IX. Propuesta de seguros o garantías financieras que, en su caso, se requieran.
- X. Copia de los permisos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
- XI. La que determinen el Reglamento de la presente Ley y las normas oficiales mexicanas que resulten aplicables". *Op cit.*

<sup>388</sup> Artículo 82 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos que dice: "Las áreas de almacenamiento de residuos peligrosos de pequeños y grandes generadores, así como de prestadores de servicios deberán cumplir con las condiciones siguientes, además de las que establezcan las normas oficiales mexicanas para algún tipo de residuo en particular:

- I. Condiciones básicas para las áreas de almacenamiento:
  - a) Estar separadas de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias primas o productos terminados.
  - b) Estar ubicadas en zonas donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas, incendios, explosiones e inundaciones.

V. Elaborar<sup>389</sup> y presentar ante SEMARNAT los planes de manejo<sup>390</sup> de los residuos peligrosos.<sup>391</sup>

c) Contar con dispositivos para contener posibles derrames, tales como muros, pretilas de contención o fosas de retención para la captación de los residuos en estado líquido o de los lixiviados.

d) Cuando se almacenan residuos líquidos, se deberá contar en sus pisos con pendientes y, en su caso, con trincheras o canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de retención con capacidad para contener una quinta parte como mínimo de los residuos almacenados o del volumen del recipiente de mayor tamaño.

e) Contar con pasillos que permitan el tránsito de equipos mecánicos, eléctricos o manuales, así como el movimiento de grupos de seguridad y bomberos, en casos de emergencia.

f) Contar con sistemas de extinción de incendios y equipos de seguridad para atención de emergencias, acordes con el tipo y la cantidad de los residuos peligrosos almacenados.

g) Contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos peligrosos almacenados, en lugares y formas visibles.

h) El almacenamiento debe realizarse en recipientes identificados considerando las características de peligrosidad de los residuos, así como su incompatibilidad, previniendo fugas, derrames, emisiones, explosiones e incendios.

i) La altura máxima de las estibas será de tres tambores en forma vertical.

II. Condiciones para el almacenamiento en áreas cerradas, además de las precisadas en la fracción I de este artículo:

a) No deben existir conexiones con drenajes en el piso, válvulas de drenaje, juntas de expansión, albañales o cualquier otro tipo de abertura que pudieran permitir que los líquidos fluyan fuera del área protegida.

b) Las paredes deben estar construidas con materiales no inflamables.

c) Contar con ventilación natural o forzada. En los casos de ventilación forzada, debe tener una capacidad de recepción de por lo menos seis cambios de aire por hora.

d) Estar cubiertas y protegidas de la intemperie y, en su caso, contar con ventilación suficiente para evitar acumulación de vapores peligrosos y con iluminación a prueba de explosión.

e) No rebasar la capacidad instalada del almacén.

III. Condiciones para el almacenamiento en áreas abiertas, además de las precisadas en la fracción I de este artículo:

a) Estar localizadas en sitios cuya altura sea, como mínimo, el resultado de aplicar un factor de seguridad de 1.5; al nivel de agua alcanzado en la mayor tormenta registrada en la zona.

b) Los pisos deben ser lisos y de material impermeable en la zona donde se guarden los residuos, y de material antiderrapante en los pasillos. Estos deben ser resistentes a los residuos peligrosos almacenados.

c) En los casos de áreas abiertas no techadas, no deberán almacenarse residuos peligrosos a granel, cuando estos produzcan lixiviados.

d) En los casos de áreas no techadas, los residuos peligrosos deben estar cubiertos con algún material impermeable para evitar su dispersión por viento.

En caso de incompatibilidad de los residuos peligrosos se deberán tomar las medidas necesarias para evitar que se mezclen entre sí o con otros materiales". *Op cit.*

<sup>389</sup> El artículo 27 de la Ley General de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos señala: "Los planes de manejo se establecerán para los siguientes fines y objetivos:

I. Promover la prevención de la generación y la valorización de los residuos así como su manejo integral, a través de medidas que reduzcan los costos de su administración, faciliten y hagan más efectivos, desde la perspectiva ambiental, tecnológica, económica y social, los procedimientos para su manejo.

II. Establecer modalidades de manejo que respondan a las particularidades de los residuos y de los materiales que los constituyan.

III. Atender a las necesidades específicas de ciertos generadores que presentan características peculiares;

IV. Establecer esquemas de manejo en los que aplique el principio de responsabilidad compartida de los distintos sectores involucrados.

V. Alentar la innovación de procesos, métodos y tecnologías, para lograr un manejo integral de los residuos, que sea económicamente factible". *Op cit.*

<sup>390</sup> En el título segundo "planes de manejo", capítulo I generalidades, en los artículos 16, 17 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, indican las modalidades y quienes están obligados a su presentación, por su parte el artículo 16 señala: "Los planes de manejo para residuos se podrán establecer en una o más de las siguientes modalidades:

I. Atendiendo a los sujetos que intervienen en ellos, podrán ser:

a) Privados, los instrumentados por los particulares que conforme a la Ley se encuentran obligados a la elaboración, formulación e implementación de un plan de manejo de residuos, o

Por su parte, el artículo 58 de la Ley General para la Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos establece lo que se debe presentar ante SEMARNAT, en caso de que la persona física o moral tenga actividades de tratamiento<sup>392</sup> de residuos peligrosos dentro de su establecimiento. Estas son adicionales a las gestiones y trámites que ha efectuado.

---

b) mixtos, los que instrumenten los señalados en el inciso anterior con la participación de las autoridades en el ámbito de sus competencias.

II. Considerando la posibilidad de asociación de los sujetos obligados a su formulación y ejecución, podrán ser:

a) Individuales, aquellos en los cuales solo un sujeto obligado establece en un único plan, el manejo integral que dará a uno, varios o todos los residuos que genere, o

b) colectivos, aquellos que determinan el manejo integral que se dará a uno o más residuos específicos y el cual puede elaborarse o aplicarse por varios sujetos obligados.

III. Conforme a su ámbito de aplicación, podrán ser:

a) Nacionales, cuando se apliquen en todo el territorio nacional.

b) Regionales, cuando se apliquen en el territorio de dos o más estados o el Distrito Federal, o de dos o más municipios de un mismo estado o de distintos estados.

c) Locales, cuando su aplicación sea en un solo estado, municipio o el Distrito Federal.

IV. Atendiendo a la corriente del residuo".

Por su parte, el artículo 17 indica: "Los sujetos obligados a formular y ejecutar un plan de manejo podrán realizarlo en los términos previstos en el presente Reglamento o las normas oficiales mexicanas correspondientes, o bien adherirse a los planes de manejo establecidos. La adhesión a un plan de manejo establecido se realizará de acuerdo a los mecanismos previstos en el propio plan de manejo, siempre que los interesados asuman expresamente todas las obligaciones previstas en él". *Op cit.*

<sup>391</sup> El artículo 31 de la Ley General de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos señala cuáles residuos que estarán sujetos a un plan de manejo los siguientes residuos peligrosos y los productos usados, caducos, retirados del comercio o que se desechen y que estén clasificados como tales en la norma oficial mexicana correspondiente:

I. Aceites lubricantes usados.

II. Disolventes orgánicos usados.

III. Convertidores catalíticos de vehículos automotores.

IV. Acumuladores de vehículos automotores conteniendo plomo.

V. Baterías eléctricas a base de mercurio o de níquel-cadmio.

VI. Lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio.

VII. Aditamentos que contengan mercurio, cadmio o plomo.

VIII. Fármacos.

IX. Plaguicidas y sus envases que contengan remanentes de los mismos.

X. Compuestos orgánicos persistentes como los bifenilos policlorados.

XI. Lodos de perforación base aceite, provenientes de la extracción de combustibles fósiles y lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales cuando sean considerados como peligrosos.

XII. La sangre y los componentes de esta, solo en su forma líquida, así como sus derivados.

XIII. Las cepas y cultivos de agentes patógenos generados en los procedimientos de diagnóstico e investigación y en la producción y control de agentes biológicos.

XIV. Los residuos patológicos constituidos por tejidos, órganos y partes que se remueven durante las necropsias, la cirugía o algún otro tipo de intervención quirúrgica que no estén contenidos en formol.

XV. Los residuos punzo-cortantes que hayan estado en contacto con humanos o animales o sus muestras biológicas durante el diagnóstico y tratamiento, incluyendo navajas de bisturí, lancetas, jeringas con aguja integrada, agujas hipodérmicas, de acupuntura y para tatuajes.

La Secretaría determinará, conjuntamente con las partes interesadas, otros residuos peligrosos que serán sujetos a planes de manejo, cuyos listados específicos serán incorporados en la norma oficial mexicana que establece las bases para su clasificación. *Op cit.*

<sup>392</sup> Artículo 58 indica: "Quienes realicen procesos de tratamiento físicos, químicos o biológicos de residuos peligrosos, deberán presentar a la Secretaría los procedimientos, métodos o técnicas mediante los cuales se realizarán, sustentados en la consideración de la liberación de sustancias tóxicas y en la propuesta de medidas para prevenirla o reducirla, de conformidad con las normas oficiales mexicanas que para tal efecto se expidan". *Op cit.*



Los documentos que se pueden presentar al juez son: el registro como generador de residuo peligroso, listado de los residuos peligrosos registrados, el plan de manejo con su resolución, bitácora de recepción y almacenamiento temporal de residuos peligrosos, las autorizaciones de los transportistas y del acopio de los residuos peligrosos.

En la inspección que se realice al almacén de residuos peligrosos para verificar sus características, se podrá observar lo siguiente:

*I. Condiciones básicas para las áreas de almacenamiento:*

- a. Estar separadas de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias primas o productos terminados.
- b. Estar ubicadas en zonas donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas, incendios, explosiones e inundaciones.
- c. Contar con dispositivos para contener posibles derrames, tales como muros, pretilas de contención o fosas de retención para la captación de los residuos en estado líquido o de los lixiviados.
- d. Cuando se almacenan residuos líquidos, se deberá contar con pisos con pendientes y, en su caso, con trincheras o canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de retención con capacidad para contener, como mínimo, una quinta parte de los residuos almacenados o del volumen del recipiente de mayor tamaño.
- e. Contar con pasillos que permitan el tránsito de equipos mecánicos, eléctricos o manuales, así como el movimiento de grupos de seguridad y bomberos, en casos de emergencia.
- f. Contar con sistemas de extinción de incendios y equipos de seguridad para atención de emergencias, acordes con el tipo y la cantidad de los residuos peligrosos almacenados.



- g. Contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos peligrosos almacenados, en lugares y formas visibles, de acuerdo con la NOM-026-STPS-2008.<sup>393</sup>
- h. El almacenamiento debe realizarse en recipientes identificados considerando las características de peligrosidad de los residuos, así como su incompatibilidad, previniendo fugas, derrames, emisiones, explosiones e incendios.
- i. La altura máxima de las estibas será de tres tambores en forma vertical.

*II. Condiciones para el almacenamiento en áreas cerradas, además de las precisadas en los numerales 1 al 9:*

- a. No deben existir conexiones con drenajes en el piso, válvulas de drenaje, juntas de expansión, albañales o cualquier otro tipo de abertura que pudieran permitir que los líquidos fluyan fuera del área protegida.
- b. Las paredes deben estar construidas con materiales no inflamables.
- c. Contar con ventilación natural o forzada. En los casos de ventilación forzada, debe tener una capacidad de recepción de por lo menos seis cambios de aire por hora.
- d. Estar cubiertas y protegidas de la intemperie y, en su caso, contar con ventilación suficiente para evitar acumulación de vapores peligrosos y con iluminación a prueba de explosión.
- e. No rebasar la capacidad instalada del almacén.

*III. Condiciones para el almacenamiento en áreas abiertas, además de las precisadas en los numerales del 1 al 9:*

---

<sup>393</sup> Esta Norma Oficial Mexicana tiene como título: “Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías”. *Op cit.*

- a. Estar localizadas en sitios cuya altura sea, como mínimo, el resultado de aplicar un factor de seguridad de 1.5 al nivel de agua alcanzado en la mayor tormenta registrada en la zona.
- b. Los pisos deben ser lisos y de material impermeable en la zona donde se guarden los residuos, y de material antiderrapante en los pasillos. Estos deben ser resistentes a los residuos peligrosos almacenados.
- c. En los casos de áreas abiertas no techadas, no deberán almacenarse residuos peligrosos a granel, cuando estos produzcan lixiviados.<sup>394</sup>
- d. En los casos de áreas no techadas, los residuos peligrosos deben estar cubiertos con algún material impermeable para evitar su dispersión debido al viento. En caso de incompatibilidad de los residuos peligrosos se deberán tomar las medidas necesarias para evitar que se mezclen entre sí o con otros materiales.

#### *4. Uso, aprovechamiento de aguas nacionales y descarga de aguas residuales en zonas federales.*

Este rubro está normado por la Ley de Aguas Nacionales. Para poder entender el concepto de aguas nacionales es necesario revisar lo que indica el quinto párrafo del artículo 27 de la Constitución Federal.<sup>395</sup>

<sup>394</sup> El artículo 5º en su fracción XVI de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos define lo que es un lixiviado indicando que es un “Líquido que se forma por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales que constituyen los residuos y que contiene en forma disuelta o en suspensión, sustancias que pueden infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se depositan los residuos y que puede dar lugar a la contaminación del suelo y de cuerpos de agua, provocando su deterioro y representar un riesgo potencial a la salud humana y de los demás organismos vivos”. *Op cit.*

<sup>395</sup> El artículo 27 párrafo quinto menciona: “Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije (*el, sic Diario Oficial de la Federación del 20 de enero de 1960*) Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes (*intermitentes, sic DOF 20-01-1960*) y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquellas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio

Como lo menciona Walss “en términos generales, es válido decir que prácticamente todas las aguas que conforme al derecho nacional e internacional se encuentren dentro del país, son originalmente aguas nacionales, por lo que la nación tiene la facultad de conceder su uso, aprovechamiento o explotación a los particulares, a los gobiernos estatales y municipales o cualquier persona física o moral en términos de la Ley de Aguas”.<sup>396</sup>

De acuerdo con lo contenido en la Ley de Aguas Nacionales, deben satisfacerse cuatro permisos para que una empresa use o aproveche las aguas nacionales, o en su defecto, realice actividades de descarga de aguas residuales en zona federales o bienes nacionales:

- I. Concesión para el aprovechamiento, uso o explotación de aguas nacionales.
- II. Permiso para descargar aguas residuales<sup>397</sup> en zonas federales o bienes nacionales.
- III. Concesiones para ocupar zonas federales o bienes nacionales a cargo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) .
- IV. Permiso para la realización de las obras necesarias para el uso y aprovechamiento de las aguas nacionales.

---

nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos; el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los Estados”. *Diario Oficial de la Federación*, diciembre 1º, 1992, México, D.F.

<sup>396</sup> WALSS, Rodolfo, *Op cit.*, p. 53.

<sup>397</sup> El artículo 3º fracción VI indica que las aguas residuales son “las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos público urbano, doméstico, industrial, comercial, de servicios, agrícola, pecuario, de las plantas de tratamiento y en general, de cualquier uso, así como la mezcla de ellas”. *Op cit.*

En la mayor parte de los trámites gestionados ante esta dependencia, prevalece el criterio de completar un formato anexando la información pertinente y técnica del trámite que se va a gestionar.

En lo concerniente al permiso de descarga de aguas residuales, quien efectúe la descarga debe de realizar estudios técnicos respecto a las aguas descargadas para que se encuentre dentro de lo establecido en las NOM-001-SEMARNAT-2001 y la NOM-002-SEMARNAT-1996.

Los documentos que se pueden presentar al juez son: los permisos que se tienen expedidos, los formatos que se acompañaron a la autoridad para emitir dicho permiso o concesión y estudios técnicos de los análisis del agua residual.

#### *5. Emisiones de ruido.*

En lo referente a las emisiones de ruido debemos atender a lo establecido en el artículo 155 que a la letra dice:<sup>398</sup>

“Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica y la generación de contaminación visual, en cuanto rebasen los límites máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas que para ese efecto expida la Secretaría, considerando los valores de concentración máxima permisibles para el ser humano de contaminantes en el ambiente que determine la Secretaría de Salud. Las autoridades federales o locales, según su esfera de competencia, adoptarán las medidas para impedir que se transgredan dichos límites y en su caso, aplicarán las sanciones correspondientes.

En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica o lumínica, ruido o vibraciones, así como en la operación o funcionamiento de las existentes deberán llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para evitar los efectos nocivos de tales contaminantes en el equilibrio ecológico y el ambiente”.

---

<sup>398</sup> Artículo reformado, *Diario Oficial de la Federación*, diciembre 13, 1996, México, D.F.

En atención a dicha disposición legal, las emisiones de ruido que sean generadas por el demandado, deben cumplirse con determinados estándares técnicos, los cuales están establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas que SEMARNAT ha instituido como:

1. NOM-079-SEMARNAT-1994.
2. NOM-080-SEMARNAT-1994.
3. NOM-081-SEMARNAT-2003.
4. NOM-082 SEMARNAT-1994.

La Norma Oficial Mexicana que nos interesa para efectos del presente tema, es la NOM-081-SEMARNAT-2003, ya que regula directamente las emisiones de ruido en fuentes fijas, comprendiendo así a la industria en general.

Esta norma nos indica el ruido perimetral que puede ser generado por maquinaria y equipo que por su naturaleza y volumen, requiere, en la mayor parte de los casos situarse en el exterior de la empresa.

Los documentos que se pueden presentar al juez son los estudios técnicos de ruido perimetral de los últimos tres años e inspección a la maquinaria generadora del ruido. En caso que esta maquinaria se encuentre como un recipiente sujeto a presión, el estudio debe acompañarse, además, de lo siguiente:

- I. Inspección de autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de dichos recipientes.
- II. Plano técnico autorizado de los recipientes sujetos a presión.
- III. Listado de los recipientes sujetos a presión vigentes en la empresa.
- IV. Bitácora de revisión y mantenimiento de los recipientes sujetos a presión.

En materia de seguridad, como se indicó anteriormente, existe diversa información que obra en posesión del demandado. Su aportación dentro del juicio por daño ambiental serviría para clarificar determinados puntos; y si el juzgador a su leal saber y entender lo juzga pertinente, deberá contar con copia de los mismos.

Cabe mencionar que lo anterior depende de las actividades que desarrolle el demandado, ya que existen supuestos que no son cumplidos puesto que no tiene maquinaria o equipo que amerite tomar dichas medidas. Por su parte, la documentación puede consistir en:

- I. Autorización y plano de todos los recipientes sujetos a presión.
- II. Registro de capacitación para la operación, mantenimiento y revisión de los equipos recipientes a presión de acuerdo a la NOM-020-STPS-2011.
- III. Documentación de los reportes de antecedentes de alteraciones, reparaciones, condiciones de operación y mantenimiento de equipos.
- IV. Estudio para analizar el riesgo potencial generado por la maquinaria y equipo, que incluye un inventario de todos los factores y condiciones peligrosos.
- V. Registro del mantenimiento de la maquinaria y equipo, correctivo o preventivo, indicando la fecha en que se realizó. Tal registro debe mantenerse durante al menos doce meses.
- VI. Programa de seguridad e higiene para la realización de trabajos de soldadura y corte en condiciones de seguridad e higiene.
- VII. Análisis de riesgos potenciales para las actividades de soldadura y corte que se desarrollen en el centro de trabajo.
- VIII. Registro de mantenimiento preventivo y, en su caso, correctivo, al equipo y maquinaria utilizados en las actividades de soldadura y corte.

- IX. Reconocimiento y evaluación vigentes de las características del ruido y sus componentes de frecuencia.
- X. Registro del personal autorizado para la ejecución de actividades que impliquen un riesgo especial por el manejo de agentes biológicos.
- XI. Relación del personal capacitado para el manejo y transporte de materiales peligrosos, junto con las constancias de habilidades correspondientes, en caso de que se cuente con ellas.
- XII. Autorizaciones correspondientes para la adquisición, importación, posesión, uso, transferencia, transporte, almacenamiento definitivo y destino o disposición final de material radioactivo y dispositivos generadores de radiación ionizante, emitidas por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.
- XIII. Permisos correspondientes de construcción, modificación, cese de operaciones, desmantelamiento o cierre definitivo de instalaciones radiactivas y la licencia de operación emitida por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.
- XIV. Relación del encargado de seguridad radiológica, o en su caso del responsable de seguridad o mantenimiento del equipo de rayos X, así como de los auxiliares necesarios por turno de trabajo, quienes deberán permanecer en el centro de trabajo durante su jornada laboral y durante todo el tiempo que sean requeridos en caso de aplicarse el plan de emergencia.
- XV. Diagrama unifilar de la instalación eléctrica actualizado que muestre el cuadro general de cargas instaladas y por circuito derivado.
- XVI. Capacitación y adiestramiento a los trabajadores que realizan mantenimiento a las instalaciones eléctricas del centro de trabajo.
- XVII. Medición y registro, al menos cada doce meses, de los valores de resistencia de la red de tierras y la continuidad en los puntos de

conexión a tierra en el equipo que pueda generar o almacenar electricidad estática.

- XVIII. Relación del personal autorizado para llevar a cabo las actividades de manejo, transporte y almacenamiento de materiales y sustancias químicas peligrosas, así como para operaciones en espacios confinados.
- XIX. Programa (procedimientos) para el manejo, transporte y almacenamiento de materiales y sustancias químicas peligrosas en equipos y sistemas, el cual contendrá los elementos señalados de las normas aplicables, así como la señalización y limitación de las zonas para el tránsito de personas.
- XX. Estudio actualizado del análisis de los riesgos potenciales de las sustancias químicas peligrosas.
- XXI. Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria, equipos e instalaciones, con registros de los últimos doce meses.
- XXII. Registro de las verificaciones oculares periódicas a las instalaciones y elementos estructurales de acuerdo con el programa de la Comisión de Seguridad e Higiene del centro de trabajo.
- XXIII. Programa de mantenimiento preventivo, en el que se establecen las condiciones de operación seguras de todos los componentes del equipo suspendido de acceso.
- XXIV. Relación del personal capacitado para los trabajos de instalación, operación y mantenimiento del equipo suspendido de acceso.
- XXV. Programa de Seguridad e Higiene en el Trabajo, donde se considere el cumplimiento de la normatividad laboral en la materia.
- XXVI. Documentos donde conste la organización y capacitación de las brigadas de evacuación del personal y de atención de primeros auxilios. Asimismo, en los centros de trabajo donde se cuente con



más de una brigada, debe especificarse la persona responsable de coordinar las actividades de las brigadas.

- XXVII. Evidencia de los simulacros de incendio realizados (los últimos tres años).
- XXVIII. Programa específico de seguridad e higiene para radiaciones ionizantes.
- XXIX. Registros actualizados del mantenimiento preventivo, de las revisiones o pruebas que se realicen a los equipos críticos relacionados con el proceso, conservando estos documentos durante cinco años.
- XXX. Registro de la capacitación, adiestramiento inicial o periódico a los trabajadores así como a los contratistas relacionados con el mantenimiento u operación de los equipos críticos, procesos y trabajos peligrosos.

#### **5.5.2 Documentación de la parte demandada en posesión de las autoridades administrativas**

Consta de los permisos, concesiones, estudios de impacto ambiental y de riesgo ambiental con que debe contar la parte demandada. La autoridad correspondiente cuenta con un expediente en particular por cada persona física o moral que efectúa los trámites.

Las autoridades administrativas poseen información apropiada para conocer el historial ambiental de una persona física o moral en relación con el cumplimiento de la normatividad ambiental.

Por consiguiente, creemos pertinente que las autoridades ambientales (SEMARNAT, SEGAM y PROFEPA) y de seguridad (STPS) deberían expedir una copia certificada de todos y cada uno de los documentos, estudios, análisis y planos que sirvieron de soporte al momento de resolver un trámite en sus diferentes áreas.

En la siguiente tabla describimos la información ambiental y de seguridad que las dependencias poseen de las personas físicas o morales que realizan gestiones de autorización para sus operaciones, procesos productivos, tipo, forma de almacenamiento de sustancias químicas, de producto terminado, de residuos peligrosos, así como de residuos de manejo especial.<sup>399</sup>

Dependencia	Tipo de dependencia	Trámite, permiso o estudio	Respuesta de la dependencia por trámite, permiso o estudio
SEMARNAT	Federal	Registro como generador de residuos peligrosos.	Aprueba el listado que le adjunta la persona física o moral de los residuos peligrosos generados por sus procesos productivos o servicios.
		Estudio de impacto ambiental.	Emite una resolución que contiene condicionantes.
		Estudio de riesgo ambiental.	Emite una resolución que contiene condicionantes.
		Programa de prevención de accidentes.	Únicamente lo recibe, como requisito del estudio de riesgo.
		Cédula de Operación Anual.	Recibe la información impresa y electrónica, no se emite respuesta.
		Plan de manejo de residuos peligrosos.	Emite una resolución que contiene condicionantes.
		Autorización como recolector de residuos peligrosos.	Emite autorización con base en la documentación de las operaciones de la persona física o moral.
		Autorización como centro de acopio de residuos peligrosos.	Emite autorización con base en la documentación de las operaciones de la persona física o moral.
		Autorización para reutilizar, tratar, reciclar residuos peligrosos.	Emite autorización con base en la documentación de las operaciones de la persona física o moral.
		Estudios técnicos de emisiones a la atmósfera.	Se establece información en la Cédula de Operación Anual.
		Estudios de análisis de agua residual.	Se establece información en la Cédula de Operación Anual.
CONAGUA	Federal	Permiso de descarga de aguas residuales.	Permiso donde se cerciora el tipo de tratamiento y lugar de descarga de las aguas residuales.

<sup>399</sup> La Ley Ambiental de San Luis Potosí en su artículo 3º define los residuos de manejo especial, que son “aquellos generados en los procesos productivos que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos”. Artículo reformado, *Periódico Oficial*, marzo 28, 2009, S.L.P.

		Licencia de uso de pozo.	Permiso donde se decreta la cantidad permitida de extracción de agua de pozo.
PROFEPA	Federal	Inspecciones ambientales y procedimientos administrativos.	Son aleatorias y en caso de existir hechos u omisiones, estos se asientan en el acta de inspección, lo que genera un procedimiento administrativo, estableciéndose sanciones.
		Certificación Industria Limpia.	Es una certificación en la que a través de una auditoría ambiental en todos los rubros ambientales, se califica el cumplimiento normativo ambiental.
STPS	Federal	Certificación Empresa Segura.	Es una certificación en la que, a través de una auditoría en todos los rubros de seguridad e higiene, se califica el cumplimiento normativo en seguridad.
		Autorización de recipientes sujetos a presión.	Se realiza una inspección y pruebas para determinar que el recipiente sujeto a presión no tenga ninguna fuga.
		Análisis de maquinaria y equipo.	Es un análisis donde se describe la maquinaria y equipo, así como la probabilidad de que pueda generar un daño a la salud o al medio ambiente laboral.
SEGAM	Estatat	Registro como generador de manejo especial.	Aprueba el listado que le adjunta la persona física o moral de los residuos industriales no peligrosos generados en sus procesos productivos o servicios. A partir del año 2014 este registro se renueva anualmente.
		Estudio de impacto ambiental.	Emite una resolución que contiene condicionantes.
		Estudio de riesgo ambiental.	Emite una resolución que contiene condicionantes.
		Reporte semestral de residuos de manejo especial.	No hay respuesta.
		Reporte trimestral de residuos de manejo especial	No hay respuesta.
		Cédula de Operación Anual.	Recibe información documental y electrónica, no se emite respuesta.
		Autorización como recolector de residuos de manejo especial.	Emite autorización con base en la documentación de la persona física o moral.

Además, las autoridades administrativas (SEMARNAT, PROFEPA, CONAGUA y STPS) deberían aportar la siguiente información:

1. Cuántas verificaciones o inspecciones se le han realizado.
2. Cuántos procedimientos administrativos se le han interpuesto y cuáles son sus resultados.
3. Si se dio el cumplimiento por parte de las personas físicas o morales a las condicionantes del estudio de impacto ambiental y de riesgo que gestionaron para el inicio de sus operaciones o aumento de producción.
4. Si el cumplimiento de las condicionantes del estudio de impacto ambiental y de riesgo efectuado por las personas físicas o morales, es en término o extemporáneo.
5. Si se ha notificado a la persona física o moral que tiene el carácter de demandada en un juicio interdictal o de acción negatoria, la revocación de algún registro o licencia por falta de cumplimiento de reportes o requerimientos.

Por consiguiente, es necesario que el juez requiera en la etapa procesal correspondiente (ofrecimiento de pruebas), toda la documentación e información que tiene la parte demandada (SEMARNAT, CONAGUA, PROFEPA, SEGAM y STPS) y demás dependencias que considere pertinente.

En este sentido la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental señala en el párrafo primero del artículo 34,<sup>400</sup> la necesidad procesal de requerir a SEMARNAT, CONAGUA, PROFEPA y SEGAM para que envíen a los autos<sup>401</sup> del expediente todo medio de prueba que posean y que esté relacionado con el demandado.

---

<sup>400</sup> El artículo 34 en su párrafo segundo establece: "El juez requerirá a la Secretaría y a la Procuraduría para que aporten todos los elementos periciales, testimoniales, documentales y demás indicios y elementos de prueba con los que cuenten. Los servidores públicos estarán obligados a cumplir con dicha obligación". *Op. cit.*

<sup>401</sup> Por auto entendemos lo siguiente: "Una resolución judicial, es decir, es un pronunciamiento de un juez o tribunal en donde se deciden cuestiones planteadas por las partes dentro de una secuela procesal". Colegio de Profesores de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la UNAM, *Diccionario de Derecho Procesal*, segunda edición, editorial Oxford University Press México, 2000, página 44.

En caso de que la información sea extensa, debe ser enviado al juez mediante memoria USB o CD.

Con la documentación descrita en párrafos anteriores el juez, durante el proceso judicial, podrá identificar, conocer y analizar lo siguiente:

- I. El desempeño ambiental que ha desarrollado la persona física o moral dentro de sus procesos productivos. La elaboración y resultados de los análisis de agua residual, emisiones a la atmósfera y CRETIB de los nuevos residuos que se generen.
- II. Que los estudios técnicos estén dentro de los parámetros establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas. En caso contrario, con el resultado adverso, el plan de acción implementado y responsable de seguimiento para corregir la desviación (problema).
- III. Tendrá conocimiento de las sustancias químicas empleadas, los tipos así como las cantidades de los residuos peligrosos y no peligrosos generados.
- IV. Que la información técnica proporcionada para solicitar permisos, licencias, certificaciones no es errónea o falseada.
- V. Se percatará si hubo planes de acción, el cumplimiento y si lo efectuó dentro del término establecido en las condicionantes fijadas en las resoluciones de impacto ambiental y de riesgo ambiental.
- VI. Observará el seguimiento a determinadas situaciones que por su naturaleza requirieron monitoreo.

Con lo anterior, el juez determinará el grado de corresponsabilidad de las autoridades ambientales a nivel federal y estatal.

### **5.5.2 Los efectos legales de la documentación en un juicio por daño ambiental**

Las consecuencias legales de contar dentro de los autos del expediente del juicio por daño ambiental, con copia simple de las documentales que posean las autoridades administrativas y el demandado, consisten, en nuestra opinión, en los siguientes supuestos:

- I. Cotejar los estudios técnicos, planos, análisis o registros que presentó la persona física o moral ante la autoridad administrativa o ante el juez. Lo anterior para verificar algún dato erróneo o falso que se haya presentado.
- II. Cotejar si la autoridad administrativa no ha resuelto sobre algún trámite gestionado por el demandado en sus diversas áreas.
- III. Cotejar la información que tiene el demandado respecto a estudios, capacitaciones, registros o diagramas que le marca la normatividad en seguridad, donde se verifique que la misma fue elaborada con base en los lineamientos establecidos en cada una de las Normas Oficiales Mexicanas.
- IV. Verificar si dentro de algún registro existe un antecedente de alguna anomalía, habiéndose reportado que esta contribuyó a que el daño ambiental se haya originado o fue detonante para que el mismo se haya extendido a otros elementos ambientales.
- V. Cotejar que la información escrita (análisis, planos y registros) se ejecuta por parte del personal interno o el contratista dentro de las instalaciones del demandado o de quienes son llamados a juicio posteriormente.
- VI. Verificar los resultados de los estudios técnicos, si no ha existido alguna alteración a través del tiempo; y si hay alguna alteración de los puntos medidos, debe existir un plan de acción aplicado a los puntos que salieron fuera de norma.

- VII. Tener el conocimiento de que el daño ambiental tuvo su aparición porque la parte demandada no cumplió con lo establecido en la normatividad ambiental.
- VIII. Tener información si en la generación del daño ambiental hubo descuido o negligencia en las operaciones de mantenimiento o funcionamiento por parte del personal de la parte demandada.
- IX. Detectar el incumplimiento de alguna observación derivada de la autoridad correspondiente que no se corrigió de manera oportuna.
- X. Observar la falta de comunicación interna entre las diversas áreas de la persona moral o física, respecto a una situación que terminó por iniciar, continuar e incrementar un daño ambiental.

## **CAPÍTULO VI Contenido y alcance de las sentencias definitivas dictadas en los juicios de interdicto (de obra peligrosa y de recuperar la posesión) y acción negatoria por daño ambiental**

### **6.1 Introducción**

Al concluir las etapas procesales en un juicio interdictal y de acción negatoria para reparar un daño ambiental, el juez debe dictar la sentencia definitiva y es una resolución donde manifiesta si el actor probó su acción y el demandado, sus excepciones, en base a las pruebas ofrecidas por las partes (documentales privadas o públicas), inspección judicial y pericial.

De este modo y con base en la exposición de los hechos efectuados por las partes (actor y demandado) en sus escritos de demanda y contestación de la misma respectivamente, efectuaremos un breve análisis de la valoración de las pruebas ofrecidas por el actor (persona física), demandado (persona moral y dependencia administrativa ambiental) a nivel federal y estatal, cuyos contenidos tienden a servir a la formación del criterio que adopte el juzgador de cara a dictar una sentencia definitiva.

Expondremos en este capítulo el contenido y las características de una sentencia definitiva: resultando, considerando y los resolutivos. Por otro lado, nos referiremos a la importancia de insertar en la sentencia definitiva un plan de acción para dar inicio a la reparación del daño ambiental.

Para una válida y correcta interpretación de los medios de prueba ofrecidos y desahogados durante el juicio interdictal y de acción negatoria, expondremos una serie de mecanismos que ayudan a la determinación de la cuantía del daño ambiental generado.

La sentencia definitiva que se dicta en un juicio interdictal y de acción negatoria debe contener determinados efectos legales directos a la persona física que promovió el juicio y, por otro lado, efectos legales indirectos encaminados a la sociedad en general, en virtud de que las consecuencias legales contenidas en una sentencia definitiva no sólo beneficiarán al promovente del juicio, sino a la sociedad en general,



aunque esta última no haya participado activamente en el proceso judicial de acción negatoria o interdictal.

Asimismo, en este capítulo desarrollaremos y abordaremos lo relativo al grado de involucramiento de las autoridades administrativas ambientales dentro de la sentencia definitiva que se dicte, que debe manifestar o reflejar la corresponsabilidad de las dependencias ambientales a nivel federal y estatal en la generación del daño ambiental.

Por último, nos referiremos, en lo relativo a la ejecución de la sentencia definitiva dictada en un juicio interdictal y de acción negatoria, a las personas y procedimientos involucrados, así como a los plazos para llevarla a efecto, tanto por la persona física o moral, como las autoridades administrativas condenadas a la reparación del daño ambiental.

## **6.2 Concepto de sentencia definitiva**

Según Cipriano Gómez, la sentencia es “el acto final de un proceso normal que se desarrolla en todos sus pasos; va proyectado, va destinado ese proceso a terminar precisamente en una sentencia. La sentencia es el acto final del proceso, acto aplicador de la ley sustantiva a un caso concreto controvertido para solucionarlo o dirimirlo”.<sup>402</sup>

Para Ovalle Favela la sentencia es “la resolución que pronuncia el órgano jurisdiccional competente”.<sup>403</sup> Este autor designa la sentencia como resolución pero en el Derecho Procesal Civil esta denominación abarca no solo la sentencia definitiva, sino también autos y decretos.

En toda sentencia deben prevalecer los tres requisitos internos o esenciales que integran la sentencia, que son:

---

<sup>402</sup> GÓMEZ LARA, Cipriano, *Derecho Procesal Civil*, quinta edición, editorial Harla, México, 1991, página 189.

<sup>403</sup> OVALLE FAVELA, José, *Teoría general del proceso*, quinta edición, Oxford University Press México, México, 2001, página 321.

## 1. La congruencia.

Esta es una condición impuesta por el derecho y la lógica<sup>404</sup> y significa la conformidad, en cuanto a la extensión, el concepto y alcance entre lo resuelto por el órgano judicial y las pretensiones que los litigantes han formulado en el juicio.<sup>405</sup>

Es de vital importancia que la congruencia de los hechos constitutivos de un daño ambiental se corrobore con lo aportado y desahogado en el expediente. Debe existir una concatenación precisa y sencilla de los puntos controvertidos.

## 2. Motivación.

La motivación es un aspecto que toda autoridad a nivel federal, estatal o municipal debe cumplir;<sup>406</sup> lo anterior está establecido en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos<sup>407</sup>, que establece que en los juicios de orden civil, la sentencia definitiva será conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y que, a falta de ésta, se apoyará en los principios generales del derecho.

Como lo mencionábamos en líneas anteriores, es de suma importancia que el daño ambiental que detectó y apreció el juez mediante las pruebas aportadas, resulte del

---

<sup>404</sup> Para BRISEÑO la condición de la congruencia del fallo impone al juez la obligación de tener al mismo tiempo en cuenta, en el momento de la decisión, los dictados del derecho y los de la lógica. BRISEÑO SIERRA, Humberto, *El juicio ordinario civil volumen II*, primera edición, Editorial Trillas, México, 1977, página 952.

<sup>405</sup> Es muy importante este principio, de acuerdo con lo establecido en la jurisprudencia: SENTENCIA, LA OMISIÓN DE ESTUDIAR UNA EXCEPCIÓN OPUESTA EN LA. VIOLA EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA). Si la demandada, al momento de dar legal contestación a la reclamación contra ella formulada opuso diversas excepciones, y el juez responsable al pronunciar la sentencia reclamada únicamente se ocupó de analizar los presupuestos de la acción ejercitada por el actor, omitiendo el estudio de aquellas, es indudable que ese proceder omisivo resulta violatorio del principio de congruencia estatuido por el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Coahuila, el cual obliga al juzgador a dictar sus sentencias en concordancia con los argumentos aducidos tanto en la demanda, como aquellos en que se sustenta la contestación a esta y demás defensas deducidas oportunamente. Por tanto, si la autoridad responsable vulneró tal principio, y con ello, las garantías de seguridad y debido proceso consagradas por los artículos 14 y 16 constitucionales, procede conceder la protección de la Justicia Federal para que se pronuncie una nueva resolución que se ocupe también de las excepciones opuestas.

Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, octava época, tomo XV-I, febrero de 1995, tesis VIII.2o.38 K, página 265.

<sup>406</sup> En palabras de GÓMEZ LARA "La motivación puede concretarse en la obligación del tribunal de expresar los motivos, razones y fundamentos de su resolución", GÓMEZ LARA, Cipriano, *Op. cit.*, p. 192.

<sup>407</sup> El artículo 16 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos habla en su último párrafo de lo siguiente: "En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho". *Diario Oficial de la Federación*, febrero 5, 1917, México, D.F.

incumplimiento de la normativa en materia ambiental y en la legislación sobre seguridad e higiene.

Puede presentarse la situación de que un solo hecho esté regulado por la normatividad ambiental y de seguridad, por lo que deben invocarse los preceptos legales de ambas al hecho en concreto.

### 3. Exhaustividad.

Es una consecuencia necesaria de los dos principios anteriores. Así, una sentencia es exhaustiva en la medida en que haya tratado todas y cada una de las cuestiones planteadas por las partes y sin dejar de considerar ninguna.<sup>408</sup>

Al respecto de la exhaustividad, es prioridad que el juez, además de analizar todas las cuestiones que las partes hayan planteado en la demanda y contestación de ésta,<sup>409</sup> el formular aquéllas que no se hayan efectuado por las partes, es decir, que opere la suplencia.

Con ello, el juez podrá, además de las presentadas en la demanda y contestación de la misma, invocar aquellas cuestiones que, de acuerdo con sus sentidos y conocimientos, considere hayan surgido y que las partes no formularon en sendos escritos.

---

<sup>408</sup> Para GÓMEZ LARA “La exhaustividad el tribunal al sentenciar debe agotar todos los puntos aducidos por las partes y referirse a todas y a cada una de las pruebas rendidas. La sentencia no será exhaustiva cuando deje de referirse a algún punto, a alguna argumentación, a alguna prueba; en otras palabras, al dictarse una sentencia debe tenerse mucho cuidado de examinar, agotándolos todos, los puntos relativos a las afirmaciones y argumentaciones de las partes y a las pruebas rendidas”. GÓMEZ LARA, Cipriano, *Op. cit.*, p. 193.

<sup>409</sup> Al respecto existe la siguiente jurisprudencia que señala: SENTENCIAS CIVILES. SOLO DEBEN OCUPARSE DE AQUELLAS ACCIONES COMPRENDIDAS EN EL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA).

La sentencia se ocupará exclusivamente de las acciones deducidas y de las excepciones opuestas en la demanda y en la contestación, estando impedido el juez para fallar excediéndose de la litis establecida en ambos actos procesales, pero ello de ninguna manera quiere decir que en la aplicación de los artículos 478 y 479 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala pueda extenderse más allá de lo que constituye la materia del juicio; esto es, si ante varias acciones solo por una se admitió la demanda, el juzgador deberá examinar los planteamientos relativos a esa acción y a las excepciones opuestas que se refieran a ella sin que le sea dado analizar los planteamientos de ambas partes relacionados con las acciones por las que no fue admitida la demanda.

Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, octava época, tomo XV-II, febrero de 1995, tesis VI.1o.63 C, página 552.

Como se observa, ninguno de los puntos controvertidos debe quedar fuera del estudio del juzgador, ya que el excluirlo sería no considerar un elemento ambiental para su remediación.<sup>410</sup>

La doctrina procesal civil clasifica los tipos de sentencias en base a los tipos de acción y se dividen en: declarativas, de condena y determinativas.

Para poder comprender cabalmente el contenido de cada una de estas sentencias, se describen a continuación:

#### 1. Las sentencias declarativas.

Son aquéllas que eliminan la falta de certeza acerca de la existencia, eficacia, modalidad o interpretación de una relación o estado jurídico. La declaración en este tipo de sentencias puede ser positiva o negativa. Es positiva cuando afirma la existencia de determinado efecto jurídico a favor del actor. Es negativa cuando afirma, ya sea a favor del actor o del demandado, la inexistencia de un determinado efecto jurídico contra ellos pretendido por la contraparte.

Toda sentencia abarca una declaración de certeza como indicio necesario de la decisión principal del asunto. Al pronunciar una condena dentro de una sentencia, es prioridad determinar las condiciones o modalidades de la relación jurídica y es necesario que el juez declare la existencia y los contextos que le condujeron a tales consecuencias.

---

<sup>410</sup> Al respecto, la jurisprudencia ha establecido la exhaustividad de la siguiente manera: SENTENCIAS CIVILES, CONGRUENCIA DE LAS (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ).

El principio de congruencia de las sentencias que establece el artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, implica la exhaustividad que debe regir en las mismas, es decir, la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta todos y cada uno de los argumentos aducidos tanto en la demanda, como aquellos en que se sustenta la contestación a esta y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate, debiéndose tomar en cuenta que en tratándose de una reconvención, el actor principal se convierte a su vez en demandado, pues constituye propiamente una contrademanda que el reo hace valer frente al actor en el mismo juicio en que fue emplazado. Por ello si esa reconvención se presenta oportunamente y cumple con los requisitos de forma, el juzgador al resolver deberá necesariamente atender y decidir en la misma sentencia, tanto lo deducido por la parte actora en su escrito de demanda, como lo alegado por la demandada en la acción reconvencional; todo ello en exacta concordancia con lo establecido en los numerales 57 y 214 del código adjetivo civil de la entidad antes referida.

Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, novena época, tomo X, octubre de 1999, tesis 1a./J. 34/99, página 226.

Como ejemplos de sentencias declarativas se pueden mencionar aquellos que declaran la nulidad o simulación de un acto jurídico, la falsedad de un documento, el alcance de una cláusula contractual, la adquisición de la propiedad por prescripción, etc.

En las sentencias declarativas podemos encontrar configuradas las sentencias constitutivas.

## 2. Las sentencias constitutivas.

Son aquéllas que, insustituiblemente, producen los efectos precedentes mencionados (declaración de incapacidad, adopción, de divorcio y de nulidad de matrimonio).

La doctrina procesal civil ha tratado de encontrar las diferencias entre las sentencias constitutivas y las declarativas, observando que, mientras que las declarativas se limitan a reconocer o hacer explícita una situación jurídica existente con anterioridad, las constitutivas establecen un estado jurídico nuevo (inexistente con anterioridad al pronunciamiento de la sentencia).

Otros autores entienden que únicamente se puede hablar de sentencia constitutiva, toda vez que el ordenamiento jurídico condiciona la existencia legal de una situación determinada previa a la declaración por un órgano judicial.

En este orden de ideas, la distinción entre las sentencias constitutivas y las declarativas no debe buscarse en un plano esencial, sino que debe remitirse a lo que en cada caso haya dispuesto el legislador, es decir, que habrá que hablar de sentencia constitutiva siempre que la ley condicione insustituiblemente a una declaración judicial, la eliminación de una incertidumbre respecto de la existencia de la validez, etc. de una declaración o estado jurídico.

Las sentencias definitivas que se dicten dentro de un juicio interdictal y de acción negatoria por un daño ambiental tienen determinadas características declarativas, porque van a establecer una nueva realidad física del ambiente: la existencia del daño ambiental.

### 3. Sentencias de condena.

Son aquéllas que imponen el cumplimiento de una prestación (de dar, hacer o no hacer).<sup>411</sup> Es el tipo de sentencia más frecuente y en ella fijaron primordialmente su atención quienes, al concebir a la acción como un elemento o función del derecho subjetivo, consideraban que aquélla no existía si no mediaba la efectiva lesión a un derecho.

Además de declarar la existencia del derecho a una prestación y el incumplimiento de ésta por parte del obligado, las sentencias de condena aplican la sanción que la ley imputa a ese incumplimiento y crean, por ello, a favor del titular del derecho, la acción tendente a obtener su ejecución coactiva.

No siempre la obligación impuesta en una sentencia de condena se cumple voluntariamente por el condenado; por ello, en todos aquellos casos en los que la sentencia no se cumple, habrá de ejercerse, en consecuencia, la ejecución coactiva por obra del Estado.

Las leyes procesales admiten la posibilidad de que se dicten sentencias de condena sin que medie la lesión actual de un derecho, con la finalidad de asegurar al actor el goce de un beneficio en una época determinada o de prevenir la eventual insolvencia del mandato.

Se trata de las denominadas sentencias de condena a una prestación futura sobre presupuestos.

La sentencia por condena, por sus características jurídicas, invariablemente recae en un juicio por daño ambiental, ya que al demandado se le obliga a realizar actos tendientes a la reparación del daño ambiental.

---

<sup>411</sup> Existe jurisprudencia que expresa claramente el contenido de una sentencia de condena, tal como se aprecia en el siguiente criterio: COSTAS. PAGO DE, EN LAS SENTENCIAS DE CONDENACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). A diferencia de las sentencias declarativas y constitutivas, en que la condenación en costas, causadas en juicio, se determina por la temeridad o mala fe con que se hayan conducido las partes en él, en las sentencias de condena, se impone tomando en consideración la naturaleza jurídica de la acción intentada y la parte o partes a quienes les fue adversa, por lo que, si la acción intentada es de aquellas por medio de las cuales se persigue, que se condene al demandado a realizar una determinada prestación, esto es, se deduce una acción de condena, atento a lo dispuesto por el artículo 104, párrafo primero del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guerrero, la condenación en costas será a cargo del perdedor. Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, novena época, tomo III, febrero de 1996, página 400.

Además de la remediación a que es condenada la parte demandada, está la condenación al pago de costas y gastos, para lo cual deben contemplarse los honorarios de los peritos.

#### 4. Sentencias constitutivas.

Son las que crean, modifican o extinguen una relación jurídica, constituyendo una nueva. Es lo que ocurre, por ejemplo, en los casos de divorcio, adopción y división de condominio.

Al trasladar el contenido de una sentencia constitutiva a un asunto de índole ambiental, podemos mencionar que el juzgador debe considerar todo lo que obra en autos y determinar si, posteriormente a la ejecución de sentencia, no se vuelven a presentar estos actos o actividades en menoscabo del ambiente y sus elementos.

Es necesario considerar la situación geográfica y económica existente entre la parte demandada y sus colindantes, ya que el hecho de establecer una clausura temporal o definitiva conlleva una serie de situaciones adversas a la población que está inmersa en las actividades de la parte demandada.

Por ello, en el capítulo IV propusimos que en el informe pericial derivado de la prueba pericial, además de mostrar la metodología de identificación y evaluación del daño ambiental, se contuviese en su parte final ciertas recomendaciones para reparar el daño ambiental ocasionado.

La finalidad de estas recomendaciones es que se establezca e implemente una nueva serie de actividades programadas, cuyo reporte de ejecución y cumplimiento por la parte demandada, debe ser directamente informado al juez.

Estas propuestas no sólo comprenden a la empresa u organización que posee la maquinaria o equipo, sino también a las autoridades administrativas que tuvieron un grado de responsabilidad en la generación del daño ambiental.

### **6.3 Elementos de una sentencia dictada en un juicio interdictal de acción negatoria por daño ambiental**

Al hablar de una sentencia definitiva, que se dicte en un juicio interdictal y de acción negatoria por daño ambiental y al realizar una reflexión sobre las múltiples cuestiones que se le presentarán al juez al momento de dictar sentencia, esta resolución, además de su contenido y estructura actual, debería ampliar los supuestos y establecer en forma congruente las cuestiones ventiladas en el proceso de índole ambiental.

La sentencia definitiva derivada de un juicio interdictal y de acción negatoria por un daño ambiental no debe limitarse al formato o protocolo tradicional de una sentencia de carácter civil, sino que el juzgador debe plantear una sentencia acorde al tipo de juicio, a las pruebas aportadas, al desahogo de las mismas y sobre todo del daño ambiental generado.

Como puntos medulares el juzgador debe considerar que:

- I. El ambiente y sus elementos son la parte fundamental de la controversia.
- II. El ambiente es el soporte de vida para la flora, la fauna y el ser humano.
- III. Mediante la invocación de estas acciones interdictales y de acción negatoria sus efectos legales no involucran sólo a las partes que formaron parte de la litis, sino al ser humano en general.

Un aspecto importante de la sentencia se refiere a la exhaustividad,<sup>412</sup> por lo que es prioritario que el juez se ocupe del estudio de las pretensiones anunciadas por las partes.

---

<sup>412</sup> Para GÓMEZ LARA, la sentencia exhaustiva es “En efecto y en la medida que haya tratado todas y cada una de las cuestiones planteadas por las partes, sin dejar de considerar ninguna. Es decir, el tribunal al sentenciar debe agotar todos los puntos aducidos por las partes y referirse a todas y cada una de las pruebas rendidas. La sentencia no será exhaustiva cuando deje de referirse a algún punto, a alguna argumentación, a alguna prueba; en otras palabras, al dictarse una sentencia debe tener mucho cuidado de examinar, agotando todos, los puntos relativos a las afirmaciones y argumentaciones de las partes y a las pruebas rendidas”, GÓMEZ LARA, Cipriano, *Op. cit.*, p. 193.



Toda sentencia definitiva que se dicte contiene dos requisitos comunes: la mención del lugar y fecha del pronunciamiento y la firma del juez.

A tales puntos se adicionan otros que son agrupados en los segmentos en que se divide el contenido de las sentencias definitivas:

- I. Los resultandos (nombre y apellido de las partes).
- II. La relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio, es decir la mención de los hechos alegados por las partes en sus escritos de demanda, contestación, reconvención y contestación de esta.
- III. El objeto y de la causa de la pretensión o pretensiones deducidas.

De lo expuesto, podemos percatarnos de que los anteriores puntos constituyen la parte más importante de la sentencia, pues en ella el juez debe exponer los motivos o fundamentos que lo determinan a adoptar una u otra solución para resolver la causa.

En lo referente al pronunciamiento, el juez debe remitirse a los hechos invocados por las partes, confrontarlos con la prueba que se haya producido, apreciar el valor de ésta y aplicar finalmente la norma o normas jurídicas mediante las cuales considere que se debe resolver el pleito, con la finalidad de evitar una aclaración de sentencia.<sup>413</sup>

Cuando la sentencia provenga de un juicio interdictal y de acción negatoria por daño ambiental, es necesario que el juez mencione la normatividad ambiental que ha sido objeto de incumplimiento o violación por parte del demandado y la fuente u origen

---

<sup>413</sup> Al respecto la jurisprudencia ha establecido la ACLARACIÓN DE SENTENCIA, QUE DEBE INTENTARSE CUANDO EXISTA IMPRECISIÓN EN LOS PUNTOS RESOLUTIVOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). El artículo 1.200 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México establece que la aclaración de sentencia procede si el juzgador incurre en contradicción, ambigüedad u oscuridad. Ahora bien, de alegarse en la queja constitucional la violación al principio de congruencia porque la Sala responsable omita establecer en forma clara y precisa cuáles puntos resolutive fueron de quedar intocados, y en la sentencia reclamada se establece que solo fue de modificarse el fallo inicial en uno de sus puntos resolutive, para quedar en los términos precisados en la parte considerativa de la resolución de alzada, implica sin duda que los demás puntos de la sentencia primigenia se confirmaron y, ante ello, tal aspecto no se vincula con cuestiones de legalidad del acto reclamado, sino con la imprecisión de dichos puntos resolutive, lo cual debe ser materia de aclaración ante la Sala responsable. Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, novena época, tomo XIX, mayo de 2004, tesis II.2o.C.460 C, página 1736.

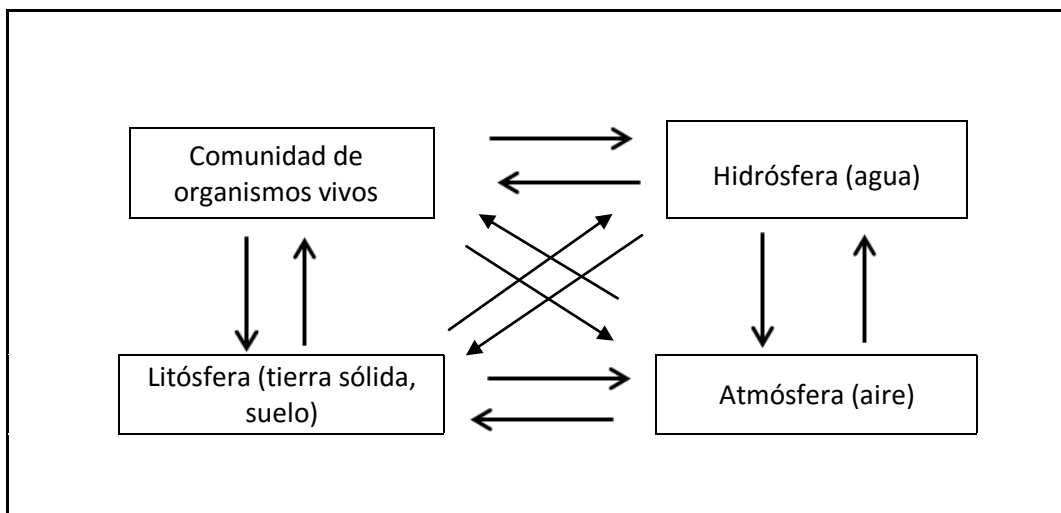
(material o física) que dio motivo al incumplimiento de la normatividad ambiental y de seguridad.

En consecuencia, el juez debería nombrar en forma clara y puntual la normatividad en materia ambiental y de seguridad incumplida, atendiendo a su conocimiento del orden jurídico vigente de la materia ambiental, aunado a lo arrojado por la valoración de las pruebas desahogadas en juicio.

El juez está obligado a realizar un estudio estricto, enérgico y profundo de todas las pruebas desahogadas y a analizar todas las cuestiones propuestas por las partes, contando con la facultad de desechar aquéllas que considere innecesarias o inconducentes.

El juzgador debe considerar en la sentencia la sistemática existente del ambiente y sus elementos.<sup>414</sup>

Klear en su obra de Ingeniería Ambiental expone un cuadro de la interrelación y de los diversos componentes del ambiente,<sup>415</sup> que puede considerarse como una guía o soporte para el juez al momento de dictar la sentencia.



<sup>414</sup> KLEAR indica que "...los componentes vivos (bióticos) como los no vivos (abióticos) de una zona –una combinación de la comunidad y de los componentes físicos y químicos del ambiente local. La característica principal de este nivel ecológico es la fuerte interacción entre los componentes bióticos y abióticos..." KIELY, Gerard, *Ingeniería ambiental. Fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión*, primera edición, editorial McGraw Hill, España, 1999, página 52.

<sup>415</sup> *Ibidem* pp. 52.

La doctrina Procesal Civil exige una estricta correspondencia entre el contenido de la sentencia y las cuestiones oportunamente planteadas por las partes, lo que supone un adecuado pronunciamiento de los elementos de la pretensión deducida en el juicio (sujetos, objeto y causa).

Consideramos pertinente la aplicación del principio *ultra petita* al momento de dictarse la sentencia definitiva en un juicio interdictal y de acción negatoria para reparar un daño ambiental, el juez debe ir más allá del límite cuantitativo y cualitativo fijado por las partes y a las prestaciones demandadas en este tipo de juicios. En este sentido creemos que debe prevalecer lo siguiente:

- I. El ambiente y sus elementos como fuente y equilibrio de vida de todo ser humano.
- II. El ambiente no tiene un valor monetario.
- III. La parte actora aprecie en forma completa el beneficio de sus pretensiones ejercidas en la demanda en la sentencia que se dicte al respecto.

### **6.3.1 Establecimiento tanto de los hechos como del derecho en la sentencia**

La sentencia definitiva, como resolución que pone fin a una controversia judicial, consta de tres partes:

- I. Los "*resultandos*", donde el juez hace mención de las partes y una relación sucinta de las cuestiones sometidas a su decisión.

Estos abarcarán a todas las partes que intervinieron en el juicio, a las personas físicas o morales, además de a las dependencias ambientales del gobierno a nivel federal o estatal que fueron llamadas a juicio, estableciendo en forma clara su grado de participación dentro del daño ambiental generado.

- II. Los “*considerandos*” , que abarcan las cuestiones sometidas a la decisión judicial, la fundamentación y aplicación del Derecho, es decir, el juez reconstruye los hechos con base en el examen de la prueba producida y, una vez esclarecidos los hechos, establece cuál es la norma adecuada a los mismos, interpretándola y explicando (fundamentando) la razón de su aplicación.

De esta parte de la sentencia deben surgir con precisión y claridad los motivos que ha tenido el juez para formular su opinión. Las partes encontrarán en ella los fundamentos de la decisión adoptada para poder impugnarla en caso de que consideren algún aspecto que no haya formulado el juzgador. Son, así, la parte más importante de la sentencia.

Al referirnos a los considerandos en una sentencia dictada en un juicio interdictal y de acción negatoria para reparar un daño ambiental, éstos debe contener todas las actuaciones y pruebas que se hayan aportado al juicio. Además, entre los hechos que se estudiarán en el considerando podemos indicar los siguientes:<sup>416</sup>

- I. Los hechos constitutivos del daño ambiental expuestos por la parte actora.
- II. Los hechos constitutivos de la existencia e inexistencia del daño ambiental expuestos por la parte demandada.
- III. Los escritos de contestación y los medios de prueba aportados por las autoridades administrativas en materia ambiental o de seguridad.
- IV. Mencionar si hubo otras personas involucradas además de las establecidas en el escrito inicial de demanda y cuya intervención dentro del juicio se debió al desarrollo del mismo proceso judicial.

---

<sup>416</sup> De acuerdo con la jurisprudencia establecida “...las autoridades están obligadas a examinar todas las constancias que obran en el expediente, no menos es que este principio debe contemplarse de acuerdo con la naturaleza del pronunciamiento que se emita...”. Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación, 1919-1995, octava época, tomo XV-II, febrero de 1995, tesis VI.1o.73 C, página 552.

- V. Especificar aquellos elementos ambientales afectados derivados de su apreciación durante el desahogo de la inspección judicial.
- VI. Detallar aquellos elementos ambientales afectados derivados de los informes periciales.
- VII. Realizar un cotejo de los elementos ambientales comunes entre la prueba de inspección y los informes periciales en relación con la maquinaria o equipo y sustancias químicas empleadas.
- VIII. Establecer la maquinaria o equipo que tuvo mayor injerencia en la generación del daño ambiental.
- IX. Indicar si existe evidencia documental, es decir, si hubo la comunicación interna (entre las diversas áreas de la empresa) de la existencia del daño ambiental o la posible formación de éste.
- X. Describir qué tipo de operación o actividad realizada por el demandado generó o contribuyó al daño ambiental.
- XI. Describir si en algún reporte de auditoría ambiental o de seguridad efectuada por un organismo externo (de certificación) o interno (dependencia de gobierno) se percibió o se mencionó el daño ambiental.
- XII. Mencionar si en algún reporte de auditoría derivada de una comunicación externa de algún colindante, auditor externo o dependencia administrativa, se manifestó algún indicio del ahora daño ambiental.
- XIII. Establecer, con base en las sustancias químicas empleadas, el tipo, cantidad estimada de consumo y en qué operaciones, así como en qué áreas, se empleaban las sustancias cuyo uso o cantidad generó o incrementó el daño ambiental.
- XIV. Establecer la relación de cumplimiento o incumplimiento a lo establecido en estudios técnicos y reportes en los diferentes rubros ambientales (en caso de que aplique).

- XV. Indicar si existió negligencia de alguna persona o departamento de acuerdo con sus actividades u operaciones que hayan dado origen al daño ambiental.
- XVI. Describir las características del almacén de residuos peligrosos y no peligrosos, así como el volumen de residuos, el tiempo de su recolección y la incompatibilidad de residuos almacenados, en caso de que alguno de estos se haya visto involucrado en el daño ambiental.
- XVII. Detectar qué elementos ambientales demostraron más afectación en su funcionamiento, cotejando y estableciendo el grado de comportamiento que tuvo la autoridad administrativa (federal o estatal) respecto a dichos elementos en cuanto a la expedición de permisos, concesiones o licencias.
- XVIII. Por último, las pruebas documentales que aportaron las autoridades administrativas ambientales (SEMARNAT, PROFEPA y SEGAM) como parte de sus gestiones y facultades en relación con el demandado o demandados.

Al respecto de las Normas Oficiales Mexicanas, el juzgador debe ser meticuloso e invocar aquellas cuestiones técnicas contenidas en las referidas normas en materia ambiental y de seguridad que tengan relación estrecha con los elementos ambientales dañados y la maquinaria o equipo, así como de las sustancias químicas empleadas en los procesos productivos.

- III. Por último, el “*fallo*” constituye la decisión del juez acerca de los hechos sometidos a su consideración. Es donde el juez declara el *derecho de las partes*, condenando o absolviendo al demandado en todo o en parte. Se establecen los plazos para que se cumpla la sentencia, las *costas*, regulando honorarios y declarando la temeridad o malicia de los litigantes o los profesionales intervinientes que hubieren incurrido en ella.

Al respecto podemos indicar, con base en el listado de los incisos mencionados en el numeral II y que el juez efectuó en los considerandos, que se tienen las bases jurídicas para exteriorizar y delimitar la forma de la sanción, así como de la forma de remediación y el pago, etcétera.

Creemos pertinente que el juez obligue a la parte demandada y a las autoridades administrativas, en primer lugar, a que le rindan cuentas en forma periódica de las obras o actividades para remediar el daño hasta su total cumplimiento, con verificación del juzgador en el lugar donde se lleven a cabo las actividades.

En segundo lugar que, en forma periódica (bimestral o trimestral), la parte demandada y dependencias gubernamentales manifiesten que no han existido actos tendientes a la formación o generación del mismo u otro daño ambiental.

### **6.3.2 Valoración de las pruebas aportadas en el juicio interdictal y de acción negatoria por un daño ambiental**

Una parte importante dentro de un juicio es lo referente a la valoración de las pruebas por parte del juzgador y consiste en una evaluación de las pruebas ofrecidas y desahogadas por las partes. Así pues, esta apreciación la realiza el juez al momento de dictar su sentencia definitiva.

Los artículos 197 a 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como los artículos 381 a 407 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, contemplan las situaciones con las que deben contar las pruebas desahogadas para que se les asigne un valor probatorio dentro de juicio.

La valoración de las probanzas que fueron ofrecidas y desahogadas en un juicio interdictal y de acción negatoria de índole ambiental debe efectuarse en la formulación de los considerandos de la sentencia.

En la siguiente tabla mencionamos los tipos de pruebas y el valor que le otorgan los códigos adjetivos federal y estatal y que están en la mira del juzgador.

<b>Tipo de prueba</b>	<b>Código Federal de Procedimientos Civiles (artículo)</b>	<b>Código de Procedimientos Civiles de S.L.P. (artículo)</b>	<b>Observaciones</b>
n/a	Artículo 197.- El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo.	No existe en este ordenamiento jurídico.	A nivel federal se contempla una completa y total libertad del juzgador para realizar el análisis de las pruebas ofrecidas y su valor dentro del juicio.
Documentos públicos	Artículo 202.- Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquellos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos solo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. <sup>417</sup>	Artículo 388.- Los documentos públicos hacen prueba plena; pero la parte contraria podrá redargüirlos de falsedad y pedir su cotejo con las matrices. Los documentos que resulten enteramente inconformes con los originales no tendrán valor probatorio alguno. Si hubiere conformidad parcial, en este punto harán prueba plena.	
Actuaciones judiciales	No existe disposición expresa.	Artículo 391.- Las actuaciones judiciales hacen prueba plena.	
Documentos privados	Artículo 210.- El documento privado que un litigante presenta, prueba plenamente en su contra, de acuerdo con los artículos anteriores.	Artículo 395.- El documento que un litigante presenta, prueba plenamente en su contra, en todas sus partes, aunque el colitigante no lo reconozca.	Contiene misma hipótesis legal.
Prueba	Artículo 211.- El valor de la prueba pericial quedará a la	Artículo 398.- El valor probatorio de los demás	Queda a criterio del juzgador su valor. <sup>418</sup>

<sup>417</sup> Este artículo tiene una fe de erratas al párrafo publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 13 de marzo de 1943.

<sup>418</sup> Respecto a la valoración de la prueba pericial al criterio del juzgador, la jurisprudencia indica: PRUEBA PERICIAL. SU VALORACIÓN CONFORME AL PRUDENTE ARBITRIO DEL JUZGADOR, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.



pericial	prudente apreciación del tribunal.	dictámenes periciales será estimado por el juez según las circunstancias.	
Inspección	Artículo 212.- El reconocimiento o inspección judicial hará prueba plena cuando se refiere a puntos que no requieran conocimientos técnicos especiales.	Artículo 399.- El reconocimiento o inspección judicial hará prueba plena, cuando se haya practicado en objetos que no requieran conocimientos especiales o científicos.	Contienen igual supuesto.
No existe prueba expresa que lo indique	Artículo 217.- El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial.	No existe disposición expresa.	Con base en las fotografías o videos que se tomen durante el desahogo de la inspección, el juzgador le proporcionará un valor probatorio.
	Artículo 210-A.- Se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra	Artículo 402.- El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la	En el Código Estatal, el valor a las pruebas es a criterio del juzgador. En el Código Federal tiene un valor de indicio. <sup>419</sup>

Es inexacto que la derogación del artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, haya cerrado la posibilidad de que el juzgador valore la prueba pericial conforme a su prudente arbitrio; porque la supresión del citado precepto y de otros relacionados con la valoración de las pruebas, se debió a su inutilidad ante el nuevo sistema establecido para la valoración del material probatorio. Este nuevo sistema no proscribió el uso del arbitrio judicial para la valoración de probanzas, sino por el contrario, eliminó las disposiciones que fijaban una tasación para determinados medios de convicción. Solo subsistió lo dispuesto respecto a los documentos públicos, pues en el artículo 403 se previene que tales instrumentos tendrán pleno valor probatorio. Pero fuera de esa excepción, la valoración del material probatorio se dejó a la sana crítica del juzgador. Cuando existían preceptos que establecían que la valoración de alguna prueba quedara al arbitrio del juzgador, la autorización en tal sentido no implicaba que la decisión sobre el valor de tal probanza se hiciera de manera arbitraria o irrazonada, sino que siempre se consideró que la decisión del juzgador debía sustentarse en una actitud prudente y razonable, expresada a través de argumentos lógicos. En el artículo 402 está contenido el principio de la sana crítica para la valoración de pruebas, y se trató de resumir los principios rectores de ese tipo de valoración y, por tal motivo, se mencionaron aspectos tales como las reglas de la lógica y la experiencia, así como la exposición cuidadosa de los fundamentos de la valoración jurídica de estos, sin que tales principios difieran de lo que jurisprudencial y doctrinalmente se consideraba con relación a los preceptos en los cuales se establecía el arbitrio del juzgador para valorar la prueba, ya que por el contrario hay una coincidencia sustancial. Por tanto, cuando el juzgador utiliza su arbitrio para examinar la prueba pericial, no viola con dicho análisis el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, puesto que ese arbitrio se encuentra también consignado en este precepto.

Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, octava época, tomo XI, marzo de 1993, página 341.

<sup>419</sup> Al efecto la jurisprudencia ha mencionado en lo siguiente: GRABACIONES MAGNETOFÓNICAS. SU VALOR PROBATORIO.

La doctrina ha sido uniforme desde antaño, al considerar medios de prueba imperfectos a los documentos privados, ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y la cierta dificultad para demostrar de modo absoluto e indudable las falsificaciones, entre otros argumentos, por mayoría de razón es aplicable ese criterio respecto a las grabaciones de la voz de personas, mediante los distintos medios electrónicos existentes, pues es hecho notorio e indudable, que actualmente hay, al alcance del común de la gente, un sinnúmero de aparatos, instrumentos y recursos tecnológicos y científicos, para la obtención de la grabación, de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza, ya sea mediante la imitación total o parcial de las voces; de la mutilación o alteración del discurso verdadero de alguien, suprimiendo lo inconveniente al interesado, uniendo expresiones parciales para conformar una falsa unidad, enlazando,

	tecnología.	ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial.	
--	-------------	--	--

El valor probatorio de un informe pericial depende de si está o no debidamente fundado. La claridad en las conclusiones es indispensable para que aparezcan exactas y el juez pueda adoptarlas; su firmeza o la ausencia de vacilaciones es necesaria para que sean convincentes; la lógica relación entre ellas y los fundamentos que las respaldan debe existir siempre para que merezcan absoluta credibilidad.

Si el informe pericial contempla buenos fundamentos, pero, por otra parte van acompañados de unas malas conclusiones o si no existe armonía entre aquéllos y éstas o si el perito no parece seguro de sus conceptos, el dictamen no puede tener eficacia probatoria. Al juez le corresponde apreciar estos aspectos intrínsecos de la prueba.

En lo que respecta a la prueba de inspección judicial, es importante que el juez durante su desahogo efectúe una relación o vinculación entre los siguientes elementos:

- I. De lo observado en las instalaciones, maquinaria, equipo, almacenes (de residuos peligrosos y de materia prima) así como del tipo y cantidad de las sustancias químicas empleadas.
- II. Los documentos privados o públicos que tenga el demandado.
- III. Por último, con la normatividad ambiental y de seguridad.

---

por ejemplo, la admisión o afirmación dirigida a un determinado hecho, con otro hecho que en realidad fue negado, etcétera. Por tanto, para que tales medios probatorios hagan plena, deben ser perfeccionados con otros elementos, fundamentalmente con el reconocimiento expreso o tácito de la persona contra quien se utilizan, por un exhaustivo dictamen de peritos, mediante la testimonial de personas que también hayan intervenido en el momento en que se dice expresado el contenido de la grabación, etcétera, pues solo de esa manera podría existir un fundamento lógico para formar en el juzgador cabal convicción, conforme a lo determinado por el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. No. Registro: 217,307.

Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, octava época, tomo XI, Febrero de 1993, tesis: I.4o.C. 183 C, página 259.

Podemos citar el siguiente ejemplo:

Items	Características físicas	Documentos relacionados	Normatividad ambiental	Normatividad de Seguridad	Observaciones
Almacén de residuos peligrosos	Tiene una superficie de...	Registro como generador de residuos peligrosos	Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley General para la Gestión y Prevención de los Residuos, NOM-052-SEMARNAT, NOM-054-SEMARNAT	NOM-001-STPS, NOM-004-STPS, NOM-026-STPS, NOM-022-STPS	
	Tiene lamparas contra explosiones	Bitácoras de entrada y salida de residuos peligrosos,			
	Esta señalizado con ...	Manifiestos de recolección de residuos peligrosos			
	Tiene ventilación natural	Autorizaciones vigentes de los recolectores de residuos peligrosos			
	Los contenedores están señalizados	Resolución de impacto ambiental (donde se contemple el almacén de residuos peligrosos)			
	Los contenedores están sobre tarimas de madera	Análisis de maquinaria y equipo (en caso de que en el almacén existiera maquinaria que se utilice para el transporte de los residuos.			
	En la canaleta de derrames hay indicios de residuos	Estudio de determinación de equipo de protección personal			
	En el exterior no hay evidencia de residuos tirados	Estudio de tierras físicas			
	El almacén colinda con ...	Tipo de señalización ambiental como de seguridad			

Además, el juzgador debe efectuar una conexión con todos los medios de prueba (informe pericial, inspección judicial, documentales privados y públicos) con lo anterior para que sea más factible identificar el origen del daño ambiental.

Para que el juez tenga la certeza jurídica de la generación del daño ambiental por parte del demandado debe ser objetivo y observar detenidamente la normatividad ambiental y de seguridad, en virtud de que la legislación en forma precisa le indica con qué y cómo se le da cumplimiento, por otra parte, el informe pericial y la inspección judicial corrobora dicho cumplimiento.

Mediante la inspección judicial y el informe pericial se puede corroborar que los procesos productivos están fuera de los parámetros permisibles marcados por la normatividad ambiental y de seguridad o bien que estos procesos son lícitos pero, aun así, alteran la funcionalidad de los elementos ambientales.

### **6.3.3 Mecanismos para determinar la cuantificación de un daño ambiental**

La discusión sobre el punto de la cuantificación de un daño ambiental es muy variada. Existen autores que señalan que no se puede hacer una cuantificación del ambiente porque este carece de valor económico.<sup>420</sup>

Los juristas ambientales han sostenido el criterio de que no se puede cuantificar el daño ambiental.<sup>421</sup>

Sin embargo, creemos pertinente que la cuantificación es posible sólo en aquellos elementos ambientales que sí se pueden cuantificar y, por ende, reparar.

---

<sup>420</sup> GONZÁLEZ MÁRQUEZ manifiesta: "La diferencia de lo que sucede con los daños civiles tradicionales, el daño ambiental no puede ser abordado exclusivamente desde una óptica económica y, por consiguiente, la compensación monetaria o indemnización por daños y perjuicios debe ser subsidiaria en relación con la indemnización *intra natura*". GONZÁLEZ MÁRQUEZ, José Juan, *La responsabilidad por el daño ambiental en México*, primera edición, editorial Universidad Autónoma Metropolitana, 2002, México, página 209.

<sup>421</sup> PAZ VIZCAÍNO indica: "La frecuente imposibilidad de reparar o restaurar los daños que se causan al medio ambiente hace que la responsabilidad civil no sea un instrumento adecuado para resolver los problemas ambientales, materia en la que 'prevenir' es mucho más eficaz que 'curar'. SÁNCHEZ, RODRIGO, Paz Vizcaíno, *Introducción al Derecho del Medio Ambiente*, primera edición, editorial Cto medicina, España, 1996, página 465.

Por su parte, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en su artículo 17<sup>422</sup> habla de la compensación ambiental de acuerdo con la normatividad ambiental y, en caso de no existir disposiciones expresas, no será impedimento ni se exime de esta obligación de restituir lo dañado a su estado base.

Consideramos que mediante las acciones interdictales y negatorias se debe observar y actuar en los problemas locales donde existe la viabilidad procesal y jurídica para hacerles frente jurídica y técnicamente.

En la sentencia que se dicte en un juicio interdictal y de acción negatoria para reparar un daño ambiental, el juez debe considerar dentro de sus puntos resolutivos diversas formas de resarcir el daño, tales como:

- I. Remediación o tratamiento de los elementos ambientales que, por su propia naturaleza, permitan realizar estas gestiones.
- II. Generación de un fideicomiso para la remediación de aquellos elementos que, por su naturaleza se puedan reparar.
- III. Sustitución de elementos ambientales (en el caso de la flora y fauna).
- IV. Imponer una sanción económica a los generadores del daño. En este sentido en el artículo 19 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental<sup>423</sup> señala el monto de estas sanciones económicas.

---

<sup>422</sup> El artículo 17 señala: “La compensación ambiental consistirá en la inversión o las acciones que el responsable haga a su cargo, que generen una mejora ambiental, sustitutiva de la reparación total o parcial del daño ocasionado al ambiente, según corresponda, y equivalente a los efectos adversos ocasionados por el daño. Dicha inversión o acciones deberán hacerse en el ecosistema o región ecológica en donde se hubiese ocasionado el daño. De resultar esto materialmente imposible la inversión o las acciones se llevarán a cabo en un lugar alternativo, vinculado ecológica y geográficamente al sitio dañado y en beneficio de la comunidad afectada. En este último caso serán aplicables los criterios sobre sitios prioritarios de reparación de daños, que en su caso expida la Secretaría en términos de lo dispuesto por la Sección 5, Capítulo Tercero del presente Título”. *Diario Oficial de la Federación*, junio 7, 2013, México, D.F.

<sup>423</sup> El artículo 19 indica: “La sanción económica prevista en la presente Ley, será accesoria a la reparación o compensación del Daño ocasionado al ambiente y consistirá en el pago por un monto equivalente de: I. De trescientos a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción, cuando el responsable sea una persona física, y II. De mil a seiscientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción, cuando la responsable sea una persona moral. Dicho monto se determinará en función de daño producido”. *Op cit*.

Por su parte, en el artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental<sup>424</sup> se establecen determinados puntos que debe contener la sentencia definitiva que se dicte en la reparación de un daño ambiental.

#### **6.3.4 ¿Los efectos y alcance de una sentencia definitiva pueden afectar a terceros?**

La sentencia que dicte el juez dentro del juicio interdictal y de acción negatoria para reparar un daño ambiental contiene un principio regulador respecto a la situación controvertida que surgió en el proceso.

Esta resolución debe ser acatada y ejecutada por todas y cada una de las partes que formaron parte del litigio. Como consecuencia, el efecto natural de la sentencia dictada consiste en su obligatoriedad e imperatividad, pues si careciera de esto, no tendría sentido, objeto o razón de ser.

La sentencia determina el alcance temporal de sus efectos. Las sentencias declarativas, como principio, proyectan sus efectos hacia el momento en que tuvieron lugar los hechos sobre los cuales versa la declaración de certeza. Por tanto, declarada, por ejemplo la nulidad absoluta de un acto jurídico, la declaración judicial se retrotrae a la fecha en que aquel se celebró.

En el juicio interdictal y de acción negatoria, esta sentencia tendrá como efecto declarativo el que los elementos ambientales gocen de la funcionalidad y soporte de otros elementos ambientales, antes de que se haya generado el daño ambiental.

---

<sup>424</sup> El artículo 37 indica: "Además de lo previsto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, la sentencia condenatoria que se dicte deberá precisar:

I. La obligación de reparar ambientalmente el daño que corresponda;

II. La obligación de compensar ambientalmente a través de las acciones que procedan, en forma total o parcial;

III. Las medidas y acciones necesarias para evitar que se incremente el daño ocasionado al ambiente;

IV. El pago de la Sanción Económica que resulte procedente, así como los razonamientos y justificación respecto al por qué el monto impuesto es suficiente para lograr los fines de inhibición y prevención general y especial a los que hace referencia el artículo 2o., fracción XI de esta Ley;

V. El importe que corresponda pagar a favor del actor o actores que hayan probado su pretensión, correspondiente a los gastos realizados para acreditar la responsabilidad, que deberá ser deducido del monto determinado en la Sanción Económica y consignado ante el Juez en términos de los dispuesto por el artículo 23 de esta Ley, y

VI. Los plazos para el cumplimiento de las obligaciones del responsable". *Op cit.*

Las sentencias constitutivas sólo producen efecto como principio hacia el futuro. En este sentido proponemos que en las sentencias definitivas que se dicten en juicios interdictales o de acción negatoria, sus efectos deben perdurar hasta que las instalaciones y operaciones dejen de estar en funcionamiento por la misma persona física o moral o por otra dentro de las mismas instalaciones.

Lo anterior para evitar que se vuelva a interponer una nueva demanda interdictal y de acción negatoria por un daño ambiental. Con la demanda presentada y la sentencia dictada los efectos deben perdurar hasta que las instalaciones y maquinaria dejen de funcionar por la misma persona física o moral o porque el demandado vendió sus instalaciones.

Aun con un nuevo dueño de la maquinaria, equipo e instalaciones, el anterior propietario debe hacerle saber que existe una demanda, una sentencia definitiva y la implantación de un plan de acción por un daño ambiental ocasionado y el nuevo poseedor debe observar detenidamente estos temas y documentos en conjunto para evitar la generación de un nuevo daño ambiental.

Proponemos que en caso de generarse un daño ambiental por parte del nuevo propietario se debe actuar en el juicio interdictal o de acción negatoria, según sea el caso, para comunicarle al juez sobre esta situación y que actúe nuevamente dentro del mismo proceso. Es decir, al trasladar este tipo de sentencias constitutivas al ámbito ambiental, podemos identificar que conforman una nueva situación jurídica respecto a quienes perdieron el juicio.

A diferencia de otras sentencias y, por tratarse del campo ambiental, se producen consecuencias legales que enlazan su desempeño a determinadas obligaciones cuyo reporte debe realizarse en forma periódica, con la finalidad de contar con un mejor control y que el daño no se repita.

Si se trata de una sentencia de condena, el tema de los efectos temporales reviste importancia a los fines de determinar la fecha de inicio y es correspondiente para establecer las condicionantes a la parte que perdió el juicio.

Al observar las características de una sentencia constitutiva y de condena y al aterrizarlas en un juicio ambiental, el juez puede generar una resolución que vincule perfectamente estos dos tipos y emitir una sentencia acorde al daño ambiental.

Las consecuencias de una sentencia definitiva de índole ambiental no deben concretarse a las partes que integraron el proceso. Podemos indicar que sus efectos son directos para las partes que formaron parte del juicio e indirectos para la sociedad en general.

De acuerdo con las acciones planteadas en este estudio, en el interdicto de obra peligrosa, el efecto directo consiste en detener en forma inmediata y suspender la reanudación de las obras generadoras del daño ambiental, mientras que no existan las condiciones ambientales adecuadas para que dicha obra reinicie actividades bajo otro esquema de funcionamiento.

Dentro de la acción del interdicto de recuperar la posesión, el juez indirectamente pondrá en posesión del actor, el uso y disfrute de las funciones que brindan los elementos ambientales afectados (después de haberse realizado las actividades pertinentes de remediación). Sin embargo, lo anterior no significa que la sentencia ponga al actor en posesión del elemento ambiental dañado.<sup>425</sup>

---

<sup>425</sup> La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la siguiente jurisprudencia respecto al interdicto de retener la posesión, la cual puede apoyarse el juzgador en un juicio ambiental respecto a la posesión: INTERDICTO PARA RETENER LA POSESIÓN. LAS PRUEBAS OFRECIDAS PARA ACREDITAR LA URGENCIA EN EL DICTADO DE LA MEDIDA PROVISIONAL EN ESTE JUICIO, NO NECESARIAMENTE DEBEN ENTENDERSE ORIENTADAS A ESA FINALIDAD, SINO TAMBIÉN PARA ACREDITAR LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA ACCIÓN INTERDICTAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).

Una correcta intelección de los numerales 600, 601, 602, 603 y 604 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Tamaulipas, conduce a concluir que el ofrecimiento de determinadas pruebas realizado por el promovente del interdicto, para acreditar la urgencia en el dictado de la medida provisional correspondiente en un juicio de interdicto para retener la posesión de inmueble, no necesariamente debe entenderse orientado a perseguir esa única finalidad y que, por ende, tales probanzas ya no sean susceptibles de tomarse en consideración durante el dictado de la sentencia definitiva para descubrir si con ellas también se tienen por acreditados o no los elementos constitutivos de la acción interdictal, ya que mientras al demandado se le haya enterado oportunamente sobre la fecha de rendición de las mismas, esto es, que se le haya respetado su garantía de audiencia, la autoridad judicial debe proceder a ponderarlas en términos legales, puesto que la legislación procedimental civil del Estado no se lo prohíbe, y sabido es que donde la ley no distingue no es dable hacerlo a su intérprete. Es más, resultaría hasta contrario a los principios de celeridad y economía procesales obligar al actor a exhibir las mismas pruebas, ya ofrecidas y desahogadas, solo para estar en condiciones de desvincularlas, en sus respectivos momentos, tanto de la pretensión de obtener una medida provisional urgente de las señaladas por la ley, como para determinar en sentencia si con esas pruebas se acreditan o no los elementos constitutivos de la acción, toda vez que conforme al invocado artículo 603 del código procedimental civil, el término probatorio de diez días tan solo se concede en esta clase de juicios a favor del demandado, se entiende que es para desvirtuar las pruebas ofrecidas por su contraria y para que alegue lo que estime adecuado a sus intereses, de donde se sigue que el actor bien puede ofrecer sus



Al hablar de la acción negatoria, los efectos de la sentencia consisten en detener los actos perturbatorios generados por la parte actora y declarar la libertad del derecho real ambiental; al efecto, en el capítulo II describimos en qué consiste un derecho real ambiental.

Consideramos que la acción negatoria tiene efectos más generales para su procedencia y no se limita a determinadas cuestiones como serían los interdictos.

Son beneficios indirectos porque el resto de la comunidad o los colindantes, es decir, la sociedad, se beneficia con los efectos:

- I. De la remediación de los elementos ambientales dañados porque pueden hacer uso de tales elementos, como el agua de un río, de un arroyo, una laguna, la calidad del aire, etcétera.
- II. Con el replanteamiento de los procesos productivos, los insumos y la generación de residuos peligrosos y no peligrosos o de servicios prestados por la parte demandada, donde evite generar más emisiones a la atmósfera, genere menos residuos peligrosos o no peligrosos así como un mejor control en su manejo y disposición.
- III. Con el consumo adecuado de acuerdo con la producción requerida de las sustancias químicas en determinados procesos productivos.
- IV. Con un mantenimiento más minucioso de maquinaria o equipo empleados para los procesos productivos.
- V. Control más detallado del equipo e instalaciones que son arrendadas.
- VI. Observación más estricta por parte de las autoridades administrativas hacia la empresa demandada con inspecciones ordinarias y, en su caso, con inspecciones extraordinarias.

---

pruebas para justificar los pretendidos derechos posesorios desde la presentación de su demanda, ya sea para obtener la medida provisional solicitada o para demostrar los elementos de su acción.  
Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, novena época, tomo XIX, mayo de 2004, tesis XIX.1o.29 C, página 1788.

- VII. Cancelación de certificados otorgados por autoridades administrativas (en caso que aplicara) hasta en tanto no exista una mejora de la forma administrativa y operativa.
- VIII. Mejora de las condiciones de seguridad del medio ambiente laboral.
- IX. Un mejor y mayor cumplimiento de la normatividad ambiental por parte de la persona física o moral de acuerdo con las operaciones o maquinaria que emplea en sus procesos productivos.
- X. Evitar la inspección ambiental o de seguridad para cumplir con los requerimientos legales en materia ambiental y en seguridad.

#### **6.3.5 Sanciones aplicables a las autoridades administrativas contenidas en la sentencia dictada en un juicio interdictal y de acción negatoria por un daño ambiental**

La sentencia definitiva que se dicta en un juicio de carácter ambiental obliga a las partes a cumplir con lo dispuesto en dicha resolución.

En el capítulo III se establecieron las razones de procedencia para que las autoridades administrativas ambientales (SEMARNAT, PROFEPA y SEGAM) tuvieran el carácter de demandadas en un juicio interdictal y de acción negatoria para reparar un daño ambiental. Tal comparecencia correspondería a la circunstancia de no haber observado y requerido a la parte demandada, del cumplimiento tácito de lo que la normatividad ambiental a nivel federal y estatal le exigía con base en las operaciones o servicios que realizaba; lo anterior queda tipificado claramente en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en su artículo 25.<sup>426</sup> De este modo, consideramos que dicha hipótesis legal debería abarcar a las autoridades ambientales.

Por consiguiente, en la sentencia definitiva, el alcance y lo que le aplicaría a la autoridad ambiental sería lo siguiente:<sup>427</sup>

---

<sup>426</sup> El artículo 25 señala: "Los daños ocasionados al ambiente serán atribuibles a la persona física o moral que omita impedirlos, si esta tenía el deber jurídico de evitarlos. En estos casos se considerará que el daño es consecuencia de una conducta omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello derivado de una Ley, de un contrato, de su calidad de garante o de su propio actuar precedente". *Op cit.*

<sup>427</sup> El artículo 352 del Código Federal de Procedimientos Civiles es bastante claro en la hipótesis que plantea, ya que indica que "cuando hayan sido varios los puntos litigiosos, se hará, con la debida

- I. Corresponsabilidad en la remediación de los elementos ambientales.
- II. Aplicar sanción pecuniaria, cuyo destino es el pago por servicios médicos especializados a la parte actora por daño a la salud, que le haya originado el daño ambiental y con una duración de diez años, a partir de que cause ejecutoria la sentencia para reclamar dicha atención, siempre y cuando la afectación en la salud de la parte actora tenga su origen en el daño ambiental que se demandó.
- III. Aplicar sanción pecuniaria para reparar los daños ambientales.
- IV. Ser corresponsable en el pago de las costas y gastos del juicio y los honorarios del perito.
- V. Programa o plan de trabajo anual de vigilancia “previo a la reparación del daño” de la parte demandada, cuyas fechas de cumplimiento deben ser coactivas al demandado. Este plan de acción debe continuar por un periodo de cuatro años, para lo cual debe exhibirse cada año dentro del proceso civil que le dio origen, a la vez que tendrá los siguientes puntos de observación:
  1. Verificar inspecciones ambientales ordinarias y, en su caso, extraordinarias, de acuerdo con el desenvolvimiento empresarial o productivo de la parte demandada.
  2. Revaloración de las condicionantes derivadas de la resolución de impacto ambiental o actualizaciones que se hayan solicitado.
  3. Revaloración de las condicionantes derivadas de la resolución del estudio de riesgo ambiental (federal o estatal), en caso de que aplique.

4. Revaloración del contenido de los estudios CRETIB de los residuos peligrosos y la actualización de los generados en planta.
5. Revaloración del contenido de los estudios CRETIB de aquellos residuos industriales no peligrosos que por sus características pueden convertirse en residuos peligrosos y la actualización de los generados en planta.
6. Revaloración de las certificaciones de “industria limpia” o “empresa segura” según aplique.

Además, las autoridades administrativas ambientales, como corresponsables del daño ambiental ocasionado, deberían imponer en la sentencia definitiva que se dicte, la sanción económica contemplada en la fracción II del artículo 19<sup>428</sup> en relación con el artículo 23,<sup>429</sup> ambos ordenamientos de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

#### **6.4 Ejecución de la sentencia dictada en un juicio interdictal y de acción negatoria por un daño ambiental**

Con respecto a la ejecución de la sentencia dictada en un juicio interdictal y de acción negatoria por un daño ambiental, ésta corre a cargo del demandado y de las autoridades administrativas que fueron condenadas.<sup>430</sup>

---

<sup>428</sup> El artículo 19 fracción II establece: “La sanción económica prevista en la presente Ley, será accesoria a la reparación o compensación del Daño ocasionado al ambiente y consistirá en el pago por un monto equivalente de: II. De mil a seiscientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción, cuando la responsable sea una persona moral”. *Op cit.*

<sup>429</sup> El artículo 23 manifiesta: “La sanción económica la determinará el juez tomando en cuenta la capacidad económica de la persona responsable para realizar el pago, así como los límites, requisitos y garantías previstos en su favor por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la gravedad del daño ocasionado y el carácter intencional o negligente de la violación, asegurándose que se neutralice el beneficio económico obtenido, si lo hubiere, y se garantice prioritariamente el monto de las erogaciones del actor o actores que hayan sido necesarias para acreditar la responsabilidad. En cada caso el órgano jurisdiccional preverá que la sanción económica sea claramente suficiente para lograr los fines de inhibición y prevención general y especial a que hace referencia el artículo 2o., fracción XI de esta Ley.

El límite máximo del importe de la Sanción Económica previsto en el artículo 19 no incluirá el pago de las erogaciones hechas para acreditar la responsabilidad ambiental por quien demande, concepto que siempre será garantizado al momento de dictar sentencia.

El juez deducirá del monto correspondiente al pago de sanción económica a cargo del responsable, el importe de las erogaciones que el actor o actores que hayan probado su pretensión hubieren realizado para acreditar la responsabilidad, y el responsable tendrá la obligación de consignarlo al juzgado para su entrega a aquellos. El pago de dicho importe será preferente respecto de cualquiera otra obligación”. *Op cit.*

<sup>430</sup> Para CIPRIANO la ejecución de sentencia es “la materialización de lo ordenado por el tribunal a efecto de que tenga cumplimiento en la realidad – en lo fáctico- lo establecido en la sentencia”, GÓMEZ LARA, Cipriano, *Op. cit.*, p. 235

En el capítulo IV propusimos que el informe pericial, en su parte final, abarcara una serie de recomendaciones a través de un plan de acción.

Por consiguiente, el juez tiene la facultad de obligar a la parte demandada a sujetarse a dichas recomendaciones planteadas o en su defecto, ampliarlas o suprimirlas y establecer las fechas de su cumplimiento.

Al respecto, el juez debe observar el artículo 41 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental,<sup>431</sup> al momento de recibir las propuestas de reparación del daño ambiental ocasionado.

Estas tendrán efecto de mandamiento sobre la parte demandada (en caso de haber obtenido una sentencia adversa), abarcando en forma equitativa a las autoridades administrativas involucradas.

Es prioridad establecer en la sentencia definitiva los plazos que se tienen para la ejecución de la sentencia definitiva por daño ambiental, en virtud de que cada uno de los elementos ambientales, por su propia naturaleza, requiere una remediación más profunda, con una mayor inversión financiera y de capital humano.

En este sentido, el juez, al dictar la sentencia definitiva, establecerá y notificará el inicio del término señalado en el artículo 38 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental,<sup>432</sup> para que las partes demandadas formulen un plan de acción de cómo y cuándo se iniciaría la reparación del daño ambiental.

---

<sup>431</sup> El artículo 41 establece: “El plazo para el cumplimiento de las obligaciones materia de la presente Ley, será fijado por el Juez tomando en consideración:

I. La naturaleza de las obras o actos necesarios para reparar el daño ocasionado al ambiente y en su caso, cumplir con la compensación ambiental;

II. Lo propuesto por las partes, y

III. La opinión o propuesta de la Secretaría”. *Op cit.*

<sup>432</sup> El artículo 38 señala: “De conformidad a lo previsto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, una vez que cause ejecutoria la sentencia que resulte condenatoria, el juez dará vista a las partes para que dentro del término de treinta días se pronuncien sobre:

I. La forma, términos y niveles de reparación material ambiental del daño ocasionado al ambiente que se propongan para cumplir esas obligaciones;

II. La imposibilidad total o parcial de reparar materialmente ambientalmente el daño, y en consecuencia, la forma, lugar y alcance de la compensación ambiental total o parcial, y

III. Los plazos propuestos para el cumplimiento de las obligaciones del responsable.

Si las partes llegaran a un acuerdo respecto a lo previsto en este artículo, podrán formular una propuesta conjunta.

Cuando exista causa justificada por razones de la complejidad técnica o material para dar cumplimiento a lo determinado por las fracciones I, II y III, el término establecido en el párrafo primero del presente artículo podrá ser prorrogable por el Juez hasta por 30 días”. *Op cit.*

Dentro de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en su artículo 40 primer párrafo,<sup>433</sup> ésta señala que el juez requerirá a la SEMARNAT para analizar la viabilidad e idoneidad de las propuestas recibidas. Sin embargo, no podemos estar de acuerdo con dicho precepto legal, ya que SEMARNAT tiene el carácter de demandado y por tanto debe ser parte en la formulación de las propuestas y no dar su opinión sobre la idoneidad de las mismas.

En este mismo sentido, encontramos el artículo 42 de la misma Ley Federal de Responsabilidad Ambiental,<sup>434</sup> ya que PROFEPA tiene el carácter de demandada, y por ineficacia de sus atribuciones, se ha generado un daño ambiental. Entonces cabe preguntar con qué carácter se le pide solicitar la verificación de las obligaciones de diverso demandado (persona física o moral).

En caso de que la parte demandada (persona física o moral) no dé cumplimiento a la ejecución de la sentencia por cuestiones técnicas del elemento ambiental, se debe fijar fecha y hora para el desahogo de una audiencia,<sup>435</sup> en la cual se encuentren presentes los peritos que rindieron el informe pericial.

Esta diligencia tendrá como finalidad escuchar las dificultades técnicas, financieras y de logística que tiene la parte demandada para no cumplir con la ejecución de sentencia. El juez reflexionará, con el apoyo de los peritos, si las razones que esgrimen son procedentes o improcedentes.<sup>436</sup> En caso de improcedencia, implementará cualquiera de las siguientes correspondientes:

#### I. Ampliar los plazos de cumplimiento.

---

<sup>433</sup> El artículo 40 en su primer párrafo indica: “Una vez que el juez reciba las propuestas para la reparación del daño o su compensación conforme a lo previsto por el artículo 38 de la presente Ley, requerirá a la Secretaría, para que en el término de diez días, formule su opinión en relación a la idoneidad y legalidad de las propuestas”. *Op cit.*

<sup>434</sup> El artículo 42 indica: “La Procuraduría auxiliará a la autoridad judicial en la verificación del cumplimiento de las obligaciones a cargo del responsable”. *Op cit.*

<sup>435</sup> OVALLE menciona que audiencia es “Un acto procesal complejo y público, que se desarrolla en la sede y bajo la dirección del órgano jurisdiccional, y en el que intervienen las partes, sus abogados y los terceros cuya presencia sea necesaria para la celebración del acto. Además la audiencia sirve para escuchar los intereses de las partes y que no sean afectadas procesalmente”, OVALLE FAVELA, José, *Op. cit.*, p. 289.

<sup>436</sup> CIPRIANO indica que “Es evidente que la fase de ejecución no compete a los jueces, ni tiene por qué corresponderles, ya que su intervención es simplemente para verificar, vigilar y fiscalizar en algunos casos el cumplimiento de resoluciones, pero no para intervenir directamente en su ejecución”, GÓMEZ LARA, Cipriano, *Op. cit.*, p. 236.

- II. Otorgar sanción pecuniaria por trescientos días de salario mínimo en la región.
- III. Clausurar temporal o definitivamente las instalaciones.
- IV. Conformar un equipo de trabajo externo, que ejecutará las recomendaciones planteadas en la sentencia definitiva y cuyo costo correrá por partes iguales, con cargo a la parte demandada (persona física o moral) y a las autoridades administrativas involucradas.

En caso de ser procedentes los argumentos planteados por la parte demandada, se establecerán nuevas fechas de cumplimiento.

Con respecto a la autoridad administrativa que también resultó condenada en la sentencia y que no cumpla con su parte de acuerdo con la misma sentencia, el juez deberá estudiar en forma detenida su desempeño, en virtud de que a diferencia de la persona física o moral, la dependencia cuenta con diversas áreas así como de profesionales ambientales, por lo que su grado de incumplimiento debe ser cuestionado y valorado por el juzgador.

En caso de que la parte condenada en el juico por daño ambiental haga una segunda petición, la resolución se determinará mediante una diligencia y en caso de improcedencia, se conformará un equipo externo de trabajo.

Este grupo externo ejecutará las recomendaciones planteadas en la sentencia definitiva cuyo costo correrá, a partes iguales, a cargo de la parte demandada (persona física o moral) y las autoridades administrativas.

Por otro lado, cabe indicar que el embargo trabado en bienes de la persona moral o física, no se levantará hasta concluir en forma satisfactoria al menos en un 85 % de funcionalidad con respecto a los elementos ambientales afectados.

Para lograr lo anterior, los peritos que rindieron el informe pericial deberán constituirse de nueva cuenta en las instalaciones o espacio donde se localiza el daño ambiental y,

mediante un estudio,<sup>437</sup> aportar información al juez para que este proceda a levantar el embargo o a continuar con el mismo.

---

<sup>437</sup> Para este estudio consideramos que se puede plantear la metodología empleada en la realización de los estudios para identificar y evaluar los riesgos ambientales.



## CONCLUSIONES

**Primera.-** El ambiente requiere ser contemplado en la doctrina civil y ambiental bajo una conceptualización legal que sirva de apoyo a otras disciplinas jurídicas. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 3º fracción I da una definición de ambiente, que no está concebido bajo un criterio jurídico.

Así, proponemos el siguiente concepto de los elementos y los recursos naturales y/o ambientales (mediante un enfoque técnico-jurídico):

*“El medio ambiente es un bien jurídico que, por sus cualidades reales e inmateriales, puede ser sujeto de transformación en sus características físicas o químicas. Este bien tiene, además, la facultad de satisfacer la necesidad de vida y de sustentabilidad para otros seres vivos y su contenido de valores, bienes y derechos lo hace apto para la posesión y para el goce o disfrute por parte del ser humano, sin fines de propiedad particular, colectiva o de una nación*

**Segunda.-** Las acciones interdictales (de retener la posesión y de obra peligrosa) son idóneas para reclamar un daño ambiental por lo siguiente:

- I. Toda persona tiene un vínculo con el ambiente, es decir, se trata de una relación o estado de hecho en la que el ser humano necesita de los elementos ambientales para crecer y desarrollarse como ser vivo.
- II. Para efectos legales esa relación o estado de hecho también se puede denominar “posesión ambiental”.
- III. Mediante los interdictos las personas buscan restablecer y/o retener esa relación o estado de hecho.
- IV. La presentación de la demanda interdictal es un acto de propio derecho y no se encuadra dentro de los supuestos contemplados en los artículos 27 y 28 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Esta Ley Federal contempla, en

su artículo 28, que tienen el derecho e interés legítimo para ejercer la acción, demandando judicialmente la responsabilidad ambiental, la reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente, quienes estén constituidos como una comunidad o las personas morales privadas, es decir, la responsabilidad se tramita mediante los intereses difusos y colectivos.

- V. Las acciones interdictales detienen los actos perturbatorios que perjudican a las personas y traen como consecuencia dos situaciones: en primer lugar, que estos actos cesen; en segundo, que se efectúe la reparación del ambiente o de sus elementos.

Por ello y con el objetivo de que el Derecho Civil y el Derecho Procesal Civil contengan hipótesis legales más apropiadas para fundamentar la demanda para reparar un daño ambiental y facilitar su procedencia, al invocarse los interdictos de obra peligrosa y de retener la posesión, planteamos que se reforme el artículo 736 del Código Civil de San Luis Potosí, de tal forma que se contemple el concepto de posesión ambiental para quedar de la siguiente manera:

Artículo 736.-...

*“Posesión ambiental es aquella tenencia permanente, inalienable e intransferible que es ejercida directa e indirecta por todos los seres humanos en forma individual o colectiva en los elementos que integran el ambiente y que son la fuente y soporte de vida para el crecimiento y desarrollo físico y psicosocial de las personas”.*

Proponemos que se reforme el artículo 16 del Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí a fin de que contemple, en un tercer párrafo, el concepto de los actos perturbatorios ambientales para quedar de la siguiente forma:

Artículo 16.-...

...

*Para la procedencia de esta acción en un juicio por daño ambiental los actos perturbatorios ambientales consistirán en: aquellas actividades industriales y no industriales, hechos o actos ejercidos por persona física o moral cuyo resultado se traduce en un detrimento en el ambiente o en alguno de sus elementos, que imposibilitan su funcionamiento adecuado y la correcta correlación entre ellos.*

**Tercera.-** Al interponerse la acción negatoria para reclamar la reparación de un daño ambiental sus efectos legales se concentrarán en lo siguiente:

- I. Demoler o destruir las obras; por otro lado, concluirían las actividades u operaciones que dieron origen a la perturbación, es decir, al daño ambiental.
- II. Condenar al demandado al pago de los daños ocasionados por el ejercicio de las perturbaciones y, por consiguiente, a la reparación del daño ambiental.
- III. Imponer al demandado la obligación de no perturbar más al actor con actividades u obras que generen un daño al ambiente o a sus elementos.

Por otro lado, la acción negatoria debe contemplar una hipótesis legal que sirva de fundamento en la demanda donde se reclame la reparación de un daño ambiental. Por ello, proponemos la incorporación de un nuevo concepto de derecho real ambiental al segundo párrafo del artículo 10 del Código de Procedimientos Civiles, el cual expresaría lo siguiente:

Artículo 10.-...

*“Para la procedencia de una acción negatoria para reclamar la reparación de un daño ambiental se entenderá por derecho real ambiental aquella relación o vínculo jurídico-ambiental absoluto e inmediato existente entre las personas y el ambiente o cualquiera*

*de sus elementos de carácter extra patrimonial, intransferible, público e inalienable”.*

**Cuarta.-** En lo que se refiere a la carga de la prueba, ésta debería ser exigida al demandado y a las autoridades administrativas por la información o documentos oficiales que están en posesión de ambos. Cabe indicar que el demandado, para iniciar sus actividades o durante las mismas, requiere cumplir con la normatividad ambiental y, para ello, tramita permisos y realiza estudios técnicos, estudio de impacto ambiental, estudio de riesgo, plan de manejo de residuos peligrosos, etcétera, los cuales está obligado a tener físicamente.

Por otro lado, están las autoridades administrativas como receptoras y calificadoras de dichos trámites legales.

Actualmente, en un juicio de responsabilidad por daño ambiental, quien demanda debe probar lo que está reclamando y, en esta circunstancia, el promovente no tiene en su poder la información o documentos correspondientes.

Por lo anterior, proponemos reformas al artículo 272 del Código Procesal Civil de San Luis Potosí, con la finalidad de que indique lo siguiente:

*“El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo, los de sus excepciones. Cuando el juicio proceda de un daño ambiental, el demandado debe probar, con los medios de prueba pertinentes, que los hechos constitutivos del daño ambiental no son atribuibles a él”.*

**Quinta.-** En lo que se refiere a la prueba pericial, su ofrecimiento debería dictarlo el juez de oficio en el auto de radicación y no a petición de parte. En cuanto a su desahogo, el perito debería iniciar la elaboración de su informe al concluir el término de contestación de demanda que tenga el demandado. La finalidad de su inicio es esta etapa obedece a que el daño ambiental no ha sido alterado en sus características físicas o químicas y se puede tener más certeza de cuál es la magnitud o perjuicio ocasionado al ambiente o a sus elementos.

Si la prueba pericial se ofrece y se desahoga tal y como está actualmente establecido en el Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí el daño ambiental se puede incrementar.

En el caso que se empezara su elaboración conforme al término de desahogo de pruebas, el demandado tiene el tiempo suficiente para ejecutar acciones tendentes a reparar el daño generado, ocasionando que ya no cuente con las mismas características de menoscabo.

Con la finalidad de que el informe contenga información completa y precisa del demandado, de sus instalaciones, así como de la existencia del daño ambiental generado, el informe pericial debe aportar información que el juez interprete y le dé la certeza jurídica del daño ambiental.

En lo relativo al informe pericial proponemos que éste contenga los siguientes elementos:

- I. Los datos de la persona a quien se le imputa el daño ambiental.
- II. La descripción de cada uno de los elementos ambientales afectados.
- III. La precisión de los puntos del peritaje.
- IV. La relación detallada de cada operación o actividad.
- V. La metodología aplicada para la identificación y evaluación del daño.
- VI. La relación de los resultados con la normatividad ambiental y de seguridad.
- VII. El resultado.
- VIII. Las recomendaciones o plan de acción.

**Sexta.-** En lo referente a la inspección judicial sugerimos que el juez no base el desahogo de la inspección en una lista de puntos a observar, ya que lo anterior limitaría la importancia de la inspección, al tratarse de un daño ambiental, puesto que no reflejaría el origen de dicho daño.

En base a lo anterior, proponemos que el artículo 352 del Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí sea reformado para quedar de la siguiente manera:

“Artículo 352.- Al solicitarse la inspección judicial se determinarán los puntos sobre los que deba versar ésta y se practicará siempre previa citación de las partes, fijándose lugar, día y hora. *Cuando el asunto verse sobre daño ambiental, no se hará referencia a puntos de inspección, a la vez que se requerirá la inspección de las instalaciones completas de la parte demandada, los documentos de control interno y el lugar donde se aprecie el daño ambiental.*

**Séptima.-** En cuanto a la sentencia definitiva y con la finalidad de que ésta precise en forma clara el origen del daño ambiental y especifique las actividades que se van a realizar para su reparación, proponemos que contenga los siguientes puntos:

- I. Descripción de la maquinaria, equipo y sustancias químicas involucradas y una descripción de los procesos productivos, haciendo referencia al informe pericial.
- II. Mención de los elementos ambientales afectados.
- III. Establecimiento de la maquinaria o equipo que tuvo mayor injerencia en la generación del daño ambiental.
- IV. Señalamiento de los comunicados internos o externos donde se informa sobre el daño ambiental o la posible formación de éste.
- V. Descripción de la operación o actividad que generó o contribuyó al daño ambiental.
- VI. Señalamiento del cumplimiento o incumplimiento de la normatividad ambiental y de seguridad.
- VII. Referencia al plan de acción y al tiempo de ejecución.

## BIBLIOGRAFIA

### Obras consultadas

- ALENZA GARCÍA, J. (2004). *Manual de Derecho Ambiental*. Ed. Universidad Pública de Navarra. España.
- ALSINA, H. (2001). *Fundamentos de Derecho Procesal*. Ed. Jurídica Universitaria. México.
- ARAUJO VALDIVIA, L. (1982). *Derechos de las Cosas y de las Sucesiones*. Ed. Cajica. México.
- ASCENSIO ROMERO, Á. (1998). *Teoría General del Proceso*. Ed. Trillas. México.
- ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO, N. (1977). *Derecho Procesal Mexicano*. Ed. Porrúa.
- ARRELLANO GARCIA, C. (1998). *Derecho Procesal Civil*. Ed. Porrúa. México.
- AZQUETA OYARZUN, D. (1994). *Valoración Económica del Medio Ambiente*. Ed. McGraw Hill. España.
- BALLESTER CECILIA, R., y BRIONES VIVES, F. (coord.). (1996). *Responsabilidad Civil por Daños al Medio Ambiente. Mecanismos y Elementos, Apuntes de Derecho Medioambiental*. España.
- BAÑUELOS SÁNCHEZ, F. (1978). *Práctica Civil Forense*. Ed. Porrúa. México.
- BECERRA BAUTISTA, J. (1986). *El Proceso Civil en México*. Ed. Porrúa. México.
- BECERRA BAUTISTA, J. (2000). *El Proceso Civil en México*. Ed. Porrúa. México.
- BENTHAM, J. (1971). *Tratado de las Pruebas Judiciales tomo I*. Ed. Jurídicas Europa – América. Buenos Aires.
- BRAÑES R. (2000). *Manual de Derecho Ambiental Mexicano*, Fundación Mexicana para la Educación Ambiental. México.
- BRISEÑO SIERRA, H. (1977). *El juicio ordinario civil volumen II*. Ed. Trillas. México.
- BURGOA ORIHUELA, I. (1989). *Las Garantías Individuales*. Ed. Porrúa. México.
- BUSTAMANTE ALSINA, J. (1995). *Derecho Ambiental*. Ed. Abeledo Perrot. Argentina.
- CABANELLAS, G. (1981). *Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual*. Ed. Heliasta S.R.L. Argentina.
- CABANELLAS, G. (1989). *Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual tomo I A-B*. Ed. Heliasta. Argentina.

- CARMONA LARA, M. del Carmen. (2001). *Derechos en Relación con el Medio Ambiente*, Colección nuestros derechos. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México.
- CASTAN TOBEÑAS, J. (1971). *Derecho Civil Español Común y Formal Tomo II Derecho de las Cosas*. Ed. Reus, S.A. de C.V. España.
- C. MARTINEZ, V. (2000). *Temas de Derechos Reales*. Ed. Duarte Quiroz. Argentina.
- CHIOVENDA, José, (2000). *Principios de Derecho Procesal Civil Tomo II*, Ed Reus, Madrid, 2000.
- COLEGIO DE PROFESORES DE DERECHO PROCESAL DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM, (2000). *Diccionario de Derecho Procesal*. Ed. Oxford University Press. México.
- CORDERO LOBATO, E. (2002). *Derecho de Daños y Medio ambiente, Lecciones de Derecho del Medio Ambiente*, ORTEGA ALVARES, L. (coord.). Ed. Lex nov. España.
- DE PINA VARA, R. (1983). *Diccionario de Derecho*. Ed. Porrúa. México.
- DE PINA VARA, R. (1998). *Diccionario de Derecho*. Ed. Porrúa. México
- DE SANTO, V. (2002). *El Proceso Civil tomo VII prueba de peritos, reconocimiento judicial*. Ed. Universidad. Argentina.
- DE SANTO, V. (2002). *El Proceso Civil tomo III* Ed. Universidad. Argentina.
- DÍAZ BRITO, F. (1999). *El límite de tolerancia en las inmisiones y relaciones de vecindad*. Cuadernos de Aranzadi Civil. Navarra. España.
- Diccionario de Derecho Romano Comparado con Derecho Mexicano y Canónico*. Ed. Porrúa. México.
- Diccionario de la Lengua Española*. Ed. Larousse. México. (1994).
- Diccionario Jurídico General Tomo II (D-N)*, Ed. IURE. México. (2006).
- DOMINGUEZ MARTINEZ, J. (1992). *Derecho Civil Parte general, Personas, Cosas, Negocio Jurídico e Invalidez*. Ed. Porrúa. México.
- Enciclopedia Jurídica Mexicana*, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ed. Porrúa. México. (2002).
- FRAGA, G. (1985). *Derecho Administrativo*. Ed. Porrúa. México.
- FRANK MACERA, B. (1998). *El Deber Industrial de Respetar el Ambiente*. Marcial Pons ediciones jurídicas y sociales. España.
- GARCIA LÓPEZ, T. (2007). La Constitución mexicana y los principios rectores del derecho ambiental, *La Constitución y el medio ambiente*, O. RABASA, Emilio, (coord.). Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México.



- GARCIA LÓPEZ T. (2013). *Derecho Ambiental Mexicano Introducción y principios*, editorial Bosch, México.
- GARCIA LÓPEZ, T. (2012). *Quien Contamina Paga Principio Regulador del Derecho Ambiental*, editorial Porrúa, México.
- Gran Diccionario Jurídico de los Grandes Juristas*. Ed. libros técnicos. México. (2003).
- GÓMEZ LARA, C. (1991). *Derecho Procesal Civil*. Ed. Harla. México.
- GOMIZ CATALA, L. (1998). *Responsabilidad por Daños al Medioambiente*. Ed. Aranzadi. España.
- GONZALEZ MARQUEZ, J. (2002). *La Responsabilidad por el Daño Ambiental en México*. Universidad Autónoma Metropolitana. México.
- GUTIERREZ Y GONZALEZ, E. (1999). *El Patrimonio*. Ed. Porrúa. México.
- GUTIERREZ NAJERA, R. (2007). *Introducción al Estudio del Derecho Ambiental*. Ed. Porrúa. México.
- HUTCHINSON, T. (1999). *Daño Ambiental tomo II*. Rubinzal – Culzoni editores. Argentina.
- JAUENOD DE ZSÓGÓN, S. (1996). *Iniciación al Derecho Ambiental*. Ed. Dykinson. Madrid.
- JORDAN CAPITAN, E. (2001). *El Derecho a un Medio Ambiente Adecuado*. Ed. Aranzadi. Navarra.
- KIELY, G. (1999). *Ingeniería ambiental. Fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión*. Ed. McGraw Hill. España.
- KUME, H. (2002). *Herramientas Estadísticas Básicas para el Mejoramiento de la Calidad*. Ed. Norma. Colombia.
- LEYVA TORRES, R. (1980). *Derecho Procesal Civil*. Ed. Universitaria Potosina. México.
- LOZANO CUTANDA, B. (2001). *Derecho Ambiental Administrativo*. Ed. Dykinson. España.
- MAGALLON IBARRA, J. (1990). *Instituciones de Derecho Civil Tomo IV Derechos Reales*. Ed. Porrúa. México.
- MARTIN MATEO, R. (2003). *Manual de Derecho Ambiental*. Ed. Aranzadi. España.
- MARTINEZ MENDOZA, R. (2006). *Diccionario Jurídico General*. Ed. Iure. México.
- MARTÍNEZ MORALES, R. (2006). *Diccionario Jurídico General tomo 2 (D-N)*. Ed. IURE. México.
- MATEOS ALARCÓN, M. (2001). *Las Pruebas en Materia Civil, Mercantil y Federal*. Cárdenas editor distribuidor. México.

- MORALES LAMBERTI, A. (1999). *Derecho Ambiental Instrumentos de Política y Gestión Ambiental*. Alveroni editores. Argentina.
- MUÑOZ, L. (1971). *Derecho Civil Mexicano*. Ed. Modelo. México.
- OVALLE FAVELA, J. (1999). *Derecho Procesal Civil*. Ed. Oxford. México.
- OVALLE FAVELA, J. (2001). *Teoría General del Proceso*. Ed. Oxford University Press. México.
- PALOMAR DE MIGUEL J. (2003). *Diccionario para Juristas tomo I*. Ed. Porrúa. México.
- PALLARES, E. (1973). *Diccionario de Derecho Procesal Civil*. Ed. Porrúa. México.
- PALLARES, E. (1986). *Derecho Procesal Civil*. Ed. Porrúa. México.
- PALLARES, E. (2000). *Tratado de las Acciones Civiles*. Ed. Porrúa. México.
- QUINTANA VALTIERRA, J. (2000). *Derecho Ambiental Mexicano*. Lineamientos Generales. Ed. Porrúa. México.
- ROJINA VILLEGAS, R. (1997). *Compendio de Derecho Civil Bienes, Derechos Reales y Sucesiones*. Ed. Porrúa. México.
- ROJINA VILLEGAS, R. (2008). *Compendio de Derecho Civil Bienes, Derechos Reales y Sucesiones*. Ed. Porrúa. México.
- SÁNCHEZ GÓMEZ, N. (2008). *Temas Selectos de Derecho Ambiental*. Ed. Porrúa. México.
- SÁNCHEZ RODRIGO, P. (1996). *Introducción al Derecho del Medio Ambiente*. Ed. Cto medicina. España.
- SERRANO MORENO, J. (1992). *Ecología y Derecho: Principios de Derecho Ambiental y Ecología Jurídica*. Ed. Comares. España.
- TAPIA RAMIREZ, J. (2004). *Bienes (Derecho Real, Derechos de Autor y Registro Público de la Propiedad)*. Ed. Porrúa. México.
- VIZCARRA DAVALOS, J. (2003). *Teoría General del Proceso*. Ed. Porrúa. México.
- WALSS, R. (2001). *Guía práctica para la gestión ambiental*. Ed. McGraw Hill. México.

### **Publicaciones periódicas**

- MONROY J. V. (2014). *Para qué sirve el Código Civil (versión electrónica)*. México. Recuperado de <http://www.monroyabogados.com.mx/pqsgcc.pdf>
- FOY VALENCIA, P. (2014). *Consideraciones sobre la función político ambiental del abogado*. España. Recuperado [http://derechoambiental.iespana.es/ABOGADO.html#\\_ftn1](http://derechoambiental.iespana.es/ABOGADO.html#_ftn1)

PEÑA CHACÓN, M. (2011). *Daño ambiental y prescripción* (versión electrónica). España. Recuperado de [http://huespedes.cica.es/aliens/gimadus/19/06\\_mario\\_penia\\_chacon.html](http://huespedes.cica.es/aliens/gimadus/19/06_mario_penia_chacon.html)

PROCESO DE ACREDITACIÓN (2014). Recuperado de [www.ema.org.mx](http://www.ema.org.mx)

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO. (2015). *Metodología de la Estratificación* (versión electrónica). México. Recuperado de <http://www.mitecnologico.com/Main/EstratificacionCalidad>

JUNTA DE ANDALUCIA. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DE TERRITORIO. (2015). *Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs)*. España. Recuperado de <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/porta/web/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9e205510e1ca/?vgnextoid=22fe6d15fad28310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=36e08c43b07d4310VgnVCM1000001325e50aRCRD>

CATALOGO DE NOM'S (2015). México. Recuperado de [www.semarnat.gob.mx](http://www.semarnat.gob.mx)

CATALOGO DE NOM'S (2015). México. Recuperado de [www.stps.gob.mx](http://www.stps.gob.mx)

MISIÓN Y VISIÓN (2014). México. Recuperado de [www.cjf.gob.mx](http://www.cjf.gob.mx)

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. (2011). *Acuerdo general que regula la integración de la lista de personas que pueden fungir como peritos*. México. Recuperado de [www.cjf.gob.mx/noticias/docs\\_noticias/2011/Acuerdo16\\_2011.pdf](http://www.cjf.gob.mx/noticias/docs_noticias/2011/Acuerdo16_2011.pdf)

CONCEPTO DE. (2015). *Definición de layout*. Recuperado de <http://conceptodefinicion.de/layout/>

Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC). (2014). México. Recuperado de <http://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/registro-de-emisiones-y-transferencia-de-contaminantes-retc>

## Legislación

México. Código Civil de San Luis Potosí. El 18 de abril de 1946. Periódico Oficial, 23 de diciembre de 2014, núm. 8, p 264.

México. Código Civil Federal. El 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928. Diario Oficial de la Federación, 28 de enero de 2010, p. 246.

México. Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí. El 19 de junio de 1947. Periódico Oficial, 05 de septiembre de 2015, núm. 48, p. 175.

México. Código Federal de Procedimientos Civiles. El 24 de febrero de 1943. Diario Oficial de la Federación, 30 de diciembre del 2008, p. 92.

México. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 05 de febrero de 1917. Diario Oficial de la Federación, 08 de octubre del 2013. P. 233.

México. Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí. 15 de diciembre de 1999. Periódico Oficial, 23 de julio del 2015, decreto 392, p. 96.

México. Ley de Vida Silvestre. El 03 de junio de 2000. Diario Oficial de la Federación, 26 de enero del 2015, p. 68.

México. Ley Nacional de Aguas. El 1º de diciembre de 1992. Diario Oficial de la Federación, 11 de agosto del 2014, p. 109.

México. Ley General de Vida Silvestre. El 03 de julio del 2000, Diario Oficial de la Federación, 26 de enero del 2015, p. 68.

México. Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. El 7 de junio de 2013, Diario Oficial de la Federación, 07 de junio del 2013, p. 17.

México. Ley Federal de Metrología y Normalización. El 1º de julio de 1992. Diario Oficial de la Federación, 30 de abril del 2009, p.48.

México. Ley Forestal. 22 de diciembre de 1992. Diario Oficial de la Federación, 31 de diciembre del 2001.

México. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. El 28 de enero de 1988. Diario Oficial de la Federación, 04 de junio 2012, p. 114.

México. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. El 22 de mayo del 2006. Diario Oficial de la Federación, 22 de mayo del 2015, p. 52.

México. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El 26 de mayo de 1995. Diario Oficial de la Federación, 15 de enero de 2009, p. 114.

México. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. El 15 de octubre de 2005. Periódico Oficial, 26 de marzo del 2015, decreto 385, p. 63.

México. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental. El 30 de mayo del 2000. Diario Oficial de la Federación, p. 19.

México. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente en materia de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica. El 03 de junio del 2004, Diario Oficial de la Federación, 31 de octubre del 2014, p. 23.

México. Reglamento de la Ley Ambiental en materia de Evaluación de Impacto Ambiental y Riesgo del Estado de San Luis Potosí. El 07 de julio del 2005. Periódico Oficial, p. 20.

México. Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. El día 21 de enero de 1997. Diario Oficial de la Federación, p. 27.

### **Normas Oficiales Mexicanas**

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad. NOM-001-STPS-2008. México. Diario Oficial de la Federación. 2008.

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. NOM-018-STPS-2000. México. Diario Oficial de la Federación. 2000.

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. Recipientes sujetos a presión y calderas-Funcionamiento-Condiciones de seguridad. NOM-020-STPS-2002. México. Diario Oficial de la Federación. 2002.

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. NOM-026-STPS-1998. México. Diario Oficial de la Federación. 1998.

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. Establece los límites permisibles contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. NOM-001-SEMARNAT-1996. México. Diario Oficial de la Federación. 1996.

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. Establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. NOM-052-SEMARNAT-2005. México. Diario Oficial de la Federación. 2005.

### **Jurisprudencia**

COMPETENCIA FEDERAL O CONCURRENTES EN UN JUICIO CIVIL: HIPÓTESIS EN QUE SE PRESENTAN CONTROVERSIAS SOBRE LA APLICACIÓN DE LEYES FEDERALES O TRATADOS INTERNACIONALES. Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, novena época, tomo VII, marzo de 1998, página 196.

ACCIÓN PUBLICIANA. NO IMPIDE SU EJERCICIO LA PROMOCIÓN ANTERIOR DE JUICIO REIVINDICATORIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, novena época, tomo V, página 767.

INTERDICTO DE RETENER LA POSESIÓN. PARA SU PROCEDENCIA SE REQUIERE DE ACTOS DE PERTURBACIONES REALES Y CONCRETAS, NO SÓLO INTENCIONALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, novena época, tomo XIII, página 1157.

REVISIÓN FISCAL, PROCEDENCIA DEL RECURSO DE. ES IMPORTANTE Y TRASCENDENTE POR TRATARSE DE LA MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE, NO OBSTANTE, LA AUTORIDAD DEBE RAZONARLO. Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1994, novena época, tomo XIII, marzo de 2001, página 1811.

POSESIÓN, CONCEPTO DE, SUSCEPTIBLE DE TUTELA CONSTITUCIONAL. CASO DE EXCEPCIÓN. Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, novena época, tomo IX, Junio de 1999, página 965.

LEGITIMACIÓN PASIVA. ES UNA CONDICIÓN NECESARIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN, NO UN PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE ÉSTA Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO. Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación, novena época, tomo X, noviembre de 1999, página 993.

ECOLOGÍA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL AMPARO EN CONTRA DE LEYES DE ESA MATERIA, CORRESPONDE A LA COMUNIDAD COMO TITULAR DE LOS DERECHOS COLECTIVOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO) Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, novena época, tomo V, Junio de 1997, página 156.

LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO, INTEGRACIÓN DE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación, novena época, página 872.

INTERDICTO DE RETENER LA POSESIÓN. LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL. Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, octava época, tomo XII, Agosto de 1993, página 459.

LA DIFERENCIA ENTRE FALTA DE PERSONALIDAD Y DE ACCIÓN. Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, novena época, tomo X, noviembre de 1999, tesis VI.2o.C. J/178, página 910.

LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA CAUSA. ES UNA CONDICIÓN NECESARIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN Y SÓLO PUEDE ANALIZARSE DE OFICIO POR EL JUZGADOR AL MOMENTO DE DICTAR SENTENCIA. Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, novena época, tomo XVI, tesis I.11o.C.36 C, página 1391.

LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO, INTEGRACIÓN DE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO. Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación, novena época, página 872.

RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. NEXO CAUSAL. Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, octava época, tomo III, segunda parte 2, página 690.

LA CUANTÍA QUE DEBE TOMARSE EN CUENTA PARA EFECTOS DE SU TASACIÓN DEBE SER UNA SOLA PARA AMBAS PARTES, Y SU DETERMINACIÓN DEPENDERÁ DE LO RESUELTO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, octava época, tomo XV-I, febrero de 1995, tesis I.8o.C.96 C, página 162.

EXCEPCIÓN DE QUITA O ESPERA EN MATERIA MERCANTIL. LA PRUEBA DE INSPECCIÓN JUDICIAL NO ES LA IDÓNEA PARA DEMOSTRARLA. Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, novena época, tomo XVII, enero de 2003, tesis II.2o.C.394 C, página 1782.

PRUEBA DE INSPECCIÓN JUDICIAL. Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, octava época, tomo IV, segunda parte-1, julio a diciembre de 1989, página 400.

SENTENCIA, LA OMISIÓN DE ESTUDIAR UNA EXCEPCIÓN OPUESTA EN LA. VIOLA EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA. Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, octava época, tomo XV-I, febrero de 1995, tesis VIII.2o.38 K, página 265.

SENTENCIAS CIVILES. SOLO DEBEN OCUPARSE DE AQUELLAS ACCIONES COMPRENDIDAS EN EL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, octava época, tomo XV-II, febrero de 1995, tesis VI.1o.63 C, página 552.

SENTENCIAS CIVILES, CONGRUENCIA DE LAS (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ). Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, novena época, tomo X, octubre de 1999, tesis 1a./J. 34/99, página 226.

COSTAS. PAGO DE, EN LAS SENTENCIAS DE CONDENA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, novena época, tomo III, febrero de 1996, página 400.

ACLARACIÓN DE SENTENCIA, QUE DEBE INTENTARSE CUANDO EXISTA IMPRECISIÓN EN LOS PUNTOS RESOLUTIVOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, novena época, tomo XIX, mayo de 2004, tesis II.2o.C.460 C, página 1736.

PRUEBA PERICIAL. SU VALORACIÓN CONFORME AL PRUDENTE ARBITRIO DEL JUZGADOR, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, octava época, tomo XI, marzo de 1993, página 341.

GRABACIONES MAGNETOFÓNICAS. SU VALOR PROBATORIO. Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, octava época, tomo XI, Febrero de 1993, tesis: I.4o.C. 183 C, página 259.

INTERDICTO DE OBRA NUEVA. VALOR PROBATORIO DEL DICTAMEN PERICIAL Y DE LA INSPECCIÓN JUDICIAL PRACTICADOS EN LAS ACTUACIONES PREJUDICIALES DEL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, sexta época, tomo Cuarta Parte, XX, página 143.

INTERDICTO PARA RETENER LA POSESIÓN. LAS PRUEBAS OFRECIDAS PARA ACREDITAR LA URGENCIA EN EL DICTADO DE LA MEDIDA PROVISIONAL EN ESTE JUICIO, NO NECESARIAMENTE DEBEN ENTENDERSE ORIENTADAS A ESA FINALIDAD, SINO TAMBIÉN PARA ACREDITAR LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA ACCIÓN INTERDICTAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, novena época, tomo XIX, mayo de 2004, tesis XIX.1o.29 C, página 1788.





